

Edgar Allison Peers

**LA TRAGEDIA ESPAÑOLA
1930-1936**

DICTADURA, REPÚBLICA Y CAOS

CLÁSICOS DE HISTORIA 577

EDGAR ALLISON PEERS

LA TRAGEDIA ESPAÑOLA
1930-1936

DICTADURA, REPÚBLICA Y CAOS

The Spanish tragedy 1930-1936. Dictatorship, Republic, Chaos

Oxford University Press

New York 1936

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015074207286&seq=1>

Traducción automática revisada

CLÁSICOS DE HISTORIA 577

ÍNDICE

Prefacio.....	5
---------------	---

Capítulo I. LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA

I. Enero de 1930. La Dictadura: sus logros y defectos. Caída y posterior muerte de Primo de Rivera.....	8
II. Enero de 1930 a marzo de 1931. Los gobiernos de Berenguer y Aznar. La rebelión de Jaca. El Comité Revolucionario a juicio.....	14
III. Marzo-abril de 1931. Las elecciones municipales y sus resultados. ¿Monarquía o república?.....	20
IV. Del 13 al 14 de abril de 1931. El cargo del rey Alfonso. Negociaciones entre Romanones y Alcalá Zamora. La decisión del Rey.....	22
V. Del 13 al 15 de abril de 1931. La posición del Comité Revolucionario. El Comité toma el poder. El primer Gobierno Republicano.....	25
VI. Del 13 al 15 de abril de 1931. Proclamación de la República en Barcelona. ¿Constitución federal o unitaria? El Día de la República en Barcelona.....	27
VII. Del 14 al 16 de abril de 1931. Salida de España del Rey, la Reina y la Familia Real. El manifiesto del Rey al pueblo.....	30

Capítulo II. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

I. Abril-mayo de 1931. La popularización de la República. ABC y Don Alfonso. El episodio del Cardenal Segura. Los disturbios del 10 al 12 de mayo en Madrid y provincias.....	33
II. Mayo-julio de 1931. Elecciones Generales y Cortes Constituyentes. Publicación del proyecto de Constitución.....	38
III. La Constitución: Resumen y análisis.....	40
IV. Julio-octubre de 1931. Los debates sobre la Constitución. Sufragio femenino. La cuestión religiosa. Dimisión del Presidente del Gobierno y del Ministro de la Gobernación. Azaña, Presidente del Gobierno.....	43
V. Octubre-diciembre de 1931. Incidentes y acontecimientos. El juicio de Don Alfonso. La elección de Sr. Alcalá Zamora a la Presidencia de la República.....	47

Capítulo III. DOS AÑOS DE IZQUIERDAS (diciembre de 1931 a noviembre de 1933)

I. Diciembre de 1931-septiembre de 1932. Reconstrucción del Gobierno. Tragedias en los pueblos. La revuelta comunista en Cataluña. Expulsión de los jesuitas. España durante el primer año de la República. La Ley Agraria de 1932.....	52
II. Agosto de 1931-septiembre de 1932. El Estatuto de Autonomía de Cataluña. El referéndum y su resultado. Aprobación del Estatuto en las Cortes. El federalismo y su futuro.....	59
III. Agosto-noviembre de 1932. Revueltas militares en Madrid y Sevilla. Suspensión de la prensa y purga de la función pública. Las elecciones catalanas.....	67

IV.	Octubre de 1932-mayo de 1933. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Logros y política de la República en materia de educación.....	70
V.	Enero-Mayo de 1933. Creciente impopularidad del Gobierno. Casas Viejas. Las elecciones municipales y posteriores.....	72
VI.	Mayo-noviembre de 1933. El Presidente y la Ley de Congregaciones. El Tribunal de Garantías Constitucionales. Disolución de las Cortes Constituyentes.....	76

Capítulo IV. DOS AÑOS DE CENTRO-DERECHA (noviembre de 1933 a enero de 1936)

I.	Noviembre de 1933-mayo de 1934. Aplastante victoria electoral. Gobierno del Centro. Posición de Gil Robles. Fallecimiento de Macià. El proyecto de ley de amnistía en las Cortes.....	79
II.	Junio-septiembre de 1934. Problemas en las provincias: los vascos y el Concierto Económico; los catalanes y la Ley de Cultivos. Los partidos de la oposición en las Cortes hablan de revolución. La CEDA provoca una crisis parlamentaria.....	85
III.	Octubre de 1934-mayo de 1935. El gobierno de Centro gira a la derecha. La Revolución del 6 de Octubre en Cataluña. Guerra Civil en Asturias. España bajo la ley marcial. Los resultados de la revolución en Cataluña.....	89
IV.	Mayo de 1935-febrero de 1936. Juicio a los consejeros catalanes. Proyectos de reforma constitucional y económicos. Disolución de las Cortes. Manifiesto electoral del Frente Popular.....	96

Capítulo V. CAOS

I.	Febrero-marzo de 1936. Victoria del Frente Popular. Indiferencia seguida de graves disturbios. Asesinatos y revueltas en Madrid y otros lugares. Disturbios agrarios.....	102
II.	Marzo-Mayo de 1936. Deposición del Presidente Alcalá Zamora. Elección del Sr. Azaña a la Presidencia.....	106
III.	Mayo-julio de 1936. El Gobierno de Casares Quiroga. Protestas de la derecha contra la anarquía generalizada. El fascismo militante y el Gobierno. Nuevos asesinatos que culminan con el de Calvo Sotelo.....	109
IV.	Julio-agosto de 1936. El levantamiento militar en el Marruecos español se extiende por la península y se convierte en guerra civil. Rápidos cambios de gobierno. Panorama en agosto de 1936.....	112
V.	Reflexiones sobre la Guerra Civil. Alianzas e ideales de los partidos. La tragedia de la Segunda República. Su fracaso según Madariaga. Perspectivas inmediatas y futuras.....	116

BIBLIOGRAFÍA sobre la España contemporánea

I.	Historias de España escritas en inglés.....	120
II.	Libros en inglés o francés sobre la España contemporánea.....	120
III.	Libros en español o catalán sobre la España contemporánea.....	121

PREFACIO

¿Cómo podemos explicar todo lo que está sucediendo hoy en España?

Desde que se terminó de escribir este libro, las dos fuerzas enfrentadas en la Guerra Civil se han enfrascado en una lucha aún más desesperada, que se libra a muerte en una atmósfera de profunda confusión política y con una crueldad y ferocidad que creíamos imposibles de volver a leer, salvo en la historia antigua y en la ficción sensacionalista. Es inútil pronunciarse sobre estos acontecimientos, como muchos hacen, aplicando fórmulas simplistas derivadas de su propio país y censurando a los españoles por no actuar como creen que ellos mismos actuarían en circunstancias similares. España no es Gran Bretaña, ni Francia, ni Estados Unidos, sino que es única en muchos sentidos —que en tiempos de paz bien podrían despertar nuestra envidia—, pero única también porque, si bien los dioses le concedieron tantos dones, le negaron no sólo el de un buen gobierno, sino también otros que ahora mismo podría haber aprovechado con gran eficacia. Dejemos de tomar partido en el conflicto e intentemos comprender.

Tanto la geografía como la historia se oponen a juzgar a España como si fuera una nación cualquiera. No sólo protegida por un foso, sino también por una sólida muralla montañosa, España ha desarrollado la mayoría de las características propias de una península. España es prácticamente el país más montañoso de Europa y presenta increíbles extremos climáticos, además de una gran variedad y abundancia de riqueza natural, y marcadas diferencias regionales en la manera de ser de su gente. Aunque escasamente poblada, y principalmente por agricultores, dos de sus veintidós millones de habitantes se concentran en sus dos ciudades más grandes. Los españoles, que en el pasado han sido tan extrañamente idealizados en el extranjero, no son un solo pueblo, sino muchos: comparten entre sí no una sola lengua materna, sino cuatro; y, más allá de las diferencias regionales, casi cualquier español exhibirá rasgos de carácter aparentemente contradictorios, por lo que se necesitarán años para llegar a conocerlo. Todos estos hechos influyen en la actual tragedia nacional.

El papel que desempeñó la historia en todo esto comenzó, sin duda, cuando sucesivas potencias codiciaron y conquistaron la deliciosa Península: iberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos y moros; estos últimos permaneciendo en el sureste durante casi ocho siglos. Otro problema quedó pendiente para las generaciones venideras cuando, en el siglo XV, Castilla y Aragón-Cataluña se unieron con el matrimonio de Fernando e Isabel, y otro más cuando la excesiva centralización privó con ligereza a catalanes y vascos de sus privilegios ancestrales. El premio del Nuevo Mundo, que por casualidad cayó en manos de España el mismo año en que se liberó de los moros, no fue una bendición sin matices. Desangrada constantemente por las necesidades de la conquista y la colonización, que le arrebataron su mejor juventud; mal gobernada por reyes débiles o ambiciosos; empobrecida por guerras extranjeras y una política económica nefasta; condenada en el siglo XVIII a imitar las costumbres de Francia, y reaccionando en el siglo XIX replegándose en su extraño y reservado aislamiento, se encontró al final de la Guerra de 1898 despojada de sus últimas colonias, lejos del camino del progreso contemporáneo, despreciada por naciones que siglos antes la habían reconocido como una gran potencia.

Fue entonces cuando el país, que desde hacía tiempo se agitaba con inquietud, tomó conciencia de la magnitud de sus responsabilidades y de la dimensión de su decadencia, y el espíritu reformista, que había estado latente durante todo el siglo XIX, comenzó a hacerse sentir rápidamente. Este libro es esencialmente una narración de los acontecimientos más recientes en

España, y abordar de forma mínimamente adecuada sus problemas fundamentales requeriría escribir un segundo volumen, algo totalmente innecesario, puesto que otros autores los han tratado con destreza y amplitud. Pero, en resumen, antes del inicio del reinado de Alfonso XIII, un descontento general había propiciado grandes mejoras en la vida social, al tiempo que comenzaba a acentuarse la división entre españoles conservadores y progresistas, una grieta que en los últimos cinco años se ha ensanchado de forma alarmante. El rápido auge del socialismo desde sus modestos comienzos en 1888, el desarrollo del sindicalismo, el comunismo y el anarquismo (este último con una fuerza singular en España), la creciente insistencia de unas pocas regiones que aspiran a ser autónomas, las reivindicaciones de los campesinos hambrientos de tierras, el creciente deseo de tolerancia religiosa, los espléndidos logros e ideales de algunos grandes pedagogos: todo ello suscitó la oposición de quienes preferían las antiguas formas de gobierno y, cuando otros denunciaban los vicios del viejo orden, se contentaban con invocar y exagerar sus virtudes. Una vez que los progresistas empezaron a hacerse notar, el péndulo político, que durante algún tiempo había oscilado de forma inofensiva, pronto mostró signos de convertirse en un fenómeno alarmante. Si la reforma se hubiera producido gradualmente, nos habríamos ahorrado la terrible catástrofe actual. Pero se había demorado tanto que la gente la exigía con urgencia, y siempre había quienes exigían más que el resto. Así pues, cuando en 1923 Primo de Rivera, impaciente ante la corrupción y la ineficacia del gobierno político y burocrático, agitó el péndulo con más violencia que nadie antes que él, preparaba inconscientemente para el futuro no sólo recriminaciones, sino también represalias. Desde entonces, éstas no han cesado. El preso político de hoy es el primer ministro de mañana. El martillo de los rebeldes se convierte rápidamente en el líder rebelde. Unos años que se burlan de la paz terminan en una guerra abierta...

Este libro, aunque aparece en medio de esa guerra, ya estaba prácticamente terminado antes del estallido de las hostilidades.

Cuando, hace aproximadamente un año, se hizo cada vez más evidente que la Segunda República, fundada con tantas esperanzas por hombres de tan elevados ideales, estaba condenada al desastre, en la forma que entonces mostraba, me puse a trabajar en describir su trayectoria en una crónica breve y sin pretensiones. El azar me ha permitido, al mismo tiempo, sin prisas ni demoras indebidas, escribir su epitafio. Las últimas semanas han sido profundamente dolorosas para todos aquellos que creen en el futuro de España y admiran a los hombres que, aunque a veces a ciegas, han intentado, con nobleza y entrega, liderarla. Si bien algunos elementos cómicos, incluso de la comedia más burda, amenizan ciertas escenas de este drama, se trata esencialmente, y en el sentido shakesperiano, de una tragedia, en la que, al repasar su desarrollo, todo lo demás parece insignificante comparado con la catástrofe.

Durante casi veinte años he pasado más de una cuarta parte de mi tiempo en la Península, y, aunque el pronombre personal de primera persona apenas se inmiscuye en la narración, gran parte de lo que se describe en ella no sólo lo he leído, sino que lo he visto. Una crónica de los acontecimientos en España que he escrito semanalmente desde 1929 ha sido ampliamente utilizada, pero mis principales fuentes, tanto para el libro como para la crónica, han sido la prensa diaria española, junto con los valiosos artículos de los corresponsales de *The Times*, a los cuales los estudiosos británicos de la política española deben estarles profundamente agradecidos.

Si bien la imparcialidad absoluta siempre es difícil de alcanzar, he intentado describir los acontecimientos de estos años con la mayor objetividad posible; y los políticos de cualquier bando buscarán en vano sus exageraciones favoritas. No he afirmado, por ejemplo, junto con un autor reciente, que «el rigor con el que se libra la guerra contra los católicos supera cualquier cosa imaginable», ni con otro, aún más reciente, que «la represión del gobierno fascista español contra los trabajadores de Asturias es tan espantosa que supera cualquier cosa que se haya oído hasta ahora sobre cualquier otro país del mundo».

Para facilitar la lectura, he utilizado términos políticos familiares para los lectores ingleses en lugar de otros que suenen extraños, y me he abstenido de salpicar las páginas con siglas como F.A.I., U.H.P., J.O.N.S., P.O.U.M., que son habituales en la prensa española. Hasta donde sé, ninguna parte sustancial de lo que he escrito anteriormente se incluye en estas páginas, pero ocasionalmente he incorporado breves pasajes de numerosos artículos publicados en *Nineteenth Century and After*, *Contemporary Review*, *Bulletin of Spanish Studies*, *Commonweal*, *The Observer*, *Liverpool Daily Post*, *Church Times*, *The Nation* y algunas otras publicaciones periódicas, a cuyos editores he tenido muchas razones para agradecerles su gran consideración.

E. A. P.

Liverpool, 15 de septiembre de 1936

SOBRE LAS NOTAS

La principal referencia es el *Bulletin of Spanish Studies* (B.S.S.), al que, desde 1929, he contribuido con un informe de los acontecimientos de España titulado «Spain Week by Week». En el inicio de cada capítulo se incluyen referencias a las páginas de este diario, que corresponden aproximadamente a cada sección del capítulo, para que los lectores que lo deseen puedan estudiar los acontecimientos en estricto orden cronológico, incluso aquellos que aquí a veces se han omitido, y puedan encontrar las citas en su forma original en español.

Capítulo I.

LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA

B.S.S., Vol. VII, pp. 50-5, 140-1; II: Vol. VII, pp. 137-45, 172-6; Vol. VIII, pp. 33-7, 124-7 124-7; III: Vol. VIII, pp. 128-31; IV: Vol. VIII, pp. 131-3; V: Vol. VIII, pp. 133-5; VI: Vol. VIII, pp. 122-3, 133-4; VII: Vol. VIII, pp. 132, 135-6.

I. ENERO DE 1930.

La Dictadura: sus logros y defectos.

Caída y posterior muerte de Primo de Rivera.

El 28 de enero de 1930, Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella y Dictador de España, dejó el cargo para el que se había autoproclamado seis años y cuatro meses antes, y se retiró a París, donde, apenas siete semanas después, falleció.

El experimento de Primo de Rivera con la dictadura había comenzado bien, pues representaba un intento novedoso y atractivo de acabar con el fenómeno español de los gobiernos en constante cambio y de resolver el problema de la ineficacia administrativa, que hasta entonces se había resistido a ser solucionada. Terminó mal, y se esgrimen diversas razones para explicar su desenlace, pero las verdaderas causas residían en los caracteres del Dictador y del pueblo español.

El Dictador era un andaluz benevolente, con todas las virtudes y defectos propios de los andaluces. Le encantaba la ostentación y el boato; hablaba demasiado, sobre todo a través de fantásticos comunicados oficiales; exageraba sin reparos; sus generosas promesas a menudo superaban su capacidad de cumplimiento; y, cuando se enfurecía, actuaba como un padre imprudente e impulsivo, imponiendo los castigos más severos, para luego modificarlos o condonarlos por completo en cuanto se le pasaba la ira. Le gustaba creer que su gobierno era suave y paternal, no una «dictadura»¹, parafraseando el juego de palabras de moda en España en aquella época, sino una «dictablanda».²

Además de andaluz era militar, tanto por ascendencia como por profesión y temperamento. Los oficiales del ejército, en efecto, lo llevaron al poder, y, literalmente, fueron los responsables de su caída. Confiaba y creía en la clase oficial como nunca confió ni creyó en la burguesía, y mucho menos en los intelectuales. No concebía la organización de un país de otra forma que no fuera como una especie de ejército. Ignorando fenómenos como el rápido crecimiento del socialismo y la creciente insistencia de los regionalistas, intentó adiestrar a la nación como si fuera una sola unidad, tal como había adiestrado a sus hombres. Así, a pesar de sus muchas cualidades —profunda sinceridad, intenso patriotismo, cortesía infalible, perseverancia constante, asombrosa laboriosidad, valentía indomable—, él mismo destruyó el pretencioso edificio que había erigido con tanta

1 [Al igual que la expresión posterior «dictablanda», en castellano en el original.]

2 Véase el primero de dos artículos de S. de Madariaga (reimpreso en *Spain*, págs. 429-433) sobre «La Nueva España», publicado en *The Times* el 23 de julio de 1929. Este artículo, si se tiene en cuenta el respeto que se le profesaba al hombre en el poder, ofrece una excelente imagen del carácter de Primo de Rivera.

confianza, y finalmente provocó la caída del régimen monárquico, para el cual probablemente no concebía otra alternativa que el caos.

En parte, también, el fin de la dictadura se debió al carácter del pueblo español. Hasta cierto punto, un liderazgo eficaz puede sacar lo mejor de ellos, pues (en términos generales) cooperan y se organizan mal, pero poseen un gran amor por el símbolo, un idealismo singular y un profundo sentido de la lealtad. Pero los límites que se niegan a seguir ciegamente se han estrechado considerablemente en las últimas décadas. Si Primo de Rivera hubiera vivido en el siglo XVII, sin duda habría gobernado la nación con mucho mayor éxito. Si Alfonso XIII hubiera sido llamado a gobernar al pueblo que gemía bajo el yugo de su bisabuelo, Fernando VII, sin duda habría fallecido a una edad avanzada, querido (o al menos tolerado) por todos. Pero España había cambiado enormemente en el siglo (1823-1923) entre la victoria de Fernando sobre los liberales y la victoria de Primo de Rivera sobre el constitucionalismo. Durante la Dictadura, era costumbre en España que los liberales repitieran con admiración la cruda descripción de Alfonso XIII atribuida a diversas personalidades: «Fernando VII y pico»³. Esta descripción debería haber ido acompañada de otra sobre la propia España: «La España de Fernando VII con mucho menos». Los españoles, en general, no son tan democráticos como la mayoría de las naciones de Europa Occidental, ni tan progresistas como algunos de sus intelectuales quisieran hacernos creer. Si rechazamos, como deberíamos, la «Leyenda Negra» que los presenta como una nación de fanáticos ignorantes e inquisitoriales y bandidos pintorescos, no debemos dar crédito inmediatamente a una «Leyenda Blanca» que los convierte en la nación más ilustrada del mundo y los reviste de un halo de santidad estrictamente laica. Pero no es necesario caer en ese error para apreciar que los españoles son mucho más democráticos y progresistas de lo que sus antepasados inmediatos pudieron haber previsto, o de lo que Primo de Rivera y su soberano pudieron haber sospechado. Como resultado, aunque al principio se resignaron a la dictadura, e incluso la aprobaron, gradualmente reaccionaron contra ella con tal determinación que, de no haberse derrumbado por su propio peso cuando lo hizo, sólo unos pocos meses más la habrían separado de una revolución popular.

Las características más destacadas del gobierno de Primo de Rivera pueden resumirse con brevedad. Triunfó en un solo día —el 13 de septiembre de 1923— como un movimiento militar, con la aprobación del Rey y, probablemente, en aquel momento, bien recibido por la mayoría del pueblo.⁴ Si hubiera buscado de inmediato la aprobación de las Cortes, no cabe duda de que podría haberse establecido constitucionalmente, pues, con el país harto de la inestabilidad política y el malestar social, los políticos profesionales estaban completamente desacreditados. Pero el Dictador creía que podía eliminar impunemente formalidades como la Constitución; además, anunciaba y repetía constantemente que había venido a gobernar sólo por noventa días y que su único objetivo era preparar al país para un gobierno democrático libre de impurezas cuya existencia todos admitían. Le resultó más difícil renunciar a sus poderes dictatoriales que asumirlos, pero el cambio a un Directorio Civil en 1925 y la creación en 1927 de una Asamblea Nacional —la vana caricatura de un parlamento— fueron factores que contribuyeron al deterioro de su salud y a la disminución de su paciencia. Sin duda, anhelaba alcanzar más de lo que nadie imaginaba.

Los logros de la Dictadura fueron numerosos⁵ y, a su manera, importantes, pero, comparados con sus fracasos, superficiales. La mayoría de ellos se englobaron bajo el epígrafe de reformas materiales, un elemento menor si se compara con la pérdida de independencia y libertad. No obstante, representaron, y aún representan, un logro positivo y una base sobre la cual la República se construyó posteriormente, sin hacer demasiado alarde de ello. Así como la grandiosa nueva

3 [En castellano en el original.]

4 Para conocer la versión del propio dictador sobre este asunto, véase su artículo reproducido en *El Debate*, el 21 de marzo de 1930.

5 Estos logros son resumidos, aunque no exhaustivamente, por Primo de Rivera en un artículo titulado «La Dictadura Civil», reproducido en *El Debate* del 23 de marzo de 1930.

Ciudad Universitaria de Madrid, promovida por el rey Alfonso⁶, será un marco magnífico para una universidad reformada y autónoma cuando el progreso educativo llegue a ese punto, así también las cuatro mil nuevas escuelas erigidas por Primo de Rivera no fueron en absoluto un comienzo insignificante para la obra de construcción mucho mayor que más tarde inauguraría (en parte a expensas de las Órdenes religiosas) la República.⁷ Las carreteras fueron mejoradas y aumentaron en número, de modo que se ha convertido casi en un lugar común para los automovilistas que las carreteras principales de España están entre las mejores de Europa. Los túneles ferroviarios transpirenaicos orientales y occidentales planeados tiempo atrás se completaron; se iniciaron las obras de otras líneas muy necesarias; se ampliaron los servicios ferroviarios; se aumentó la velocidad de los trenes y su puntualidad se aproximó algo más a los horarios. Se pusieron en marcha grandes proyectos de irrigación y se elaboró un generoso programa para innovaciones similares del futuro. Se instaló un sistema telefónico completamente nuevo y altamente eficiente, por una nueva empresa española de origen norteamericano. Los hoteles fueron ampliados y enormemente mejorados. Se creó un Patronato Nacional del Turismo, que aún existe; y tanto el volumen como la eficiencia del sector turístico aumentaron considerablemente. Dos enormes exposiciones, en Barcelona y Sevilla, atrajeron visitantes de todo el mundo y, de paso, contribuyeron en gran medida a fortalecer los lazos entre España e Hispanoamérica.

Además, Primo de Rivera luchó con determinación contra la corrupción y el desorden. En la Administración Pública, donde esta situación era más grave, realizó un valiente intento, aunque no del todo exitoso, de asegurar que quienes percibían un salario también realizaran la correspondiente labor. En las grandes ciudades se restableció el orden, y tanto los gánsteres como los promotores de huelgas y disturbios consideraron prudente abandonar el país. Los enemigos de la dictadura, tanto en España como en el extranjero (pero principalmente en el extranjero), declararon hasta la saciedad que España estaba «muda bajo una colosal tiranía militar... un reinado de terror».⁸ Cualquiera que viajase allí entre 1923 y 1929 sabe bien que el país mostraba todos los signos externos de prosperidad y felicidad.

Pero la prosperidad era puramente material y comenzó a desvanecerse con el aumento de los impuestos; la peseta se devaluó y la gente se dio cuenta de que pasarían décadas antes de que fueran pagadas las grandes exposiciones. Salvo en un aspecto, la felicidad no era más que una satisfacción superficial. Ese aspecto era el inmenso alivio provocado por la exitosa conclusión por parte de Primo de Rivera de la guerra de Marruecos, que databa de 1909 y que había llegado a considerarse casi una institución, cobrándose un precio constante y a menudo trágico en vidas y salud a la población. Los éxitos del líder del Rif, Abd-el-Krim, culminaron provocando un desastre devastador en Annual, en 1921, en el que perecieron el general Silvestre y todo un ejército. Cuando Primo de Rivera tomó las riendas del gobierno, decidió darle a España una paz victoriosa y, después de un breve período de aparente inactividad pero de necesaria repliegue, lanzó un ataque, en estrecha colaboración con los franceses, a finales del verano de 1925, que finalmente condujo a un acuerdo muy deseado en mayo siguiente.⁹

Si bien todo esto debe reconocerse en favor de Primo de Rivera, existe un cargo en contra, más general y de mayor peso. Se suprimió la libertad de expresión y la libre manifestación de opinión; si hubiera sido posible suprimir el libre pensamiento —«la funesta manía de pensar», como se la llamaba en tiempos de Fernando VII—, la Dictadura sin duda seguiría vigente hasta nuestros días. Pero no fue así, e incluso entre quienes en general pensaban como el Dictador, crecía un coro de exasperación ante sus numerosas medidas represivas: periódicos censurados y suspendidos;

6 Véase *The Times Educational Supplement* del 9 de agosto de 1930. La Ciudad Universitaria se construyó por iniciativa del rey Alfonso, aunque contó con el apoyo de Primo de Rivera y se desarrolló considerablemente durante la República.

7 Sobre esta cuestión véase Sir George Young: *The New Spain*, pág. 99.

8 Joseph McCabe: *Spain in Revolt*, Londres, 1931, pág. 227.

9 Véase Primo de Rivera: «Constitución y labor del Directorio», en *El Debate*, 22 de marzo de 1930.

reuniones públicas, e incluso banquetes, vigilados secretamente; líderes (y no siempre políticos) multados, encarcelados o exiliados por las más leves indiscreciones; clubes cerrados; asociaciones abolidas; universidades suspendidas por períodos indefinidos; la Junta para Ampliación de Estudios, que es la institución educativa más avanzada de España, interferida; comprobaciones religiosas impuestas a los funcionarios estatales, con la destitución de los recalcitrantes; y todo esto, además de las medidas más severas que se tomaban ante el menor indicio de auténtica revuelta.

Cuando la dictadura cumplía los tres años —¡la dictadura que debía terminar después de tres meses!— Primo de Rivera tramó un ridículo llamamiento al país. Un plebiscito de cuatro días, con participación de ambos sexos —¡no se olvidaría de las mujeres!—, recogió unos 6.700.000 votos, quién los registró y cuántos votó cada uno, nadie lo sabe.¹⁰ En septiembre de 1927 se creó la igualmente ridícula «Asamblea Nacional Suprema», un pseudoparlamento diseñado para «representar a todas las clases e intereses», pero compuesto principalmente por miembros designados por el dictador. Sus reuniones en sesión plenaria duraban un promedio de veinticuatro horas al mes, y no tenía autoridad legislativa ni administrativa, sino que sólo estaba facultada para presentar recomendaciones al Gobierno.¹¹ Ninguno de los críticos del Dictador se engañó ni se apaciguó por la creación de tal organismo, al igual que la de «Unión Patriótica», una organización nacional de «buenos ciudadanos» —es decir, partidarios de la Dictadura— que se suponía que sería el instrumento para devolver al país al gobierno constitucional, pero que se dio a conocer principalmente por sus multitudinarias manifestaciones, organizadas a un costo enorme para apuntalar la política y el prestigio del Dictador. Mientras tanto, él siguió posponiendo la hora fatídica en la que inevitablemente tendría que renunciar al poder. «Se le dijo al pueblo —comentó *The Times* en 1927— que la dictadura duraría una semana, luego noventa días, después varios períodos indefinidos, pero tras cuatro años completos la ven tan firmemente establecida, y creen que tan inamoviblemente establecida, como siempre.¹² Al cabo de cinco años y medio, Primo de Rivera anunció que su retiro aún estaba a dos años de distancia.¹³ Quizás, de haber sido posible, habría continuado indefinidamente por el camino que solía describir con cierta ligereza como «ilegal pero patriótico»¹⁴, nadie lo sabe.

De todas las puerilidades y tiranías del dictador, la más flagrante fue probablemente su trato a Cataluña. Esta región de España, que tiene su propia lengua, su literatura, su historia y su carácter nacional, llevaba tiempo exigiendo cierto grado de autonomía al que se creía con derecho, y las pequeñas concesiones que la monarquía le había hecho no habían satisfecho a nadie. Pero incluso estas medidas fueron suprimidas por Primo de Rivera. «¡No hay regionalismo en el ejército! —argumentaba—. ¿Por qué habría de haberlo en España? ¡Vivamos todos como españoles felices y contentos bajo el mando de su padre Primo!» Así pues, se abolió la *Mancomunitat* (organización central que coordinaba el trabajo de los ayuntamientos); se ordenó arriar la bandera catalana; se prohibió el uso del catalán en las reuniones públicas; incluso las placas de las calles de Barcelona fueron cortadas por la mitad por orden del gobierno, permitiéndose únicamente que apareciera el nombre en castellano de cada calle.

Las situaciones a las que condujo tal represión son casi increíbles. Por citar solo un ejemplo, el consejo del Colegio de Abogados de Barcelona fue disuelto por intentar publicar la lista de sus

10 Fernández Almagro (op. cit., p. 497) lo expresa cortésmente: «Firmaron en listas colocadas al efecto en sitios públicos, cuantos quisieron, o fueron llevados o fingidos, en número de 6.697.164»: se han escrito cosas más extrañas sobre este notorio plebiscito, pero carecemos de espacio para registrarlas. Cfr. «The Dictatorship in Spain» en *The Times*, 4 de octubre de 1926.

11 Op. cit., págs. 497, 504-5. Véase un interesante editorial, «The Spanish National Assembly», en *The Times* del 14 de septiembre de 1927, y las propias opiniones de Primo de Rivera en su artículo reproducido en *El Debate*, 25 de marzo de 1930.

12 *The Times*, art. cit.

13 *El Debate*, 7 de marzo de 1929.

14 *The Times*, art. cit.

miembros en catalán y se nombró un nuevo consejo en su lugar. Varios de los nuevos miembros se negaron a asumir el cargo, ante lo cual el Gobierno anunció que, de persistir en su negativa, serían privados de la ciudadanía, del derecho a ejercer su profesión y de su propiedad privada.

Lo asombroso fue que, bajo un trato que habría sido intolerablemente ofensivo de no haber sido tan ridículamente infantil, toda Cataluña no se convirtiera en separatista para siempre. En cambio, con encomiable sensatez, sus líderes se concentraron en una intensa propaganda cultural dentro del país, con la vista puesta en el futuro de la región, y en propaganda política a una distancia prudencial fuera de ella. Sólo se produjo un intento serio de revolución: la aventura de Prats-de-Molló, en noviembre de 1926, en la que el líder exiliado de la organización separatista *Estat Català*, el coronel Macià, intentó desesperadamente, aunque sin éxito, invadir Cataluña con un ejército voluntario de exiliados y reclutas extranjeros, y establecer un «gobierno provisional de Cataluña» para la restauración de la «soberanía nacional».¹⁵ Los líderes, que sufrieron la humillación de ser arrestados en territorio francés, fueron juzgados y expulsados de Francia, tras lo cual se refugiaron en Bélgica.

Sin embargo, en otras partes de España se realizaron otros intentos de derrocar a la dictadura por la fuerza de las armas. A mediados del verano anterior, una rebelión militar en Valencia, liderada por los generales Weyler y Aguilera, había sido sofocada, y sus dirigentes habían recibido un castigo ejemplar.¹⁶ Valencia también fue escenario de un segundo levantamiento fallido tres años después, bajo el mando de un antiguo líder conservador, D. José Sánchez Guerra, quien regresó de un exilio voluntario en París para dirigirlo; estuvo acompañado por una revuelta de las guarniciones de artillería de Ciudad Real. Estas rebeliones, como otras de menor importancia, fueron reprimidas sin dificultad. Primo de Rivera, como soldado, sabía cómo lidiar con levantamientos militares repentinos; lo que no pudo controlar en absoluto fue el creciente descontento civil.

Éste comenzó a manifestarse a gran escala a principios de 1929. En primer lugar, hubo problemas con la administración pública. Dos distinguidos escritores, Don Enrique de Mesa y Don Ceferino Palencia, fueron destituidos de sus cargos en el Ministerio de Instrucción y encarcelados sumariamente; nadie parecía saber con certeza el motivo. Pero un comunicado del Dictador amenazaba seriamente con imponer las penas más severas a los funcionarios públicos que criticaran el régimen, y el siguiente aviso a los empleados apareció en las paredes de todas las oficinas gubernamentales: «Les guste o no, el Gobierno es su amo. Pueden tener su propia opinión al respecto, si se consideran capaces de tenerla. Pero deben abstenerse estrictamente de criticar sus acciones».¹⁷

Luego surgieron rumores de crecientes disensiones entre el Dictador y el Rey. Primo de Rivera había decidido disolver el cuerpo de artillería, que había sido fundamental en la rebelión; el Rey se negó a firmar el decreto hasta que el Dictador amenazó con dimitir si seguía demorándolo. Tras la promulgación del decreto, estallaron disturbios entre los cadetes, y aún más graves en las universidades a raíz de la concesión de privilegios universitarios al colegio jesuita de Deusto y al colegio agustino de El Escorial. En primer lugar, se desató una oleada de protestas verbales, y el Colegio de El Escorial dejó claro al dictador el rumbo que debía seguir al rechazar los privilegios. Pero, ante su inacción, las palabras se convirtieron en acciones, y se desató una violenta agitación por todo el país. Liderados por la Universidad de Madrid (conocida como la «Universidad Central»), los estudiantes de todas las ciudades universitarias se declararon en huelga, organizaron manifestaciones, apedrearon edificios y se enfrentaron a la policía... Era evidente que la situación no podía continuar, pero una vez más el dictador no encontró otro remedio que la represión. Cerró

15 Fernández Almagro, op. cit., pp. 498-99.

16 Cf. artículo editorial de *The Times*, 30 de junio de 1926.

17 «The Spanish Crisis and its Sequel», *Nation*, 6 de abril de 1929. Cf. «The Spanish University Question», *Nation*, 4 de mayo de 1929.

la Universidad de Madrid durante dieciocho meses y otras universidades durante periodos más cortos.

Los intelectuales españoles, ya distanciados del régimen, volvieron a protestar. Los profesores dimitieron. Menéndez Pidal, director de la Academia Española, escribió una carta abierta al dictador, prácticamente irrefutable, que contenía la censura pública más severa que este había recibido hasta entonces. Todos los consejos universitarios de España, declaró el eminente académico español, habían condenado esta acción contra la que los estudiantes protestaban con toda razón. «El daño que ha causado es irreparable. Además del perjuicio a la vida intelectual, arruinará la carrera de miles de personas. ¿Qué semillas, sino las del rencor, se están sembrando en las mentes de los jóvenes que, estudiantes de hoy, serán los líderes del mañana?»

Todo esto sucedió en la primavera de 1929, pocos días antes de Pascua. ¡Primo de Rivera estaba realmente molesto! Luego hizo una gira por Cataluña y Aragón y, al oír los habituales elogios, se le ablandó el corazón. Un grupo de profesores serviles pronunció unas «nobles palabras» en la Asamblea Nacional y, poco después, el Ministro de Instrucción pronunció unas conmovedoras frases de perdón. Una de las grandes manifestaciones de la Unión Patriótica en Madrid volvió a poner a todos de buen humor. Pronto corrió el rumor de que la Universidad cerraría durante seis meses (incluidas las vacaciones de verano de cuatro meses) en lugar de dieciocho. Luego, que volvería a abrir en quince días...¹⁸

Así, como un anciano decrepito, la administración decadente se precipitó cuesta abajo hacia su destrucción. A finales de 1929, todos admitían que sus días estaban contados. «El dinero siempre lo sabe», dice el proverbio español, y fue significativo que al cierre del año la libra esterlina se situara en 36,50 frente a las 29 de principios de año: la peseta, de hecho, estaba más baja que en cualquier otro momento desde principios de siglo. Los disturbios universitarios se agravaban cada vez más: pronto, parecía, no habría ninguna universidad abierta. El proyecto de redacción de una nueva Constitución había fracasado; el dictador encontraba cada vez menos personas dispuestas a colaborar con él. A principios de 1930, cedió ante lo inevitable y sugirió que la dictadura debía terminar, no en marzo de 1931, como había dicho diez meses antes, sino en su séptimo aniversario, en septiembre de 1930. Pero este período de gracia, como el propio Primo de Rivera dejó constancia¹⁹, fue considerado demasiado largo, y nada menos que por el propio rey. Así pues, el dictador rectificó su anuncio y se comprometió a dimitir en cinco meses, con elecciones previstas para finales de junio.

Pero la dictadura sería aún más corta. En la última semana de enero, el joven y brillante ministro de Hacienda del dictador, Calvo Sotelo, renunció, y no se encontró a nadie capaz y dispuesto a sucederle en tan poco tiempo. Primo de Rivera empezó a preguntarse si podría, con un mínimo de dignidad, abandonar de inmediato el cargo que él mismo se había creado.

Su siguiente acto, que indignó a todo el país, fue una inexplicable muestra de locura, atribuible únicamente a la incapacidad o al agotamiento mental. Él mismo la describió como «una prueba sensacional y decisiva» de si debía o no permanecer en el poder. «Como la dictadura llegó por proclamación militar —anunció— ahora serán los jefes militares o navales quienes decidan si se mantiene».²⁰ Así pues, autorizó a los capitanes generales y a los oficiales de alto mando del Ejército y la Armada a realizar un examen breve, discreto y privado de la situación y a decidir su futuro. Si se oponían a su permanencia en el cargo, presentaría inmediatamente su dimisión al Rey.²¹ Para el

18 En realidad, el Real Decreto que reabría las universidades se firmó el 20 de mayo. Sobre este tema, véase Asim: «The Spanish University Crisis», en *B.S.S.*, 1929, vol. VI, pp. 92-101. Este artículo incluye el texto de la carta del Sr. Menéndez Pidal y la respuesta del dictador. Para un análisis crítico de la correspondencia, véase también *El Debate* del 3 de abril de 1929.

19 «Fin de la Dictadura española. En *El Debate*, 25 de marzo de 1930.

20 Nota reproducida en la prensa española del 26 de enero de 1930.

21 *Ibid.*

pueblo, esto representó un abandono flagrante del país en manos aún menos capacitadas para gobernarlo que las suyas. Cualquiera que hubiera sido la respuesta, difícilmente habría podido sobrevivir una semana después de haberla dado. Pero, al final, los oficiales tomaron la decisión correcta y obvia. Sólo podían apoyar a un Gobierno que contara con la confianza de Su Majestad. Primo de Rivera ofreció entonces su dimisión al Rey para que Su Majestad pudiera completar la respuesta a la pregunta original. Su Majestad respondió aceptando la dimisión, y Primo de Rivera se marchó.²²

«Y ahora —escribió en el último de esos locuaces comunicados oficiales que él mismo había hecho famosos—, un breve descanso, tras dos mil trescientos veintiséis días de continua inquietud, responsabilidad y trabajo». Pero su descanso, como se demostró, sería eterno. Murió, con trágica rapidez, el 16 de marzo. Su cuerpo fue repatriado a España y se le rindió un magnífico funeral. Decenas de miles de personas permanecieron bajo la lluvia incesante al paso de la procesión, y tras los dolientes, tanto particulares como oficiales, venía una enorme multitud espontánea. Con su generosidad inagotable, España olvidó por un instante los pecados que el Dictador había cometido contra la libertad y recordó únicamente sus logros positivos, sus buenas intenciones y su sinceridad. Las mujeres, en particular, lo aclamaron como el hombre que había traído la paz a Marruecos. Y tal podría ser aún el principal veredicto de la posteridad sobre él. Pues, con todos sus defectos, trabajó, según su criterio, por el bienestar de España, y no debería ser indigno de un lugar en la noble historia de España.

II. ENERO DE 1930 A MARZO DE 1931.

Los gobiernos de Berenguer y Aznar. La rebelión de Jaca. El Comité Revolucionario a juicio.

Durante un breve periodo, España se tranquilizó. «Aquí no pasa nada», se decían sarcásticamente durante la dictadura, cuando la represión implacable intentaba sofocar el creciente descontento. Pero ahora que se había eliminado esa restricción, y a nadie le habría sorprendido una reacción violenta, parecía que realmente no ocurría nada y que el país se preparaba para un retorno pacífico y gradual al orden constitucional, según la receta de Primo de Rivera. Un gobierno provisional, presidido por el exministro de Guerra, el general Dámaso Berenguer, había decretado una amnistía y se disponía a allanar el camino hacia un régimen más liberal, lo cual fue recibido con entusiasmo, sobre todo en Cataluña. Se redujo la censura de prensa. Se empezó a tratar de reformas educativas. Se hablaba de elecciones.

Pero pronto comenzaron a aparecer indicios de que algo no iba bien. El cambio de la libra esterlina cayó progresivamente durante el otoño hasta situarse en 51, y a partir de entonces se recuperó lentamente. Las huelgas generales, aunque sin violencia y durando sólo uno o dos días cada una, se produjeron con desagradable frecuencia en todo el país. En junio se registraron en Sevilla, Málaga, Granada y Bilbao; en septiembre, en Galicia y Asturias; en noviembre, en Madrid y Barcelona. Las concentraciones masivas de republicanos parecían estar convirtiendo a numerosos adeptos a una ideología que, aparentemente, se había manifestado poco durante la Dictadura. No sólo eso, sino que corría el rumor de que destacados republicanos habían formado un Comité Revolucionario, que se había reunido con líderes del movimiento por la autonomía catalana en San Sebastián y había redactado un pacto que obligaba a los catalanes a trabajar por la República, y a los líderes republicanos, a cambio de su ayuda, a presentar un proyecto de ley de autonomía ante las Cortes Constituyentes tan pronto como llegaran al poder.²³ Cuando las universidades reabrieron sus puertas en octubre de 1930, un resurgimiento de los disturbios estudiantiles aumentó la sensación

22 La historia completa se relata de forma concisa en el *ABC* del 27 de diciembre de 1930.

23 Para una descripción de la reunión, un resumen del Pacto y referencias a las fuentes bastante dispersas, véase Fernández Almagro, op. cit., pp. 157-158.

general de inquietud. Al mes siguiente, no fue un estudiante, sino un profesor de filosofía, José Ortega y Gasset²⁴, quien declaró en la revista más respetada de Madrid que los errores del general Berenguer eran irremediables. «¡Españoles! —exclamó—, ¡vuestro Estado no existe! ¡Reconstruido! *Delenda est Monarchia*.»²⁵

En diciembre, la guarnición del pequeño pueblo pirenaico de Jaca intentó poner en práctica este consejo.²⁶ El motín iba a ser sólo la vanguardia de un ataque mucho más extenso contra el régimen que el Comité Revolucionario había planeado para el 15 de diciembre. Al enterarse de que los líderes de Jaca habían decidido atacar primero, el Comité envió a uno de sus miembros, Sr. Casares Quiroga, para disuadirlos. Llegó a su destino a altas horas de la noche del 11 al 12 de diciembre, con el fin de entrevistar a los líderes revolucionarios a la mañana siguiente. Pero los amotinados llegaron aún antes: la señal para la acción había sido el primer toque de diana y el delegado del Comité se despertó con el estruendo de las armas.

El alma del motín era un joven andaluz, el capitán Fermín Galán, que ya había pasado tres de sus treinta años en prisión por rebelión militar contra la Dictadura, y era un hombre de ideas muy avanzadas²⁷, además de notable persistencia, iniciativa y valentía. Su segundo al mando, el capitán Ángel García Hernández, era un hombre de un tipo muy diferente —entre otras cosas, católico practicante— pero de igual determinación y valor. Galán y sus hombres comenzaron desarmando a cualquiera que les resistiera, arrestando al Gobernador Militar, cortando los cables telefónicos y telegráficos, interceptando el tráfico ferroviario, izando la bandera roja, amarilla y morada de la revolución sobre el Ayuntamiento y emitiendo una proclama despiadada que amenazaba con fusilar sin juicio a cualquiera que se opusiera a la «recién nacida República», no solo por la fuerza de las armas, sino también «por palabra o por escrito».

A primera hora de la tarde, los amotinados, ochocientos hombres, comenzaron a marchar hacia el sur, rumbo a Zaragoza, con la intención de ocupar Huesca y así establecerse en una importante posición estratégica mientras sus filas crecían y la revolución estallaba en otros lugares. Sin embargo, tras un enfrentamiento esa misma noche, cerca de Ayerbe, con fuerzas leales movilizadas apresuradamente desde la guarnición de Huesca, se toparon con una resistencia más fuerte pocas horas después, a dieciséis kilómetros de distancia, y fueron inmediatamente derrotados. Varios cientos de rebeldes fueron hechos prisioneros; seis de los cabecillas fueron sometidos a consejo de guerra; y, para que el incidente sirviera de escarmiento, Galán y García Hernández fueron fusilados.

Este último suceso causó una profunda y trágica impresión en la opinión pública²⁸, sobre todo porque en aquel momento se creía que algunos ministros habían aconsejado clemencia y que el Rey había intervenido a favor de la ejecución de las sentencias.²⁹ Esto parece improbable, considerando los sacrificios que hizo Don Alfonso cuatro meses después para evitar el derramamiento de sangre, pero sin duda exacerbó el sentimiento contra la Monarquía y, tan pronto como se proclamó la República, los retratos de Galán y García Hernández se exhibieron por doquier en homenaje a los «mártires de la Revolución».

Mientras tanto, parecía que el fracaso del golpe de Jaca había restablecido temporalmente el orden, pues, salvo algunas huelgas aisladas, la revolución prevista para el 15 de diciembre no llegó a buen puerto. Sin embargo, el Comité Revolucionario publicó un extenso, elocuente y algo violento manifiesto, al final del cual los doce firmantes declararon que, con plena conciencia de su

24 Se reproducen sus artículos más significativos, entonces y durante la República, en José Ortega y Gasset: *Un proyecto republicano (Artículos y discursos 1930-1932)*. (Clásicos de Historia)

25 *El Sol*, 15 de noviembre de 1930.

26 Existen varios relatos de esta rebelión. Sigo principalmente a Fernández Almagro, op. cit., pp. 562 y ss.

27 Véase: Fermín Galán, *Nueva creación*. (Clásicos de Historia)

28 Véase *Las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, en el diario ABC*. (Clásicos de Historia)

29 Sobre esta cuestión véase el testimonio del general Mola (cit. Fernández Almagro, op. cit., p. 567).

misión y responsabilidad, asumían las funciones de autoridad pública como Gobierno Provisional de la República Española.³⁰ Varios de los firmantes fueron, como era de esperar, arrestados de inmediato; otros lograron eludir a la policía y huir del país. Pero la publicación del manifiesto marcó un hito decisivo en la historia de la campaña republicana, incluso con mayor claridad que la propia rebelión de Jaca.

Durante esta semana convulsa tuvo lugar otra manifestación que, si bien fue principalmente espectacular, contribuyó en gran medida a la impresión causada por los revolucionarios. Uno de los puntos de Madrid que debían ocupar, de haberse materializado el levantamiento del 15 de diciembre, era el aeródromo del barrio de Cuatro Vientos. Los líderes encargados de esta operación, el comandante Franco y el general Queipo de Llano, no vieron razón alguna para no realizar una demostración de fuerza. En consecuencia, creyendo, al parecer, que al menos en Madrid se llevarían a cabo los planes originales, se apoderaron del aeródromo y sobrevolaron la ciudad lanzando panfletos con el lema: «¡Españoles! ¡Se ha proclamado la República!» y con amenazas de que las tropas que obedecieran las órdenes de sofocar el movimiento serían bombardeadas desde el aire, tanto si salían a las calles como si permanecían en los cuarteles.

Destacamentos de infantería y artillería fueron trasladados inmediatamente a Cuatro Vientos y, en pocas horas, los líderes habían escapado o se habían rendido. Esto, presumiblemente para gran alivio del Gobierno, puso fin a las manifestaciones de diciembre. Se hizo todo lo posible por calmar al país. Se declaró la ley marcial y se reimplantó la censura durante seis semanas. Sin embargo, esto no tuvo el menor efecto sobre las huelgas generales, que se propagaban sin cesar, especialmente en el norte de España: en La Coruña, Santander, Bilbao, Tolosa, Pamplona, Logroño y otras ciudades. Las universidades volvieron a cerrar para evitar que contribuyeran al desorden. El signo más esperanzador de la época fue que el Gobierno comenzó a reflexionar seriamente y a hablar abiertamente sobre las próximas elecciones generales.

Pero quizás nada tuvo mayor trascendencia durante estos meses que la unión de los intelectuales españoles a favor de la formación de una República. El Ateneo de Madrid, el famoso club literario español y cuna del pensamiento liberal, había reabierto sus puertas tras la caída de Primo de Rivera, cerrado al primer estallido de disturbios y reabierto por sus propios directivos sin la autorización del Gobierno. Como resultado, se encontraba cerrado casi de forma continua. En junio anterior, durante uno de sus breves periodos de actividad, había elegido presidente a un funcionario de mediana edad llamado Manuel Azaña, un hombre con ciertas pretensiones literarias, que había traducido *La Biblia en España* de Borrow y escrito varias novelas y obras de teatro. Azaña era conocido por ser un republicano convencido, y su elección en ese momento fue sumamente significativa. Además, tres personalidades prominentes habían formado una «Liga al Servicio de la República», ¡como si la República ya hubiera llegado! Uno de ellos, el Dr. Gregorio Maraón³¹, era un eminente especialista madrileño, con una clientela que incluía a la aristocracia e incluso a la realeza. El segundo, Don Ramón Pérez de Ayala, era uno de los novelistas más importantes de España, un hombre que aún no había cumplido los cincuenta, que se había labrado una reputación a temprana edad y que quizás aún tenía por delante su mejor obra. El tercero, Don José Ortega y Gasset, el profesor de filosofía mencionado anteriormente, era (y sigue siendo) inmensamente respetado en el mundo de las ideas y el progreso. Un manifiesto firmado por los tres sostenía que la Monarquía se encontraba en la última fase de descomposición y debía dar paso a una forma de gobierno genuinamente nacional: una República que combinara la fuerza dinámica con la disciplina e invitara a todos los españoles a participar en la suprema empresa de resucitar la historia de España. «Hacemos un llamamiento a todos los profesores y maestros —continuaban los firmantes— a escritores y artistas, médicos, ingenieros, arquitectos y todo tipo de expertos técnicos, a abogados, notarios y demás miembros de la profesión jurídica. En particular, necesitamos la

30 Reproducido íntegramente, op. cit., pág. 568, n.

31 Véase: Gregorio Maraón, *Artículos republicanos 1931-1937*. (Clásicos de Historia)

colaboración de los jóvenes. La República será el símbolo de que los españoles, por fin, han decidido actuar con vigor y tomar las riendas de su propio destino».³² El manifiesto causó un profundo impacto en la clase a la que iba dirigido, y es difícil calcular la vergüenza que la publicidad que se le dio debió de provocar al Gobierno.

En febrero de 1931, la situación era tan caótica que el Gobierno se vio incapaz de mantenerse en el poder hasta las elecciones generales, previstas para marzo, y el 14 de febrero dimitió precipitadamente. Es probable que el rey Alfonso se encontrara entonces más aislado que en cualquier otra crisis anterior de su reinado. Su dictador original fue destituido, su sucesor, no menos dictatorial, fue desacreditado, y el antiguo sistema de partidos de responsabilidad colectiva se desmoronó. Así, el rey emergió, como nunca antes, como la única persona que debía encontrar una salida a una situación que, después de todo, podría haber evitado, o sufrir las consecuencias.

La censura de prensa se había reimplantado inmediatamente tras la dimisión del gobierno, pero los rumores sobre el futuro de la monarquía se extendían por doquier. Algunos decían que don Alfonso abdicaría incondicionalmente; otros, que renunciaría a sus poderes en favor de su cuñado, don Carlos; otros, que se le pediría que abandonara el país hasta después de las elecciones, y que entonces se le exigirían garantías para gobernar constitucionalmente. Sin embargo, ninguno de estos dramáticos acontecimientos tuvo lugar. Tras consultar, como era habitual, con destacados estadistas, el Rey optó por la medida más impopular: pedirle a su enemigo, José Sánchez Guerra, que formara un Gobierno de Izquierda, insistiendo, sin embargo, en que un amigo de confianza, el Conde de Romanones, y otro de sus candidatos, figuraran en él como ministros sin cartera. Sánchez Guerra no estuvo de acuerdo, pero intentó formar un Gobierno aceptable para el pueblo, y para ello visitó la llamada Prisión Modelo de Madrid, donde solicitó la colaboración de miembros del Comité Revolucionario. De haber aceptado, la situación del Rey se habría vuelto aún más embarazosa, pero la única respuesta del líder revolucionario, Alcalá Zamora, fue emitir una nueva declaración reiterando su anterior desafío:

«La coalición republicano-socialista —decía— permanece inseparablemente unida... Negándose a tener participación alguna en el Gobierno... continuará su labor desde fuera y esperará el inevitable triunfo de la República... Estamos seguros de que las elecciones instaurarán la República legalmente y estamos resueltos a que ninguna intriga ni influencia de los poderes tradicionales nos arrebate esta victoria».³³

Así pues, Sánchez Guerra regresó de la prisión al Palacio para rechazar la oferta del Rey. Al final, fue el astuto Conde de Romanones quien salvó la situación, no formando un gobierno él mismo, sino creando uno nuevo al estilo de Berenguer, bajo el mando de un almirante, Juan B. Aznar, en lugar de un general. Él mismo, su verdadera fuerza, se contentó con asumir el Ministerio de Estado. Nadie veía a este gobierno con la menor confianza, salvo algunos periódicos ultraconservadores³⁴ y publicaciones extranjeras que se basaban en dichas fuentes. Estas últimas creían citar a uno de ellos: que «la gran diplomacia del Rey Alfonso» había desacreditado a la oposición republicana y evitado una nueva dictadura militar. «La Monarquía está más firmemente establecida que en ningún otro momento de los últimos siete años», añadía este periódico, «y el Rey ha aumentado considerablemente su prestigio y quizás su popularidad personal».³⁵

Cualquier español que albergara tales idealismos estaba destinado a desilusionarse muy pronto. Pero es cierto que el nuevo Gobierno se puso a trabajar con gran celeridad y tomó varias decisiones trascendentales. En primer lugar, se celebrarían elecciones en todo el país el domingo 12 de abril; estas, sin embargo, no serían parlamentarias, sino municipales. A continuación, se celebrarían elecciones parlamentarias, y las Cortes entonces electas estarían expresamente

32 Op. cit., p. 372, n. 576. Cf. *ABC*., 17 de febrero de 1931.

33 Op. cit., p. 576.

34 Cf. el artículo editorial de *ABC*, 19 de febrero de 1931.

35 *Daily Telegraph*, 20 de febrero de 1931.

facultadas para redactar una nueva constitución. Al mismo tiempo, se revisaría toda la obra del régimen dictatorial y se haría un intento decidido por solucionar algunos problemas centenarios, como el de Cataluña. Tantas veces se habían prometido intentos similares que la iniciativa inspiraba poca confianza. Pero al menos demostraba que el Gobierno era consciente de la gravedad de la situación.

Pero el nuevo equipo, apenas asumió el poder, comenzó a exacerbar la opinión pública con una serie de juicios por rebelión³⁶ solemnemente orquestados.

Primero, el 13 de marzo, tuvo lugar el consejo de guerra celebrado en Jaca contra más de sesenta prisioneros capturados durante la rebelión de diciembre. Todo el país se conmovió profundamente al saber que el Fiscal General solicitaba cinco penas de muerte, además de las dos ya ejecutadas. Los abogados defensores emitieron un llamamiento público que casi podría considerarse una solemne advertencia.

«Siempre tan terrible —decían— por ser tan irreparable, la pena capital infligida tres meses después de un intento de revuelta no puede tener ningún valor ejemplar; sólo puede interpretarse como un acto de venganza, y esto es absolutamente incompatible con el sentir público actual...

»Al emitir esta protesta y llamamiento, solicitamos la colaboración de todos los españoles. Va dirigido a todos los españoles, incluso a aquellos cuyas opiniones difieren más de las nuestras. Deseamos también apelar a la Iglesia, la más grande de las instituciones fundadas en el principio de la compasión. Sólo recientemente, en el momento de la ejecución de Galán y García Hernández, la Iglesia guardó silencio. Recordemos ahora el Decálogo, que no distingue entre republicanos y monárquicos. En el pasado, la Iglesia ha implorado el perdón para los delincuentes comunes: los delincuentes políticos son sin duda más merecedores de sus esfuerzos...

»La violencia da el peor ejemplo posible. Endurece la opinión pública. Siembra las semillas de la venganza...»³⁷

Tras un juicio de tres días y deliberaciones que se extendieron durante treinta y dos horas, el Tribunal dictó dieciséis sentencias de prisión de seis meses a veinte años, una de cadena perpetua y una de muerte. Llegaron peticiones de indulto de todo el país. La organización socialista nacional conocida como la Unión General de Trabajadores declaró que «el malestar que impera en el país se agravaría enormemente con el derramamiento de una sola gota de sangre». El Gobierno evidentemente coincidió con esta opinión, pues en veinticuatro horas el Rey concedió el indulto.

Exactamente una semana después del consejo de guerra de Jaca, comenzó en Madrid el juicio contra seis miembros del Comité Revolucionario que habían firmado el manifiesto sedicioso de diciembre anterior y que, en lugar de huir del país, como sus compañeros firmantes, habían sido encarcelados en la Prisión Modelo, que, especialmente durante la crisis de febrero, se había convertido en un centro del más ferviente entusiasmo republicano. Los nombres de los seis figurarían prominentemente en la historia política posterior de España. El líder reconocido era Niceto Alcalá Zamora, abogado andaluz y antiguo Ministro de la Corona. Miguel Maura era hijo de uno de los presidentes del gobierno más distinguidos de la historia de España y hermano del Duque de Maura, Ministro de Trabajo en el gabinete de Aznar. Fernando de los Ríos había sido durante años profesor en la Universidad de Granada y era sobrino del célebre pedagogo liberal Francisco Giner de los Ríos. Álvaro de Albornoz era un abogado de mediana edad que posteriormente ocupó uno de los cargos mejor remunerados de la República. Francisco Largo Caballero, destacado socialista, era secretario general de la Unión General de Trabajadores. Santiago Casares Quiroga era el desafortunado enviado a Jaca, quien, al estallar el motín, fue descubierto y arrestado por algo más que una simple sospecha.

36 Véase *Los juicios por la sublevación de Jaca en el diario "Ahora"*. (Clásicos de Historia)

37 *El Sol*, 13 de marzo de 1931.

La censura de prensa, si bien permitió que se informara del juicio con bastante detalle, prohibió la descripción del manifiesto que lo originó. Sin embargo, era de conocimiento público que los firmantes se habían reservado cargos en el Gobierno Republicano Provisional que esperaban establecer, y Alcalá Zamora fue nombrado presidente. Este conocimiento elevó la expectación a niveles altísimos. «El juicio —decía entonces una publicación— fue una gran demostración republicana, incluso más efectiva que las que se han celebrado en las plazas de toros de Madrid y Valencia».³⁸ Los acusados eran héroes populares, y las autoridades no pudieron impedir que se les rindiera homenaje. Una multitud inmensa aclamó su llegada. Al entrar en el tribunal, abogados y público se pusieron de pie en señal de respeto. Tras la audiencia, fueron agasajados por el Colegio de Abogados. Incluso sus esposas e hijas recibieron ofrendas florales. La trascendencia del acontecimiento era innegable.

No habría sido difícil predecir las líneas de defensa que adoptaron los acusados y sus abogados. Lógicamente, no había respuesta posible. «Sólo podéis condenar a mis amigos y clientes —dijo el señor Ossorio y Gallardo— demostrando la legalidad de la Dictadura». Y eso era precisamente lo imposible. Alcalá Zamora, en un largo discurso pronunciado con gran sinceridad, fue aún más allá. Causó una tremenda impresión al exponer de la forma más sencilla posible las razones que lo habían llevado, siendo ex-ministro, a simpatizar con la República, y resultaba imposible no quedar impresionado por la minuciosidad de los planes del Comité y la confianza con la que los habían plasmado al demostrar cómo tales preparativos detallados eran esenciales, cuando llegara la República, para evitar el derramamiento de sangre y garantizar la seguridad de la Familia Real.

El resto de los acusados apenas se apartaron del argumento fundamental recién enunciado: la violación de la Constitución por parte del Rey, la ilegalidad de la Dictadura, el estado de opresión en el que habían vivido los españoles durante los últimos siete años y la completa incompetencia moral y jurídica del Tribunal que los juzgaba. Todos negaron enérgicamente las acusaciones. Una acusación absurda de que estuvieran inspirados de alguna manera por el comunismo. «Un abismo se abre entre el credo comunista y el mío», declaró Largo Caballero. «Los obreros, al darse cuenta de que España se precipitaba hacia el estado de anarquía más terrible, me ordenaron firmar el manifiesto en su nombre, y estábamos firmemente convencidos de que, al hacerlo, nos alejábamos del comunismo y guiábamos a los socialistas fuera de su tortuoso camino».³⁹

El 23 de marzo se dictaron las sentencias: seis meses y un día de prisión para cada delincuente, pena que fue conmutada íntegramente al final del día siguiente. Fue la admisión más clara de la completa imposibilidad de contener una marea cuyo constante ascenso era visible para todos. El entusiasmo de los miles que permanecieron durante horas frente a la prisión para recibir a los héroes liberados fue indescriptible. Rodeados, cada uno, por una multitud tan densa que les resultaba imposible llegar a sus coches y a sus familiares que los esperaban, sólo pudieron abrirse paso a empujones hasta los taxis y, con gran dificultad, marcharse al son de un ensordecedor «¡Vivas!» Pero no pronunciaron discursos, ni siquiera declaraciones de intenciones, salvo una breve frase: «¡Y ahora a luchar!»⁴⁰

Como todos sabían, la lucha estaba a punto de comenzar, aunque pocos, quizás, imaginaban lo rápido que terminaría.

38 Roberto Castrovido en *El Pueblo*, de Valencia, 26 de marzo de 1931.

39 Cf. *B.S.S.* 1931, Vol. VIII, p. 126.

40 *El Sol*, 25 de marzo de 1931.

III. MARZO-ABRIL DE 1931. **Las elecciones municipales y sus** **resultados. ¿Monarquía o república?**

El Domingo de Ramos de 1931 cayó apenas cinco días después de la liberación de los líderes revolucionarios y exactamente dos semanas antes de las elecciones municipales. Así, las ceremonias y procesiones de Semana Santa, que atraen a extranjeros que viajan cientos e incluso miles de kilómetros, contrastaban extrañamente con las multitudinarias y turbulentas asambleas electorales y las manifestaciones a favor de amnistías inmediatas para todos los presos políticos. No es que el país estuviera sumido en el caos. Durante la última semana de marzo se habían producido graves disturbios en Madrid, donde estudiantes de la Facultad de Medicina desafiaron a la Guardia Civil, resultando muerto un miembro de la misma, mientras que varios estudiantes de medicina y guardias sufrieron heridas graves. En la Universidad de Barcelona, grupos de estudiantes también tomaron el edificio principal y lo defendieron de la Guardia Civil, y en Valencia, la Guardia Civil disparó contra estudiantes durante una manifestación republicana. Sin embargo, el inicio de las breves vacaciones de Semana Santa impidió que la situación se agravara, ya que durante unos días cruciales los cabecillas fueron dispersados y regresaron a sus hogares.

Durante los días previos a las elecciones, reinaba una especie de silencio en el país, y la impresión general era de una profunda preocupación. Había mucha actividad, pero apenas emoción. Se debatía si las elecciones (que, aunque municipales, eran, por supuesto, de carácter eminentemente político) estarían manipuladas por los dirigentes de los partidos, como tantas veces había ocurrido en el pasado, o si serían la auténtica expresión de la opinión pública. La creencia general era que, al ser las primeras en ocho años, con tantos jóvenes electores que nunca antes habían votado inscritos en el censo, no podían dejar de ser totalmente sinceras. Podría haber algún caso de manipulación electoral puntual —quizás, en las zonas rurales, a gran escala—, pero en toda España, y sin duda en las ciudades más grandes, que aportaban cerca de una quinta parte del electorado, los resultados serían clave para comprender la opinión pública.

Al mismo tiempo, cabe afirmar, sin temor a equivocarse, que pocos, si acaso alguno, esperaban que estas elecciones instauraran la República de inmediato. La mayoría de los republicanos creían, citando las propias palabras de Sr. Alcalá Zamora, que «podrían ser el primer paso hacia la República»⁴¹, pero eso era otra cuestión. Destacados personajes públicos, que formaban parte de los círculos más íntimos del Comité Revolucionario, testificaron que sus dirigentes no esperaban un cambio de régimen antes del verano. Pensaban que la opinión pública en abril mostraría una clara inclinación hacia el republicanismo y que el movimiento de opinión así iniciado y demostrado provocaría una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de junio. Si el Gobierno posponía estas elecciones por temor a las consecuencias, el momento podría ser propicio para una revolución. Por lo tanto, sus planes eran meticulosos, hasta el más mínimo detalle. Pero la rapidez y la facilidad con que se derrumbó la histórica monarquía probablemente sorprendieron tanto a la mayoría de quienes habían trabajado para propiciar su caída como al mero espectador.

El domingo de las elecciones municipales fue un día cálido y soleado, y, aunque en su víspera se produjeron algunos disturbios esporádicos, transcurrió casi con la misma tranquilidad que un día de humillación nacional. Recuerdo haber pasado la mañana en la paz del jardín de un monasterio a varios kilómetros de Barcelona, y, al regresar a la ciudad en la hora punta, me impresionó más la serenidad de las principales avenidas que el contraste entre el jardín apacible y el mundo exterior. Quienes tenían memoria de muchos años comentaban abiertamente que jamás se había vivido un día electoral más tranquilo. En Madrid había más actividad que en Barcelona, pero incluso allí,

41 B.S.S., 1931, Vol. VIII, p. 129.

donde más estaba en juego, nadie habría sospechado que se estuvieran preparando acontecimientos tan trascendentales.

En España, el lunes, hasta la tarde, respetando el principio del descanso dominical, es un día sin periódicos, salvo las generalmente llamadas *Hojas del Lunes*, que ofrecen un resumen mínimo de las noticias. Por lo tanto, durante un tiempo, los resultados de las elecciones no se conocieron en absoluto. Al principio parecía que favorecían a los monárquicos. A las dos de la tarde, las cifras recibidas hasta esa hora, y publicadas por el Ministro de la Gobernación, mostraban que 22.150 puestos habían ido a parar a los monárquicos y solo 5.875 a los republicanos. Los distritos rurales, salvo contadas excepciones, habían apoyado a la monarquía; en Madrid, el número de concejales obtenidos por cada grupo era exactamente igual; y solo en las principales capitales de provincia y en los distritos norte y este de Vizcaya, Logroño, Huesca, Lérida, Barcelona y Tarragona había mayorías republicanas.

Pero estas cifras, como muchos comprendieron entonces, no eran un indicador de lo que probablemente sucedería. En primer lugar, todos sabían que eran incompletas. En segundo lugar, era improbable que España esperara a que las circunscripciones rurales se volvieran republicanas antes de derrocar a la monarquía. Y, lo más importante de todo, las cifras proporcionadas por el Ministro de la Gobernación no tenían en cuenta la inmensa magnitud de las mayorías republicanas en las grandes ciudades. En el distrito de Madrid, por ejemplo, donde Alcalá Zamora, como correspondía al líder del Comité Revolucionario, encabezó la votación con 12.048 votos, cada uno de los dos socialistas que le siguieron recibió más de 11.000, y los tres monárquicos apenas unos 4.000 cada uno, mientras que de los siete candidatos restantes, el más popular obtuvo 577 votos y el menos popular 8. En otro distrito, aunque dos de los cinco concejales electos eran monárquicos, cada uno obtuvo menos de la mitad de los votos de cada uno de los republicanos. En Barcelona, los republicanos obtuvieron un promedio de unos 90.000 votos frente a los 33.000 de los monárquicos.⁴²

Una expresión de opinión tan contundente en las dos grandes ciudades de España explicaría de inmediato la actitud derrotista que adoptó el Gobierno. Madrid se enteró de esto muy temprano el lunes por la noche. El presidente del Gobierno, asediado por los periodistas (una tribu mucho más importuna y omnipresente que en nuestro propio país), había dado una respuesta posiblemente impulsiva y ciertamente indiscreta a una de sus preguntas.

—¿Es inminente una crisis?— le habían preguntado.

—¿Qué mayor crisis quieren —respondió— que el espectáculo de un país que creíamos monárquico convirtiéndose en republicano en veinticuatro horas?⁴³

La franqueza no podía ir más allá. Incluso el despacho del ministro de Guerra a los capitanes generales —«los monárquicos han sido derrotados y las elecciones se han perdido en las principales capitales de provincia»⁴⁴— quedó eclipsado por ella. Al caer la noche, la respuesta a la pregunta de los periodistas, con todo lo que implicaba, era tema de conversación en toda la madrileña. El martes por la mañana, los periódicos lucían la palabra «República» en cada página. Los mensajes de los líderes revolucionarios, tanto en el país como en el exilio, que ocupaban un lugar destacado, resultaron casi un anticlímax tras el reconocimiento del jefe del Consejo de Ministros. Se daba por hecho que el Gobierno dimitiría y los republicanos tomarían el poder, pero esa cuestión ya no

42 Las cifras oficiales completas de estas elecciones nunca se publicaron, y es posible que los republicanos obtuvieran más votos que los monárquicos en todo el país, aunque ciertamente ganaron menos concejalías. El corresponsal de *The Times* en Madrid (véase *The Times*, 29 de julio de 1932) solicitó, varios meses después de la Revolución, al Ministro de la Gobernación permiso para examinar los resultados, pero le fue denegado.

43 *El Sol*, 14 de abril de 1931.

44 Así lo expreso, traducido, *The Times* del 29 de julio de 1932. «Si el propio Comité Republicano —añadió el corresponsal de *The Times*— hubiera tenido que enviar una circular a los comandantes militares, difícilmente habría podido redactar instrucciones mejor concebidas para allanar el camino hacia una rendición pacífica de los monárquicos».

interesaba a las multitudes que se congregaban en las esquinas o paseaban por las avenidas, inmersas en sus debates, deteniéndose de vez en cuando para enfatizar sus argumentos con gestos entusiastas. La cuestión que los absorbía iba más allá del Gobierno y del Comité Revolucionario, y se centraba en el hombre en cuyas manos, como nunca antes, estaba el destino de España. Allí, en el gran Palacio Real, con su patio repleto de multitudes ansiosas y su gloriosa vista sobre la espléndida sierra de Guadarrama, Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios Rey de las Españas, debía estar debatiendo en ese preciso instante la cuestión más trascendental que había tenido que resolver en toda su vida como monarca.

«¿Monarquía o República? ¿Caos o unión? ¿Guerra o paz?»

Y esas eran las alternativas que se debatían tanto en las calles como en el Palacio aquella fatídica mañana de martes.

IV. DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 1931. El cargo del rey Alfonso. Negociaciones entre Romanones y Alcalá Zamora. La decisión del Rey.

Gran parte de lo que realmente sucedió se dio a conocer casi de inmediato a través de la prensa: los republicanos tenían todo que ganar y nada que perder con una política de total franqueza. Se añadieron detalles y se corrigieron otros en varios libros que aparecieron posteriormente⁴⁵, de modo que el relato más completo de los hechos puede leerse en fuentes españolas. Aquí bastará con narrar la historia en sus líneas generales, para lo cual una breve retrospectiva no será superflua.

Desde una etapa temprana de la historia de la Dictadura —quizás incluso antes de aceptarla— el rey Alfonso no pudo haber dejado de ser consciente de la responsabilidad personal por el cambio de régimen que recayó sobre sus hombros. Sin duda, como admitieron incluso sus más fervientes apologistas⁴⁶, había actuado inconstitucionalmente cuando en noviembre de 1923 se negó a convocar a las Cortes a petición de sus ministros, confirmando así su aceptación de la ilegal Dictadura. Su carácter no era el de un andaluz afable y expansivo; él no podía, como Primo de Rivera, referirse a la ligera a sus acciones «ilegales pero patrióticas»: al contrario, nunca olvidó que algún día tendría que rendir cuentas a la historia, si no a sus propios súbditos.

Cabe imaginar sus sentimientos, entonces, tras la caída de Primo de Rivera, cuando previó la improbabilidad de un retorno tranquilo al gobierno constitucional. Es improbable que compartiera las vagas esperanzas de salir adelante a duras penas, como lo hacían los monárquicos más miopes; al contrario, se sabe que, durante la crisis de febrero de 1931, la reina Victoria, de visita en Londres, donde su madre había sufrido un accidente, estaba gravemente preocupada por su futuro y su seguridad. Pero su regreso, el 17 de febrero, brindó a los partidarios del trono la oportunidad de demostrar su lealtad. Mientras el majestuoso tren real, con su conductor ducal, atravesaba las capitales de provincia, la música, las flores y los aplausos frenéticos la recibieron por doquier. En Madrid, decenas de miles de personas abarrotaron las calles y rodearon el Palacio hasta que los Reyes aparecieron en los balcones. Fue «una de las manifestaciones de entusiasmo más impactantes que la Familia Real había recibido jamás».⁴⁷

45 Por ejemplo, el libro del Conde de Romanones *Las últimas horas de una monarquía*, el de Gabriel Maura *Dolor de España* y el de Alcalá Galiano *La caída de un trono*. Otras fuentes se enumeran en la bibliografía.

46 Por ejemplo, Bertrand y Petrie, op. cit., pág. 523. Para conocer la opinión de un crítico no apologista, véase S. de Madariaga, *Spain*, págs. 428, 436. («Católico devoto, sacrificó su juramento sobre los Evangelios; rey, rompió su palabra real.»)

47 *ABC*, 18 de febrero de 1931.

Un mes después, con las elecciones a la vuelta de la esquina y el Gobierno de Aznar aparentemente al mando de la situación, el rey Alfonso consideró factible visitar también Londres. Si bien no era un optimista ingenuo, sino, como ha reconocido un historiador muy crítico, un político de primer orden,⁴⁸ poseía esa personalidad naturalmente jovial que suele ir acompañada de gran energía física, y sin duda esperaba que, por muy debilitada que pudiera quedar su posición tras las elecciones parlamentarias, pudiera fortalecerla una vez concluidas. Que las elecciones municipales pudieran provocar su caída era una idea probablemente tan lejana a él como a casi todos los demás. Cuando, durante la noche de aquel fatídico domingo y en las primeras horas del día siguiente, le llegaron los primeros resultados por teléfono, difícilmente pudo creer que su pueblo lo estuviera abandonando. Ni el derrotista Aznar ni el esperanzado pero lúcido Romanones pudieron convencerlo de que, al menos por el momento, todo estaba perdido. Su primera idea fue una tregua de un mes seguida de elecciones parlamentarias⁴⁹, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus ministros le convencieran, como probablemente ya lo había estado interiormente, de que tal medida jamás sería aceptada por el otro partido.

El lunes por la noche, una reunión de tres horas del Gabinete estuvo completamente dominada por la figura más destacada del Gobierno: el Conde de Romanones. Hacer alarde de fuerza, sostenía el veterano estadista, era impensable; el problema no radicaba en un acto ilegal del pueblo, sino en su opinión expresada democrática y constitucionalmente. Su lógica y sinceridad convencieron, y sólo dos defensores de la fuerza —Bugallal y La Cierva— se opusieron a él. Con estas excepciones, el Gabinete acordó, en primer lugar, dimitir y luego reunirse con el Rey de dos en dos, para que pudiera pedirles consejo, si así lo deseaba, sobre el curso de acción a seguir en tales circunstancias críticas.

Pero el martes por la mañana la situación era aún más grave. Prácticamente todas las grandes ciudades se habían pasado a la República, la mayoría por mayorías decisivas, y en una pequeña localidad —Eibar, en la provincia norteña de Guipúzcoa— la República había sido proclamada oficialmente. En pocas horas, otras ciudades más grandes —San Sebastián, Zaragoza, Córdoba— siguieron el ejemplo de Eibar. Era evidente que había que persuadir al Rey para que abandonara el país, al menos por el momento. Así pues, el Conde de Romanones telefoneó a uno de los amigos personales de Don Alfonso, el Vizconde de Casa-Aguilar, rogándole que presentara a Su Majestad la posibilidad de que el Ejército y la Guardia Civil se unieran a los republicanos y que le aconsejara convocar al Gabinete y redactar un acta de renuncia en debida forma para que la transferencia de poderes se efectuara legalmente.⁵⁰ El Vizconde accedió a transmitir un mensaje escrito al Rey en este sentido, quien inmediatamente mandó llamar al Conde de Romanones y le encargó que se comunicara de inmediato con Sr. Alcalá Zamora con el fin de llegar a un acuerdo en las mejores condiciones posibles.

Era mediodía cuando Romanones partió, y el Rey dedicó las horas siguientes a entrevistar a sus ministros, tal como el Gabinete había sugerido la noche anterior. Mientras tanto, reacio a recibir a Alcalá Zamora en su residencia, el Conde se entrevistó con él en casa de Gregorio Marañón, el médico aristócrata que tan recientemente se había declarado republicano. Fue un encuentro singular. Alcalá Zamora había sido en su día seguidor político y secretario privado de Romanones; ambos habían sido ministros del mismo monarca, en cuyo gabinete también había servido el médico; habían tenido desacuerdos y se habían enemistado; ahora se reunían de nuevo, desde bandos opuestos, para decidir el futuro de España.

Romanones comenzó solicitando la tregua que Don Alfonso había propuesto originalmente y que, al parecer, aún esperaba que contara con el apoyo de la corte.

48 Madariaga, op. cit., pág. 187. Cfr. el supuesto comentario del Rey a esta sentencia en Fernández Almagro, op. cit., pág. 579.

49 G. Maura, cit. Fernández Almagro, op. cit., p. 591, n.

50 Fernández Almagro, op. cit., p. 395.

Alcalá Zamora se negó rotundamente. No era por eso que los miembros del Comité Revolucionario habían arriesgado su seguridad personal.

Entonces el Rey abdicaría, siempre y cuando se estableciera una regencia bajo el Infante Don Carlos.

Aun así, parecía que no había argumentos válidos.

—¿Qué exige entonces el Comité Revolucionario a Su Majestad? —preguntó Romanones—.

—El Rey debe entregarnos el poder y abandonar España inmediatamente.

—¿Y cuándo? —preguntó Romanones.

—Antes de que anochezca —respondió el Presidente designado—, el poder debe estar en nuestras manos. Es definitivo.⁵¹

Así pues, a las dos de la madrugada, se acordó amistosamente que, sin abdicación formal, el Rey abandonaría Madrid esa misma noche. Cinco minutos después, el Conde regresaba al Palacio.

La batalla estaba perdida. El rey recibió a varios de sus consejeros, pero, en cuanto supo que las alternativas eran el derramamiento de sangre o la dimisión, tomó su decisión con perfecta serenidad.

Ya se había recibido la noticia de que la República había sido proclamada en la «segunda capital» de España, Barcelona. A las tres y media, la tricolor republicana, roja, amarilla y morada, ondeó sobre el edificio de Correos de Madrid en la Plaza de Cibeles, y, como por arte de magia, la tricolor comenzó a aparecer en taxis y tranvías, en los escaparates de tiendas y casas particulares, y sobre edificios públicos, hasta que, al anochecer, ondeaba sobre el mismísimo Palacio Real. La gente se agrupaba y, con pancartas improvisadas a partir de carteles rudimentarios que representaban a la joven España acariciando a un león o a Galán y García Hernández, los «mártires de la libertad», desfilaban por las calles gritando fervientes «¡Viva la República!». Jóvenes con gorras rojas se apoderaban de taxis y se subían a autobuses y tranvías para viajar gratis sin límite.

Con el paso del tiempo, la agitación aumentó y, para evitar que la situación se volviera ingobernable, un grupo de ministros decidió declarar la ley marcial. La proclamación se realizó debidamente, pero fue ignorada. Durante unas horas, España tuvo dos gobiernos. A las cuatro de la tarde, Alcalá Zamora emitió un comunicado anunciando que la República se instauraría antes del anochecer. A las cinco, se proclamó extraoficialmente desde el Ayuntamiento de Madrid. Unos minutos después, el gabinete saliente se reunió con el rey saliente. Los dos ministros más intransigentes seguían aconsejando resistencia, pero Don Alfonso los interrumpió bruscamente.

«No quiero que se derrame ni una sola gota de sangre por mí», dijo.⁵²

Luego, tras leer un mensaje a la nación redactado por el Duque de Maura y revisado por él mismo, se despidió brevemente de sus ministros. En dos ocasiones durante la reunión del gabinete se habían recibido mensajes insistentes del Gobierno Provisional de la República, que se había reunido en casa del hermano del Duque de Maura, Miguel. Se acercaba el atardecer, dijeron, y el poder debía ser entregado de inmediato. Así pues, una vez concluida la reunión, comenzaron los preparativos para la partida del Rey.

51 Alcalá Galiano, op. cit. (edición inglesa), p. 205; Fernández Almagro, op. cit., p. 597

52 Fernández Almagro, op. cit., p. 199, n.

V. DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 1931.
La posición del Comité Revolucionario. El Comité
toma el poder. El primer Gobierno Republicano.

Mientras tanto, ¿qué ocurre con el Comité Revolucionario, ahora Gobierno Provisional de la Segunda República Española?

El lunes por la tarde, mientras los miembros que habían estado en el exilio regresaban apresuradamente a España, el resto se reunió en casa de Alcalá Zamora y redactó el siguiente manifiesto, que se publicaría con sus firmas conjuntas:

«Los representantes de las fuerzas republicanas y socialistas, unidos para la acción conjunta, sienten la imperiosa necesidad de dirigirse a España para hacerle comprender la trascendencia histórica de los acontecimientos del pasado domingo, 12 de abril. Jamás, en toda nuestra historia, se ha logrado un hito comparable al del pasado domingo, pues nunca España ha demostrado tal fuerza cívica y convicción entusiasta, ni ha revelado con tanta determinación la firmeza y dignidad de las que es capaz en defensa de sus ideales políticos.

»Existen acontecimientos cívicos en la historia moderna de Europa comparables al que tuvo lugar en España el 12 de abril, pero ninguno que pueda superarlo. Los resultados de las elecciones en las capitales y principales ciudades españolas constituyen, en efecto, un plebiscito contra la Monarquía y a favor de la República. República, al tiempo que la magnitud alcanzada equivale a un veredicto de «Culpable» contra el actual detentador del poder supremo. Este juicio adverso se ha alcanzado con la colaboración de todas las clases sociales y profesiones del país, mientras que en las calles los grupos juveniles españoles, incapaces de emitir su voto, han dado una emocionante demostración del fervor con que nos apoyan.

»Ahora que ha llegado esta hora, invocamos esas supremas virtudes cívicas que en toda nación culta son respetadas por las principales instituciones del Estado, los órganos oficiales del Gobierno y las fuerzas armadas. Es imperativo que todos se sometan a la voluntad nacional, que es inútil intentar tergiversar con el silencio o apelando a los votos emitidos por el feudalismo rural. El doce de abril quedó registrada legalmente la voz de la España viva, y, si lo que desea es ahora tan claro como el día, lo que rechaza no es menos evidente.

»Si, para gran desgracia de nuestra España, aquellos que por el poder de la fuerza ostentan cargos oficiales, o que sirven a la patria, si en posiciones subordinadas no se da una respuesta adecuada a la grandiosa y noble expresión de sentimiento cívico que ella ha dado, entonces, en presencia del país y de la opinión internacional, rechazamos la responsabilidad de lo que inevitablemente sucederá, ya que, en nombre de esta joven y entusiasta España, que por fin ha alcanzado la mayoría de edad, y a la que en estas circunstancias representamos, declaramos públicamente que actuaremos con prontitud y energía para dar efecto inmediato a sus deseos mediante el establecimiento de la República.»⁵³

Esta nota, si bien algo pomposa y confusa en su terminología, era firme en su tono, explícita en su intención y tan poco provocadora en su expresión como cabía esperar. Casi al mismo tiempo, la socialista Unión General de Trabajadores emitió una declaración ligeramente más belicosa, prometiendo velar por que nada interfiriera en la implantación de la voluntad nacional. El martes por la tarde, como en respuesta a estas demandas, el distinguido militar General Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, quien inicialmente se había declarado neutral, se puso a sí mismo y a sus fuerzas a disposición del nuevo Gobierno, el cual, esa misma noche, desde la casa de Maura, envió y reiteró al Rey y a su Gabinete el ultimátum ya mencionado.

Luego se produjo la maniobra que, para los propios ministros, debió ser la más dramática de aquellos dos intensos días. «Serviré al Gobierno que me dé órdenes desde el Ministerio de la

⁵³ Op. cit., p. 592.

Gobernación», había dicho Sanjurjo el martes por la mañana a un mensajero del Gobierno Provisional que lo había visitado para informarse sobre sus intenciones. Sanjurjo, como se demostró, ya había llegado, pero era el atardecer, la hora que el presidente designado había indicado a Romanones como límite para la rendición del rey. Ya no había tiempo, y era hora de que los ministros del nuevo régimen tomaran posesión. Debían dirigirse al Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, centro de la vida política y la actividad popular de Madrid.

Así pues, en palabras de Alcalá Zamora, «antes de que anoheciera del todo, fuimos en dos coches al Ministerio de la Gobernación, donde una vanguardia formada por los dos subsecretarios recién nombrados del presidente del Gobierno y el ministro del Interior ya había llegado discretamente... Tuvimos la suerte de pasar desapercibidos hasta que estuvimos a unos trescientos metros de nuestro destino. A partir de ahí, nuestros coches apenas podían avanzar: el entusiasmo delirante de las masas era algo indescriptible. Incluso recorrer esa corta distancia nos llevó casi media hora, y fue un milagro que lográramos pasar sin causar ningún accidente. Al final, por algún medio inconcebible, la multitud nos abrió paso... y llamamos insistentemente a las puertas cerradas y fuertemente custodiadas del Ministerio de la Gobernación. A todos nos pareció que la breve espera era interminable... Pero si dentro hubo alguna vacilación, pronto se disipó: la puerta se abrió, los oficiales y los hombres de la Guardia Civil se pusieron firmes y saludaron a los representantes del nuevo régimen al entrar. Éramos por fin el Gobierno; habíamos ganado.»⁵⁴

Con la tricolor republicana ondeando por primera vez en un edificio gubernamental, el subsecretario y otros funcionarios del antiguo régimen cedieron silenciosamente su lugar a los del nuevo, el primer Gobernador Civil Republicano recibió sus órdenes, y Miguel Maura, Ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional, salió al conocido balcón y, de manera histórica, se dirigió a la multitud eufórica y que les aclamaba en la Puerta del Sol.

A las once de la noche de aquel día, el nuevo Ayuntamiento de Madrid tomó posesión formalmente, y a las dos de la madrugada del miércoles siguiente (una hora no tan inusual en España como en otros países) el Gobierno tomó posesión plena del poder. Su primer decreto, emitido una hora después, pero fechado el martes, concedía «la más completa amnistía» a los presos políticos y estaba firmado por «Niceto Alcalá Zamora y Torres, Presidente del Gobierno de la República». Pero con anterioridad, los otros siete miembros del Gobierno Provisional que se encontraban en Madrid habían firmado y distribuido un documento que anunciaba la llegada del nuevo régimen y nombraba a su primer Presidente del Gobierno. El documento decía así:

«El Gobierno Provisional de la República ha asumido el poder sin largas negociaciones y sin ningún tipo de oposición o resistencia formal. Es el pueblo quien lo ha elevado a la posición que ahora ostenta, y es el pueblo quien, en toda España, le rinde homenaje y lo inviste de autoridad. En virtud de lo cual, el Presidente del Gobierno Provisional de la República asume en adelante la jefatura del Estado con el consentimiento expreso de las fuerzas políticas vencedoras y la voluntad del pueblo, que conocía la composición del Gobierno Provisional antes de emitir su voto en las recientes elecciones.

»Interpretando el deseo inequívoco de la nación, el Comité integrado por las fuerzas políticas que han colaborado para la instalación del nuevo régimen designa a Don Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de Presidente del Gobierno Provisional de la República».

Tras dirigirse dos veces a la nación por radio, instalar a los miembros de su Gobierno en sus respectivos despachos y declarar el día siguiente (que, de hecho, ya había comenzado) día festivo nacional, el nuevo Presidente, cabe suponer, se retiró a descansar. En pocas horas, el último de los ministros exiliados había regresado a España y se publicó la lista completa del Gobierno. En vista de la trayectoria posterior de algunos de sus miembros, puede resultar interesante mencionar sus nombres.

54 Op. cit., p. 600.

Presidente del Gobierno:	Niceto Alcalá Zamora
Estado:	Alejandro Lerroux
Justicia:	Fernando de los Ríos
Gobernación:	Miguel Maura
Hacienda:	Indalecio Prieto
Fomento:	Álvaro de Albornoz
Instrucción Pública:	Marcelino Domingo
Guerra:	Manuel Azaña
Marina:	Santiago Casares Quiroga
Economía Nacional:	Luis Nicolau d'Olivera
Trabajo:	Francisco Largo Caballero
Comunicaciones:	Diego Martínez Barrio

El día festivo nacional, en Madrid, como en el resto del país, transcurrió prácticamente sin incidentes. Aunque el estruendo de los gritos y cánticos fue tremendo, los daños materiales fueron mínimos. En un momento dado, se temió por el Palacio Real, pero su cambio de nombre a «Palacio Nacional» y la colocación de carteles que decían: «Pueblo, respete este edificio: es suyo», lo salvaron. Los daños causados a la propiedad en Madrid, si bien lamentables, no fueron graves. La estatua de la diosa Cibeles, bastante vulnerable, situada frente a la Oficina General de Correos, sufrió la amputación de sus brazos y cetro; la figura de Felipe III, en la Plaza Mayor, fue derribada de su pedestal; y, finalmente, la estatua de Isabel II, en la plaza que entonces llevaba su nombre, fue primero decapitada y luego adornada con una bandera roja y una inscripción: «¡Viva los mártires de Jaca!»⁵⁵

VI. DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 1931.

Proclamación de la República en Barcelona. ¿Constitución federal o unitaria? El Día de la República en Barcelona.

En Barcelona, la única ciudad española que puede considerarse, con razón, rival de Madrid, el cambio de régimen se celebraba con igual fervor. Era de esperar, no sólo porque Cataluña y su capital sufrieron más que el resto de España durante la Dictadura, sino también porque tenían mucho que ganar con el establecimiento de la República. Además, a la luz de los acontecimientos posteriores, los detalles de la proclamación de la República en Barcelona adquirieron una importancia singular y, por lo tanto, deben describirse con cierto detalle.

La emoción contenida en Barcelona, al hacerse públicas las enormes mayorías republicanas, fue incluso más intensa que la de Madrid. Todos sabían lo que probablemente iba a ocurrir, pero nadie sabía si ocurriría, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Los rumores se convirtieron en susurros, los susurros en vivas, y finalmente corrió la voz de que en la Plaza de Santiago, ya fuera desde el Ayuntamiento o desde el palacio del siglo XVI antiguamente conocido como Palacio de la Generalitat, sede del antiguo parlamento catalán, se haría una proclamación de trascendencia trascendental alrededor de las dos de la tarde. ¿Pero cuál sería la proclamación? Sólo en esta parte de España cabía la menor duda. En la incertidumbre del momento, la gente se preguntaba si Cataluña se separaría del resto de España y se convertiría en una República independiente. O si, como en el resto de España, gobernaría el Gobierno Provisional. O si existía la posibilidad de la proclamación de los Estados Unidos de Iberia, en cuyo caso Castilla y Cataluña compartirían sin duda la preeminencia.

No se supo hasta después que, alrededor de las once de la mañana, la noticia de la proclamación de la República en algunos pueblos pequeños de España había llegado a oídos de uno

55 Cf. Manuel Bueno: «Los Iconoclastas», en *ABC*, 30 de abril de 1931.

de los concejales republicanos elegidos con una enorme mayoría el domingo: un abogado llamado Lluís Companys. Mientras caminaba por las calles, entabló conversación con algunos colegas, quienes sugirieron la posibilidad de proclamar la República independientemente de Madrid. Una vez acordada la idea, Companys no tardó en reunir a la mayoría de los concejales republicanos recién elegidos, y apenas a la una de la tarde entró con ellos en el Ayuntamiento y tomó posesión de él en nombre de la República.

—Aquí están —le dijo al alcalde en funciones— los auténticos representantes del pueblo. Hemos venido a tomar el control del gobierno de la ciudad.

—No opondré resistencia —respondió el alcalde, señalando su bastón de mando.

Companys captó la indirecta y el bastón. Luego, junto con sus compañeros, izó la bandera republicana sobre el Ayuntamiento. La multitud ya congregada en la plaza sabía que, de una forma u otra, Cataluña estaba a punto de proclamarse a favor de la República, y entonces comenzó a cantarse *La Marsellesa* y a gritar «¡Vivas!» y «¡Mueras!» (o, más correctamente, en catalán, «¡Vísques!» y «¡Moris!»), que, como puedo atestiguar personalmente, se oyeron sin cesar, salvo durante unas cuatro horas antes del amanecer del miércoles, durante no menos de cuarenta horas seguidas.

La multitud se hizo cada vez más densa hasta que el tráfico se paralizó; cada vez más densa, hasta que, incluso en aquella inmensa plaza, apenas se podía uno mover. Casi a las dos de la madrugada, se produjo un revuelo de emoción entre la multitud cuando Companys apareció en el balcón del Ayuntamiento y anunció que se proclamaría la República en Barcelona. Entonces se vislumbró tras él la alta y delgada figura del coronel Macià, líder de la victoriosa Esquerra, o Izquierda Catalana. La multitud estalló en vítores entusiastas, que se apagaron repentinamente cuando Sr. Macià se adelantó para pronunciar un brevísimo discurso.

«Pueblo de Cataluña:

»En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, que, con toda cordialidad, procuraremos incorporar a la Federación de Repúblicas Ibéricas.

»A partir de ahora queda constituido el Gobierno de la República de Cataluña, que se reunirá en el Palacio de la Generalitat.

»Quienes formen el Gobierno de Cataluña estarán dispuestos, desde ahora y en adelante, a defender las libertades del pueblo catalán y a morir por ellas. Esperemos que vosotros, catalanes, estéis dispuestos, como todos nosotros, a morir por Cataluña y la República.»⁵⁶

Al terminar su discurso, los vítores se redoblaron. Alguien con una corneta comenzó a tocar *La Marsellesa*. Toda la multitud la coreó. Parecía que se había de oír a kilómetros de distancia.

Mientras tanto, acompañado por sus compañeros consejeros, el coronel Macià cruzó al Palacio de enfrente para su elección formal a la presidencia del nuevo Gobierno, antes de la cual se dirigió de nuevo al pueblo, esta vez desde el balcón del Palacio.

«En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, bajo el régimen de una República Catalana, que libre y cordialmente desea y solicita la colaboración de los demás pueblos hermanos de España en la creación de una Confederación de Pueblos Ibéricos, y se ofrece a liberarlos de la Monarquía Borbónica.

»Aquí y ahora alzamos nuestra voz a todos los estados libres del mundo, en nombre de la libertad, la justicia y la paz de las naciones».⁵⁷

No fue hasta la madrugada del miércoles, cuando se hicieron públicas las noticias procedentes de Madrid que acabamos de narrar, que la victoria de esta revolución incruenta en Barcelona se

56 B.S.S., 1931, Vol. VIII, p. 133.

57 Ibid.

confirmó con la rendición del Ejército. Pero el pueblo lo dio por sentado, hasta tal punto que apenas se les ocurrió responder a las preguntas que se habían estado haciendo antes de la proclamación.

Estas preguntas, sin embargo, eran importantes. ¿Qué había proclamado exactamente el señor Macià? Evidentemente, se trataba de una república catalana, pues no sólo ondeaba la bandera catalana en lo alto del Palacio, por encima de la tricolor republicana, sino que la proclamación oficial, cuyas copias se exhibieron por toda la ciudad, rezaba «República Catalana». Pero sólo una república catalana en el sentido federal de dichas palabras. Si bien no se mencionó en absoluto a Alcalá Zamora ni a su Gobierno Provisional en Madrid, la segunda proclamación dejaba claro que la colaboración con los «pueblos hermanos» de España sería parte integral del nuevo orden, y se conocía lo suficiente del Pacto de San Sebastián, firmado en agosto del año anterior, como para garantizar la fiel colaboración de Barcelona con Madrid en la construcción de la España del futuro.

Cabe destacar también que entre los ministros del Gobierno Provisional se encontraba un catalán de gran prestigio y confianza, Nicolau d'Olwer, lo que aseguraba, por un lado, que Cataluña no había sido olvidada y, por otro, que cumpliría con su cometido en el futuro. Así pues, se prestó poca atención a los términos de la proclamación, y sólo el Gobierno Provisional la examinó con cierta inquietud. Por supuesto, no se toleraría la idea de una República Federal; era una idea que requeriría décadas, si no siglos, de desarrollo antes de convertirse en política práctica. Pero que los catalanes hubieran iniciado su nuevo régimen en la dirección equivocada fue un error que afectó directamente a Madrid, pues el Pacto de San Sebastián los comprometía a patrocinar un Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes Constituyentes, y para la paz de la República era esencial que los gobiernos de Madrid y Barcelona estuvieran de acuerdo tanto ahora como en el futuro. Así pues, cuando la República apenas llevaba una semana, tres ministros volaron de Madrid a Barcelona, entrevistaron al Gobierno catalán y los persuadieron de cambiar la expresión «Estado Catalán» (*Estat Català*), que tenía una connotación algo siniestra asociada al separatismo puro, por la histórica «Generalitat de Cataluña», y al mismo tiempo, de aceptar convertirse en una región autónoma dentro de un Estado unitario si así lo decidía la Corte. Siempre razonables cuando se les trata con sensatez, los catalanes no pusieron ninguna objeción al acuerdo y, por el momento, el asunto quedó resuelto amistosamente.

El Día de la República —fiesta nacional— en Barcelona fue una fiesta inolvidable. Reinaba una euforia desbordante, pero un ambiente de gran buen humor y sin ningún tipo de desorden. Las únicas víctimas conocidas fueron los retratos enmarcados del Rey, que a alguien se le ocurrió dejar caer desde los pisos superiores de los edificios a las aceras. Se podría describir como un Día del Armisticio seguido de una noche de regatas; añádase a esta breve descripción una pizca de color local y ahí está la escena.

Imagínese, si conoce Barcelona, la escena al contemplar las Ramblas bordeadas de aviones hasta la Plaça de Catalunya. Hasta donde alcanza la vista, un mar de gente. Un mar con velámenes amarillos y rojos que representan a la República de Cataluña, y velámenes rojos, amarillos y morados que representan a la República de España. Desde las casas ondean banderines, banderas y serpentinatas, también rojas, amarillas y moradas, contra el cielo azul. Los taxis están cubiertos con los colores de Cataluña o de España. A lo largo de la avenida central arbolada, la juventud republicana, algunos con gorras rojas, otros con símbolos republicanos, marcha quién sabe adónde. Por las calles del Ensanche, ni rastro de tranvías: la noche anterior habían sido tomados por la gente, viajando en ellos sin pagar billete, ni siquiera con un simple «con permiso». No solo viajaban en ellos, sino que los llenaban hasta rebosar, apretujados arriba y abajo, abarrotando las plataformas, colgados de la parte trasera y subiendo a trompicones las escaleras. Un poco hartos de esa multitud que alborotaba, los tranvías se precipitaban a toda velocidad por las Ramblas, provocando escalofríos tanto al pensar en su posible vuelco como por la imagen simbólica de un pueblo que se lanza a la inmensidad de lo desconocido.

Pero ningún catalán podía pensar en algo así en esta noche en que celebra la liberación de su país. ¡Visca la República!... Solo en los escasos y bienvenidos momentos en que nadie toca ni canta *La Marseillesa* se pueden distinguir las palabras, pero brotan a pleno pulmón de esta ciudad de un millón de personas enloquecidas, marchando quién sabe adónde: subiendo por las Ramblas hasta la Plaça de Catalunya, bajando de nuevo por las Ramblas, a lo largo del Muelle, a través de los Jardines, subiendo por los bulevares más altos, hasta Pedralbes, y finalmente, cuando todo oscurece, hasta la fortaleza de Montjuic, donde habrá bailes y fuegos artificiales y la noche se consumirá en júbilo.

Al fin el puerto queda en penumbra, el sol se pone; pero los gritos se hacen más fuertes y la multitud más densa. Aviones sobrevuelan la ciudad, con las dos banderas de la libertad ondeando en sus alas. Lentamente giran y se dirigen a Montjuic. La gente, de todos los rincones de la ciudad, hace lo mismo. Poco a poco, la Barcelona vieja se vacía. A medida que el sonido de tantos pasos se aleja, los gritos se desvanecen.

La República vuelve a ponerse en marcha. ¡Visca la República!

VII. DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 1931.

Salida de España del Rey, la Reina y la Familia Real. El manifiesto del Rey al pueblo.

Mientras los miembros del Gobierno Provisional permanecían sentados en sus coches frente a la Puerta del Sol, escuchando los aplausos del pueblo, sin duda había una leve nota discordante en la música, al menos para los más imaginativos. Por mucho que proclamaran la República, el Rey seguía en el Palacio Real, y, por mucho que la multitud abucheara al «tirano Borbón», siempre existía el peligro de que la belicosidad de los más intransigentes, o el carisma del propio Don Alfonso, convirtieran esas mueras en vivas; ¡tan impredecible es el pueblo, incluso en su mejor momento!

Había anochecido, la noche había caído, y aún no había noticias de la partida del Rey. Pero los ministros no tenían por qué temer. Valiente como para arriesgar su vida, como tantas veces lo había hecho cuando su seguridad personal estaba en peligro, era lo suficientemente valiente incluso como para arriesgarse a ser considerado un cobarde por la seguridad de su pueblo. Desde el principio había comprendido que, si era imposible llegar a un acuerdo con el enemigo, lo mejor para todos era que se marchara de España, con la esperanza, sin duda, de que la Segunda República siguiera el mismo camino que la Primera y de que lo volvieran a llamar pronto. Así pues, tras su última reunión con el Gabinete, rechazó por igual las súplicas de los ministros más intransigentes, las declaraciones de sus asistentes personales y las ofertas de un valiente general para reunir a lo que pudiera del ejército. Su decisión estaba tomada: abandonaría España esa misma noche.

Su objetivo inmediato era Francia, pero la cuestión era cómo llegar allí. La ruta directa, vía Irún, era inviable. Gibraltar, si bien era una salida conveniente, se encontraba demasiado lejos. En su encuentro con el Dr. Marañón, Romanones y Alcalá Zamora se habían inclinado por Portugal; y, hasta altas horas de la noche del martes, la multitud en las grandes ciudades, que abarrotaba las redacciones de los periódicos y otros lugares donde se exhibían boletines informativos, creía que Portugal ya estaba decidido.

Finalmente, sin embargo, el Rey optó por el plan menos previsible de conducir el martes por la noche hasta Cartagena y, en la madrugada del miércoles, embarcar en el crucero *Príncipe Alfonso*, que lo llevaría a Marsella. A las nueve menos cuarto, con un pequeño séquito, salió del Palacio por una salida privada y viajó durante la noche, llegando a Cartagena a las cuatro de la mañana siguiente y a Marsella veintiséis horas después. En cuanto desembarcó, el comandante izó

una bandera republicana confeccionada especialmente durante el viaje, como para demostrar que su pasajero no era el rey de España, sino don Alfonso de Borbón-Habsburgo.

La reina viajaba con todos sus hijos, excepto el infante don Juan, que estudiaba en la Academia Naval de San Fernando y se reunió con su familia unos días después en París. Se creía que podrían llegar a Francia sin problemas en el tren expreso de la mañana, pero en el último momento decidieron tomar el tren en El Escorial en lugar de en la capital. La historia de sus preparativos y viaje puede considerarse, sin exagerar, parte de la historia anecdótica del reinado de Alfonso XIII más que de la historia de la República. Baste decir que, tras una noche de angustia que no disminuyó ni siquiera por los gritos de la multitud que llenaba el patio y asaltaba las puertas y ventanas del Palacio, embarcaron sanos y salvos en el tren real Pullman que los esperaba en El Escorial y llegaron a la frontera francesa sin sufrir ningún tipo de molestia.

Dos días después, para sorpresa de todos, el Gobierno Provisional autorizó la publicación del manifiesto que el ex-rey había leído en la última reunión de su gabinete. Dos breves e inofensivos mensajes, dirigidos al Ejército y a la Marina respectivamente, escritos por Don Alfonso a bordo del crucero y confiados al almirante Rivera, quien lo había acompañado a Marsella, no fueron publicados y se conocieron mucho más tarde. Pero el nuevo Gobierno estaba tan seguro de su control sobre el país —«tan libre era», en sus propias palabras, «de todo temor a las reacciones monárquicas»— que, aunque algunos podrían pensar que había sido precipitado al permitir que el Rey abandonara España sin abdicar formalmente del trono, no vio objeción alguna en permitir la publicación del documento más extenso, precediéndolo con tan solo unas pocas palabras para justificar su decisión. El manifiesto decía lo siguiente:

«Las elecciones celebradas el domingo me demuestran claramente que ya no cuento con el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que esta indiferencia no será definitiva, pues siempre me he esforzado al máximo por servir a España, e incluso en las ocasiones más críticas he antepuesto el interés público a todo lo demás.

«Un rey puede cometer errores, y sin duda yo también me he equivocado en ocasiones, pero sé bien que nuestra patria siempre se ha mostrado generosa con aquellos cuyas faltas carecen de malicia.

«Soy el rey de todos los españoles y también soy español.

«Podría encontrar medios suficientes para mantener mi prerrogativa real mediante el uso efectivo de la fuerza contra quienes la disputan. Pero deseo abstenerme con toda resolución de cualquier acción que pueda sumir a mis compatriotas en una guerra civil fratricida.

«No renuncio a ninguno de mis derechos, pues sólo me pertenecen como un legado que me ha confiado la Historia, del cual algún día tendré que rendirle cuentas.

«Espero las noticias de la expresión auténtica y adecuada de la conciencia colectiva de la nación, y, mientras la nación habla, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y abandono España, demostrando así que la reconozco como la única dueña de su destino.

«Al hacer esto, creo estar cumpliendo con el deber que me impone el amor a mi patria. Ruego a Dios que otros españoles lo sientan con la misma intensidad y lo cumplan como yo.

»Alfonso R. H.»⁵⁸

Fue una despedida magnífica, y mucho más comedida de lo que cabría esperar del último de los Borbones, en quien la iniciativa y el valor personal siempre habían primado sobre la perspicacia, la sensibilidad o la prudencia. Nadie se habría sorprendido si, con una fe persistente en el derecho divino de los reyes y el monarquismo inherente al pueblo español, amante de los símbolos, hubiera señalado el carácter apolítico de las elecciones o las cifras publicadas, que, por supuesto, otorgaban una amplia mayoría monárquica, y, exhortando a sus ministros a apoyarlo y a su ejército a luchar por él, hubiera desafiado a los revolucionarios a que hicieran lo peor. El resultado final de tal

58 Para el original, véase B.S.S., 1931, Vol. VIII, p. 135. Hay otras traducciones.

actuación habría sido en primer lugar una guerra civil, seguida —venciera quien venciera— por el peor tipo de caos político. Tampoco se puede dejar de admirar el tono del manifiesto, que honra tanto a su talentoso autor como a su firmante real. Si bien es probable que, optimista hasta el final, don Alfonso esperara que las elecciones de junio lo trajeran de vuelta, la magnanimidad de su actitud no se basa en absoluto en tal expectativa. Cuando habló por última vez a su pueblo, lo hizo como rey, sí, pero no menos como español y ser humano. De él puede decirse, como se dijo de un soberano anterior que descubrió que los reyes pueden equivocarse y deben sufrir por sus errores, pero que aprendió la lección de forma más trágica:

No hizo nada común ni intencionado
 en aquella memorable escena...
 Ni invocó a los dioses, con vulgar rencor,
 para vindicar su derecho indefenso.

Y como epitafio para todo su reinado, podemos recurrir a Shakespeare y decir, aún más brevemente:

Nada en su vida
 le sentó tan bien
 como el momento de dejarla.⁵⁹

59 La primera de las dos citas procede de la obra de Andrew Marvell, titulada *An Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland* (1650). Y la segunda, más conocida, pertenece al *Macbeth*. La pronuncia Malcolm cuando comunica a Duncan la muerte del rebelde Thane de Cawdor. (Clásicos de Historia)

Capítulo II.

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

B.S.S., Vol. VIII, pp. 138-43; II: Vol. VIII, pp. 193-5, Vol. IX, pp. 2-3; III: Vol. IX, pp. 65-89; IV: Vol. IX, pp. 3-18; V: Vol. IX, PP. 18-24, 89-94.

I. ABRIL-MAYO DE 1931.

La popularización de la República. ABC y Don Alfonso. El episodio del Cardenal Segura. Los disturbios del 10 al 12 de mayo en Madrid y provincias.

Se había resuelto satisfactoriamente el asunto del rey, y el nuevo Gobierno se centró en la consolidación de la República. Pues hasta que no se celebraran las elecciones, previstas para junio, y se estableciera firmemente una Constitución republicana, siempre existía la posibilidad de una reacción violenta por parte de los partidarios de Don Alfonso.

Se recurrieron a diversas estrategias para hacer popular al nuevo régimen. Una de ellas fue el reparto de *regalos*. El segundo día de la República, se concedieron pensiones vitalicias, con fecha del diciembre anterior, a los familiares de los héroes «mártires» de Jaca.⁶⁰ Los parques reales de Madrid y el palacio real de Pedralbes en Barcelona fueron cedidos a los habitantes de dichas ciudades. Sevilla, donde el extremismo estaba tan arraigado que se vendía literatura comunista desde las mismísimas escaleras de la catedral, recibió 500.000 pesetas para paliar el desempleo de forma inmediata, y se concedieron ayudas menores en otras partes del país. Antes de que terminara abril, Alcalá Zamora realizó una visita oficial a Barcelona, y tanto en Cataluña como en el resto del país se supo que las aspiraciones del pueblo a la autonomía recibirían la más favorable atención.

Los intelectuales, que habían prestado a la joven República un apoyo tan valioso y oportuno, fueron apaciguados principalmente con garantías de la ayuda que, a su debido tiempo, se destinaría a la enseñanza; los intelectuales son pacientes y, por lo general, inofensivos, y esperan más tiempo que el proletariado para que se cumplan las promesas. Pero como anticipo de lo que estaba por venir —y resultó que había merecido la pena la espera—, se otorgaron importantes embajadas a hombres de letras. Salvador de Madariaga, quien durante algún tiempo había sido, de hecho, el principal embajador plenipotenciario de la futura República, pasó de la cátedra Rey Alfonso XIII en Oxford, que tan extrañamente había aceptado ocupar, a la embajada en Washington. Salvador Albert, el poeta, fue a Bélgica; Américo Castro, el crítico de Cervantes, a Berlín; y el novelista Ramón Pérez de Ayala, quien durante algunos meses, como hemos visto, había estado trabajando para instaurar la República, a Londres. La embajada en París se ofreció, primero, al eminente especialista, el Dr. Marañón; y luego al profesor socialista Julián Besteiro. Al rechazar ambos el puesto, se le otorgó a un historiador y novelista que aspiraba a ser un segundo Pérez Galdós, Alfonso Dánvila.

60 Cf. «Homenaje de la República: Galán y Hernández», *El Sol*, 16 de abril de 1931.

Otro recurso para la popularización de la República en toda España fue la organización de manifestaciones. El éxito de la fiesta nacional del 15 de abril superó con creces las expectativas de sus promotores, y el domingo siguiente, una multitudinaria manifestación organizada en Madrid en honor al héroe socialista Pablo Iglesias transcurrió en perfecto orden. El Día del Trabajo (1 de mayo), fecha en la que siempre existía la posibilidad de un estallido de extremismo, se acercaba peligrosamente, pero fue proclamado día festivo oficial, prohibiéndose expresamente el trabajo, y, salvo algunos incidentes menores en Barcelona y Bilbao, no se registraron disturbios. ¡Verdaderamente, como observó un periodista británico, se trataba de una «república inmaculada»!

Vale la pena detenerse un momento para admirar lo que quizás fue el mayor logro de los artífices de la Segunda República: su gestación con tanta tranquilidad. Primo de Rivera se enorgullecía de la facilidad con la que había dado su golpe de Estado, pero ¿cuál había sido su tarea, aparte de la del nuevo Gobierno Provisional? «Aquí estaba una monarquía que había existido durante quince siglos, aniquilada en el espacio de cuarenta y ocho horas por la fuerza irresistible de la voluntad popular, sin derramarse una sola gota de sangre en el proceso».⁶¹ La monarquía más antigua de Europa, escribió Alcalá Zamora en un artículo cuya jactancia habría sido perdonable de no haber sido prematura, había caído ante la voluntad indomable del pueblo. ¿Y cuál era el estado de España, continuó, en el momento de esta revolución incruenta?

«Las fuerzas del orden permanecen en sus cuarteles o, si se les ordena salir, confraternizan con el pueblo... No hay necesidad de custodiar bancos, iglesias ni conventos, pues no se ven amenazados ni por la avaricia ni por las pasiones sectarias. Las tiendas permanecen abiertas sin la menor preocupación ni peligro... Incluso los joyeros no toman precauciones especiales. Las mujeres, e incluso los niños, transitan libremente por las calles... Al quinto día del gobierno republicano, una procesión cívica de más de cien mil personas recorrió Madrid sin el menor desorden...»⁶²

Estas, como se demostró más tarde, fueron unas palabras desafortunadas, que pronto se volverían cruelmente en contra del autor. Pero los párrafos que siguen, que describen la minuciosidad y la meticulosidad de la preparación del Comité Revolucionario, merecen aún más ser citados. Siendo una coalición de ideas muy diversas, había trabajado en conjunto hasta que no existía el menor temor de que se desmoronara al comenzar a gobernar. Cada paso a dar había sido discutido previamente. Todas las carteras ministeriales se habían asignado exactamente como se anunciaron en abril; todos los cargos importantes del Estado se habían cubierto con antelación, incluso los gobiernos civiles de las provincias. Todas las reformas iniciales que se proponían establecer se habían elaborado hasta el más mínimo detalle. Durante los dos meses posteriores a la formación del Gobierno Provisional en el verano de 1930, éste se reunió no ocasionalmente, ni siquiera con frecuencia, sino a diario, «para que, una vez conseguida la victoria, la maquinaria del gobierno no se paralizara ni por un instante».⁶³

Todo era extraordinario; uno no sabe si maravillarse más por la laboriosidad y la meticulosidad que caracterizaban el trabajo de estos idealistas tan pragmáticos o por el éxito rotundo que lo recompensó. Pero se avecinaban tiempos peores, y lamentablemente hay que dejar constancia de que una tercera medida que tuvo que adoptarse para la consolidación de la República fue la represión. El nuevo régimen no llevaba ni un mes en el poder cuando se tuvieron que tomar medidas drásticas para intentar sofocar unos graves disturbios. Esta acción, en su relativa ineficacia, demostró que las pasiones de la multitud eran más profundas y violentas de lo que el afable y bienintencionado jefe del gobierno había sospechado.

Los disturbios de mayo de 1931 comenzaron con una primicia periodística conseguida por el famoso periódico monárquico *ABC*. El director de *ABC*, Luca de Tena, era, al igual que su padre, su

61 W. Horsfall Carter, «Spain and her Immaculate Republic». *Contemporary Review*, abril de 1931.

62 Niceto Alcalá Zamora: «La sorpresa y la preparación de la República Española», *El Sol*, 3 de mayo de 1931.

63 Ibid.

fundador, amigo personal de Don Alfonso XIII, y, tres semanas después de la proclamación de la República, visitó al Rey, que se encontraba en Londres, para conseguir una entrevista personal que se convirtió en la sensación del momento. No había nada en el contenido de la entrevista, visto en retrospectiva hoy, que fuera en lo más mínimo incendiario; de hecho, lo más destacable es que el Rey exiliado pudiera expresarse con tanta moderación. «No pondré la más mínima dificultad en el camino del Gobierno Republicano», se dice que manifestó.

«Los monárquicos que deseen seguir mi consejo no sólo se abstendrán de interponer obstáculos al Gobierno, sino que lo apoyarán en todas las empresas patrióticas... Muy por encima de las ideas formales de república o monarquía se encuentra España... Puede que haya cometido errores, pero solo he pensado en el bien de España... Rechacé las ofertas que me hicieron para quedarme y gobernar por la fuerza y... por España hice el mayor sacrificio de mi vida cuando descubrí que ya no se me deseaba».⁶⁴

No fue tanto los sentimientos expresados en la entrevista lo que alarmó a la opinión republicana, sino el hecho de que el editor de un importante periódico hubiera viajado a Londres para obtenerla; que, una vez obtenida, la hubiera redactado de forma tan atractiva y le hubiera dado tanta relevancia; y que le hubiera añadido una expresión de lealtad a la Monarquía Parlamentaria y Constitucional.⁶⁵ De igual modo, no fue tanto el contenido de la famosa pastoral del Cardenal Segura lo que indignó esta opinión, sino las palabras con las que el Cardenal la había expresado y la sensación de que no se podía confiar en que se mantuviera neutral.

La personalidad arrolladora y dinámica del Dr. Pedro Segura, Cardenal-Arzobispo de Toledo y Primado de toda España, difícilmente podía permanecer en un segundo plano durante mucho tiempo en tiempos de agitación nacional. Obispo a los treinta y cinco años, Primado y Cardenal once años después, aún no había cumplido los cincuenta. Erudito, había obtenido nada menos que tres doctorados universitarios. Reformador social, se había dado a conocer en toda España por su labor humanitaria en la región más pobre del país, Las Hurdes. Pastor devoto, llevaba una vida muy sencilla en su palacio toledano y, durante las misiones diocesanas, era conocido por trabajar tan duro y durante tanto tiempo como el párroco más humilde.

Desde el 14 de abril, la opinión pública se había centrado en la actitud del Cardenal-Arzobispo hacia el nuevo régimen, y justo al día siguiente de la publicación de la entrevista al rey en el *ABC*, la prensa reprodujo el extenso texto de una pastoral que dio mucho que hablar en todo el país. Si bien no podía interpretarse en su totalidad como provocadora, el lenguaje y los sentimientos expresados en varios párrafos, en los que la prensa, naturalmente, hizo hincapié, fueron, como poco, desafortunados. Resultaba poco prudente, por ejemplo, en un momento así, comenzar expresando «el agradecido recuerdo de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, quien durante su reinado preservó con éxito las antiguas tradiciones de fe y piedad de sus antepasados», dedicar los tres párrafos siguientes a un elogio de «Su Majestad caída» e insinuar que «los enemigos del reino de Jesucristo» avanzan. El punto culminante de su argumento no era otro que un llamado a la batalla.

«En estos momentos de terrible incertidumbre, todo católico debe medir la magnitud de sus responsabilidades y cumplir valientemente con su deber. Si todos mantenemos la mirada fija en los intereses superiores y sacrificamos lo secundario por lo importante; si unimos nuestras fuerzas y nos preparamos para luchar con perfecta cohesión y disciplina, sin vanidad, sino con fe en nuestros ideales, con abnegación y espíritu de sacrificio, podremos mirar al futuro con tranquilidad, confiados en la victoria.

»Si permanecemos “callados e inactivos”; si nos dejamos llevar por la “apatía y la timidez”;⁶⁶ si dejamos el camino abierto a quienes intentan destruir la religión o esperamos que la benevolencia de nuestros enemigos asegure el triunfo de nuestros ideales, no tendremos derecho a lamentarnos

64 *ABC*, 5 de mayo de 1931.

65 *Ibid.*

66 Las citas proceden de una encíclica de León XIII.

cuando la amarga realidad nos muestre que teníamos la victoria en nuestras manos, pero no supimos luchar como guerreros intrépidos, dispuestos a sucumbir gloriosamente.»⁶⁷

Desde cierto punto de vista, estas fueron palabras espléndidas; nadie negará que fueron palabras valientes; sin embargo, la mayoría de la gente hoy estaría de acuerdo en que también fueron provocadoras. No fue sorprendente que un Ministro de Justicia anticlerical las condenara como «belicosas», ni que el Gobierno decidiera que tal cosa «no se podía permitir que continuase» y solicitara a la Santa Sede la destitución del Cardenal de su arzobispado.⁶⁸ Tampoco era de extrañar que el *ABC*, que describía la pastoral como «irreprochablemente leal al Gobierno»⁶⁹ y no ver en ella «ni un párrafo, afirmación o consejo cuestionable», fuera atacada por extremistas.

Esto, y más, fue lo que sucedió. El domingo 10 de mayo, exactamente cuatro semanas después de aquellas trascendentales elecciones municipales que pusieron fin a la Monarquía, la inmaculada república española manchó su historial.

El problema comenzó en Madrid, donde, en la calle de Alcalá, se había fundado un nuevo Club Monárquico, que esa mañana de domingo celebraba una reunión privada para elegir a su Comité. Según algunos informes, los transeúntes oyeron la Marcha Real sonando en un gramófono dentro del local; otros alegaron que los miembros del Club realizaban provocaciones desde el balcón. Cualquiera que fuera la causa, se congregó una multitud, y cuando dos hombres que pagaban su taxi antes de entrar al Club oyeron el alboroto, gritaron «¡Viva la Monarquía!» y golpearon a su conductor, que había clamado por la República, la pasión latente se encendió. Comenzó una pelea campal y, por desgracia, tuvo lugar antes del mediodía, cuando la calle de Alcalá está siempre abarrotada.

De alguna manera, se extendió el rumor de que el taxista había muerto a causa de los golpes recibidos. El rumor se propagó como la pólvora.

«¡Abajo los monárquicos!», gritaba la multitud. «¡Abajo el local! ¡Abajo por el balcón!».

Para entonces, la Guardia Civil había llegado en gran número, pero su intento de dispersar a la multitud fue completamente ineficaz. Se extendió la brillante idea de que sería un juego divertido prender fuego a los coches de los miembros del Club, que esperaban allí, delante de sus propios ojos. Dicho y hecho: en pocos minutos, dos de los coches ardían alegremente.

Desde el punto de vista de las autoridades, los problemas de cómo despejar las calles y cómo sacar a los monárquicos de la casa sanos y salvos se volvieron igualmente urgentes. Trajeron tres grandes furgonetas policiales y, entre abucheos, insultos y golpes, metieron a los miembros del Club dentro. Pero ninguno podía salir, pues decenas de hombres se arrojaron al suelo para impedirles el paso. Finalmente, el Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, subió a una de las furgonetas e intentó arengar a la multitud. ¡Cada vez peor! «¡Pero bueno! ¿Maura? —gritaba la turba—. ¡Abajo con él! ¡Abajo con el hijo de su padre! ¡Abajo con el hijo del monárquico!»

Para entonces eran las cuatro. El conductor de una de las furgonetas, con una hábil maniobra, había logrado abrirse paso entre la multitud que le impedía avanzar, pero la multitud crecía sin cesar, hasta que toda la Alcalá y las calles aledañas se convirtieron en una masa inmensa.

De repente, alguien comenzó a gritar:

«¡Al ABC! ¡A las oficinas del ABC! ¡Abajo el ABC!»

La situación cambió al instante. En pocos momentos, miles de personas corrían por la Alcalá, cruzaban la plaza de Cibeles, subían por el paseo de Recoletos y por todas las demás rutas posibles hasta unirse en la calle Serrano, donde se ubicaban las oficinas del diario monárquico. En su camino, reconocieron a Leopoldo Matos, antiguo ministro del rey Alfonso, que acudía a una cita vespertina. Inmediatamente se abalanzaron sobre él, lo golpearon, le arrancaron el abrigo, le

67 *El Sol*, 7 de mayo de 1931.

68 Declaración de Fernando de los Ríos, *El Sol*, 8 de mayo de 1931. Cf. B.S.S., 1931, Vol. VIII, p. 140.

69 *ABC*, 8 de mayo de 1931.

pisotearon el sombrero y bien podrían haberlo linchado⁷⁰ de no ser porque, para su propia seguridad, lo detuvieron.

Finalmente, tras varios incidentes similares, la multitud alcanzó su objetivo. Unos cuantos centinelas que habían sido designados para custodiar las oficinas fueron rápidamente neutralizados, y en cuestión de momentos, entre vítores de miles de personas, varios cientos comenzaron a apedrear las ventanas y a arrojar gasolina a las paredes con la intención de incendiarlas. La Guardia Civil, desesperada, se replegó al interior del edificio y desde allí disparó varios tiros al aire. Esto bastó para dispersar a la multitud, que, a diferencia de otras similares de días posteriores, estaba desarmada, y pronto grupos de republicanos enloquecidos, que afirmaban que les apuntaban con ametralladoras desde las oficinas del *ABC*, se dedicaron a desatar su furia contra edificios en otras partes de la ciudad. El Gobierno, como si no estuviera preparado en absoluto para acontecimientos que habían sido claramente pronosticados, parecía impotente, y lo único que pudo hacer el Ministro de la Gobernación aquella noche fue intentar apaciguar a la multitud anunciando la suspensión del *ABC*, el registro de sus oficinas y el encarcelamiento de su editor.

Pero la furia se apoderó de la multitud, y al día siguiente estalló el vandalismo, esta vez dirigido contra la Iglesia. A plena luz del día, a las diez y media de la mañana, un grupo de hombres prendió fuego a la iglesia jesuita de la calle de la Flor, en pleno centro de la capital. Los bomberos no llegaron hasta que el edificio estuvo completamente en llamas, y entonces la multitud, que había estado observando la escena con la misma placidez que si se tratara de un espectáculo de fuegos artificiales organizado por el ayuntamiento, se abalanzó sobre ellos e impidió por la fuerza que apagaran las llamas hasta que la iglesia quedó reducida a cenizas. Ni siquiera la policía montada ni la caballería pudieron hacer nada ante esta determinación del pueblo.

A continuación, multitudes con banderas rojas se congregaron y marcharon hacia el magnífico convento⁷¹ y la iglesia construidos por los Padres Carmelitas en la Plaza de España, la residencia de los Jesuitas en Alberto Aguilera, el convento mercedario de Bravo Murillo, el Colegio de Maravillas en el barrio de Cuatro Caminos, el Colegio del Sagrado Corazón en Chamartín y otros edificios, a los que incendiaron y destruyeron casi por completo. Muchos conventos fueron desalojados como medida de precaución, y monjes, frailes y monjas escaparon vestidos de laicos. Algunos vagaron por Madrid esa noche, sin tener adónde ir, y fueron acogidos por distintas familias.

Aun así, el Gobierno no tomó medidas efectivas. El Gabinete estuvo reunido durante trece horas seguidas, pero cuanto menos se dijera sobre el resultado de sus largas deliberaciones, mejor. En una declaración oficial, atribuyeron la principal culpa, no, como cabría esperar, a las turbas, sino a los monárquicos, las personas más impopulares de España, a las que parecía que se les podía combatir con cualquier arma. Estos «reaccionarios», rezaba la declaración, «habían decidido deliberadamente incitar los disturbios» y «desafiar al pueblo». Incluso los relatos circunstanciales de los disturbios publicados por los periódicos republicanos más acérrimos desmentían esta imputación.⁷² Pero su efecto fue, por supuesto, simplemente estimular a las multitudes a intensificar sus esfuerzos, y la suspensión del diario católico *El Debate*, así como del *ABC* monárquico, difícilmente podría haber sido más oportuna si su objetivo hubiera sido aplaudir los logros de los incendiarios. Por lo demás, se proclamó la ley marcial, se cerró la Bolsa y se hizo un llamamiento al país por radio.

Pero, aunque las turbas madrileñas ya habían saciado su violencia, los incendios, provocados con tanta ligereza, se extendieron rápidamente por todo el país. Al norte de Madrid no hubo disturbios, ni tampoco en Cataluña, que, como veremos, estaba ocupada con otros asuntos. Pero en

70 Es lo que le ocurrió el 4 de septiembre de 1936. (Clásicos de Historia)

71 En España, la palabra «convento» incluye coloquialmente a los monasterios, y se aplica por tanto a todas las casas religiosas, de monjes, de frailes y de monjas, y en ese sentido general se emplea en este libro.

72 El extenso comunicado se puede encontrar en *Informaciones* del 11 de mayo de 1931 y en otros diarios madrileños del 12 de mayo. Para obtener más detalles sobre los disturbios, consúltense los mismos periódicos.

Andalucía, *tierra de María Santísima, tierra bendita de Dios*⁷³, la pasión descontrolada cobró un precio terrible. En casi todas las grandes ciudades del sur se proclamó la ley marcial. En Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, conventos e iglesias ardieron en llamas. La ciudad más afectada fue Málaga, donde los días 11 y 12 de mayo los incendios continuaron sin interrupción. No sólo se incendiaron el Palacio Episcopal, la residencia de los jesuitas y los conventos de agustinos, carmelitas y maristas, sino que también se destruyeron varias iglesias que contenían valiosas obras de arte, junto con numerosos comercios y edificios públicos.⁷⁴

Durante cuarenta y ocho horas reinó el pánico en España, y se hablaba con vehemencia de Rusia y México. Se trasladaron numerosos tesoros eclesiásticos a lugares seguros. En medio de todo esto, el Cardenal Primado, no sin sugerencias de las autoridades seculares, cruzó la frontera sigilosamente y se dirigió a Roma. Pero al cabo de cinco días, el país volvió a estar completamente tranquilo. La oleada de indignación que había surgido, aparentemente sin causa justificada, se había disipado con igual rapidez. El *ABC* y *El Debate* permanecieron suspendidos; algunos funcionarios públicos dimitieron; y los periodistas retomaron la búsqueda de noticias.

Así terminó el primer mes de la segunda República Española.

II. MAYO-JULIO DE 1931.

Elecciones Generales y Cortes Constituyentes.

Publicación del proyecto de Constitución.

Los ataques contra iglesias y conventos demostraron claramente al Gobierno la necesidad de un control más eficaz de la violencia popular, y no cabe duda de que aprendieron la lección. El fortalecimiento de la Guardia Civil, un cuerpo de hombres valientes y leales a quienes todos rinden homenaje, data de este período, al igual que la creación de las tropas de choque o Guardias de Asalto, de carácter más expeditivo. Pero por el momento, el principal efecto que parecían tener los levantamientos era el deterioro de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que ya entonces no eran precisamente fáciles. Antes de cumplir una semana en el cargo, el Gobierno había anunciado la secularización de los cementerios, la cancelación de la asistencia obligatoria a actos religiosos en el Ejército, y una mayor tolerancia hacia los cultos no católicos. A finales de mayo se aprobó un decreto que otorgaba a todas las confesiones los mismos derechos en materia de culto, prohibía a cualquier funcionario indagar en las creencias religiosas de una persona y eliminaba la obligación de participar en prácticas o ceremonias religiosas. Lamentablemente, hubo quienes interpretaron esto como una señal de que los católicos podrían ser perseguidos con impunidad, y muchos católicos practicantes, sin ninguna relación con la política, perdieron sus empleos por razones (parafraseando una expresión que por aquel entonces servía para encubrir multitud de pecados) de «incompatibilidad con el régimen».

Mientras tanto, a la virtual expulsión de España del Cardenal Primado se sumó la expulsión del Obispo de Vitoria, acusado de utilizar las visitas diocesanas con fines de propaganda política. Parecía que se había llegado a un punto muerto total entre Madrid y Roma cuando la Santa Sede rechazó al recién nombrado Embajador ante el Vaticano y puso como condición para su aceptación la protección de la vida y los bienes de los fieles. El Gobierno no respondió a este anuncio, pues no tenía respuesta que dar. En aquel momento, era incapaz de proteger la vida o los bienes de ningún grupo de ciudadanos.

Quizás la tensión provocada por esta situación de inactividad mutua se vio mitigada por un incidente poco digno ocurrido a mediados de junio. El cardenal primado regresó a España de incógnito. Evidentemente, aunque no había sido expulsado formalmente, sabía que los funcionarios

⁷³ [En castellano en el original.]

⁷⁴ *El Sol*, 13 de mayo de 1931.

de frontera no le permitirían la entrada, así que este príncipe de la Iglesia volvió a entrar en España por uno de los pasos pirenaicos poco transitados, y no fue hasta que llegó a Guadalajara que fue detenido, retenido durante la noche y al día siguiente expulsado por Irún. Ya fuera porque el golpe fue demasiado duro para su orgullo o porque la Santa Sede consideró mejor ceder a las exigencias del gobierno español, nunca volvió a intentarlo. Poco después, su sede fue declarada vacante, y le sucedió monseñor Gomá, obispo de Tarazona, un anciano que demostró tener considerable capacidad administrativa, aunque en el momento de su nombramiento era conocido principalmente por sus conocimientos teológicos.

Para cuando ocurrió el incidente de Guadalajara, el Gobierno estaba ocupado con asuntos que consideraba más importantes que la persecución de los cardenales recalcitrantes. Se acercaban las elecciones generales de las primeras Cortes de la República —las Cortes Constituyentes, como se las llamaba— y con ellas nuevos escollos tanto para el Gobierno como para el régimen. Las huelgas revolucionarias, que comenzaron poco después de la proclamación de la República, se estaban volviendo preocupantemente comunes. La ley marcial y unos disturbios que dejaron seis muertos, acompañaron a una huelga de tres días en San Sebastián, y se habían producido huelgas de solidaridad en la costa. Los sindicalistas de las provincias del norte amenazaron con una huelga general si no se eliminaba a dos ministros. Se intentó una huelga importante en las minas asturianas y, aunque se limitó a cerca del veinte por ciento de los mineros, los enfrentamientos entre huelguistas y trabajadores hicieron necesaria la intervención militar.

Otro motivo de inquietud era la peseta. Durante casi un mes tras los disturbios incendiarios de mayo, y a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la exportación de capitales, su valor no dejó de caer. A mediados de mayo, la libra esterlina se situaba, aproximadamente como en diciembre anterior, en 48 pesetas; a finales de mes, había alcanzado los 62 y el ministro de Hacienda, el Sr. Prieto, amenazaba con dimitir. Sin embargo, poco a poco, la peseta comenzó a recuperarse y, a mediados de junio, el tipo de cambio volvió a situarse en 48.

Mientras tanto, se preparaba el terreno para la reunión del nuevo parlamento. Semanas antes, se había fijado la edad mínima para votar en 23 años; a mujeres y sacerdotes se les había permitido ser miembros de las Cortes; se había reformado la división electoral del país para que cada provincia pudiera elegir un diputado por cada 50.000 habitantes. El parlamento unicameral, aunque aún no elegido, fue investido solemnemente, mediante proclamación, con plenos poderes constituyentes y administrativos, siendo el primero de ellos la ratificación de la autoridad asumida por el Gobierno Provisional. Firmada por todos los ministros, la proclamación tuvo la contundencia que sin duda se pretendía; y, para minimizar los disturbios, se organizaron fiestas populares como preámbulo a las elecciones; las fiestas en Madrid duraron al menos dos semanas.

Las elecciones, al igual que las fatídicas elecciones municipales de abril, transcurrieron con tranquilidad, y los resultados fueron los que el Gobierno Provisional podía haber esperado. En Madrid, los candidatos del Gobierno obtuvieron un promedio de 120.000 votos, frente a los 30.000 de los candidatos que les seguían en la lista. Solo un nuevo diputado en toda España se declaró monárquico, y los conservadores que podrían haberse considerado simpatizantes monárquicos no superaban los 19. Incluso el partido republicano de derecha, liderado por Alcalá Zamora, que había presentado más de cien candidatos, contaba con tan solo 28 escaños en la nueva Cámara. La alianza republicana, de izquierda, sumaba 145⁷⁵; los socialistas, 114; y los socialistas radicales, 56. Era evidente que España seguía bajo la influencia de la reacción republicana de abril, y parecía que no habría dificultad alguna en mantener una coalición progresista ininterrumpida por tiempo indefinido.

75 Es un tanto impreciso. El autor parece reunir los escaños de varios partidos republicanos: el mayoritario Radical (90 escaños) con otros menores, como la Alianza Republicana de Azaña (26), la Agrupación al Servicio de la República (13) y otros. Todos ellos bastante incompatibles entre sí. (Clásicos de Historia)

Antes de la reunión del nuevo Parlamento, el Gobierno Provisional publicó el primer borrador de la Constitución, que durante toda la legislatura constituiría el principal tema de debate. En general, guardaba un gran parecido con el documento que finalmente fue aprobado por las Cortes Constituyentes. Una divergencia notable fue la propuesta de un Senado de 240 miembros: 60 elegidos por los empresarios, 60 por los trabajadores, 60 por las profesiones liberales y 60 por las universidades, las instituciones culturales y las organizaciones religiosas. La mitad de cada grupo sería reelegida en cada elección, y el Senado en su conjunto sería indisoluble. Sin embargo, dado que el principio bicameral fue rechazado categóricamente pocos meses después, las ideas de los primeros republicanos sobre este tema tienen sólo un interés histórico.

Tan pronto como concluyeron las elecciones generales, estallaron nuevamente los disturbios sociales. Esta vez adoptaron la forma, que más tarde se haría tristemente común, de huelgas revolucionarias en cadena, organizadas por el Sindicato Único, como se conoce a la Confederación Nacional del Trabajo, en todo el país.

Uno de los objetivos de los huelguistas fue la red telefónica, que había sido optimizada bajo la Dictadura. Durante semanas, una huelga telefónica dejó el servicio inoperativo en toda España, mientras que, en Madrid, grupos sindicalistas atacaron la Central Telefónica en la Gran Vía y la policía montada tuvieron que cargar contra ellos. En Valencia, los empleados de hoteles y restaurantes salieron a la calle, e incluso los cafés estaban medio vacíos. Pero los peores disturbios tuvieron lugar en Sevilla, la metrópolis, por así decirlo, de las vastas regiones de Andalucía y Extremadura, donde había tanta agitación entre los campesinos. En Sevilla, durante diez días, la turba amenazó con triunfar. Se declaró una huelga general el 20 de julio; en los disturbios que la acompañaron un hombre murió, y en su funeral un tiroteo causó tres muertos y numerosos heridos. Las autoridades actuaron con más determinación que nunca en España. Los centros sindicalistas y comunistas de Sevilla fueron cerrados; destacados sindicalistas fueron arrestados. Y, mientras continuaban los disparos, se destruyó con artillería uno de los centros sindicalistas que era un nido de pistoleros, como se había averiguado. Cuando se declaró la ley marcial y hasta la aviación participaba en la vigilancia, la situación mejoró; a finales de mes, reinaba la calma. La cifra de 30 muertos y 200 heridos parecía entonces enorme. ¡Qué lástima que, en los años siguientes, se viera superada con creces una y otra vez!

III. LA CONSTITUCIÓN: RESUMEN Y ANÁLISIS

Día tras día, desde julio hasta diciembre, bajo el sofocante calor del verano madrileño, las Cortes recién elegidas debatieron la Constitución republicana. Nadie que siguiera el curso de los debates podía cuestionar la intensa vehemencia de todas las partes en su búsqueda de una base sólida sobre la que sustentar la República. Tampoco cabía dudar de la determinación y la laboriosidad que mantuvieron a las Cortes trabajando sin descanso durante lo que normalmente es un periodo de prolongadas vacaciones. Cuando, antes de finalizar el año, se promulgó la Constitución, el Gobierno debió sentir una profunda satisfacción.

Todo lector de la Constitución de 1931⁷⁶ sentirá que se ha distanciado considerablemente de la España de la historia y de la leyenda⁷⁷ —especialmente de la Leyenda Negra— de un país opuesto a toda innovación y a toda forma de progreso. «España —declara el primer artículo— es una república democrática de trabajadores de todas las clases, organizada en un régimen de libertad y

76 En *Medio siglo de legislación autoritaria en España (1923-1976)* se han reunido numerosos textos legislativos de la Segunda República: los primeros decretos, la ley electoral, la ley de defensa de la república, la Constitución, el Estatuto de Cataluña, la Ley de Reforma Agraria, la de Confesiones y Congregaciones religiosas, la de Orden Público, la de Vagos y Maleantes, y otras. (Clásicos de Historia)

77 El texto completo en español de la Constitución se encuentra en B.S.S., 1932, Vol. IX, pp. 65-89.

justicia». Su autoridad, continúa el texto, «emana del pueblo»; todos sus ciudadanos «son iguales ante la ley»; «no tiene religión oficial»⁷⁸. España ya no se enorgullece de un espléndido aislamiento: el Estado español respetará las normas universales del derecho internacional⁷⁹. La nueva República tampoco sueña con imperios ni conquistas: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional»⁸⁰. Estos artículos introductorios, como las primeras escenas de un drama, crean la atmósfera general y nos preparan para lo que vendrá. La primera sección de la Constitución, relativa a la organización del país, se mencionará nuevamente en relación con la autonomía regional. Baste decir que, si bien para España en su conjunto se mantiene la organización provincial y municipal vigente en la nueva Constitución, se establece específicamente que, bajo ciertas condiciones, grupos de provincias pueden solicitar un Estatuto de Autonomía⁸¹, con la salvedad de que «en ningún caso se permite una federación de comunidades autónomas»⁸². En los artículos siguientes se establece una amplia delimitación entre las competencias del Gobierno Central y las de la comunidad autónoma, y se detallan los principios generales que deben observarse en caso de controversia.

Tras una breve sección sobre la nacionalidad española, se incluye la sección más extensa y, en muchos sentidos, la más importante de todo el documento, relativa a las «garantías políticas e individuales». En ella predominan la igualdad y la libertad. A partir de ahora, no se reconocen títulos nobiliarios. No se concederán privilegios especiales a los ciudadanos por razón de sexo, riqueza, clase social, opiniones políticas o creencias religiosas.⁸³ Todos son libres de elegir su profesión y de expresar libremente sus ideas y opiniones, sin estar sujetos previamente a censura.⁸⁴ Ambos sexos tienen derecho al voto en igualdad de condiciones; la edad mínima para sufragar es de veintitrés años.⁸⁵ Estas y otras disposiciones buscan, sin duda, crear una España libre. Sin embargo, en caso de emergencia nacional, muchas de ellas podrán ser suspendidas total o parcialmente, por decreto del Gobierno, en todo el territorio o en parte de él, sujetas a la posterior confirmación de las Cortes. La suspensión tendrá una duración máxima de treinta días, sin posibilidad de prórroga.⁸⁶

Esta sección vital de la nueva Constitución también contiene algunas de sus cláusulas más controvertidas: las relativas a la religión y las órdenes religiosas. El pago del clero por parte del Estado cesará dos años después de la promulgación de la Constitución. El Estado, las provincias o los municipios no otorgarán ningún tipo de ayuda financiera a ninguna institución religiosa. Todas las confesiones religiosas serán consideradas en adelante como asociaciones, sujetas a una ley especial.⁸⁷ Se reafirma la libertad de conciencia ya garantizada al individuo por decreto; podrá profesar y practicar cualquier forma de religión, siempre que no transgreda la moral pública. Todas las denominaciones podrán practicar su culto libremente en privado, pero para cualquier manifestación pública de su religión deberán obtener la autorización del Gobierno.

De las Órdenes religiosas, aquellas que requieren la realización de un voto, «además de los tres votos canónicos de obediencia a una autoridad distinta de la legítima autoridad del Estado», «quedan disueltas» y «sus bienes serán nacionalizados y utilizados con fines educativos y caritativos». Todas las demás Órdenes estarán sujetas a una ley especial que disolverá aquellas que (presumiblemente a juicio del Gobierno de turno) «constituyan un peligro para la seguridad del Estado» y obligará a las restantes a inscribirse en el Ministerio de Justicia. Ninguna Orden podrá

78 Arts. 1-3.

79 Art. 7.

80 Art. 6.

81 Art. 11.

82 Art. 13.

83 Art. 25.

84 Arts. 33, 34.

85 Art. 36.

86 Art. 42.

87 Art. 26.

poseer más bienes, directa o indirectamente, de los necesarios para su propia subsistencia. Ninguna Orden podrá dedicarse a la industria, el comercio o la educación. Todas las Órdenes estarán obligadas a presentar sus cuentas anuales al Estado y (como última amenaza para los contumaces) «será admisible la nacionalización de los bienes de las Órdenes religiosas».⁸⁸

Para evitar que se piense que las Órdenes son indebidamente penalizadas, artículos posteriores declaran que «toda la riqueza del país, sea cual sea su origen, está subordinada a los intereses de la economía nacional» y que «toda la riqueza histórica y artística del país, sea cual sea su origen, constituye el tesoro cultural de la nación y se encuentra bajo la custodia del Estado, el cual puede prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que considere oportunas para su defensa». En ningún caso se podrá ordenar la confiscación de bienes como pena, pero cualquier bien podrá ser «expropiado forzosamente», con la aprobación de las Cortes, «previo pago de una indemnización adecuada».⁸⁹ El término «adecuación», como veremos en breve, es susceptible de diversas interpretaciones.

Otro grupo de artículos regula el matrimonio, el divorcio y la educación de los hijos. En la nueva España, el matrimonio se fundamentará en la igualdad de género, y toda unión podrá disolverse «por mutuo desacuerdo o a petición de cualquiera de las partes, si se demuestra justa causa».⁹⁰ Los padres están obligados a educar a sus hijos, legítimos o ilegítimos.⁹¹ La educación primaria (como antes) será obligatoria y gratuita.⁹² Toda la educación será laica e «inspirada en los ideales de la solidaridad humana».⁹³

Estos son, en forma necesariamente concisa, los artículos de la nueva Constitución que revisten mayor interés para quienes no son españoles. El resto se refiere principalmente a la administración parlamentaria y puede resumirse brevemente.

El poder legislativo, que reside en el pueblo, se ejercerá en un parlamento unicameral, cuyos miembros serán elegidos por sufragio universal y voto secreto por un período máximo de cuatro años.⁹⁴ El Presidente de la República, jefe del Estado, «personaliza la nación».⁹⁵ Será elegido de una manera peculiar: por un colegio electoral compuesto por todos los miembros de las Cortes y un número igual de electores, o compromisarios, elegidos *ad hoc* mediante elecciones similares a las que se celebran para la elección de los diputados parlamentarios.⁹⁶ El mandato del Presidente es de seis años y no puede renovarse hasta que hayan transcurrido al menos seis más.⁹⁷ En lugar de prestar juramento sobre los Evangelios, como hicieron los Reyes de España, «prometerá fidelidad a la República y a la Constitución» ante una «solemne asamblea» de las Cortes.⁹⁸ Sus poderes, definidos con cierto detalle, incluyen el nombramiento del presidente del gobierno —un punto de cierto interés, como se verá más adelante— y la presentación a las Cortes de cualquier decreto del Gobierno que le parezca contrario a las leyes vigentes.⁹⁹ Su autoridad sobre las Cortes es considerable: puede convocar una sesión especial «cuando lo considere oportuno», suspender las sesiones ordinarias por breves períodos y disolver las Cortes por completo en dos ocasiones durante sus seis años de mandato, siempre que, en cada disolución, ordene que se celebren nuevas

88 Art. 27.

89 Art. 26.

90 Arts. 44, 45.

91 Art. 43.

92 Art. 48.

93 Ibid.

94 Arts. 51-53.

95 Art. 67.

96 Art. 68.

97 Art. 71.

98 Art. 72.

99 Arts. 75, 76.

elecciones dentro de los sesenta días siguientes, y que, en la segunda disolución, las nuevas Cortes puedan censurar su actuación, requiriéndose una mayoría absoluta para que el voto de censura implique automáticamente su destitución.¹⁰⁰

Esta última disposición hace que la posición de un Presidente que enfrenta numerosas crisis políticas sea extraordinariamente precaria, y, dado que su destitución también puede efectuarse en cualquier momento por el voto de tres quintos de los diputados, sujeto a la aprobación del colegio electoral,¹⁰¹ parecería que la nueva Constitución no tenía grandes esperanzas de que los mandatos de seis años se completaran con frecuencia.

Otra limitación interesante de los poderes del Presidente se refiere a la promulgación de las leyes aprobadas por las Cortes. Todas estas leyes deben promulgarse dentro de los quince días siguientes a su aprobación, o, si una mayoría de dos tercios de las Cortes ha declarado una ley de urgencia, debe promulgarse «inmediatamente». Las leyes que no se declaran urgentes pueden ser devueltas a las Cortes por el Presidente, junto con una «declaración motivada», y entonces se requiere una mayoría de dos tercios para su promulgación.¹⁰²

Un artículo final en la extensa sección sobre la presidencia declara al Presidente «penalmente responsable» de cualquier infracción de sus obligaciones constitucionales y dispone que será juzgado ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (del que se hablará más adelante) por mayoría de tres quintas partes de los diputados de las Cortes.¹⁰³ Dado el marcado carácter político del Tribunal, esta disposición probablemente dará lugar a situaciones delicadas. Sin duda, no será un camino de rosas lo que le espera al primer Presidente de la República Española.

IV. JULIO-OCTUBRE DE 1931.

Los debates sobre la Constitución. Sufragio femenino. La cuestión religiosa. Dimisión del Presidente del Gobierno y del Ministro de la Gobernación. Azaña, Presidente del Gobierno.

Si bien varias partes de la nueva Constitución se han omitido necesariamente en el análisis anterior, los artículos descritos indican al menos las líneas principales que siguieron los cinco meses de debate casi continuo. Naturalmente, durante este periodo se produjeron otros debates además de los relativos a la Constitución, pues era necesario resolver sin demora problemas urgentes y satisfacer el descontento en todo el país. Tan pronto como cesaron los enfrentamientos casi bélicos en Sevilla, Cataluña celebró un referéndum pacífico para la ratificación de su Estatuto de Autonomía, que, para garantizar la continuidad de la paz, tuvo que ser examinado exhaustivamente por una comisión especial de las Cortes y, en la primavera siguiente, como veremos más adelante, se debatió a la par con las igualmente importantes leyes sobre agricultura. Sobre la urgencia de estas últimas se insistió continuamente al Gobierno. La precariedad era general, y el descontento especialmente abundante en las zonas central y sur de Toledo, Ciudad Real, Extremadura y Andalucía. Inmediatamente se presentó en las nuevas Cortes un proyecto de ley de reforma agraria que ilegalizaba la propiedad de más de 300 hectáreas, con la esperanza de que en el plazo de un año unas 70.000 familias se asentaran en sus propias tierras. Pero fue más fácil aprobar una ley de este tipo que llevarla a la práctica, y fue necesario recurrir a diversas medidas provisionales durante el período que ahora se analiza.

Los debates sobre la Constitución se desarrollaron en medio de huelgas y disturbios en todo el país, aunque ninguna de ellas, salvo un paro total de dos días en Barcelona durante el mes de

100 Art. 81.

101 Art. 82.

102 Art. 83.

103 Art. 85.

septiembre, causó graves inconvenientes, y los disturbios fueron solo esporádicos. Era evidente que la inestabilidad política sería una amenaza constante hasta que se satisficieran las aspiraciones de los extremistas, si es que esto era posible, lo que impulsó aún más la labor de los redactores de la Constitución. El Gobierno, a pesar de la diversidad de afiliaciones políticas de sus miembros, hizo todo lo posible por dejar de lado las diferencias en aras del bien común, y cabe añadir que la prensa demostró una admirable moderación en su tratamiento de las situaciones más difíciles.

Dos crisis de cierta importancia —la primera por sus efectos a largo plazo y la segunda por sus efectos inmediatos— caracterizaron los debates sobre la Constitución. La primera de ellas se refería al sufragio femenino¹⁰⁴. En España hay muchas mujeres (6.500.000 de los 12.500.000 votantes inscritos en el censo de 1933 eran mujeres), y fue con cierta sorpresa para los observadores extranjeros ver cómo un país que acababa de librarse de una monarquía del siglo XVII se preparaba para adoptar una reforma tan propia del siglo XX. Muchas de las feministas más avanzadas de España, tanto dentro como fuera de las Cortes, consideraban que las mujeres, cuya educación había sido tan descuidada en el pasado, aún no estaban preparadas para el voto. Dicho de otro modo, los anticlericales temían que, una vez dispusieran del sufragio, la gran mayoría de las mujeres votaran (como se decía) «tan sólo a un sacerdote»; y, si bien en algunos sectores el liberalismo era más fuerte que el anticlericalismo, una gran parte temía dejar que el liberalismo siguiera su curso. Algunos argumentaban que, salvo contadas excepciones, sólo las mujeres de ideas progresistas ejercerían el voto, puesto que sólo ellas reconocerían su valor; y que, a medida que la educación se fortaleciera y aumentara el número de dichas mujeres, se convertirían en una gran fuerza para el bien. Para respaldar este argumento, señalaban la amplia mayoría obtenida por los partidos de izquierda en las elecciones de junio, las primeras celebradas bajo la República y las primeras en las que votaron las mujeres¹⁰⁵. Pero sus oponentes replicaban que esas últimas elecciones eran atípicas: el país aún se encontraba bajo la influencia del entusiasmo republicano original y muchos partidarios de la derecha habían considerado inútil votar. Una de las diputadas más destacadas, Victoria Kent, recién nombrada directora de prisiones, se encontraba entre las más firmes opositoras al sufragio femenino. «Si todas las mujeres españolas fueran universitarias u obreras —declaró en las Cortes— les daría el voto de inmediato; pero tal como están las cosas, darles el voto es quitarle votos a la República, y debo oponerme en conciencia al artículo».¹⁰⁶ Al final, las sufragistas ganaron, pero sólo por 39 votos. La división fue notable: la mayoría, compuesta principalmente por socialistas, se vio reforzada por casi la totalidad del pequeño partido católico, un hecho que habla por sí solo y del que las elecciones de 1933 resultaron ser un elocuente testimonio.

La segunda crisis, mucho más violenta, surgió de los debates sobre la cuestión religiosa. Una y otra vez, a lo largo de la historia de la Segunda República, se evidencia el carácter esencialmente religioso del español. Los enemigos de la religión intentan repetidamente atacarla o expulsarla de la mente del pueblo, y una y otra vez el propio pueblo la defiende instintivamente y asegura su victoria. Es sin duda un hecho de suma importancia que, en un momento de máximo entusiasmo por la República y cuando su propia naturaleza estaba en entredicho, personas de igual relevancia que el Presidente de Gobierno y el Ministro de la Gobernación dimitieran del Gobierno en defensa de la Iglesia a la que profesaban fidelidad. No era la primera vez durante los debates que se amenazaba con una secesión del Gabinete: el Ministro de Hacienda había presentado su dimisión a finales de septiembre y el Presidente de Gobierno había hecho lo mismo una semana después, pero en ambos casos la presión del resto del Gabinete los había mantenido en sus cargos. Ahora, sin embargo, la conciencia dictaba un rumbo que ninguna presión meramente política podía alterar, y de la derrota misma la Iglesia arrebató una victoria.

104 Véase [El voto femenino: debate en las Cortes de 1931](#). (Clásicos de Historia)

105 Error del autor: las mujeres no pudieron votar, aunque sí ser votadas. (Clásicos de Historia)

106 Cf. B.S.S., 1932, Vol. IX, p. 11.

Los artículos anticlericales descritos anteriormente fueron presentados el 8 de octubre de 1931, no por Azaña, su principal defensor, cuyas armas más pesadas se reservaron para el final, sino por un opositor de la Iglesia algo más doctrinario, Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia. Don Fernando no tuvo mayor dificultad en esgrimir el argumento habitual a favor de la separación de la Iglesia y el Estado: un argumento atractivo que, al mismo tiempo, aumenta la fortaleza espiritual de la Iglesia y los recursos financieros del Estado. Y aunque en tales debates la retirada de fondos es siempre una cuestión más delicada, supo manejar con habilidad el argumento de que el clero, ya de por sí mal pagado, podría ser razonablemente sostenido por sus parroquias en lugar de por el Estado, que gasta en la Iglesia una suma promedio de más de 44 millones de pesetas.

Tras un debate preliminar sobre este tema, el artículo fue remitido a una Comisión Permanente de las Cortes para ciertas revisiones, y no fue hasta el 13 de octubre, después de haberse acordado la separación de Iglesia y Estado, que el artículo sobre las Órdenes Religiosas, que había provocado la escisión en el Gabinete, volvió a ser objeto de debate. El discurso más destacado de este debate, y uno de los más memorables de toda la historia de la Segunda República, fue pronunciado por aquel acérrimo enemigo de las Órdenes, Manuel Azaña.

Algunas de las declaraciones más sorprendentes jamás realizadas en las Cortes pueden leerse *Diario de Sesiones* (equivalente al británico *Hansard*) del 13 de octubre. En primer lugar, Azaña planteó una cuestión puramente de debate, que difícilmente habría podido influir en un solo diputado: no se trataba, dijo, de un problema religioso, sino puramente político, puesto que un problema religioso concierne únicamente a la conciencia de un individuo y esta cuestión se relaciona con la constitución de un Estado laico. A continuación, con absoluta seriedad, prosiguió declarando que España ya no era una nación católica. Admitió que aún existían millones de católicos practicantes en el país, pero consideró que, desde el siglo pasado, el catolicismo había dejado de ser la expresión y la guía del pensamiento español.

«España en el siglo XVI era un país católico, a pesar de que numerosos y distinguidos españoles eran disidentes, algunos de los cuales constituyen la gloria y el esplendor de la literatura española. Hoy, España ha dejado de ser católica, a pesar de que hay muchos millones de españoles que practican el catolicismo».¹⁰⁷

Tras esta insignificante paradoja, Azaña se adentró en el ámbito de las finanzas y luego pasó a lo que describió como la parte «dramática» de las propuestas del Gobierno: el tratamiento de las Órdenes religiosas. Aquí fue lo suficientemente franco como para mostrar tanto la debilidad como la fortaleza de su argumento. Es necesario, dijo, respetar el principio de la libertad de conciencia —tanto cristiana como no cristiana—, pero no menos importante es proteger la República. Considerando que ambas necesidades eran incompatibles, propuso anteponer el Estado. Con vehemencia, aunque con cinismo, comparó la supuesta «reforma» de las Órdenes religiosas con una operación quirúrgica sin anestesia. La operación podría resultar fatal en ocasiones: «Para cuáles, no lo sé, pero sin duda para algunas.»¹⁰⁸

Para una de ellas, propuso que resultara fatal de inmediato. Esta «Orden sin nombre», como él la denominó, y que se proponía aniquilar por completo, hacía voto de obediencia a una autoridad distinta del Estado. Todos sabían a qué se refería, y el anuncio «Me refiero a los jesuitas» no causó revuelo. De la Compañía de Jesús haría un ejemplo. Los jesuitas debían desaparecer.

En cuanto al resto de las propuestas, Azaña admitió que eran poco liberales y lamentó que «iba a escandalizar a la opinión liberal». Pero no debía haber medias tintas. Al principio del debate, De los Ríos había expresado cierta simpatía por las numerosas Órdenes que se dedican a las obras de misericordia, y con razón, pues han merecido el reconocimiento de todos los españoles. Pero, ¿acaso Azaña permitiría alguna excepción a su favor? Ni por un instante. Hacen proselitismo, exclamó, además de cuidar y curar. Y el proselitismo no lo podemos tolerar ni por un momento.

107 *El Sol*, 14 de octubre de 1931.

108 *Ibid.*

Así pues, no se debe permitir que las Órdenes se dediquen a «negocios», ya sea la venta de bordados y dulces por parte de monjas que consagran su vida al bien o la publicación de revistas especializadas y obras de erudición por parte de monjes, entre los que se encuentran algunos de los más destacados intelectuales de España. Y, lo más grave de todo, «ni por un instante, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia» se les debe permitir enseñar.

«Lo lamento profundamente, pero esto es necesario para la auténtica defensa de la República. La continua influencia de las órdenes religiosas en la conciencia de los jóvenes es precisamente el secreto de la situación que atraviesa España y que, como republicanos —y no sólo como republicanos, sino como españoles—, tenemos el deber de impedir a toda costa. No me digan que esto es contrario a la libertad: es una cuestión de salud pública. ¿Acaso ustedes, que se oponen a esta medida en nombre del liberalismo, permitirían que un profesor universitario impartiera clases sobre la astronomía de Aristóteles y afirmara que las estrellas están fijas a esferas que conforman los cielos? ¿Permitirían que se enseñara medicina del siglo XVI desde una cátedra en una universidad española? No lo harían; a pesar del derecho del profesor a enseñar y a pesar de su libertad de conciencia, tal cosa jamás se permitiría.» Y os digo que, en el ámbito de las ciencias políticas y morales, las Órdenes religiosas católicas se ven obligadas, en virtud de su dogma, a enseñar todo aquello que es contrario a los principios que constituyen el fundamento del Estado moderno.»¹⁰⁹

Así continuó Azaña. La sesión se prolongó toda la noche y, cuando se realizó la votación, a las siete de la mañana del día catorce, el artículo fue aprobado por 178 votos contra 59. Quizás el hecho más significativo y llamativo que surgió del anuncio del resultado fue que, a pesar de la importancia de la cuestión, casi la mitad de los miembros estuvieron ausentes o no votaron. Por extraño que parezca, tres miembros del Gobierno, Domingo, Albornoz y Lerroux, estuvieron ausentes, y dado que Alcalá Zamora y Maura votaron con la oposición, difícilmente puede decirse que el Gobierno apoyara con entusiasmo sus propias propuestas.

A las seis de la tarde, a pesar de la ausencia, en señal de protesta, de los católicos vascos, la Cámara estaba mucho más llena que once horas antes. El Presidente de Gobierno y el Ministro de la Gobernación habían manifestado el valor de sus convicciones y habían dimitido. La situación no era fácil. Con la inestabilidad reinante en el país, un paso en falso podría ser fatal para la República; sin embargo, no había Jefe de Estado para nombrar un nuevo Presidente de Gobierno ni mecanismos legales para su selección. Alejandro Lerroux, el miembro de mayor edad del Gobierno, que como era de esperar había anunciado su dimisión colectiva, interpretó el sentir de la Cámara dirigiéndose a su Presidente, el profesor Julián Besteiro, y pidiéndole que actuara como si fuera el Presidente de la República. Al manifestar su aceptación, toda la asamblea, contenta de poder desahogar sus emociones contenidas, se puso de pie al unísono y lo aclamó con entusiasmo.

—¡No abandonaré esta Cámara —exclamó Besteiro— hasta que termine la crisis!

—¡Viva la República! —gritó Don Alejandro—. ¡Viva España!

—¡Viva la República y la nación española! —respondió Besteiro.

Una vez más, la Cámara se puso de pie y gritó «¡Viva!»

En menos de tres horas, la crisis había terminado. Cuando los ministros entraron y tomaron asiento en el banco azul, se observó de inmediato que Azaña los encabezaba. Sin mucha reticencia, cabe suponer, había asumido las responsabilidades que le correspondían por el papel protagonista que había desempeñado en el origen de la crisis. Una ligera reorganización del personal bastó para la formación de un nuevo Gobierno, y el nuevo Presidente de Gobierno anunció que todo estaba listo para la entrada en vigor de la Constitución en un breve discurso. Animado por un estruendoso aplauso, pronunció una perorata inusualmente emotiva:

109 Ibid.

«¡Jamás, señores, mientras esté en mis manos, se debilitará la autoridad! ¡Jamás, mientras esté en mis manos, el Gobierno de mi país será objeto de desprecio, burla e injuria! ¡Jamás en este ministerio habrá vacilación en el servicio a la comunidad! La República nos pertenece a todos. ¡Ay de aquel que se atreva a levantar la mano contra ella!»¹¹⁰

La Cámara estalló en aplausos. «¡Así se le habla al país!», gritó un diputado.

La sesión apenas había durado media hora cuando la Cámara levantó la sesión.

A la noche siguiente, el debate sobre la Constitución continuó como si nada hubiera pasado.

V. OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1931.

Incidentes y acontecimientos. El juicio de Don Alfonso. La elección de Sr. Alcalá Zamora a la Presidencia de la República.

Transcurrieron casi ocho semanas antes de que la Constitución estuviera lista para su promulgación, pero nada de lo ocurrido durante los debates fue comparable en interés a lo que se acaba de relatar. Muchos de los artículos restantes no generaron controversia y, aunque otros, como los relativos a la facilidad para divorciarse y el uso de lenguas regionales en las escuelas, fueron valientemente cuestionados, punto por punto, por el pequeño grupo de conservadores, algunos grupos de la oposición, como el partido católico vasco, pensaron que podían servir mejor a una causa temporalmente perdida regresando a sus circunscripciones. La asistencia disminuyó, a menudo hasta la mitad del número total de diputados, un hecho que la prensa de todos los partidos destacó continuamente. De vez en cuando, se aprobaban artículos por escasas mayorías: solo 14 votos, por ejemplo, aseguraron el principio de la elección del Presidente por colegio electoral en lugar de por sufragio popular. Pero, en general, ni siquiera los apasionados discursos del nuevo Presidente de Gobierno lograron despertar interés, y la atención pública se centró fuera del Parlamento, más que dentro de él.

Una serie de leves acontecimientos animaron los días de finales de otoño. Una de ellas la proporcionó Azaña, cuya «Ley para la Defensa de la República», aprobada con escasa oposición por las Cortes apenas una semana después de su acceso al poder e incorporada, durante el mandato de estas Cortes, a la Constitución, estaba destinada a convertirse en la medida más odiada del momento. Sólo los temores más graves por la seguridad de España podían justificar «la paradoja de tener una Constitución que garantiza los derechos del individuo junto con una ley que los pone a merced de un solo ministro».¹¹¹ La ley otorgaba al Ministro de la Gobernación el poder de suspender reuniones públicas, suprimir asociaciones, cerrar clubes y confiscar armas ilícitas, mientras que once «actos de agresión contra la República», que incluían no solo huelgas, disturbios y violencia, sino también delitos tan vagos como la incitación, la difusión de rumores subversivos, la defensa de la Monarquía, el enriquecimiento ilícito y la negligencia oficial, se declaraban punibles con multas o exilio. Tal medida podría ser necesaria, pero los abusos a los que inevitablemente conduciría eran evidentes, y pocos ministros estarían orgullosos de aplicarla.¹¹² Fue duramente criticada en todos los ámbitos, y no solo por potenciales huelguistas y alborotadores. Con el paso del tiempo, su similitud con las medidas promulgadas durante la Dictadura se hizo más evidente.

Otro acontecimiento fue la obra de Ramón Pérez de Ayala, entonces embajador en la Corte de Santiago y uno de los principales intelectuales que se habían manifestado desde el principio en apoyo de la República. Veinte años antes, siendo joven, Pérez de Ayala había escrito una novela satírica titulada *A.M.D.G.*, que atacaba a los jesuitas, a quienes debía su educación inicial. España no es el único país donde antiguos alumnos han criticado o ridiculizado escuelas excelentes y

¹¹⁰ *El Sol*, 15 de octubre de 1931.

¹¹¹ Cf. *B.S.S.*, 1932, Vol. IX, p. 148.

¹¹² Cf. *El Sol*, 21 de octubre de 1931.

eficaces, y la novela juvenil, aunque no olvidada, había sido superada en mérito por las obras más maduras del autor. Por lo tanto, fue una dolorosa sorpresa para muchos que el embajador de la República en Londres eligiera precisamente ese momento, cuando las pasiones estaban en su punto álgido, para representar una versión teatral de su novela en la capital española. Ciertamente, no fue en Inglaterra donde el embajador aprendió a atacar a un enemigo derrotado. La puesta en escena de la obra fue, como era de esperar, un pretexto para las manifestaciones, y si, como consecuencia, se hubiera reavivado los incendios del mayo anterior, cabe preguntarse a quién se le habría atribuido la responsabilidad. En la primera función, según informó *El Sol*, el estruendo fue tal que no se oyó ni una palabra del primer acto.¹¹³ Al tumulto le siguió la violencia, que continuó tras finalizar la obra y estalló esporádicamente en las siguientes representaciones.

Pero el principal acontecimiento del final del otoño en Madrid fue el espectacular juicio en rebeldía de Don Alfonso XIII ante las Cortes Constituyentes y su condena al destierro perpetuo. Apenas unos días después de la proclamación de la República, se anunció la realización de varias investigaciones para informar sobre la dictadura, el juicio y la ejecución de Galán y García Hernández, y otras cuestiones similares. Fue una fortuna para el público que, en un momento en que el interés por las Cortes decaía, la comisión que investigaba la presunta culpabilidad de don Alfonso emitiera un informe sensacional. De hecho, resultó incluso más impactante que la famosa agitación del «¡Ahorquen al káiser!»¹¹⁴ en Inglaterra. El informe, casi unánime, de la comisión declaró al criminal culpable de alta traición contra el pueblo español y merecedor de la pena de muerte. Sólo debido al rechazo a la pena capital, se pudo recomendar a las Cortes que condenaran al ex-rey a cadena perpetua si regresaba a España, y a muerte únicamente si «continuaba en sus actos de rebelión».

Ante la perspectiva de disfrutar de este fantástico espectáculo, aderezado oportunamente por el supuesto descubrimiento de una conspiración monárquica de la que nadie parecía conocer los detalles, las Cortes se reunieron la noche del 19 de noviembre para un inusual festín de oratoria y permanecieron reunidas hasta que se dictó sentencia, por aclamación, a las 4 de la madrugada del día siguiente. El *ABC* describió el proceso como un «acto de persecución rencoroso e innecesario», por lo que fue suspendido durante tres días y multado con mil pesetas. Sin embargo, los comentarios del corresponsal madrileño de *The Times* sobre las acusaciones respaldan esta opinión, y cabe estar seguro de que, en los años venideros, el pueblo español, siempre tan generoso cuando no se deja llevar por la pasión, se unirá en su sincero pesar por todo el proceso.

Los cuatro cargos de la acusación contra Don Alfonso eran los siguientes: (1) Incumplimiento de sus deberes como soberano constitucional; (2) aceptación del golpe de Estado de 1923; (3) crimen de lesa majestad hacia el pueblo; y (4) complicidad en inmoralidad administrativa. Sobre estos cargos, el corresponsal de *The Times* comenta lo siguiente:

«Desde su ascenso al trono en 1902 hasta 1923, parece que el rey Alfonso no puede ser acusado del primer cargo, ya que todos los decretos de este periodo fueron refrendados por los ministros responsables. En cuanto al segundo cargo, el documento presentado por el conde Romanones demuestra que, en septiembre de 1923, la abdicación —que habría supuesto el abandono de la nación, puesto que el rey había jurado solemnemente servir como soldado— era la única alternativa a la aceptación de la Dirección Militar, que, además —y esto es tan notorio que no se discute—, contaba en aquel momento con la simpatía de la mayoría de la nación. En cuanto al delito de lesa majestad contra el pueblo, nadie parece comprender su significado ni haber intentado plantearlo en las Cortes. Tampoco se presentó prueba alguna de complicidad en la inmoralidad administrativa.»¹¹⁵

113 *El Sol*, 7 de noviembre de 1931.

114 En las elecciones parlamentarias de 1918, el primer ministro liberal David Lloyd George utilizó en la campaña el lema «Hang the Kaiser!» (Clásicos de Historia)

115 *The Times*, 27 de noviembre de 1931.

El único aspecto del debate digno de mención fue la defensa del ex-rey por parte del único defensor declarado de la monarquía borbónica en las Cortes Constituyentes: el veterano parlamentario, el Conde de Romanones. Tras desafiar a los ex-ministros de la monarquía presentes a que declararan haber firmado alguna vez un decreto por orden del rey y en contra de su voluntad, procedió a leer el documento mencionado anteriormente, el cual, de aceptarse como auténtico, demuestra que en 1923, al igual que en 1931, el ex-rey tuvo que elegir entre un golpe de Estado y una guerra civil, y que en ambas ocasiones, con razón o sin ella, optó por la vía que evitó el derramamiento de sangre de su pueblo.

El documento, cuya autenticidad fue confirmada posteriormente por el marqués de Alhucemas, entonces primer ministro, es un telegrama de Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, al capitán general de Madrid.¹¹⁶ Dice así:

«Ruego a Su Excelencia que señale respetuosamente a Su Majestad el Rey la urgencia de resolver la cuestión planteada, sobre la cual recibo continuamente un apoyo valioso y renovado. Tenemos la razón de nuestro lado y, por lo tanto, la fuerza, aunque hasta ahora la hemos utilizado con moderación. Si se intenta engañarnos para que lleguemos a un compromiso que nuestra conciencia consideraría deshonoroso, exigiremos penas más severas y las impondremos con rigor. Ni yo, ni las guarniciones que me acompañan, ni las guarniciones de Aragón de las que acabo de recibir una comunicación al respecto, consentiremos en nada que no sea lo que hemos exigido. Si en un intento por defenderse los políticos forman un frente unido, nosotros haremos lo mismo, con la ayuda del pueblo, cuyas reservas de energía son enormes. Hoy estamos decididos a la moderación, pero en caso extremo no rehuiremos el derramamiento de sangre.»

Resulta difícil comprender cómo, tras tales pruebas, el juicio bajo el segundo cargo pudo haber continuado. Pero la pasión seguía nublando el juicio, y el Conde, aunque recibió una atención respetuosa debido a su estatus y edad, en ningún momento se le respondió con seriedad. Sin duda, todo el juicio fue orquestado para dar estabilidad a la República e inflamar aún más al pueblo contra la Monarquía caída. Y en este sentido, sin duda, tuvo éxito.

Unos días después, la atención se desvió del ídolo caído a la figura que estaba a punto de ser erigida en su lugar: la elección del primer Presidente de la República.

Durante algunas semanas, habían circulado rumores sobre los nombres de personalidades prominentes que se consideraban posibles candidatos. Idealmente, el más idóneo habría sido el venerable Don Manuel Bartolomé Cossío, reconocido experto en arte español, pionero en España de la teoría pedagógica moderna y pensador audaz y original. Sin embargo, aunque en pleno uso de sus facultades mentales, Cossío tenía setenta y tres años y llevaba tiempo postrado en cama a causa de una dolorosa enfermedad, de la que falleció tres años después. Otra figura destacada, a quien muchos hubieran deseado ver en la Presidencia, aunque sólo fuera por su condición ajena al círculo de los políticos profesionales, era el profesor Rafael Altamira. Este escritor y crítico, autor de la célebre *Historia de España y de la civilización española*, pertenece a un selecto grupo de académicos españoles de proyección y prestigio internacional. Como ferviente defensor y amigo de la progresista Institución Libre de Enseñanza, habría ejercido una fuerte atracción sobre la izquierda, mientras que la derecha no habría podido negar su distinción intelectual. No tenía más de sesenta y cinco años, y su elección para el cargo más alto del país habría sido un broche de oro para el nombramiento de tantos académicos en puestos de menor distinción.

Pero parecía que se prefería un candidato político para la presidencia, y la lista se redujo a dos posibles aspirantes. Debía ser uno de ellos, y en este caso la elección parecía recaer necesariamente en un astuto parlamentario de casi setenta años, con larga experiencia y una trayectoria de trabajo incansable. Era el líder radical Alejandro Lerroux, a quien ya conocimos en los dos gobiernos republicanos como Ministro de Estado. Lerroux era sumamente impopular en Cataluña, y su elección como presidente habría exacerbado la opinión pública en esa importante parte de la

¹¹⁶ Ibid.

península. Por lo demás, estaba plenamente cualificado para el cargo, y el prestigio que había adquirido como representante de España en la Sociedad de Naciones habría hecho que su nombramiento fuera bien recibido en el extranjero.

El Gobierno, sin embargo, tenía otra propuesta, más sutil, que combinaba las ventajas de la conveniencia política y el apoyo popular. ¿Por qué no nombrar al recién dimitido presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora? Para el mundo en general, esta elección parecería completamente natural y apropiada, pues Alcalá Zamora había sido jefe del Comité Revolucionario y del Gobierno Provisional, había representado al Gobierno en las negociaciones que llevaron a la transferencia de poder y, hasta pocas semanas antes, había sido el primer Presidente de Gobierno de la República. Pero había argumentos a su favor aún más contundentes. Desde su renuncia al Gabinete, se sabía que estaba considerando una medida que podría perjudicar gravemente los intereses progresistas: liderar una campaña a favor de la revisión de la Constitución para modificar los artículos anticlericales que le resultaban tan ofensivos. Es cierto que la Constitución prevé su propia revisión sólo bajo condiciones tan estrictas que no habría riesgo alguno de que se cumplieran hasta después de nuevas elecciones. Pero una de las contingencias que el Gobierno estaba particularmente ansioso por evitar era cualquier movilización de las fuerzas de la religión organizada, y un ex primer ministro que pudiera presentarse como mártir por motivos de conciencia sería un líder sumamente útil para tal movilización y un oponente sumamente inconveniente para un Gobierno que no estaba muy seguro de su estabilidad. Además, Don Niceto había sido monárquico y ministro de la Corona: ¿qué pasaría si, como líder de un partido católico fuerte y unido, decidiera, tarde o temprano, volver a conducirlo a Don Alfonso? En definitiva, la situación suscitaba serias dudas.

Sin duda, no se podía concebir un plan mejor que colocar a Don Niceto a salvo en el Palacio Nacional. Como presidente constitucional, estaría alejado de la política partidista. No podría causar mucho daño y, como hemos visto, la Constitución preveía diversas circunstancias en las que un gobierno fuerte o un primer ministro astuto podrían provocar la destitución de un presidente no deseado. La idea parecía excelente: lo mejor sería acostumar cuanto antes a la víctima y al público en general, y, si fuera posible, obtener el voto unánime de las Cortes, que, solo en esta ocasión inicial, sesionarían solas, sin sus respectivos comisarios, para elegir al primer jefe de la República.

En consecuencia, un día a principios de noviembre, una delegación de ministros visitó a Don Niceto en su residencia, le comunicó formalmente el honor que la Providencia y el señor Azaña le tenían reservado y le sugirió respetuosamente que, si le parecía bien, podía dejar de hablar de una campaña revisionista y abstenerse de participar en la política partidista hasta el día de su elección. Ciertamente, le pareció bien. España podía haber abandonado la Monarquía, pero no había renunciado a la dignidad que debía rodear al sucesor del monarca. El cargo de Presidente de la República conllevaba un sueldo —se hablaba de nada menos que un millón de pesetas al año¹¹⁷—, más un millón y cuarto para gastos. Era un hombre casado, con tres hijos y tres hijas, y ahora sería el Presidente mejor pagado del mundo.

La delegación regresó de donde había venido, bastante satisfecha con las garantías que Don Niceto le había dado. Ahora solo tenía que obtener el consentimiento de los partidos políticos, lo cual no debería ser difícil.

En muchos sentidos, Don Niceto no fue una mala elección, aunque ni siquiera sus amigos más cercanos lo habrían descrito como una figura imponente. Con cincuenta y cuatro años, cordobés de nacimiento, un marcado acento andaluz y todos los modales oratorios del abogado-político, se presentaba ante el público como un pequeño burgués benévolo, de estatura media, con un rostro bastante agradable, pero con una boca desafortunadamente débil, que llamaba la atención cada vez que sonreía, y eso ocurría a menudo, especialmente en ocasiones ceremoniales. Para el público, impresionado más bien por el supuesto tamaño de sus pies, se le conoció al principio de su carrera

117 Nominalmente, 40.000 libras; al tipo de cambio vigente entonces, unas 25.000.

presidencial como *el Botas*, apodo que nunca le abandonó. Aun así, gozaba de gran prestigio como político. En su juventud, como ya hemos dicho, fue protegido y colaborador político del Conde de Romanones, y tras su ruptura con él, y posteriormente con la Monarquía, su ingreso en el partido republicano lo catapultó de inmediato a la cabeza, puesto que no había muchos hombres de posición en él que hubieran sido ministros de la Corona.

A principios de diciembre, la Constitución estaba terminada y, tras una revisión verbal, fue ratificada el 9 de diciembre. Para un parlamento español que, como comentó un ingenioso personaje, suele ser «notorio por sus ausencias», la Cámara estaba bien llena: sólo hubo noventa y ocho ausentes, la mayoría de los cuales eran abstencionistas deliberados, católicos vascos o conservadores extremos del tipo que por entonces se autodenominaba inofensivamente «agrarios». Al día siguiente, por 362 votos de un total de 466 posibles, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República. Algunos otros individuos recibieron votos impares, sumando un total de trece; hubo treinta y cinco papeletas en blanco y cincuenta y seis abstenciones. Don Niceto podía considerarse, por lo tanto, con la confianza de las Cortes y, presumiblemente, de la nación, y tanto las Cortes como la nación lo celebraron en consecuencia.

El 11 de diciembre, en la expresión española, el Presidente «tomó posesión» de su cargo. Ataviados en su mayoría con traje de etiqueta, los diputados, junto con representantes del Cuerpo Diplomático, permanecieron en sus escaños mientras los ministros subían a la tribuna para formar el telón de fondo de su electo, quien prestó juramento de fidelidad a la Constitución y recibió la máxima distinción, una distinción inusual para un Gobierno republicano y anticlerical, del Gran Collar de Isabel la Católica. La promesa empleada se basaba en el juramento que antiguamente prestaban los soberanos españoles, omitiendo toda referencia a Dios y a los Santos Evangelios. La ceremonia fue breve.

«Prometo solemnemente, por mi honor —repitió Alcalá Zamora— ante las Cortes Constituyentes, como órgano de la soberanía nacional, que serviré fielmente a la República, velaré por el cumplimiento de la Constitución, respetaré las leyes y dedicaré mis actividades como jefe de Estado al servicio de la justicia y de España».

«En nombre de las Cortes Constituyentes, que lo eligieron y que ahora lo invisten en el cargo —respondió Besteiro—, le digo: Si actúa así, que la nación le recompense; y si no, que le pida cuentas».

Al pronunciarse esta promesa, se oyeron salvas de artillería fuera de la Cámara, que se redoblaron cuando los diputados salieron de ella. Una multitud inmensa y ordenada se alineaba a lo largo del camino desde la Cámara hasta el antiguo Palacio Real, donde el Presidente iba a establecer su residencia, aunque posteriormente, tras reconsiderarlo, decidió que sería más prudente usarlo únicamente como oficina. Cuando la procesión de personalidades entró en el Palacio, se izó la bandera presidencial —una bandera roja con el escudo nacional—; la tricolor republicana ya ondeaba. Aviones sobrevolaban el Palacio; bandas interpretaban melodías patrióticas; y se distribuían entre la multitud copias de la recién promulgada Constitución, alegremente encuadradas en papel amarillo, rojo y morado. Finalmente, siguiendo un precedente real bien establecido, el afable nuevo presidente, con una amplia sonrisa, apareció con sus ministros en uno de los balcones del Palacio.

Dos días después, el Presidente Alcalá Zamora ofreció su primera recepción diplomática. El vicedecano del Cuerpo, a quien correspondió pronunciar un discurso formal de felicitación y buena voluntad, fue el Nuncio Apostólico. La coincidencia tenía un matiz irónico. Habiendo sido expulsado y depuesto el Cardenal Primado de España, negándosele un puesto al embajador español en el Vaticano, separada y despojada de la dotación económica de la Iglesia, debilitadas las órdenes religiosas y condenada a la expulsión de la Compañía de Jesús del país, cabría suponer que el discurso del Nuncio iba más allá de la mera formalidad.

Capítulo III.

DOS AÑOS DE IZQUIERDAS

(diciembre de 1931 a noviembre de 1933)

B.S.S., Vol. IX, pp. 94-101, 145-9, 193, 197, Vol. X. P. 32; I: Vol. VIII, pp. 196-7; Vol. IX, pp. 199-208; Vol. X, pp. 16-28; III: Vol. X, pp. 29-34, 62-5, passim. IV: Vol. X, pp. 34, 62-7; V: Vol. X, pp. 68, 117-27; Vol. XI, pp. 151-2; VI: Vol. X, pp. 180-7; Vol. XI, pp. 23-30.

I. DICIEMBRE DE 1931-SEPTIEMBRE DE 1932.

Reconstrucción del Gobierno. Tragedias en los pueblos. La revuelta comunista en Cataluña. Expulsión de los jesuitas. España durante el primer año de la República. La Ley Agraria de 1932.

Una vez que el Presidente se instaló en lo que a partir de entonces se conocería como el «Palacio Nacional», el Gobierno, antes de fijar las fechas para un breve y merecido receso navideño, emprendió una importante reestructuración.

Durante los meses dedicados a la redacción de la Constitución, la coalición republicana tuvo considerables dificultades para mantenerse unida y, ahora que se sentían con mayor libertad para actuar por iniciativa propia, los radicales, liderados por Lerroux, decidieron separarse de un Gobierno que consideraban excesivamente socialista y pasar a la oposición. Como resultado, el equipo reconstituido de Azaña —el cuarto gobierno republicano en ocho meses— tomó un aspecto predominantemente socialista, con dos carteras en manos de radical-socialistas y las finanzas en las hábiles manos de un independiente, Carner, catalán en gran parte responsable del borrador del Estatuto de Autonomía, que estaba a punto de ser ratificado por las Cortes. Cabe destacar que la cartera de Estado de Lerroux pasó a manos de Luis de Zulueta, el rechazado embajador ante el Vaticano.

La Navidad y el Año Nuevo transcurrieron tranquilamente en España. El tema principal de conversación fue, como antaño, la gran Lotería Nacional, cuyo primer premio, casualmente, recayó, quizás de forma bastante apropiada, en el Estado. En Nochebuena, dos aviadores españoles, Haya y Rodríguez, volaron desde Sevilla, cruzando el Sáhara, hasta Bata, en la Guinea Española, un viaje de unos 4.800 kilómetros en veintisiete horas. Temas tan poco controvertidos como estos llenaban los periódicos, y durante un breve tiempo las crisis políticas quedaron en el olvido.

Pero, por desgracia, no por mucho tiempo. El último día de 1931 tuvo lugar la primera de esas terribles tragedias rurales que más tarde se volvieron tan frecuentes y parecían imposibles de predecir o prevenir. Para el turista, uno de los mayores encantos de España es el pintoresco encanto y la variedad de sus pequeños pueblos. Todo viajero conoce los pequeñas agrupaciones de casas pardas, dispersas aquí y allá a lo largo de la larga carretera blanca que atraviesa la vasta meseta castellana hasta el horizonte; los pueblos verdes y frescos, sombreados por árboles, que convierten las provincias del norte en un oasis en el desierto del largo y caluroso verano español; las tranquilas aldeas andaluzas, bordeadas de palmeras, con sus calles flanqueadas por acacias y los naranjales a

pocos kilómetros de distancia. Parecería imposible que la violencia, los disturbios y los asesinatos pudieran surgir, como espíritus malignos, en medio de un entorno tan apacible.

Sin embargo, ya sea porque las rápidas (quizás excesivamente rápidas) mejoras en las comunicaciones facilitaron la difusión de doctrinas subversivas entre los campesinos sin educación, o por cualquier otra razón, los disturbios rurales en España se convirtieron gradualmente en una noticia habitual. Las primeras informaciones sobre estos disturbios se extendió por España con terrible rapidez, de punta a punta del país, en los primeros días de 1932.

Casi ningún madrileño que leyó el periódico el 2 de enero había oído hablar de Castilblanco, ese pequeño pueblo extremeño de nombre tan peculiar, cerca del Guadiana, en la provincia de Badajoz. Los novecientos habitantes del pueblo, como demostró un informe oficial posterior, no sufrían ningún tipo de penuria: había comida en abundancia y casi todos los aldeanos poseían tierras. La embriaguez era desconocida; apenas se había oído hablar de muertes violentas. Hasta la llegada de la República, no interesaba nada el mundo exterior: sólo existían dos radios —la del párroco y la del médico— y nadie, ni siquiera durante la Dictadura, hablaba de política.¹¹⁸

Sin embargo, sólo motivos políticos podían explicar la tragedia ocurrida allí en la víspera de Año Nuevo. Las autoridades habían denegado el permiso para celebrar una reunión política en el pueblo. Los promotores decidieron llevarla a cabo. La Guardia Civil, que acudió en defensa de las autoridades, fue atacada por una turba y cuatro guardias fueron asesinados. Casualmente, una huelga general en la ciudad de Badajoz se había extendido a éste y a otros pueblos; los huelguistas amenazaron de muerte a la telegrafista si comunicaba la noticia de la masacre; así que durante unas ocho horas no se supo nada de lo sucedido. Cuando llegaron los periodistas, quedaron horrorizados ante la revelación de una brutalidad desmedida. Los guardias asesinados habían sido golpeados con sus propios fusiles hasta quedar irreconocibles. Les habían destrozado la cabeza, les habían arrancado los ojos y les habían apuñalado, apedreado y mutilado el cuerpo.¹¹⁹ En uno de los cuerpos se contaron treinta y siete puñaladas. Para colmo, según declararon los testigos, las propias mujeres del pueblo habían bailado alrededor de los cadáveres desfigurados.¹²⁰

Este fue solo el primero, aunque el peor, de una serie de ultrajes similares que en aquellos oscuros días de enero se reportaron desde esta provincia del sur. Casi al mismo tiempo llegaron noticias parecidas del norte: el pequeño pueblo de Arnedo, cerca de Calahorra, se había declarado en huelga; la Guardia Civil había disuelto una reunión en la plaza; ambos bandos habían disparado; y seis personas, entre ellas cuatro mujeres, habían muerto en la refriega.

Todo esto, a la espera de la reunión de las Cortes, dio al Gobierno motivos para reflexionar seriamente. Extremistas, tanto en las Cortes como en el campo, declararon que la Guardia Civil se había comportado brutalmente en cada ocasión y que debía ser controlada por la autoridad. Sin embargo, parecía imposible determinar qué había sucedido realmente. Siglos atrás, en una de sus obras, Lope de Vega describe el apacible pueblecito de Fuenteovejuna, donde, según cuenta la historia, un tirano fue asesinado por sus fechorías. Cuando los aldeanos fueron interrogados, e incluso torturados, para que revelaran los nombres de los asesinos, gritaron al unísono: «¡Fuenteovejuna!» Parecía probable que ocurriera lo mismo en Castilblanco. Se habían realizado cuarenta arrestos, pero había pocas posibilidades de infligir un castigo efectivo.

En las Cortes, el jefe del Gobierno protestó vehementemente contra los intentos de «utilizar los cuerpos de las víctimas como armas de agresión contra la República». Pero eso fue precisamente lo que sucedió y lo que continuaría sucediendo. De los partidos pertenecientes a la extrema izquierda, los socialistas eran leales a un gobierno en el que ellos mismos estaban fuertemente representados: sólo más tarde, tras su derrota, se unieron a los revolucionarios. Pero sus rivales, los

118 *El Sol*, 17 de enero de 1932.

119 Comunicado oficial, citado en *El Sol*, 2 de enero de 1931.

120 Este detalle fue reportado por el general Sanjurjo, entonces director general de la Guardia Civil (*El Sol*, 3 de enero de 1932). El general Sanjurjo ofrece más detalles en *El Sol* del 5 de enero.

sindicalistas, hicieron todo lo posible por avivar la discordia, y con ellos, unidos en una extraña alianza destinada a perdurar hasta límites insospechados, estaban anarquistas y comunistas. Agravios como la supuesta brutalidad en Castilblanco fueron pretexto suficiente para una serie de huelgas revolucionarias acompañadas de violencia. Estas, que estallaron por todo el país, tenían como objetivo, aunque de forma indirecta, sustituir al régimen recién constituido, al que estigmatizaban como «burgués», por otro de tendencias más avanzadas. «¡Ya tenemos nuestra República!», era su lema nacional; «¡ahora queremos nuestra Revolución!»

Dado que anarquistas, comunistas y sindicalistas tienen ideales muy distintos e incluso incompatibles, puede parecer sorprendente que se unieran de esta manera, pues, de haber logrado destruir la Segunda República en ese mismo instante, sin duda habrían discrepado sobre el siguiente paso a seguir, y el resultado habría sido un caos inmediato. Pero lo cierto es que, muy temprano en la historia de la República, la pequeña pero decidida Federación Anarquista unió fuerzas con la organización sindicalista mucho más grande, conocida como la Confederación Nacional del Trabajo,¹²¹ y esta combinación anarco-sindicalista fue responsable de la mayoría de los primeros disturbios. De vez en cuando, el anarco-sindicalismo también se unió al comunismo, que, en estos primeros años, era en sí mismo una influencia algo vaga y móvil. «Los comunistas en España — como señaló *The Times* por entonces—, parecen indistinguibles de los anarquistas. Su objetivo es derrocar a cualquier gobierno simplemente por ser un gobierno, y sus métodos son la desorganización y el caos.»¹²²

Como bien sabe cualquier viajero que haya conversado con obreros españoles, estos tienden a seguir a individuos más que a principios; Nin y Maurín en Cataluña, y el casi mesiánico Dr. Vallina en el sur, cuentan con decenas de miles de seguidores, pero estos suelen tener una idea muy vaga de lo que representan sus líderes. Por lo tanto, es imposible establecer una clara distinción entre los tres elementos perturbadores y los principios que representan, aunque es muy posible que en el futuro estos se aclaren.

En enero de 1932, estas fuerzas subversivas se desataron simultáneamente por primera vez. Durante días, Bilbao, en el norte de España, fue escenario de disturbios con constantes tiroteos e incendios. Otro foco de agitación fue Valencia, en el este, donde turbas atacaron iglesias sin éxito y la Guardia Civil se convirtió en blanco de su furia. Sin embargo, los disturbios más graves tuvieron lugar a finales de mes, en Cataluña.

Tal era el entusiasmo por la autonomía en esa región que hasta entonces había sido una de las zonas más tranquilas del país. La Generalitat, además, mantenía buenas relaciones con los sindicalistas, y los catalanes veían con mucha más simpatía los métodos e ideales del sindicalismo que los del comunismo. Pero los comunistas, que durante los últimos nueve meses habían estado regresando a España de su largo exilio en gran número, y que en general se oponían a cualquier forma de gobierno regionalista, habían estado trabajando constantemente para socavar el Estatuto de Autonomía antes de que entrara en vigor, y esta revuelta probablemente pueda describirse correctamente como el primer intento decidido y organizado de establecer un Estado comunista en España. Duró alrededor de una semana, pero aunque, al estallar, comenzaron revueltas simpatizantes en Bilbao, en la ciudad catalana de Lérida, en Sevilla y en varias otras partes de Andalucía, la idea de los rebeldes parece haber sido establecer su dominio, en primer lugar, en el norte de Cataluña, y su acción fue demasiado estrictamente localizada como para demostrar un peligro real. Su centro fue el valle del Llobregat, entre las ciudades industriales de Manresa y Berga. Las vías del ferrocarril de vía estrecha que unía estas ciudades fueron arrancadas; se convocaron huelgas generales en toda la localidad; En Sallent se incautó un polvorín, mientras que

121 Si bien, en aras de la simplificación, se han evitado en la medida de lo posible estos términos algo confusos, conviene aclarar que la Unión General de Trabajadores (UGT), de tendencia socialista; la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de tendencia sindicalista; y la Federación Ibérica de Anarquistas (FAI), de tendencia anarquista ibérica.

122 *The Times*, 27 de julio de 1931.

un «Comité Revolucionario» izó en el Ayuntamiento la bandera roja que en España suele ser un símbolo de socialistas, sindicalistas y comunistas, y emitió una proclama comunista.

La revuelta tuvo un resultado excelente que, quizás desde el punto de vista del régimen vigente, casi la justificó. Fue la primera prueba seria de la eficacia del Gobierno, y dicha eficacia superó la prueba de forma que suscitó elogios unánimes. La firme y rápida actuación de Sr. Azaña, que en los años siguientes salvó al país de la guerra civil en repetidas ocasiones, sofocó la rebelión de inmediato. Se movilizaron tropas de infantería, caballería y artillería desde otras partes de Cataluña, y se ordenó al Gobernador militar de Barcelona que actuara sin temor a consecuencias. Para cuando Azaña tuvo ocasión de dirigirse al Parlamento, prácticamente todo había terminado, y pudo adoptar una actitud de fácil satisfacción que probablemente no sentía, pero que le valió un voto de confianza con tan solo cuatro disidentes.

Mientras el Presidente de Gobierno arremetía con determinación contra los extremistas de la izquierda, también se preparaba para dar efecto a sus ataques anteriores contra la derecha, poniendo en práctica el artículo veintiséis de la Constitución y expulsando a los jesuitas. Mediante un decreto del 23 de enero de 1932, la Compañía de Jesús fue disuelta en territorio español a partir del 3 de febrero, y sus bienes pasaron a ser propiedad del Estado. El Presidente de la República, cuya conciencia le había impedido permanecer en el Gobierno cuando se aprobó el artículo, aparentemente no tuvo reparos en firmar el decreto sin objeción alguna, y a las dos semanas de su promulgación los jesuitas abandonaban el país.

Dado que la Compañía de Jesús no se mencionaba específicamente en el artículo, era evidente que el decreto debía justificar su aplicación. Lo hizo remitiéndose brevemente a la bula de Pablo III, que constituye el fundamento canónico de la institución de la Compañía, y a sus propias Constituciones, que la consagran preeminentemente al servicio de la Sede Apostólica. La prensa española, sin embargo, había publicado unos días antes una declaración redactada por cinco destacados abogados y respaldada por muchos otros, que demostraba, en opinión de muchos, que, cualesquiera que fueran las intenciones de quienes la promovieron, el artículo no era aplicable a la Compañía de Jesús.

Los jesuitas —declaraba el documento—, al igual que todas las demás órdenes religiosas, profesan «los tres votos de pobreza, castidad y obediencia a sus superiores» y, además, los profesos, que representan menos del diez por ciento del total de miembros, hacen el voto adicional, aprobado por Pablo III, que los obliga a «cumplir todo aquello que el Pontífice de hoy o sus sucesores manden en lo que respecta al bienestar de las almas, la propagación de la fe y las misiones a las que tengan a bien enviarnos».

Este compromiso, continúa el documento, no puede en modo alguno impedir la obediencia legítima al Estado. Señala que todos los religiosos y todos los sacerdotes de la Iglesia Católica están vinculados a la Santa Sede exactamente del mismo modo que los jesuitas se vinculan específicamente mediante este voto adicional, considerado como un acto (en palabras del propio voto) de humildad. El artículo 26 de la Constitución, prosigue, reconoce tácitamente la admisibilidad del voto de obediencia «al poder espiritual del Romano Pontífice, a quien todos los católicos deben obedecer», y sólo cuando quienes lo hacen lo hacen se refiere explícitamente al bienestar de las almas o a la propagación de la fe, la nueva Constitución lo considera ilegal. Concluyendo con una defensa de la libertad religiosa, dirigida al jefe de un Gobierno que ha profesado defenderla, los firmantes declaran que la disolución de la Compañía de Jesús en España será una flagrante injusticia.

Incluso antes de la publicación de esta declaración, apenas se pretendía que la expulsión de los jesuitas fuera algo más que una medida oportunista. Tampoco gozaba de gran popularidad, salvo entre los anticlericales.¹²³ Ya hemos visto que apenas la mitad de los diputados estuvieron presentes

123 «La Segunda República —escribió Salvador de Madariaga, a quien nadie describiría como clerical— ha desperdiciado una magnífica oportunidad de orientar el problema de la educación secundaria hacia una solución

cuando se aprobó el artículo 26 de la Constitución, que dos miembros del Gobierno votaron en contra y que tres estuvieron ausentes. ¿Qué pasó con el resto? «He votado a favor de una mala medida —escribió Nicolau d'Olwer, entonces Ministro de Economía—, pero no haber votado a favor habría sido abrir la puerta a un artículo aún peor y más intolerante». Se refería, por supuesto, al borrador original de la Constitución, que habría disuelto todas las Órdenes. En otras palabras, los jesuitas, no por primera vez en su historia, estaban siendo arrojados a la multitud con la esperanza de que ésta quedara satisfecha.

La prensa, en su mayor parte, criticó el decreto hasta donde se atrevió, aunque la reciente suspensión del periódico católico *El Debate* por sus críticas al Gobierno hizo imprescindible la cautela. Ningún periódico que se autodenominara liberal podía tolerar tal medida. El editorial de la *Publicitat*, periódico republicano de izquierdas, normalmente firme defensor del Gobierno, decía:

«El decreto ahora publicado no puede sorprender a nadie, aunque está suscitando protestas que nosotros mismos reconocemos como lógicas... Como liberales, nos oponemos a todo aquello que impida el ejercicio de los derechos individuales, y por ello desaprobamos por completo el carácter antiliberal del artículo 26 y del decreto que de él se deriva.»¹²⁴

La excelencia de la educación jesuita es proverbial en todo el mundo, y en un país como España, donde durante siglos se ha descuidado la educación, ha sido una bendición. En el momento de su disolución, la Compañía contaba con unas setenta residencias y treinta colegios en España. Entre los colegios más conocidos, el de Sarrià, cerca de Barcelona, contaba con una Escuela de Estudios Eclesiásticos, un Instituto de Química y laboratorios de Biología y Psicología Experimental. Los estudios teológicos del colegio de Comillas y los estudios astronómicos del de Granada eran igualmente destacables. Las clases más pobres se vieron aún más empobrecidas tras la pérdida de los jesuitas. La iglesia del Sagrado Corazón, en Barcelona, mantenía cinco clubes obreros y, en 1931, educaba a más de 1.200 niños. El Club Obrero Jesuita de Burgos, con 1.500 miembros, ofrecía vivienda, planes de pensiones, un club de prestaciones por enfermedad, una caja de ahorros y clases diurnas y nocturnas. Y así se podría seguir en todo el país. Una nación progresista, con planes bien organizados de educación y progreso social, podría posiblemente suprimir tales instituciones sin grandes pérdidas, pero que un régimen que comenzó reconociendo el atraso del país y su intención de remediarlo, procediera a cerrar tantas de las mejores escuelas de España y a expulsar a tantos de sus maestros más talentosos, fue anteponer la intolerancia y los prejuicios al deseo de progreso educativo y social.

La primera semana de febrero se produjo la partida de un gran número de jesuitas, quienes abandonaron sus residencias, escuelas y demás instituciones. Con la dignidad que siempre los caracterizaba, y tras haber manifestado su protesta colectiva en silencio, abandonaron el país sin desfiles ni manifestaciones. El único disturbio que provocó su partida tuvo lugar en las Cortes, donde un debate retrospectivo sobre el decreto de expulsión fue guillotinado en medio de escenas de gran desorden. En el País Vasco, de donde procedía su fundador, se les ofreció una emotiva, aunque discreta, despedida. En la basílica de Loyola, lugar de nacimiento de San Ignacio, se calculó que la asistencia a las misas del día de la partida de los Padres ascendió a veinte mil personas.

Tras haber asestado un duro golpe a la derecha, Azaña volvió a la izquierda y provocó la indignación de muchos de sus seguidores al deportar a un centenar de rebeldes comunistas, sin juicio previo, a la Guinea Española. La mayoría pertenecían a las clases más humildes, y la medida fue calificada abiertamente como una acción clasista. Pero el Gobierno se mostró unido e inflexible en esta cuestión, y, aunque como consecuencia se convocaron más de veinte huelgas generales por

satisfactoria. Obsesionada por su anticlericalismo, ha clausurado con ligereza el único tipo de escuela que, con todas sus imperfecciones, guardaba cierta semejanza con una escuela secundaria: el colegio jesuita. Y al hacerlo, ha creado cada vez más caricaturas insípidas de universidades. En materia de educación secundaria, la República ha fracasado estrepitosamente.» (*Anarquía o Jerarquía*, p. 248).

¹²⁴ *Publicitat*, 26 de enero de 1932.

toda España, los rebeldes fueron trasladados a Guinea, donde permanecieron durante muchos meses.

Siguió entonces un periodo de relativa calma para un país hastiado de la agitación. Las huelgas —generales y parciales— se sucedieron sin cesar por toda España, pero la mayoría duraban sólo uno o dos días y pronto se integraron en la vida cotidiana de los españoles. Muchas de estas huelgas no supusieron mayores inconvenientes que la falta de panecillos para el desayuno y el cierre de teatros y cafés. Eran, en realidad, poco más que días festivos, con la emoción añadida de ser inesperadas. En Madrid, gran parte de los habitantes pasaban el día en la sierra, y las calles principales de la ciudad estaban ocupadas principalmente por niños jugando al fútbol. En ocasiones, las huelgas generales iban acompañadas de disturbios, pero incluso esto solía tener mayor repercusión en los periódicos del día siguiente que en la experiencia de quienes lo leían. Media docena de personas de entre medio millón resultaban heridas, y esa media docena acaparaba la atención mediática. En general —y hablo desde mi propia experiencia—, la situación en España entre marzo y agosto podría calificarse, con razón, de tranquila.

Las Cortes estaban muy activas, pero, a excepción de la Ley Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se debatieron durante todo el verano, hubo poca legislación de especial interés. En febrero se definieron y aprobaron las nuevas leyes de divorcio. Estas ampliaron aún más la brecha entre la Iglesia y el Estado, pues, mientras la Iglesia seguía declarando el matrimonio indisoluble, el Estado proponía ahora conceder el divorcio tras cinco años de separación acordada, por un periodo, por breve que fuera, de abandono, por una pena de prisión superior a seis años y por otros muchos motivos. Sin embargo, estas propuestas, de tan trascendental importancia para la vida familiar, suscitaban apenas interés incluso entre los diputados: la asistencia a las Cortes llegó a ser de tan solo ochenta personas; las votaciones tuvieron que posponerse; e incluso se creó una comisión para debatir la viabilidad de imponer multas por ausencia.

La primera Semana Santa bajo el régimen republicano, con las tradicionales procesiones al aire libre, habían sido temidas por los amantes de la paz, por temor a que las pasiones anticlericales se desataran de nuevo y causaran daños irreparables. Pero no había motivo para alarmarse. La mayoría de las procesiones, por prudencia, se cancelaron; Sevilla, cuna de la más importante, estaba triste, pero tranquila. *El Debate* volvió a publicarse tras sesenta y seis días de suspensión. Todo parecía ir bien. Incluso el Día del Trabajo transcurrió sin mayores incidentes, salvo algunas escaramuzas, y, por supuesto, con una paralización casi total de la actividad laboral en todo el país.

Tras la Pascua, todos celebraron el primer aniversario de la República. Podría pensarse que había pocos motivos que celebrar, pero al menos se podía afirmar que la República había sobrevivido doce meses y podía considerarse definitivamente establecida. «Mucho, muchísimo —escribió el Dr. Marañón el día del aniversario— queda por hacer. Pero el período de peligro ha terminado. La República ya no puede ser objeto de meros chismes de pueblo. Es un hecho consumado... parte de la estructura de la historia».¹²⁵

Este podría ser un buen lugar para plasmar algunas impresiones generales sobre la vida en las grandes ciudades españolas durante el primer año de la República, en comparación con los últimos años de la Monarquía. No se puede decir que la comparación sea del todo halagadora para el nuevo régimen. Se observó un notable aumento de la exuberancia, especialmente en las calles y los espacios públicos, entre los jóvenes de ambos sexos. Esto era, quizás, previsible en una época de agitación política y social, y no se debería censurar al nuevo orden por ello. Sin embargo, en los últimos y más sombríos días de la República, degeneró en una licencia descarada y vergonzosa. Dado que muchas de las familias más ricas habían abandonado el país, presumiblemente había menos riqueza, pero sin duda había mucha más ostentación de riqueza, y especialmente de automóviles de lujo. De nuevo, puede que de hecho hubiera más inmoralidad o no, pero sin duda

125 G. Marañón: «Un año de República. España en franquía.» *El Sol*, 14 de abril de 1932. [Incluido en Gregorio Marañón, *Artículos republicanos*.—Clásicos de Historia.]

había mucha más ostentación de la misma, principalmente en forma de literatura pornográfica, que ocupaba un lugar destacado en quioscos y librerías y, junto con la literatura marxista, se vendía a las puertas mismas de las iglesias.

Pero la principal característica superficial de la vida social en los primeros años de la República fue el enorme aumento de la mendicidad. «Las calles de Madrid y de muchas otras ciudades —escribió el corresponsal de *The Times* en Madrid pocos días antes del primer aniversario de la República— se han infestado tanto de mendigos que es casi imposible caminar cien metros sin ser abordado no sólo por los profesionales ciegos, cojos o mutilados, a la antigua usanza y tolerados, sino también por grupos de dos, tres o cuatro hombres que llevan una manta o un pañuelo grande para recoger monedas e imploran caridad *para los pobres desempleados*.»¹²⁶ Según mi propia observación, Barcelona constituía una notable excepción a esta regla, y ciudades como Toledo y Granada, al menos, no estaban peor que antes. Pero la mayoría de las capitales y grandes ciudades de provincia, y sobre todo Madrid, estaban plagadas de mendicidad. La calle de Alcalá se había convertido en una continua exhibición de deformidades físicas; ancianos y mujeres jóvenes con niños invadían el paso de los peatones y abordaban a los viajeros en tranvía o autobús; mientras que grupos desagradables se agrupaban en las escaleras de las estaciones de metro, observaban con miradas lascivas junto a las taquillas y aparecían de repente en cada esquina que conducía a un andén o salía de él.

Se desconoce la causa exacta de este aumento de la mendicidad. La depresión económica, aunque considerable, no bastaba para explicarla, ya que España, con aproximadamente la mitad de la población de Gran Bretaña, tenía en aquel entonces menos de una cuarta parte de su desempleo. Tampoco se descuidaba a las personas sin hogar y desamparadas; es cierto que las órdenes religiosas se habían visto privadas de muchas oportunidades para hacer el bien. Pero, por otro lado, muchos municipios, incluido el de Madrid, estaban poniendo en marcha planes de ayuda de una magnitud sin precedentes. Cabía suponer que la mendicidad, con la consiguiente falsedad, había aumentado debido a la mayor independencia e indisciplina que trajo consigo la República, combinadas con una marcada tendencia de la gente del campo a emigrar a las ciudades.

Sólo algunos disturbios bastante graves en las universidades y una semana de huelga de transportes, organizada con éxito, perturbaron la armonía de principios de verano. Y las Cortes avanzaban con paso firme en la tramitación de la Ley Agraria y el Estatuto de Cataluña, con la clara perspectiva de tener que reunirse en sesión ininterrumpidamente durante un segundo verano. La cuestión catalana es tan compleja que conviene tratarla por separado, pero es preciso mencionar aquí la Ley Agraria, cuya primera parte fue aprobada por las Cortes en julio de 1932 y la segunda en septiembre.

Durante décadas, el descontento y precariedad entre los jornaleros agrícolas del sur de España constituyó un grave problema, pero bajo la Monarquía, aunque se habló a menudo de la reforma agraria, no se hizo nada fundamental. Las dificultades agrarias en el norte y el sur eran muy diferentes. En el norte, el problema radicaba en la enorme división de las propiedades, a menudo de tamaño insignificante. En el sur, enormes latifundios, que a veces abarcaban cientos de miles de hectáreas —principalmente en Extremadura y Andalucía—, estaban en manos de terratenientes absentistas y eran cultivados por campesinos con salarios tan bajos que en 1931 se calculaba que no superaban las 900 pesetas anuales (equivalentes a 36 libras esterlinas). Las malas cosechas, frecuentes, provocaban una miseria generalizada apenas mitigada por las precarias ayudas privadas.

La creciente influencia de las organizaciones políticas sobre el campesinado y el rápido crecimiento de las organizaciones socialistas y sindicalistas provocaron huelgas y manifestaciones campesinas que los gobiernos, con demasiada frecuencia, resolvieron autorizando a la Guardia Civil a ejercer una represión implacable, haciendo caso omiso de las consecuencias. Mucho antes de que la República llegara al poder, los progresistas coincidían en que la expropiación y redistribución de

126 *The Times*, 2 de marzo.

la tierra era el único remedio. La cuestión radicaba en si la República llegaría a tiempo (y, una vez instaurada, actuaría a tiempo) para que la medida se adoptara constitucionalmente, o si se llevaría a cabo por la fuerza mediante una gigantesca revolución campesina.¹²⁷

La Ley Agraria de 1932 fue un intento valiente y eficaz de atender las demandas directas de los líderes sindicalistas, de ofrecer algún tipo de compensación a los terratenientes que, naturalmente, se opondrían a una legislación confiscatoria y, al mismo tiempo, de fortalecer la República. Así, por un lado, toda tierra que superara cierta superficie (cuyo límite variaba según el distrito) quedaba sujeta a expropiación; pero, por otro lado, la indemnización solo se permitía sobre el valor catastral de la tierra, que a menudo era muy inferior a su valor real, y el pago se realizaba mediante bonos del Estado, cuya disposición estaba restringida.

La ley se aplicaba a las provincias del sur y centro de España —Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca— y a todas las demás tierras de origen feudal que habían pasado a sus propietarios por sucesión directa. Las propiedades reales y las tierras de los conspiradores contra la República, según lo previsto en la Constitución, debían ser confiscadas sin indemnización, mientras que los grandes señores solo debían ser indemnizados por mejoras recientes. Las tierras expropiadas pasaban a ser propiedad nacional y debían ser cultivadas por campesinos arrendatarios, ya fuera por familias o en grupos comunales.

Para la administración de la nueva Ley, las Cortes crearon un Instituto Central de Reforma Agraria, que recibiría un crédito sustancial del Estado. La junta general del Instituto estaría compuesta por veintiún miembros: terratenientes, arrendatarios, trabajadores agrícolas y expertos financieros y agrarios. El Instituto actuaría principalmente a través de comités regionales y comenzaría cuanto antes la ingente tarea de realizar los censos necesarios y proceder a la redistribución. Los pesimistas dudaban de que esta tarea pudiera completarse, y que el sistema agrario se revolucionara por completo, en el transcurso de la vida de alguien en el país; las estimaciones, tanto conservadoras como optimistas, situaban el período necesario entre veinte y treinta años.

Tales eran las líneas generales de la Ley Agraria de 1932. Rechazada en las Cortes en cada etapa únicamente por la pequeña minoría que representaba a la clase terrateniente, fue bien recibida en el país por el ciudadano común y, por lo general, por el campesino, aunque, al acercarse la época de siembra, se recibían frecuentes informes del sur sobre grupos de campesinos que tomaban tierras por la fuerza. Pero fueron principalmente los extremistas —los grandes y los sindicalistas— quienes vieron con desaprobación la nueva ley. Sin embargo, ambas clases vislumbraban, o creían vislumbrar, su oportunidad en el futuro, y ambas estaban dispuestas a esperar.

II. AGOSTO DE 1931-SEPTIEMBRE DE 1932.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña. El referéndum y su resultado.

Aprobación del Estatuto en las Cortes. El federalismo y su futuro.

A partir de lo escrito sobre el Pacto de San Sebastián y la proclamación de la República en Barcelona, se puede apreciar la importancia del problema catalán en la historia reciente de España.¹²⁸ La intensidad de los sentimientos que caracterizan la actitud de Cataluña ante la cuestión de la autonomía regional solo podría explicarse adecuadamente mediante una digresión tan extensa que desproporcionaría por completo esta narración. Aquí sólo se puede ofrecer un breve repaso de su historia.

127 Para una descripción de las condiciones agrarias en España durante los últimos años de la Monarquía, véase S. de Madariaga: *Spain*, pp. 191-203.

128 Se encontrarán numerosas referencias a esta sección en un artículo de B.S.S., 1932, Vol. IX, pp. 199-208, 1933, Vol. X, pp. 16-28, al final del cual se incluye el texto completo en español del Estatuto.

Durante la Edad Media, a lo largo de unos tres siglos y medio, el noreste de España hizo historia. Mientras Castilla intentaba expulsar a los musulmanes hacia el sur, a África, Cataluña, una vez liberada de las incursiones musulmanas, miraba hacia el este en busca de conquistas y comercio a través del Mediterráneo. Las Baleares, Córcega, Sicilia y Cerdeña cayeron en manos catalanas, al igual que Valencia, Játiva y Murcia en la península. A esto le siguió la expedición a Constantinopla, la extensión del imperio catalán en Asia y el establecimiento, en 1311, del Ducado de Atenas, que duró casi ochenta años.

Pero la unión de los reinos españoles condujo gradualmente a la subyugación de Cataluña en un Estado centralizado. La lengua catalana, que había producido al menos tantas obras maestras como el castellano, dejó de ser la voz de la literatura. Políticamente, la situación empeoró. Los privilegios ancestrales de los catalanes comenzaron a desvanecerse. Tuvieron que mantener parte de un ejército en el que apenas ejercían pequeños mandos. Pagaban impuestos elevados por la virtud de la industria y la fertilidad natural de su país. Incluso su preciado santuario de Montserrat cayó en manos de monjes castellanos, quienes instaron a los penitentes catalanes a hablar en una «lengua cristiana». Poco a poco, un pueblo de temperamento leal se fue transformando en una nación de rebeldes.

El espíritu nacional estalló en dos ocasiones: en 1640, los catalanes se alzaron contra Felipe IV en una revuelta conmemorada por su himno patriótico «Els Segadors», y en 1714, su negativa a aceptar al primero de los Borbones españoles, Felipe V, condujo al terrible asedio de Barcelona y a su posterior sometimiento. El origen de la liberación parcial efectuada tras la caída de los últimos Borbones se remonta al renacimiento literario que comenzó en 1833. La rica, vigorosa y elegante lengua catalana había sido proscrita y descuidada durante siglos, pero nunca olvidada, y ahora, impulsada por unos pocos hombres de letras patriotas, las glorias de la literatura catalana medieval revivieron espléndidamente, alcanzando en los últimos años una creciente fructificación.

El renacimiento cultural trajo consigo progreso político. En 1893, la Unión Catalanista publicó las famosas «Bases de Manresa», sobre las que se han fundamentado la mayoría de las reivindicaciones modernas de Cataluña. Durante el presente siglo, prácticamente todos los diputados catalanes a las Cortes españolas han sido catalanistas. En 1913, la creación de la Mancomunitat, ya mencionada, supuso un nuevo avance. Sobre su fundación se gestaron planes propagandísticos sin los cuales habría carecido de realidad: la «IV Semana Municipal» de 1918 y las consiguientes negociaciones con Madrid; la enérgica Acció Catalana y su órgano *La Publicitat*. Aunque lentamente, y a veces casi imperceptiblemente, el progreso continuó, hasta que en 1923 Primo de Rivera inició una nueva era de represión.

Una de las grandes virtudes del pueblo catalán, una virtud quizás inesperada en un pueblo tan lleno de energía, iniciativa e imaginación, es su paciencia. Ninguna nación habría podido soportar las persecuciones de la Dictadura, a menudo más agravantes cuando eran más pueriles y triviales, con mayor dignidad, ni habría afrontado con más serenidad las demoras y desilusiones que, quizás inevitablemente, les sobrevinieron en los primeros años de la República. Quien desconozca la historia catalana podría ser perdonado por subestimar la profundidad de su apego a su tierra y por malinterpretar las manifestaciones del 14 y 15 de abril como explosiones superficiales de relativamente poca importancia. Pero no es así. Los catalanes, durante el último siglo, se han topado con tanta frecuencia con la desilusión de sus amigos, así como con la persecución de sus enemigos, que se han resignado al progreso más lento, y aunque sus esperanzas, justificadamente altas en 1931, se han visto frustradas en más de una ocasión en los años transcurridos, siempre han estado dispuestos a aceptar lo que han logrado como una garantía de que vendrán más.

Existe la creencia popular, aunque errónea, de que el pueblo catalán anhela la separación total del resto de España. El partido separatista es, de hecho, muy pequeño, y la principal división entre los catalanes en materia de principios políticos radica en la cuestión del federalismo. Cuando se publicó el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la versión redactada para su sometimiento al

pueblo y, si este lo aprobaba, a las Cortes de la República Española, no contenía ninguna sugerencia de separación total, y se respetaron meticulosamente los deseos del Gobierno Provisional, que ya se habían manifestado en Barcelona. Así, se usó la palabra «Generalitat» donde cabría esperar la palabra «Estado», y el federalismo expresamente repudiado en la Constitución española también quedó excluido del borrador del Estatuto. De principio a fin, el Estatuto se caracterizó por una moderación propia de estadistas, algo que fue generalmente reconocido por quienes, fuera de Cataluña, conocían la historia del país. Presentado, conforme a lo estipulado en el acuerdo con la República, a todos los ayuntamientos catalanes y aprobado por ellos, el Estatuto fue sometido a referéndum el 2 de agosto de 1931. Se creía que, si el pueblo lo aprobaba claramente, sería aprobado por las Cortes sin modificaciones importantes.

No cabía duda de la aprobación popular. El referéndum se celebró debidamente en un caluroso domingo de agosto que quedará grabado en la memoria de quienes lo vivieron en Cataluña, y el resultado constituyó una de las afirmaciones electorales más decisivas de la historia. La mayoría se situó en una proporción de casi 200 votos a 1. Votaron a favor del Estatuto 592.961 electores y en contra 3.276. De los que lo rechazaron, 2.188, casi dos tercios, votaron en Barcelona, una ciudad cuyos habitantes son conocidos por su diversidad de opiniones. En el resto de Cataluña, las proporciones fueron asombrosas: 421.231 votos a favor frente a 1.088 en contra, es decir, el 99,997% a favor. Si las votaciones alguna vez demostraron algo, estas demostraron sin lugar a dudas que Cataluña apoyaba casi unánimemente, no sólo un vago ideal de autonomía, sino un documento claramente definido cuyos términos eran conocidos por todos.

Pero aquellos que fueron lo suficientemente optimistas como para creer que esta decisiva expresión de opinión sería respetada en toda España estaban destinados a desilusionarse rápidamente. Tras la proclamación de la República, como también antes, tras la disolución de la Dictadura, se produjo un notable acercamiento entre Barcelona y Madrid y un decidido intento por parte de cada partido de ver la cuestión desde el punto de vista del otro. Pero una vez que el Estatuto de Cataluña se presentó ante las Cortes, comenzó una reacción virulenta en su contra. Durante aproximadamente un año, se desató una feroz agitación contra los «separatistas». Ciertos periódicos fulminaron diariamente contra el Estatuto; Clubes y asociaciones enviaron telegramas de protesta incoherentes; conocidas figuras de la tradición se dirigieron a multitudinarias reuniones públicas; e innumerables delegaciones de provinciales patriotas (cabe recordar la «Unión Patriótica» de Primo de Rivera) organizaron manifestaciones, principalmente en la capital española.

La agitación contó con el apoyo de muchos que no habían protestado contra las cláusulas de autonomía de la nueva Constitución y que, al parecer, no comprendían la falta de lógica de su postura, puesto que la Constitución aprobaba claramente el principio de autonomía regional. Sin embargo, la mayoría de los manifestantes eran conservadores que se oponían firmemente a la mayor parte del programa del Gobierno Provisional y, por decirlo suavemente, mostraban una tibia aversión hacia la propia República. Lo cierto es que el anticatalanismo constituía una forma de oposición al régimen sumamente conveniente y prácticamente segura. Aunque en general las cosas marchaban bien durante 1931-1932, los ánimos se caldeaban cuando la conversación se veía interrumpida por temas como la restauración de la Monarquía, el restablecimiento de la Iglesia, la devolución de sus tierras a los grandes señores o la reincorporación de los funcionarios destituidos por «incompatibilidad». No era viable atacar públicamente al Gobierno por su política eclesiástica o agraria, pero sí era perfectamente viable atacar una política a la que el Gobierno, por el Pacto de San Sebastián, estaba realmente comprometido, pero que tenía su origen en otro lugar. Además, existía un magnífico eslogan que sonaba espléndidamente patriótico: «¡Vota por una España unida!». «El desmembramiento de nuestro país» era una frase que los opositores al Estatuto llevaban al extremo, siempre a una distancia prudencial, por supuesto, de Barcelona. Desde el punto de vista político, defender una España unida era una medida irreprochable, y si (se argumentaba) el Gobierno podía debilitarse por la derrota de su política regionalista, pronto podrían seguir otras derrotas.

Naturalmente, el riesgo de derrota de un gobierno de coalición, con una mayoría tan amplia a su favor, ante un proyecto de ley al que estaba prácticamente comprometido, era mínimo. Sin embargo, durante la tramitación del Estatuto en las Cortes, entre el 6 de mayo y el 9 de septiembre de 1932, éste fue lamentablemente mutilado en cláusulas que sus promotores consideraban fundamentales. Una vez más, los catalanes demostraron una admirable moderación. Sus diputados protestaron por todos los medios contra las sucesivas mutilaciones, y el pueblo confió en que harían lo que estuviera en su mano, dejando el resto para el futuro. «Aprecio enormemente el admirable ejemplo de disciplina que habéis dado —dijo Macià a su pueblo la noche del 9 de septiembre—, y tengo plena confianza en la buena acogida con la que recibiréis este Estatuto... aunque no sea el Estatuto por el que votamos». Es importante recordar esta sencilla verdad en cualquier análisis de la situación y la conducta de Cataluña bajo el régimen republicano. Una comparación detallada del borrador del Estatuto con su versión final ocuparía demasiado espacio para un breve análisis. Sin embargo, se pueden ofrecer algunos ejemplos.

Uno de los puntos más delicados de todo el debate fue el uso del catalán, pues, si bien políticamente puede parecer de poca importancia, su valor sentimental es enorme, y fue en sus intentos por reprimir la lengua que Primo de Rivera se granjeó, entre los catalanes, el mayor rechazo. El borrador del Estatuto establecía que «el catalán será la lengua oficial en Cataluña, pero en las relaciones con el Gobierno de la República la lengua oficial será el castellano». En su versión final, el Estatuto llegó a un compromiso insatisfactorio, por no decir sin sentido: «el catalán, al igual que el castellano, es la lengua oficial en Cataluña». Tras establecer el castellano como único idioma oficial para las comunicaciones entre Cataluña y el resto de España, se detallaron numerosos casos en los que debían utilizarse ambos idiomas, o en los que la otra parte, distinta del representante de Cataluña, podía elegir uno u otro.¹²⁹ Estos detalles eran insignificantes, pero, al ser impuestos en el debate, tuvieron un profundo impacto en una población sensible.

Un punto aún más crucial era la educación. Cataluña llevaba mucho tiempo privada del derecho a organizar cualquier aspecto de la educación de su población. Los profesores y maestros catalanes se veían imposibilitados de obtener puestos en otras partes de España, mientras que, por otro lado, las escuelas y colegios catalanes estaban repletos de docentes cuya lengua materna era diferente a la de sus alumnos, y la que debería haber sido la universidad específicamente catalana de Barcelona, al igual que todas las demás universidades españolas, se administraba desde Madrid. El deseo de los catalanes era que (citando el Proyecto de Estatuto) «la educación en todos sus grados y órdenes, y los servicios de instrucción pública, bellas artes, museos, archivos, bibliotecas y conservación de monumentos» estuvieran en manos de la Generalitat, tomándose las debidas precauciones, en interés tanto de Cataluña como de la República, en cuanto a la igualación de estándares.¹³⁰ Todo lo que se les concedió fue permiso para «crear y mantener los centros de instrucción que la Generalitat considere oportunos, independientemente de los institutos culturales y educativos del Estado», junto con el control de los servicios de bellas artes, museos y bibliotecas y la conservación de monumentos y archivos con excepción de los Archivos de la Corona de Aragón.¹³¹ Se creó una situación peculiar con respecto a la Universidad de Barcelona. A propuesta de la Generalitat, el Gobierno Central debía estar facultado para conceder autonomía a la Universidad, con un Patronato, o Consejo de Control, que garantizaría la igualdad en todos los aspectos entre las lenguas y culturas castellana y catalana.

Sin duda, se trataba del sincero intento de una Cámara lastrada por críticas que, si bien no provenían de un gran número de personas, debían tenerse en cuenta, para resolver problemas ancestrales de forma aceptable para todos. Pero la propuesta quedó tan lejos de los deseos de los

129 Estatuto de Autonomía, Art. 2.

130 Para el texto original en catalán de esta cláusula, y para otros detalles del Proyecto de Estatuto, véase *B.S.S.*, 1931, Vol. VIII, pp. 196-7.

131 Estatuto de Autonomía, Art. 7.

catalanes que parecía existir un grave peligro de desafección total. «Hoy —declaró Companys, portavoz principal de la Esquerra en las Cortes— toda Cataluña es republicana, más sólidamente que cualquier otra parte del país». Ella había creído, continuó, que sus deseos, prácticamente unánimes, serían respetados, pero se estaba desilusionando rápidamente. Si se aprobaba el presente artículo, insatisfactorio, se aplicaría con la máxima lealtad. Pero los diputados catalanes no podían votar a favor, así que se abstuvieron por completo de votar.

El Presidente de Gobierno intentó en vano persuadir a Esquerra para que modificara su postura extrema. Era conocido desde hacía tiempo como un ferviente defensor de Cataluña y, anteriormente en los debates, se había ganado por completo la simpatía de los regionalistas con un discurso de tres horas, uno de los más poderosos y efectivos que jamás había pronunciado. Tras repasar la historia del problema catalán desde que, por medio de métodos represivos, el primero de los Borbones creyó haberlo resuelto definitivamente, Azaña demostró que, a menos que se abordara con decisión, se volvería irresoluble. La Constitución de la República, afirmó, autoriza claramente el Estatuto: las Cortes no tenían otra alternativa que aprobarlo. Habiendo demostrado en esa ocasión su total afinidad con aquellos a quienes intentaba influir, ahora les suplicaba que se contentaran con el camino ya recorrido hacia la cima de sus ambiciones, en lugar de insistir en seguir ascendiendo. Fracasó, pero sus palabras tuvieron repercusión fuera de la Cámara y contribuyeron en gran medida a calmar los ánimos en Barcelona, desde donde se seguían los debates con suma ansiedad.

Una vez más, Azaña se sumó a la postura catalana cuando, posteriormente, las Cortes examinaron las propuestas financieras enmendadas del Estatuto. Algunos consideraron las propuestas excesivamente generosas; a estos les respondió que si se concedía autonomía a una región, esta debía tener no solo una situación financiera sólida, sino también la capacidad de expandirse con la prosperidad de la región. Otros objetaron que las propuestas se estaban tramitando con demasiada rapidez; a estos respondió: «Vayan tan despacio como quieran, pero la Cámara no levantará la sesión hasta que se haya aprobado el Estatuto». La respuesta, propia de un maestro de escuela, fue respetada, si no apreciada, y «el debate continuó».¹³²

Esto ocurrió a finales de agosto. El 9 de septiembre, el Estatuto en su conjunto fue aprobado por 314 votos a favor y 24 en contra. La afluencia de público, en plena temporada baja madrileña, contrasta con la de quienes habían votado, en octubre anterior, a favor del artículo 26 de la Constitución. A pesar de la decepción sufrida por la mutilación del Estatuto, los catalanes no tuvieron reparo en celebrar lo conseguido¹³³. Al día siguiente de la votación, Barcelona estalló en un júbilo que se convirtió en fiesta hasta altas horas de la madrugada. El día 11 —coincidiendo con el aniversario del ataque de Felipe V a Barcelona en 1714— los diputados catalanes regresaron de Madrid y fueron recibidos con honores. Cuatro días después, el Estatuto y el decreto que lo promulgaba se firmaron, muy apropiadamente, en San Sebastián, y el 25 se entregó formalmente a la Generalitat reunida en sesión. Fue en esta última fecha cuando el entusiasmo del pueblo catalán se desbordó por completo. Y el destinatario de dicho entusiasmo fue Azaña¹³⁴. La República, declaró, está fundando la nueva España sobre bases de equidad y justicia: Cataluña y la República deben mantenerse unidas o caer juntas.

«¡Ahora sois de la República!», exclamó tres veces seguidas.

Y cada vez, desde la densa multitud que se agolpaba a sus pies, se oía un tumultuoso «Sí» que le respondía con toda la fuerza de la gratitud y la lealtad de Cataluña.

Así, tras siglos, Cataluña se liberó de una forma de unión en la que su individualidad había sido aplastada y su pretensión de ser pueblo y nación, tácitamente rechazada, y se le otorgaron los estatutos de una nueva alianza que reconocía ambas. Era, sin duda, sólo un primer paso. El tiempo y la presión de acontecimientos aún imprevisos debían poner a prueba la alianza. Cada eslabón del

132 Cf. B.S.S. 1933, Vol. X, P. 17.

133 Véase el [Auca de l'Estatut de Catalunya \(1932\)](#), publicado por *L'Esquella de la Torratxa*. (Clásicos de Historia)

134 Véase: Manuel Azaña, [Sobre el Estatuto de Cataluña](#). (Clásicos de Historia)

nuevo Estatuto debía demostrar su valía. Muchos problemas, cuya solución completa todos sabían que aún no se había alcanzado, debían reconsiderarse. Y aún quedaban más dificultades. ¿Se apaciguarían los separatistas de la Estrella Solitaria con este compromiso de Estatuto? Se temía que no; y, aunque pocos, eran decididos e influyentes. ¿Se conformarían los federalistas con un Estatuto que, en virtud de la propia constitución de la República, tenía una base unitaria? Esto parecía aún menos probable. El propio Macià, un federalista convencido, continuó utilizando el lenguaje de su histórica declaración del 14 de abril de 1931. «Abrazamos —declaró en su discurso al pueblo el 9 de septiembre de 1932— a los demás pueblos de Iberia».¹³⁵ Incluso el Presidente de Gobierno, el 25 de septiembre, habló de manera similar. «Dentro de poco —reza el informe de su discurso—, los demás pueblos de España tendrán sus estatutos y todos ellos deberán contribuir a asegurar a España un nuevo lugar en el mundo».¹³⁶

Este es quizás el momento oportuno para hablar de las aspiraciones de estos otros pueblos y para dar una idea de la posición de los autonomistas y federalistas no sólo en Cataluña, sino también en otros lugares.

La idea de federación, al igual que la de autonomía regional, tiene su origen en la premisa de que los habitantes de España no son un solo pueblo, sino muchos. Todo viajero observador en España, y todo estudioso inteligente de la cultura española, sabe que esta premisa tiene fundamento. No sería difícil encontrar dos pueblos europeos que fueran más parecidos entre sí, de lo que son los gallegos respecto de los andaluces, los extremeños respecto de los aragoneses, o los catalanes respecto de los castellanos. Con dialectos distintos, en la Península se hablan cuatro lenguas bien diferenciadas: el euskera (filológicamente independiente), el español, el portugués (con su importante dialecto, el gallego) y el catalán (con su dialecto, el valenciano), lenguas emparentadas con el francés y el italiano dentro de la familia romance.

Junto a los catalanes, los vascos, con sus características bien definidas y su lengua única, son probablemente quienes tienen mayores reivindicaciones de autonomía. En los últimos años, los estudios vascos y un movimiento nacional vasco han experimentado un progreso considerable, y resulta significativo que, tres días después de la proclamación del Estado catalán en Madrid, se intentara proclamar un Estado vasco bajo la famosa encina de Guernica, ciudad que fue sede del Parlamento Vasco. Sin embargo, ante la oposición de militares y policías, sus promotores no siguieron adelante. Los vascos, aunque relativamente pocos, son un pueblo decidido, dispuesto a esforzarse para alcanzar sus aspiraciones y su pueblo.

Normalmente, por País Vasco se entiende las cuatro provincias de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra, aunque es dudoso que esta última, la más aislada y rural de las cuatro, desee participar de la autonomía vasca; su situación es similar a la de las Islas Baleares, cuyos habitantes tienen las mayores afinidades con los catalanes, pero parecen preferir ser gobernados desde Madrid. Aunque el movimiento por la autonomía vasca se desarrolló en gran medida gracias a un renovado interés por la lengua vasca, su rasgo distintivo principal reside en su postura ante la cuestión religiosa. Los vascos son fervientemente católicos; fueron los diputados vascos quienes se retiraron de las Cortes en protesta contra los artículos anticlericales de la Constitución, y el País Vasco sufrió más que ninguna otra región la represión generalizada de la prensa tradicionalista por parte de Azaña. En consecuencia, el primer borrador de su estatuto de autonomía, que otorgaba el control religioso al Gobierno Central, fue vehementemente rechazado por algunos ayuntamientos, especialmente por los de Guipúzcoa, que votaron a favor de un Concordato independiente. Esto, junto con la tibieza de los navarros, constituyó un claro obstáculo. En el debate del primer borrador del Estatuto en Pamplona, en junio de 1932, 123 delegados navarros votaron a favor y 109 en contra, mientras que entre los demás delegados la mayoría fue de 245 a 14. Excluida así Navarra por su propio acto, los

135 Op. cit., p. 19.

136 Ibid.

ayuntamientos de las otras tres provincias aprobaron el Estatuto con una unanimidad casi total¹³⁷, y, en noviembre siguiente, los plebiscitos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava confirmaron esta decisión, con el 87%, el 89% y el 50% de los electores, respectivamente, votando a favor¹³⁸. El Estatuto pasó entonces a las Cortes, pero las demoras parlamentarias, sumadas a las representaciones de la minoría alavesa, lo mantuvieron en comisión hasta que la dimisión del Gobierno hizo inevitable un nuevo aplazamiento.

Galicia, en el extremo noroeste de España, es tierra de agricultores y marineros, de buenos criados y malos amos, de soñadores y poetas. Los gallegos bien podrían encontrar su lugar en una Península Federalista y alcanzar una mayor prosperidad que la actual, pero es difícil imaginar que, bajo una constitución unitaria, logren un gran éxito en materia de autonomía. Sin embargo, muchos de ellos, principalmente por razones económicas, la anhelan fervientemente. Todo aquel que haya viajado por estas provincias noroccidentales conoce su aislamiento. La Coruña y Vigo son dos de los principales puertos de España, pero las comunicaciones que los conectan son terriblemente ineficientes. Mientras que en el resto de España hay un kilómetro de ferrocarril por cada 1.330 habitantes, en Galicia la proporción es de un kilómetro por cada 3.660 habitantes. No existe una línea directa de Pontevedra a La Coruña ni de Pontevedra a Lugo, y el tren ligero que une la mundialmente famosa Santiago con su desembocadura natural en la costa, Villagarcía, debe ser uno de los peores del país. Estas y otras desventajas las han soportado los gallegos con excesiva paciencia. Pero, con la llegada de la República, el movimiento autonomista, con unos cuarenta años de existencia, tuvo el valor de mirar a Madrid a la cara y preparar su proyecto de Estatuto. Al principio, el progreso fue lento, principalmente debido a la dificultad de fijar la sede del propuesto gobierno autónomo. La Coruña, principal puerto y ciudad con una larga historia de independencia, probablemente tenía la mejor legitimidad. Santiago la cuestionaba desde el punto de vista tradicional, y Orense llevaba tiempo siendo la sede del movimiento galleguista. En diciembre de 1932, el proyecto se presentó a los ayuntamientos y fue aprobado por la mayoría necesaria. Antes de que se pudiera dar el siguiente paso, cayó el Gobierno central y, con él, tanto para Galicia como para el País Vasco, se esfumó toda esperanza de progreso inmediato.

Ninguna otra región de España es probable que presione por la autonomía bajo la Constitución vigente, aunque en varias existen organizaciones autonomistas que los federalistas ven con simpatía. Cada uno de los pueblos de la península ibérica, afirman los federalistas, tiene derecho a la autonomía; quienes no la exijan la aceptarán cuando se les ofrezca; y el resto, cuya conciencia nacional se ha visto sofocada por una centralización excesiva, la aceptará en pocos años. No todos los promotores de la idea usarían exactamente ese lenguaje, pero es típico tanto de los más insistentes como de los más moderados.

En su forma más extrema, el federalismo pretende crear catorce estados independientes, pero la mayoría lo considera una mera ensoñación. El plan más viable de una unión de unos cuatro estados federaría, presumiblemente, Cataluña, el País Vasco, Galicia y el resto de España; esta última, y con mucho la mayor de estas divisiones, estaría unida por el hecho de que el idioma que se habla en casi todo su territorio es el castellano. Las Islas Baleares bien podrían unirse a Cataluña, aunque por el momento no parecen tener aspiraciones hacia ese proyecto. La posición de Valencia, que no está exenta de tales aspiraciones, genera muchas dudas. Poco después de la proclamación de la Generalitat, los nacionalistas valencianos enviaron una declaración de adhesión y emitieron un comunicado exigiendo la formación de un estado aliado pero independiente que incorporara las tres provincias levantinas de Valencia, Castellón y Alicante. Pero el nacionalismo valenciano cuenta con relativamente pocos adeptos, y los intentos de elaborar un Estatuto sólo tienen la ventaja, desde el punto de vista de los agitadores, de mantener la cuestión en la opinión pública. La esperanza del movimiento reside en sus líderes más jóvenes, quienes comprenden que, por el momento, las

137 B.S.S. 1933, Vol. X, p. 187.

138 B.S.S. 1934, Vol. XI, p. 30.

provincias de Castellón y Alicante son indiferentes, o incluso hostiles, y que debe transcurrir un tiempo antes de que la ciudad y la provincia de Valencia puedan convencerlas. Si bien el valenciano guarda similitud con el catalán, las posiciones de Cataluña y Valencia son muy diferentes. Dos catalanes, al encontrarse como desconocidos, pueden saludarse en castellano, pero en sesenta segundos estarán hablando su propio idioma. Dos valencianos, en cambio, pueden conversar en castellano durante todo el día.

Andalucía, asimismo, en caso de que triunfe el federalismo, bien podría, dadas sus dificultades agrarias, exigir y obtener cierto grado de autonomía. De hecho, se organizó una Asamblea Regional en Córdoba en febrero de 1933 para debatir el tema, pero la fuerte oposición y la retirada de muchos delegados impidieron cualquier avance.¹³⁹ En la propia Andalucía, pocos toman en serio el Estatuto. Existen minorías autonomistas activas tanto en Mallorca como en Aragón, si bien es significativo que gran parte del boicot a los productos catalanes durante la agitación antiseparatista de 1932 surgiera en esta última región.

Las ideas e ideales de los federalistas, como ya se ha insinuado, son numerosos, pero los párrafos anteriores representan las líneas que la mayoría de ellos preferiría. Cabe añadir que la teoría federal establece que las regiones incapaces, tras un análisis exhaustivo, de sentir la vitalidad de la vida nacional en su interior, se convertirán en territorios bajo el gobierno central de la «Iberia Federal», hasta que deseen la autonomía.

Quienes tachan la idea federal de utópica no deben olvidar que es prácticamente tan antigua como la tradición republicana en España. Tras la destitución de Isabel II en 1868, las Cortes Constituyentes, reunidas para determinar el futuro de la nación, contaban con una minoría republicana casi totalmente federalista. En 1873, cuando se formó la Primera República Española, la Asamblea Constituyente era marcadamente federalista, al igual que la Constitución que redactó y que, sin embargo, no pudo aplicar. Esta proponía dividir España y sus colonias en no menos de diecisiete Estados, dividiendo Andalucía y Castilla en dos partes cada una, separando Navarra de las otras tres provincias vascas, y aislando otras partes de la Península, como Extremadura, Murcia y las Islas Baleares, como entidades autónomas. Parece improbable que tal federación pudiera llegar a existir. Si así fuera, lo más probable es que tuviera una existencia breve y convulsa, y que la división condujera a un rápido retorno a la centralización total y, posiblemente, al establecimiento de un Estado totalitario.

Pero debemos abandonar esta interesante, aunque algo académica, cuestión y retomar nuestra narrativa principal. En el fondo, los obstáculos al federalismo son psicológicos. El ejemplo que algunos españoles dan de su éxito —el de Estados Unidos— puede volverse fácilmente en su contra. Los norteamericanos tienen un talento innato para la cooperación, y algunos de ellos, completamente ineficaces individualmente, producen un excelente trabajo en equipo. Los españoles, en cambio, tienen una marcada inclinación por el individualismo, y cuando intentan cooperar, lo hacen mal o fracasan por completo. Hasta que no cambien su naturaleza, como es posible que ocurra gradualmente a lo largo de los siglos con las cambiantes condiciones de la vida europea, es inútil suponer que sean capaces de un gobierno federal, y por esa razón, sus más fervientes defensores confían en que nunca se verán tentados a experimentarlo.

139 *B.S.S.*, 1933, Vol. X, pp. 69–70.

III. AGOSTO-NOVIEMBRE DE 1932. **Revueltas militares en Madrid y Sevilla. Suspensión de la** **prensa y purga de la función pública. Las elecciones catalanas**

Mientras las Cortes aún estaban en sesión —menos de un mes antes de la aprobación del Estatuto de Cataluña y de la Ley Agraria, y de que la Cámara obtuviera apenas tres semanas de vacaciones— estalló en Madrid una nueva y alarmante revuelta, de un carácter militarista más bien anticuado, y otra, casi simultáneamente, en Sevilla. Cabe señalar que las revueltas, en España como en otros lugares, nunca se producen según un calendario: se pronostican continuamente para el Día del Trabajo, el aniversario de la Dictadura o el día siguiente a unas elecciones generales, y esos días transcurren con total tranquilidad. Lo contrario también es cierto. Sin duda, fue una gran insensibilidad por parte de los rebeldes actuar en pleno verano español, cuando todo el mundo dormía o estaba de vacaciones y hacía demasiado calor como para interesarse debidamente por los acontecimientos.

Es indudable que ambos levantamientos estaban relacionados entre sí, pero no se confirmó que se planearan con el mismo objetivo. La revuelta de Madrid fue francamente monárquica: el primer indicio de un resurgimiento violento del monarquismo, y su rápida represión, al no generar una respuesta popular significativa, debió de ser un duro golpe para las aspiraciones alfonsistas. La revuelta de Sevilla pretendía atacar, no a la República en sí, sino la interpretación que el Gobierno de turno daba a los principios republicanos. No cabe duda de que, incluso en los inicios del Gobierno, un creciente descontento se hacía sentir entre sus antiguos partidarios. Una breve frase cargada de sentimiento, «¡No es esto!», que se dice que fue utilizada por primera vez por el eminente filósofo José Ortega y Gasset, era entonces el lema de los moderados, así como de aquellos cuyas simpatías se inclinaban hacia la derecha. Y es muy posible que los descontentos de Sevilla no desearan más que una purga de las Cortes y del Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los observadores creían que, de haber triunfado ambas revueltas, sus líderes habrían unido fuerzas de inmediato e intentado gobernar el país.

En Madrid, la revuelta estalló en la madrugada del 10 de agosto. Organizada por aristócratas y oficiales retirados del ejército, su primer objetivo fue la toma de la Oficina General de Correos, un edificio de aspecto catedralicio situado en la Plaza de Cibeles, en pleno centro del Madrid moderno. Para su gran sorpresa, los rebeldes se toparon con una tenaz resistencia por parte de la población civil, a la que intentaron intimidar, y antes de que pudieran recuperarse, se vieron enfrentados a un considerable contingente de policías y soldados leales que habían sido enviados de urgencia al lugar de los hechos. Se produjeron enfrentamientos en la calle de Alcalá, que atraviesa la plaza, en una de cuyas esquinas se encuentra la Oficina de Correos, pero el resultado nunca estuvo en duda y en pocas horas todo peligro para el régimen había desaparecido.

En Sevilla, la revuelta fue más grave. Su líder no era otro que el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, conocido popularmente como el «León del Rif», quien había figurado prominentemente en las noticias durante las tragedias de los pueblos del invierno anterior y era conocido por su profunda desilusión con los resultados del republicanismo. Al parecer, el general había planeado observar los acontecimientos en Madrid y, cuando considerara que había llegado el momento oportuno para atacar, viajar a toda prisa a Sevilla, publicar un manifiesto describiendo sus objetivos y protestando su lealtad al republicanismo, y proclamarse capitán general. Una vez llevado a cabo su programa, el movimiento inicialmente parecía destinado a causar un considerable derramamiento de sangre. Estallaron enfrentamientos por toda la ciudad, no sólo entre las tropas del general Sanjurjo y las fuerzas del orden, sino también entre extremistas de derecha e izquierda, estos últimos viendo en ello una oportunidad providencial para saldar viejas cuentas. Así pues, incendiaron tres clubes, varias mansiones aristocráticas y las oficinas sevillanas del periódico monárquico *ABC*, que publicaba una edición especial diaria para Andalucía. La revuelta, por deplorables que fueran sus consecuencias para la vida y la propiedad, sirvió para frenar el avance de

los rebeldes y, dado que la Guardia Civil se mantuvo mayoritariamente leal, los refuerzos pronto decidieron el desenlace de la rebelión. Hubo un gran número de detenciones, y el general Sanjurjo, que se dirigía a toda velocidad hacia la costa, fue capturado de forma bastante ignominiosa en la carretera por un policía. Desafortunadamente, las llamas encendidas por los rebeldes sevillanos se extendieron por Andalucía; en todas las grandes ciudades de la región se propagaron las protestas socialistas y sindicalistas; hubo numerosos disturbios; y en Granada, donde la situación era particularmente tensa, la hermosa iglesia de San Nicolás, en el Albaicín, quedó destruida por el fuego.

La pronta y decidida actuación del Gobierno hizo que se le valorara mejor, y Azaña recibió, con toda justicia, numerosas felicitaciones y muestras de confianza. En las Cortes habló extensamente y con la mayor franqueza, con ese tono flemático e impasible que puede adoptar a voluntad, y sus oyentes sintieron, no por primera vez, que se trataba de un hombre plenamente capaz de dirigir el destino del país. El Gobierno, aseguró a la Cámara, había estado al tanto de la revuelta madrileña con mucha antelación, y sofocar el levantamiento sevillano había sido un juego de niños. La buena impresión que causó en las Cortes se intensificó en el juicio de los principales presos, que se celebró, dos semanas después, ante un tribunal civil en el Palacio de Justicia, donde los miembros del entonces Comité Revolucionario habían sido juzgados a finales de 1930. El Fiscal solicitó la pena de muerte para el general Sanjurjo y cadena perpetua para su hijo, su ayudante de campo y la mayoría de sus compañeros de prisión. La primera de estas sentencias fue concedida, pero la opinión pública rechazaba las ejecuciones, y en pocos días la lista de individuos y asociaciones que habían solicitado el indulto llenaba cuatro columnas de un periódico. Entre los solicitantes, cabe destacar, se encontraban la viuda de García Hernández y la madre de Galán, los dos oficiales fusilados tras la rebelión menos de dos años antes. El Gobierno no puso objeción alguna a la clemencia: aconsejó unánimemente al Presidente que concediera el indulto, y Sanjurjo padre (cuyo hijo había sido declarado inocente) fue condenado a cadena perpetua, pena que todos sabían que pronto concluiría.

Hasta aquí todo iba bien; pero en otros aspectos el Gobierno perdió terreno. Antes de que se celebrara el juicio, las Cortes, tras una sesión nocturna, aprobaron una ley para la confiscación de las tierras, casas y demás bienes de los que fueran declarados culpables. El artículo 44 de la Constitución de 1931 había legalizado dicho procedimiento y la fuerza del Gobierno no dejaba lugar a dudas sobre el resultado de la votación, pero tanto en las Cortes como en el campo se produjeron violentas protestas contra lo que, dadas las circunstancias, se consideró un exceso de severidad.

Sea cual sea la opinión al respecto, difícilmente caben diferencias de opinión sobre el trato que el Gobierno dio a la prensa. En tiempos de crisis, podría ser razonable suspender los periódicos de la oposición durante uno o dos días, pero la concepción que el Gobierno tenía de la libertad de prensa, por cuya contravención quienes ahora los apoyaban habían atacado con tanta vehemencia a Primo de Rivera, fue suspender ocho periódicos madrileños, entre ellos *ABC*, *El Debate* e *Informaciones*, por tiempo indefinido, junto con un gran número de publicaciones periódicas de las provincias. *El Debate* e *Informaciones* no pudieron publicarse hasta octubre, y, en cuanto a *ABC*, sus lectores empezaron a pensar que jamás volverían a verlo. Finalmente reapareció el último día de noviembre, tras un intervalo de ciento doce días, durante los cuales había pagado sueldos y salarios a casi mil empleados y había registrado una pérdida neta certificada de más de dos millones de pesetas. En estas circunstancias, cabía perdonarle una ligera fanfarronería, y la pluma de su editor ciertamente no había perdido su astucia durante tres meses y medio de inacción:

«Ni en tiempos de Calomarde —rezaba su editorial—, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera, jamás, durante los seis reinados y dos repúblicas de todos los gobiernos, se aplicó a una publicación periódica una sanción gubernamental tan severa, sin justificación legal alguna. Si bien se está dejando de lado la Constitución, que prohíbe la suspensión de publicaciones periódicas

salvo por sentencia firme de un tribunal competente, nuestro caso no se justifica ni siquiera por la Ley de Defensa de la República, pues esta faculta al Ministro de la Gobernación para suspender publicaciones periódicas únicamente por un período determinado, cuya duración debe fijarse al dictarse la sanción y viene determinada por las causas o motivos que la justifican. Nosotros, por nuestra parte, repudiamos la imposición de esta sanción, que no tiene precedentes en España.»¹⁴⁰

El resultado de tales medidas solo podía ser, en términos españoles, contraproducente. Aumentó el descontento que ya sentían moderados y conservadores; destruyó el efecto positivo que la prontitud y prudencia del Gobierno habían generado entre la población no política; y perjudicó enormemente la reputación de la República en el extranjero.

En septiembre, un intento fallido de los comunistas por promover su propia revolución incrementó aún más la población de las cárceles españolas, muchas de las cuales ya estaban casi abarrotadas. No todos los presos detenidos en agosto fueron juzgados con la misma celeridad que los cabecillas, y en la Prisión Modelo de Madrid, numerosos aristócratas encontraron alojamiento precario —¡y a su propio costo!— a la espera de su deportación, con juicio o sin él, en buques de guerra que los esperaban frente a Cádiz. A mediados de septiembre, el primer destacamento se dirigía a Villa Cisneros, en la insalubre costa del África Occidental Española, de donde volveremos a saber de ellos en breve.

A principios de otoño se produjo la purga más considerable de la Administración pública hasta la fecha, basada en la ya habitual «incompatibilidad con el régimen», un delito que no requiere de pruebas y que es imposible de refutar; una eventualidad de la que pocos podían considerarse plenamente a salvo. El proceso no había sido inventado por la República, pero generó inquietud e inseguridad, situaciones sumamente indeseables. Los despidos masivos incluyeron a más de cuarenta miembros del Servicio Diplomático, algunos por supuesta disidencia y otros por razones no especificadas. En noviembre, el tan esperado y tardíamente celebrado juicio de los principales responsables de la Dictadura de 1923-1930 resultó decepcionante, y el anuncio de las sentencias, que oscilaban entre seis años de exilio y veinticuatro años de prisión, fue recibido con escaso interés. La Dictadura pertenecía al lejano pasado de España; la cuestión crucial era qué haría con su futuro.

En noviembre, las Cortes recibieron un Presupuesto. Esto no debería parecer un hecho inusual, pero resultó ser el último Presupuesto de la historia, ya que los gobiernos posteriores optaron por la prórroga. Considerando cómo se había ido acumulando el déficit durante la Dictadura —con un aumento constante de 417 millones de pesetas en 1925 a 924 millones cuatro años después—, las cifras no eran alarmantes. El primer año de la República redujo el déficit a 576 millones y el segundo lo disminuyó en 100 millones más. No era tanto el dinero lo que inquietaba, sino lo que pensaba la gente.

Si bien la mayor parte de España durante este período se encontraba inquieta y temerosa, Cataluña permanecía tranquila y satisfecha. Una vez promulgado el Estatuto de Autonomía, la reconstrucción, a pesar de los inevitables retrasos, avanzó a buen ritmo. Las elecciones al nuevo Parlamento de Cataluña, celebradas el 20 de noviembre, otorgaron, como se preveía, una enorme mayoría a la Esquerra, que en muchos lugares obtuvo más del doble de votos que la moderada Lliga. El Partido Radical, que ya se estaba volviendo tan impopular en Cataluña que su desaparición era solo cuestión de tiempo, obtuvo un resultado muy discreto. Tras quedar en cabeza en las elecciones por Barcelona, el veterano líder de Esquerra Macià fue elegido presidente de un Gobierno de siete miembros, que comenzó a trabajar poco antes de Navidad, dispuesto a hacer frente a los numerosos problemas que planteaba la transferencia gradual de las competencias concedidas por el Estatuto. Cabe destacar que el Presidente del Parlamento era un personaje singular del que hablaremos más en el próximo capítulo: Lluís Companys, héroe de Barcelona el 14 de abril, y ahora exalcalde de la ciudad.

140 ABC, 30 de noviembre de 1932.

IV. OCTUBRE DE 1932-MAYO DE 1933. **La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas.** **Logros y política de la República en materia de educación**

Cabría suponer que, tras la separación de la Iglesia y el Estado y las numerosas concesiones y gestos hacia el anticlericalismo, el Gobierno se limitaría a los asuntos seculares. Sin embargo, aún quedaba por aprobar la «Ley de Confesiones y Congregaciones», prefigurada en los artículos 26 y 27 de la Constitución, que se convirtió en objeto de controversia desde su primera publicación, como borrador, en octubre de 1932, hasta su promulgación siete meses después.

Una parte considerable de la Ley, tal como fue aprobada, simplemente confirmaba las garantías ya consagradas en la Constitución y reiteraba las normas establecidas en aras de la igualdad religiosa. Las congregaciones religiosas, por ejemplo, podían celebrar cultos dentro de sus propios edificios, pero no fuera de ellos, salvo con autorización especial. Cualquier aviso emitido por ellas estaría sujeto a las mismas normas policiales que cualquier otro aviso. Tendrían libertad para nombrar a sus propios funcionarios, siempre que fueran españoles, sujetos al veto del Estado. Sus bienes pertenecen al Estado, «bajo cuya protección —expresión irónica— disponen de ellos. Pueden «fundar y dirigir establecimientos para la instrucción en sus respectivas doctrinas y para la formación de sus ministros», pero el Estado, mediante inspección, velará por que ninguno de ellos «enseñe doctrinas que amenacen la seguridad de la República».

Esto es solo una indicación de la naturaleza de la Ley en sus primeras secciones, y de ninguna manera un intento de resumirla. La última y más importante parte tenía como objetivo restringir la libertad de las Órdenes religiosas, un objetivo logrado mediante una serie de regulaciones abusivas que intensificaron la oposición de los católicos sin aumentar notablemente la satisfacción de los anticlericales. Se prohibió a las Órdenes participar en cualquier tipo de actividad política, siendo la pena por desobediencia la disolución a discreción de las Cortes. Todas las Órdenes debían ser reconocidas como asociaciones y presentar copias de sus estatutos, una declaración de los «fines» de cada una de sus «casas o residencias» y un inventario de sus posesiones. Cada casa debía registrar el nombre de su Superior, necesariamente español, y los nombres de sus demás miembros, de los cuales al menos dos tercios debían ser españoles, junto con los detalles de los bienes que cada miembro había aportado a la Orden. Cada casa religiosa debía presentar sus libros y su balance anual para su inspección. Si algún religioso o novicio desea abandonar su Orden, el Estado apoyará su intención y exigirá a la Orden que le devuelva los bienes que haya depositado, menos una compensación razonable en función del tiempo que haya permanecido en ella.

Ninguna Orden, continúa el texto de la Ley, podrá dedicarse al comercio, la industria ni (salvo lo necesario para su subsistencia) a la agricultura. Ninguna Orden podrá impartir clases, salvo a sus propios miembros; la inspección estatal velará por que las Órdenes no mantengan escuelas privadas ni impartan clases en escuelas gestionadas por laicos. Toda actividad docente por parte de miembros de Órdenes religiosas deberá cesar el 1 de octubre de 1933, excepto en las escuelas primarias, para las que el plazo se prorroga hasta el 31 de diciembre.

Incluso entre los anticlericales, existían dos opiniones sobre la conveniencia de aprobar una medida educativa tan drástica, o al menos de aplicarla con tanta rapidez. La República llevaba dieciocho meses en vigor y aún había miles de niños sin acceso a la educación por falta de centros escolares adecuados. Muchos pedagogos que priorizaban la educación sobre el anticlericalismo consideraban imposible atender adecuadamente a un número adicional de alumnos de primaria, estimado por el Ministro de Instrucción en 350.000 y por la prensa católica en el doble¹⁴¹, y que sería mejor introducir el cambio de forma mucho más gradual. Otros, sin embargo, argumentaban que durante un período de transición podría producirse una reacción favorable a un gobierno conservador y que, en ese caso, la ley podría no llegar a entrar en vigor.

141 *The Times*, 6 de junio de 1933; *B.S.S.*, 1933, Vol. X, p. 179.

Dediquemos un momento a repasar lo que la República había hecho y se proponía hacer por la educación en general. Cuando Marcelino Domingo, un antiguo maestro de escuela, se convirtió en el primer ministro de Instrucción de la República, se encontró ante problemas demasiado complejos para una solución inmediata, incluso si el ataque a estos problemas no se hubiera complicado por consideraciones políticas. Las universidades eran demasiado numerosas; al carecer de autonomía, estaban a merced de cualquier viento político; sus planes de estudio a menudo eran inadecuados; sus profesores, generalmente elegidos por oposición (una especie de examen oral), comenzaban con un salario mínimo de 5.000 pesetas (nominalmente 200 libras esterlinas anuales) y a menudo apenas ascendían; la relación de los estudiantes con los profesores y con la propia universidad dejaba mucho que desear. Las escuelas secundarias eran demasiado escasas: muchas ciudades grandes contaban con un solo instituto público. En estos, las clases eran demasiado numerosas; los salarios de los profesores, demasiado bajos. El plan de estudios, que, desde antes de la Dictadura, había sido modificado continuamente, era demasiado amplio y superficial. Para complementar sus salarios, los maestros se dedicaban a un negocio ilícito: la venta de libros de texto de mala calidad que ellos mismos escribían y obligaban a sus alumnos a comprar. Las escuelas primarias eran las peores. A pesar de los esfuerzos de Primo de Rivera, sólo en Madrid había 50.000 niños para quienes no había plazas en las escuelas existentes.¹⁴² Es fácil imaginar la situación en el país y cómo habría sido de no ser por la labor de las Órdenes religiosas.

Aunque en realidad se ha avanzado poco en la reforma universitaria, Marcelino Domingo había previsto cambios trascendentales en los tres niveles de enseñanza y, desde el principio, se propuso crear la escuela única: el único camino de aprendizaje que conduce desde la escuela primaria hasta la universidad; en otras palabras, establecer el escalafón educativo. Lo primero y principal era, obviamente, sentar las bases de la reforma construyendo más escuelas primarias, tarea que emprendió con gran determinación. En tres meses, autorizó la creación de 27.000 nuevas escuelas, de las cuales más de 3.000 ya estaban terminadas y 7.000 debían finalizarse en el plazo de un año.¹⁴³ La formación de los docentes resultó más complicada, pero para las vacaciones de verano de 1931 ya se estaban impartiendo cursos intensivos de pedagogía y, para septiembre del año siguiente, se había formado a un gran número de maestros.

En 1932 se lograron nuevos avances. Se abrieron unas 2.500 escuelas más, lo que elevó el total a casi 10.000. Los salarios de los maestros de primaria se habían incrementado hasta un mínimo de 3.000 pesetas (equivalentes a 120 libras esterlinas), y se habían introducido mejoras en la escala de los aumentos salariales. Se aprobó una ley que obligaba a los municipios a contribuir al coste de las nuevas escuelas construidas en sus jurisdicciones. Las escuelas itinerantes, o «misiones pedagógicas» —para usar el nombre español, algo repulsivo, de un proyecto tan atractivo—, se habían enviado a las zonas rurales más remotas para acercar a sus habitantes a la música, la pintura, la historia, la literatura y la civilización contemporánea. A finales de 1932, Fernando de los Ríos, sucesor de Marcelino Domingo como Ministro de Instrucción, resumió estos y otros avances. Pudo destacar los excelentes colegios de secundaria que se habían construido (o, en ocasiones, confiscado a los jesuitas) en Madrid y los 70.000 alumnos que recibían educación secundaria, frente a los 20.000 de tres años antes. En cuanto a la educación universitaria, confesó, poco que destacar. La construcción de la Ciudad Universitaria en Madrid avanzaba a buen ritmo, pero un ministro republicano difícilmente podía decir mucho al respecto.¹⁴⁴ Las penosas huelgas estudiantiles continuaron, junto con los viejos abusos de los profesores, y solo en Barcelona, donde la Generalitat no había tardado en reclamarla, existía autonomía universitaria. Se había intentado, como también se había hecho durante la Dictadura, reducir el número de universidades, pero, según declaró De los

142 *The Times Educational Supplement*, 6 de junio de 1931.

143 *El Sol*, 28 de julio de 1931.

144 Cf. *B.S.S.*, 1933, Vol. X, p. 69.

Ríos, en cuanto propuso la supresión de dos de ellas, la oposición fue tan grande que abandonó el proyecto por considerarlo inviable.

Aun así, considerando la situación en su conjunto, y sin olvidar reformas secundarias como el fortalecimiento de la Junta para Ampliación de Estudios, la creación de Escuelas de Estudios Árabes y la fundación en Santander de la «Universidad Internacional de Verano», de nombre un tanto pretencioso, la República merecía ser felicitada por sus logros. En el primer año del siglo XX, el presupuesto destinado a educación había sido de 50.000 pesetas; en 1932, se multiplicó por novecientos, es decir, 45.000.000 de pesetas.

Cuando, en mayo de 1933, el Gobierno se enfrentó a la Oposición por las cláusulas educativas de la Ley de Confesiones y Congregaciones, el Ministro de Instrucción restó importancia a las desventajas de cerrar tantas escuelas tan rápidamente. Para la completa integración de los niños en las escuelas primarias de las Órdenes, afirmó, sería necesario crear 7.000 escuelas nuevas, de las cuales ya se habían previsto 4.000, y había tiempo y dinero suficientes para el resto. Los 17.000 alumnos de secundaria de las Órdenes también podrían integrarse en octubre, y quinientos nuevos profesores de secundaria estaban recibiendo formación intensiva durante el verano.

Pero muchos, además de los diputados de la Oposición, no compartían el optimismo del ministro De los Ríos. Si el presupuesto anual de Educación, preguntó *The Times*, no va a superar el millón de libras esterlinas, ¿de dónde saldrán todos los nuevos edificios? ¿Se propone confiscar las escuelas de las Órdenes? Esto no queda claro. Tampoco lo está cómo se preparará a 7.000 nuevos maestros en seis meses.¹⁴⁵

«Una solución más pausada habría bastado», concluye este periodista, y desde el punto de vista educativo, no cabe duda de que una solución más pausada habría sido más eficaz. Pero, al final, el cambio se produjo con menos violencia de la prevista. Pues en noviembre, apenas un mes antes de que cesara la instrucción elemental impartida por las Órdenes, el Gobierno cayó, y su sucesor, de carácter menos avanzado, permitió que la situación se mantuviera. Si para bien o para mal, dado que las reformas educativas de otro tipo también se ralentizaron considerablemente, es una cuestión sobre la que bien puede existir diferencia de opiniones.

V. ENERO-MAYO DE 1933.

Creciente impopularidad del Gobierno. Casas Viejas. Las elecciones municipales y posteriores.

Los primeros días de 1933, aunque al principio no fue evidente, vieron cómo se agudizaba la impopularidad del Gobierno y comenzaba su caída. En la segunda semana del año, la atención se desvió de la política debido a una serie de revueltas anarquistas: el tercer levantamiento armado contra la República en doce meses. Estas se extendieron mucho más que ninguna otra de su tipo, abarcando Madrid, Barcelona, Lérida, Valencia y Sevilla, pero todas fueron sofocadas en cuarenta y ocho horas con una facilidad alentadora. Unos días antes, había llegado a España la noticia de la fuga de Villa Cisneros de veintinueve de los revolucionarios de agosto. Durante meses habían circulado historias (no todas procedentes de fuentes imparciales) sobre las indescriptibles penurias que estaban sufriendo, y la noticia de que los fugitivos, ahora a salvo en Portugal, habían optado por emprender un viaje de casi dos mil millas en un barco de cien toneladas en lugar de continuar su vida en África Occidental o regresar a España para el juicio que aún esperaban, volvió a poner violentas acusaciones de tiranía en boca de los enemigos del Gobierno.

Pero el acontecimiento que, en mayor grado que ningún otro, provocó la caída del Gobierno y un cambio de rumbo completo, aunque no permanente, en la política republicana, fue la revuelta de Casas Viejas. El nombre poco distinguido de este pequeño pueblo, situado a diecinueve kilómetros

¹⁴⁵ *The Times*, 6 de julio de 1933.

al sur de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, era a finales de 1932 tan desconocido para el español medio como lo había sido Castilblanco doce meses antes. Sin embargo, en pocas semanas, el nombre de «Casas Viejas», en lugar de designar simplemente una aldea de mil habitantes, significó el más implacable odio hacia un Gobierno que (según sus enemigos) se había caracterizado desde el principio hasta el final por ser un gobierno arbitrario, de tal dureza y tiranía que ya no podía continuar.

Los hechos, tal como fueron inicialmente relatados en la prensa madrileña, sugieren que se trató de uno de los disturbios locales, lamentablemente frecuentes durante la República, provocados por la violenta influencia de ideas subversivas sobre las mentes sencillas de campesinos incultos y sin experiencia. Los habitantes de Casas Viejas viven en los límites de una finca de 40.000 hectáreas propiedad del Duque de Medinaceli, que estaba a punto de ser confiscada y distribuida entre el campesinado.¹⁴⁶ En la madrugada del 11 de enero, un grupo de rebeldes, no todos habitantes del pueblo, se apoderó del centro anarcosindicalista local, proclamó un régimen comunista, intimidó al alcalde y exigió la rendición de la Guardia Civil.

«Moriré por la República —respondió el sargento— pero jamás me rendiré», y pidió refuerzos con urgencia a Medina Sidonia y Cádiz.

Mientras tanto, los rebeldes, que, como demostraron las investigaciones posteriores, habían acumulado grandes cantidades de pistolas, municiones y explosivos, abrieron fuego contra la Guardia Civil, con tal efectividad que, en cuestión de minutos, tres miembros de la pequeña fuerza resultaron mortalmente heridos. Poco después del mediodía, refuerzos de la Guardia Civil y tropas de choque hicieron retroceder a los rebeldes a una posición fuera y sobre el pueblo, arriaron la bandera anarquista que había sido izada y comenzaron a registrar el pueblo casa por casa. Sólo una casa les resistió: la de un rebelde apodado Seisdedos, cuya hija Libertaria le hacía de pistolera mientras disparaba. Allí, las tropas leales sufrieron grandes pérdidas. Finalmente, durante la noche, tuvieron que pedir bombas y una ametralladora, que, incluso entonces, dudaron en usar hasta que recibieron un telegrama del Ministro de la Gobernación autorizándolos a arrasarla. Acto seguido, la bombardearon sin piedad, la empaparon con gasolina y le prendieron fuego: Seisdedos, su hija y otras seis personas perecieron.

A las siete de la mañana del día siguiente, tras el incendio de varias casas y la muerte de más de veinte personas, los rebeldes se rindieron. Probablemente nunca se sabrá con exactitud qué ocurrió en las últimas horas de la lucha. A pesar de los esfuerzos posteriores por obtener y analizar pruebas, los testimonios de los testigos fueron tan contradictorios que no se pudo reconstruir con claridad lo sucedido. Lo que más se supo fue que los comandantes de las fuerzas leales habían recibido órdenes drásticas de Madrid; que las tropas, reducidas en número, fatigadas por la falta de sueño y exasperadas por las cuantiosas bajas, las interpretaron al pie de la letra; y que algunos guardias y tropas de asalto protestaron vehementemente contra las órdenes recibidas, calificándolas de bárbaras e inhumanas. El capitán Rojas, que había comandado las tropas en el lugar, fue objeto de duras críticas, y cuando, dieciséis meses después, fue llevado a juicio, se le imputó la muerte de catorce personas y recibió una severa condena.

La indignación suscitada por estos terribles sucesos se manifestó en las Cortes desde el primer momento¹⁴⁷, cuyos miembros se reunieron a principios de febrero tras un receso más prolongado que cualquiera de los anteriores. La actitud del Presidente de Gobierno fue, en un principio, de beligerancia: No cabía esperar que el Gobierno se ocupara de sofocar «la más mínima chispa revolucionaria en el pueblo español más pequeño». Pero las críticas a las que tuvo que hacer frente pronto se volvieron demasiado detalladas y contundentes como para poder rebatirlas con un simple discurso, sobre todo porque, desde hacía algún tiempo, el Sr. Lerroux y sus seguidores radicales se

146 *The Times*, 14 de enero de 1933. El siguiente relato se cita del informe de la Comisión Parlamentaria, publicado íntegramente en *El Sol* y otros periódicos madrileños el 12 de marzo de 1933.

147 Véase [Revolución y represión en Casas Viejas. Debate en las Cortes](#). (Clásicos de Historia)

habían vuelto cada vez más problemáticos y todo apuntaba a que la coalición de izquierda se desintegraría en breve. Finalmente, el Sr. Azaña tuvo que aceptar un debate de dos días sobre Casas Viejas y plantear la cuestión como una moción de confianza.¹⁴⁸

Los días del debate, irónicamente, coincidieron con los del Carnaval. La Cámara, por una vez, estaba abarrotada; la pasión se desbordó y se produjeron numerosos escándalos. Miembros de casi todos los partidos políticos censuraron al Gobierno. Uno de los héroes menores de Jaca, Sediles, estableció un paralelismo, en medio de las protestas de Azaña y sus partidarios, entre Jaca y Casas Viejas. Maura, con la autoridad de un exministro del Interior, describió el asunto como una mancha imborrable en el historial del Gobierno. Martínez Barrio, quien posteriormente perpetró la famosa condena del régimen de Azaña al caracterizarlo como un régimen de «barro, sangre y lágrimas», lanzó un ataque personal contra la actitud del Presidente de Gobierno. Azaña se mostró firme ante el asunto, pero posiblemente fue la batalla parlamentaria más dura en la que se había visto envuelto hasta entonces. Ganó por votación nominal, pero sólo por una estrecha mayoría de cuarenta y tres votos.

En España, por entonces, esta mayoría no podía considerarse definitiva. Tan sólo una semana después, los opositores más intransigentes del Gobierno presentaron una moción de censura que sirvió de pretexto para volver a sacar a relucir el asunto. Esta vez, el Presidente de Gobierno se comprometió a que se realizara una investigación oficial, y entonces su mayoría aumentó en veinte votos.

A mediados de marzo, la comisión investigadora enviada a Casas Viejas había regresado. Su informe ofrecía el relato más completo posible de todo el incidente y, además de dejar constancia de las opiniones ya reproducidas, censuró al Director General Menéndez, que ostentaba el mando supremo, por haber dado órdenes expresas de aplicar la *ley de fugas*¹⁴⁹ a todos los que causaran problemas. El Gobierno, sin embargo, lo exoneró, llegando a dictaminar a su favor que no se habían probado los hechos. El resultado de dicho informe era bastante obvio. El Director General, siguiendo la costumbre tan de moda, fue a prisión. En unas Cortes muy mermadas, tuvo lugar un debate casi lánguido que se prolongó durante varios días; y en una nueva votación, el voto a favor del Gobierno fue unánime o, para ser exactos, las cifras fueron de 210 a 1.

Pero, a pesar de este resultado, la credibilidad del Gobierno quedó mortalmente dañada, y todo el mundo lo sabía. «Muy feo», murmuraba la gente en la calle. Con esto quería decir: «Esta continua severidad y represión no puede continuar. Incluso a costa de frenar el progreso republicano, España necesita un cambio de líderes».

Al principio, el propio Gobierno fue incapaz de ver (o no quiso) lo que era evidente para cualquier observador externo. El barómetro que en 1933, como en 1931, reflejaba el sentir político del país eran las elecciones municipales. Ya en enero se anunció que el nuevo censo electoral estaba casi terminado, y se fijaron para abril las elecciones municipales —las primeras desde las que dieron paso a la República—. Estas, por supuesto, tendrían un carácter puramente político, y pronto quedó claro que el Sr. Azaña tenía grandes expectativas respecto a sus resultados. «Los partidos políticos que nos apoyan —declaró en febrero ante dos mil o más de sus seguidores—, irán al país preparados, si son derrotados, para asumir las consecuencias. Pero si no son derrotados, ¡entonces habrá consecuencias para otros!»¹⁵⁰

El invierno dio paso a la temprana primavera española y, salvo las habituales huelgas diarias por todo el país, acompañadas de disturbios, España estaba tranquila. Otro de los comités, que en ocasiones se formaban entre disidentes moderados, sobre las responsabilidades por los sucesos del

148 El debate parlamentario se prolongó al final durante dos meses, febrero y marzo. Se reproduce, tomado del *Diario de Sesiones*, en *Revolución y represión en Casas Viejas. Debate en las Cortes*. (Clásicos de Historia)

149 Término aplicado al procedimiento por el que las fuerzas del orden han sido acusadas con frecuencia en España: disparar a una persona con el pretexto de que intentaba escapar.

150 Cf. B.S.S., 1933, Vol. X, p. 118, y Manuel Azaña: *En el poder y en la oposición*, Vol. I, p. 368.

pasado, concluyó sus sesiones, y por los diversos papeles que habían desempeñado en las ejecuciones de Jaca, varios exoficiales del ejército recibieron diversas penas de prisión. Los presos arrestados en Castilblanco más de un año antes (pues los molinos de la República molían despacio) fueron juzgados y sentenciados, y los malhechores del agosto siguiente que no habían escapado de Villa Cisneros fueron llevados ante los tribunales; diecisiete de ellos, cabe mencionar, tras pasar seis meses en deportación, fueron absueltos. Los trágicos sucesos de Casas Viejas comenzaron a desvanecerse en el pasado; parecía que también habían pasado a la historia.

Entonces, a principios de abril, llegó un anuncio que demostraba que el Gobierno había temido poner a prueba el apoyo popular. Al fin y al cabo, se trataba de una opinión. Las «consecuencias» que Azaña había desafiado con tanta audacia —los votos de seis millones de mujeres—, un factor «desconocido», quizás, pero conjeturable con demasiada precisión, deberían esperar un poco más antes de que las afrontara. Había pocas esperanzas de que la izquierda volviera al poder; que ese día fatídico se pospusiera lo máximo posible.

Así pues, las elecciones municipales se aplazaron indefinidamente y se anunciaron elecciones parciales en su lugar, que se celebrarían en unos 2.500 distritos rurales que en 1931 habían elegido a monárquicos y que, como castigo, desde entonces habían estado privados de representación. La fecha fijada para este sondeo preliminar de opinión era el 23 de abril, y reinaba el temor de que los días intermedios se produjeran disturbios, pues ¿acaso el Viernes Santo —día festivo eclesiástico, aunque ya no oficial— no coincidía este año con el 14 de abril, Día de la República? Las banderas ondearían por doquier y los festejos y ceremonias estarían en pleno apogeo, ¿y no conduciría esto inevitablemente a enfrentamientos entre católicos y anticlericales?

Los temores carecían de fundamento. La Semana Santa, como tantas veces en el pasado, fue una semana de tregua, y ambas partes cedieron y recibieron libremente. Por un lado, las procesiones y pasos, incluso en Sevilla, permanecieron dentro de las iglesias en lugar de arriesgarse a provocar disturbios desfilando por las calles como de costumbre. Por otro lado, los actos más festivos previstos para la celebración del Día de la República se aplazaron hasta el sábado y el domingo, y, aunque resultaba extraño ver banderas a toda asta el Viernes Santo, hubo pocas otras muestras de júbilo. La opinión pública en España es tan profundamente católica que incluso entre los anticlericales las prácticas católicas se dan por sentadas; las fiestas de los santos mayores, por ejemplo, ya no son festivos oficiales, pero se celebran libremente como tales sin que nadie ponga objeción alguna. Precisamente en 1933, a pesar del permiso concedido a los teatros y cines de Madrid para permanecer abiertos el Jueves Santo y el Viernes Santo, solo once de los cincuenta y seis abrieron sus puertas, y cinco de ellos ofrecieron exclusivamente funciones religiosas.¹⁵¹

El primer domingo después de Pascua se celebraron las elecciones «parciales» y los resultados debieron confirmar los peores temores del Gobierno. Es cierto que demostraron que la declarada monarquía prácticamente había desaparecido, pero nadie había supuesto que la monarquía estuviera en juego. La pregunta era: «¿Debe el actual Gobierno permanecer o marcharse?». Y por una mayoría de dos a uno, la respuesta fue: «Marcharse». De los 16.000 escaños que se cubrieron, algo más de 5.000 fueron para los candidatos del Gobierno, unos cien menos para los partidos de derecha, y unos setecientos menos aún para la oposición de centro e izquierda.¹⁵²

Tan pronto como se reunieron las Cortes, los partidos de la oposición exigieron enérgicamente la dimisión del Gobierno, ya que la prueba que él mismo había propuesto había dado resultados desfavorables. Azaña optó una vez más por la beligerancia. ¿Qué eran esas elecciones, al fin y al cabo, para que afectaran la posición del Gobierno? Simplemente cubrir vacantes en circunscripciones rurales insignificantes y oscuras: «burgos podridos», en realidad¹⁵³. No tenía la menor intención de dimitir; había sido llamado al poder para construir una nueva España en torno a

151 Cf. *B.S.S.*, 1933, Vol. X, p. 123.

152 Los escaños restantes fueron para candidatos independientes. Para consultar las cifras, véase *B.S.S.*, 1933, vol. X, pág. 124.

la nueva Constitución y permanecería en el poder hasta que se hubieran votado todas las leyes complementarias a la Constitución.

Esta actitud, aunque quizás la única que le era posible, tuvo el desafortunado efecto de llevar a la coalición prácticamente a su fin. Antes de pronunciar el discurso que pronto se hizo tristemente célebre como el de los «burgos podridos», había conversado extensamente con el Presidente de la República, y a sus críticos les parecía improbable que existiera alguna esperanza de disolución por parte de este. Así pues, los radicales, que ya venían mostrando inquietud, se rebelaron abiertamente en el Parlamento, y los partidos de la oposición se unieron para formar un bloque abiertamente obstruccionista en las Cortes con la esperanza de exasperar al Gobierno hasta obligarlo a dimitir. Durante varias semanas reinó el caos. La Ley de Congregaciones, que avanzaba lentamente en la Cámara, se estancó noche tras noche mientras los obstruccionistas forzaban un debate político tras otro. El Presidente de Gobierno hizo constantes llamamientos a la concordia, y varios parlamentarios pacifistas presentaron sugerencias que podrían agilizar los asuntos públicos. Pero la oposición declaró que el bienestar público requería, ante todo, un nuevo gobierno, y se mantuvo firme en su postura.

Incluso mientras la batalla se libraba en las Cortes, el centro de atención se trasladó temporalmente al campo. Los disturbios sociales, debidos principalmente a los sindicalistas, se reanudaron en toda España. Barcelona quedó paralizada durante varios días por una huelga de tráfico; todos los centros sindicalistas y anarquistas fueron cerrados; y dos compañías de tropas de choque se desplegaron en la ciudad. Antes de que esto terminara, se inició una serie de huelgas generales de cuarenta y ocho horas en todo el país. Prácticamente todas las grandes ciudades se vieron afectadas —desde Zaragoza, Oviedo y La Coruña en el norte hasta Sevilla en el sur— y también muchas poblaciones más pequeñas. En Madrid, los disturbios se extendieron a la Universidad. Grupos de jóvenes autodenominados fascistas organizaron manifestaciones idénticas a las de los antifascistas en los últimos años de la Dictadura. Se produjeron disparos; varias personas resultaron heridas; y la mayor parte del alumnado se declaró en huelga en protesta. Durante mayo y junio, estos disturbios continuaron prácticamente sin tregua. Algunos creían que anunciaban la disolución de algo más que el Gobierno, pero la gran mayoría llevaba tiempo creyendo que la República estaba a salvo, simplemente porque no existía una alternativa viable. «¡Comunismo, jamás! ¡El Rey, no!» resumía la situación. Por un lado, la España católica no toleraría un sistema totalmente contrario a sus arraigadas tradiciones. Por otro lado, pocos podían soportar la idea de un Borbón de nuevo en el trono, con todas las recriminaciones y la venganza que implicaba no aprender ni olvidar nada. No había, pues, un temor serio a un cambio de régimen, pero sí una profunda depresión y la sensación de que, durante muchos años, España, luchando por ascender, estaba condenada a la inestabilidad y al conflicto, y que no existía una salida fácil a sus problemas que no la llevara de nuevo a la ruina.

VI. MAYO-NOVIEMBRE DE 1933.

El Presidente y la Ley de Congregaciones. El Tribunal de Garantías Constitucionales. Disolución de las Cortes Constituyentes

El 17 de mayo de 1933, tras una tramitación más ardua que la de cualquier otra medida gubernamental, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas fue aprobada por las Cortes por mayoría de 278 votos y enviada al Presidente para su firma.

En cuanto se supo de ello, la afable figura del Presidente se convirtió en el centro de atención por primera vez desde su elección. En los dieciocho meses transcurridos, había mantenido

153 La expresión tuvo gran repercusión en la prensa. Como ejemplo puede consultarse los artículos correspondientes a esos días de Wenceslao Fernández Flórez, en [*Columnas de la República 1931-1936*](#). (Clásicos de Historia)

numerosas consultas con sus ministros, visitado diversas partes del país, recibido delegaciones, pronunciado discursos, inaugurado escuelas y actuado como una figura decorativa complaciente, aunque no especialmente eficaz. Pero ahora se presentaba una dura prueba ineludible. Según la Constitución, estaba obligado a firmar la Ley o a afrontar las consecuencias de cometer un delito¹⁵⁴, lo que, como mínimo, le costaría su alto cargo. En el pasado, ante una cuestión similar, había seguido los dictados de su conciencia: ¿lo haría de nuevo?

Si esto era pedirle demasiado, argumentaban sus correligionarios católicos, disponía de quince días de plazo, transcurridos los cuales podría devolver la Ley a las Cortes para su reconsideración. Dado que la mayoría de dos tercios necesaria para su promulgación ya se había superado ampliamente, tal medida no reportaría grandes beneficios, salvo una leve demora. Sin embargo, podría tener un efecto moral valioso en el futuro, aunque, por otro lado, también podría provocar a los extremistas de izquierda. En definitiva, la disyuntiva parecía estar entre la promulgación y las consecuencias de la negativa.

Por regla general, el Presidente aprobaba las leyes que se le presentaban para su firma en uno o dos días, y cuando, al cabo de una semana, la Ley de Congregaciones seguía sin firmarse, la situación empezó a adquirir relevancia. Durante todo este periodo, se publicaron en la prensa conservadora protestas de todo tipo, procedentes de todos los rincones del país, y un número aún mayor se envió en privado al presidente. Al final de la semana, los obispos metropolitanos españoles emitieron una carta conjunta condenando la ley y otras medidas anticlericales del gobierno. Aun así, no hubo reacción: la situación comenzó a tornarse tensa, incluso dramática. Las esperanzas del partido clerical crecieron.

Pero el 2 de junio, el último día del plazo que le concedía la Constitución, Alcalá Zamora capituló. A pesar de una encíclica condenatoria del Vaticano, publicada al día siguiente, de la que podemos suponer que tenía conocimiento previo, prefirió conservar su cargo antes que hacer un segundo sacrificio. La derecha, que en su día había depositado grandes esperanzas en él, nunca lo perdonó del todo, y, aunque pronto los ofendería aún más profundamente, ya no contaban con su apoyo. La historia, sin embargo, no le reprochará esto, pues tras dos siglos de Borbones, la España que necesitaba era ante todo un presidente que actuara constitucionalmente, y al parecer lo encontró en el Sr. Alcalá Zamora.

Una semana después, por iniciativa del presidente, el Gobierno dimitió, y éste intentó encontrar otro primer ministro capaz de formar una nueva coalición. Pero la búsqueda fue infructuosa y, en pocos días, Azaña volvió al poder con un gabinete reorganizado, pero por lo demás prácticamente idéntico. Las oportunidades brindadas a otros líderes para formar gobierno habían aclarado la situación, y durante los tres meses que Azaña iba a permanecer en el cargo no hubo más obstáculos.

El principal logro de estos meses fue la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, de nombre algo grandilocuente, que podría describirse como un intento de suplir la creciente necesidad de un Senado u otra forma de segunda cámara. Su función era decidir si las leyes eran constitucionales o no; dirimir conflictos entre el Estado y las regiones autónomas; pronunciarse sobre cualquier presunta infracción de la Constitución por parte del Presidente, el Presidente de Gobierno y otros; y, entre muchas otras tareas, proteger a cualquier ciudadano cuyos derechos constitucionales hubieran sido vulnerados. El gran deseo de muchos era que este Tribunal fuera imparcial y apolítico: de sus veinticuatro miembros, quince serían elegidos por las distintas regiones de España, y su Presidente sería elegido por diez años y percibiría una remuneración anual de 100.000 pesetas (aproximadamente 4.000 libras esterlinas), una suma solo superada por la del Presidente de la República. Sin embargo, el primer Presidente del Tribunal fue un político: el Sr. Albomoz, Ministro de Justicia socialista, quien dejó el cargo al ser elegido, y la mayoría de los

154 Art. 85 (B.S.S., Vol. IX, p. 82).

miembros electos pertenecían a la misma categoría. En efecto, es difícil lograr la imparcialidad en la política española.

Nadie lamentó la derogación de la odiada Ley de Defensa de la República, que, a finales de julio, tras una ignominiosa trayectoria de veintiún meses, dio paso a una nueva y bastante más liberal Ley de Orden Público. La disposición más conocida de esta medida es la triple clasificación de las condiciones nacionales de excepción: estado de prevención, estado de alarma y estado de guerra. Ante la persistencia de las huelgas en todo el país, se esperaba que esta clasificación facilitara la adopción de medidas eficaces. Durante el estado de prevención, por ejemplo, que puede ser declarado por el Gobierno y no requiere ser remitido a las Cortes hasta transcurridos diez días, se puede detener o expulsar a extranjeros indeseables, suspender asociaciones, cancelar reuniones e imponer multas de amplio alcance a particulares. El estado de alarma —desafortunadamente denominado así, pues en repetidas ocasiones ha provocado una aprensión innecesaria en el extranjero— permite adoptar medidas aún más estrictas con poca antelación y debe renovarse o revocarse al cabo de un mes. En retrospectiva, la promulgación de la nueva ley tuvo poca repercusión en el número de huelgas y disturbios, pero sí mitigó en parte el sentimiento de agravio que muchos sentían bajo la Ley de Defensa de la República y apaciguó a quienes creían que España estaba pasando rápidamente de una dictadura a otra.

En septiembre, la oposición en las Cortes volvió a mostrarse inquieta. Azaña había aprobado todas las leyes complementarias a la Constitución y, aun así, seguía en el cargo. Era hora, decían los radicales, de que esta coalición predominantemente socialista se disolviera. El país se inclinaba claramente hacia la derecha: de los quince puestos electos en el Tribunal de Garantías Constitucionales, los candidatos ministeriales solo habían ganado cinco, frente a los cuatro obtenidos por los radicales y los seis por otros grupos de la oposición, principalmente de derecha. La asistencia a las Cortes disminuía y Lerroux insinuó claramente una nueva oleada de obstruccionismo en un futuro próximo. Esta vez, Azaña captó la indirecta y presentó su dimisión. Llevaba casi exactamente dos años en el cargo.

El sentir general era a favor de la disolución inmediata, pero al final Lerroux accedió a intentar formar un gobierno predominantemente radical y radical-socialista. Su destino fue el ridículo. El mismo día de su presentación en las Cortes, el líder socialista Indalecio Prieto presentó una moción de censura, que contó con tal apoyo que, al segundo día del debate, Sr. Lerroux inició su discurso con las palabras «Morituri te salutant». Estas palabras resultaron ser una declaración acertada de la situación. En una Cámara de la que apenas faltaba una veintena de diputados, con más de un tercio de ellos absteniéndose, el Gobierno perdió por noventa y ocho votos y su dimisión fue inmediata.

Esto dejó meridianamente claro que no quedaba más remedio que recurrir a las urnas. Se formó un nuevo Gobierno con los restos del anterior, bajo la dirección del Ministro de la Gobernación saliente, Martínez Barrio; el Presidente de la República disolvió debidamente las Cortes Constituyentes; y se fijaron las elecciones generales para las primeras Cortes ordinarias de la República el día 19 de noviembre.

Capítulo IV.

DOS AÑOS DE CENTRO-DERECHA

(noviembre de 1933 a enero de 1936)

B.S.S., Vol. XI, pp. 30-1, 85-92, 141-9; II: Vol. XI, pp. 209-16; Vol. XII, pp. 5-8; III: Vol. XII, pp. 9-21, 89-96, 127-31; IV: Vol. XII, pp. 132-7; Vol. XIII, pp. 21-7, 79-87.

I. NOVIEMBRE DE 1933-MAYO DE 1934.

**Aplastante victoria electoral. Gobierno del Centro. Posición de Gil Robles.
Fallecimiento de Macià. El proyecto de ley de amnistía en las Cortes.**

Las elecciones generales en España difieren en muchos aspectos de las de otros países europeos, sobre todo por el tiempo que debe transcurrir antes de que se anuncien cifras fiables. En las zonas rurales más remotas, las comunicaciones no son óptimas y la recogida de las papeletas tarda días, no horas. Incluso en las grandes ciudades, donde el recuento debería ser rápido, distintos periódicos a veces publican listas diferentes del número de votos emitidos para cada candidato. Además, dado que existen numerosos partidos y su afiliación a la izquierda, la derecha o el centro no siempre es fácil de determinar, la estimación de la fuerza de los partidos debe ser, en el mejor de los casos, aproximada. Asimismo, en algunas circunscripciones suele ser necesario celebrar segundas vueltas, dos semanas después de la primera jornada electoral. Finalmente, el primer acto de las nuevas Cortes es la verificación de los certificados electorales, un proceso prolongado que a veces conlleva la anulación de las elecciones y su repetición dos o tres semanas después.

Todo esto explicará por qué, sin duda afortunadamente, la noticia de la aplastante victoria electoral de noviembre de 1933 se comunicó al pueblo español con tanta tranquilidad. La primera información que se difundió fue sobre el orden con que se llevaron a cabo las elecciones, y la tranquilidad del país. Luego llegaron las cifras de Madrid, siempre una fuerte circunscripción socialista, que mostraron que la izquierda se mantenía firme, pero también que, como ningún candidato había obtenido el porcentaje necesario del total, sería necesaria una segunda vuelta. Pero la siguiente noticia, la de los primeros doscientos resultados del país, dio una idea de la reacción a favor del conservadurismo: casi la mitad de estos candidatos ganadores pertenecían a la derecha, y los socialistas eran sólo veinte.

Pasaron casi tres semanas antes de que el ministro del Interior publicara los resultados completos y se hiciera evidente la magnitud de la victoria. Una ley electoral aprobada desde las últimas elecciones había aumentado la representación en las Cortes a 473: de estos, los partidos de derecha tenían 207; el centro, 167; y la izquierda, 99. En términos comparativos, la derecha había aumentado su número en 165 y el centro en 31, mientras que la izquierda había perdido 192. La composición de las tres divisiones principales resultaba interesante. Con la derecha, habían regresado nada menos que 43 diputados que se autodenominaban «tradicionistas» o «monárquicos» y 62 que pertenecían al recién formado y muy enérgico partido conocido como Acción Popular. Más de 100 de los 167 diputados de centro eran radicales, y de los restantes, 25

pertenecían a la Lliga Catalana. La izquierda estaba compuesta de manera similar: 58 de los 99 eran socialistas y 19 eran de la Esquerra Catalana; los demás partidos, tan fuertes en el parlamento anterior, prácticamente habían desaparecido.

A primera vista, se habría pensado que la derecha llegaría al poder, y se empezó a especular sobre el grado de éxito que podrían alcanzar. Había pocos de ellos en las Cortes Constituyentes; los viejos conservadores habían abandonado el país o se habían retirado de la política activa; y los líderes de los tres grupos principales eran jóvenes e inexpertos. Pero una breve reflexión dejó claro que, sin la estrecha cooperación del centro, la derecha sería incapaz de llegar al poder. Contaban con la mayoría; y, si bien la derecha y el centro, unidos, podían imponerse sin temor a la derrota, la izquierda y el centro, también unidos —y en ciertas ocasiones podrían unirse con mucha frecuencia—, serían más que suficientes para enfrentarse a los aparentes vencedores de las elecciones.

El factor decisivo en la situación política fue, por lo tanto, el aumento de treinta y uno en la representación del centro; un aumento no notable en sí mismo, pero una clara señal de que la opinión moderada estaba ganando terreno y una garantía suficiente de que la oscilación del péndulo, que era tan imperativo detener en aras de la paz, probablemente disminuiría en intensidad. La política más viable, por consiguiente, parecía ser que el centro, y no la derecha, gobernara, especialmente dado que el líder radical, Lerroux, que contaba con el mayor número de escaños en las nuevas Cortes, era un parlamentario astuto y experimentado. Cuando esto quedó claro, hubo mucho descontento entre los extremistas, pero el sentimiento general en todo el país era, por lo que se podía apreciar, de alivio. Por enérgicas que fueran las reformas de la izquierda, su gobierno había estado marcado por acciones e incidentes que, para el ciudadano común, olían a tiranía. La suspensión de la prensa, Casas Viejas y la Ley de Defensa de la República no se olvidarían fácilmente. Ahora, sin embargo, habría una oportunidad para remediar los peores excesos de los dos últimos años y el peligro de represalias violentas sería mínimo.

Pero, si el ciudadano común albergaba tantas esperanzas, como demostraron los acontecimientos, era excesivamente optimista. En lugar del programa bien definido, los decididos intentos de avance y las huelgas revolucionarias casi diarias que adornaron el calendario del bienio socialista, España iba a atravesar un período de letargo político, con gobiernos en constante cambio, una confusión desesperante en las Cortes, disturbios (aunque menos intensos que antes) en el país, y una página negra de conflictos, apenas distinguible de una guerra civil, que se interponía entre el primer año y el segundo. Si el primer año puede describirse como uno de pacificación e intentos de reconstrucción, el segundo se caracterizó por la liquidación parcial de la rebelión y la incertidumbre sobre el futuro. Si los electores de noviembre de 1933 esperaban algo mejor que lo anterior, los de febrero de 1936 estaban seguros de que no podían obtener nada peor. Los dos años de gobierno de la izquierda fueron años de grandes esperanzas y aplastantes decepciones, mientras que los dos años de gobierno del centro fueron años de una depresión monótona.

El 8 de diciembre, casi antes de que se publicaran los resultados de las elecciones, el gobierno provisional se vio inmerso en una oleada de disturbios anarcosindicalistas de proporciones alarmantes. Barcelona, donde una huelga de transportes llevaba tiempo gestándose, estalló en revuelta, y fue necesario instalar ametralladoras en las principales plazas para sofocarla. Simultáneamente, estallaron revueltas anarcosindicalistas en varias partes de España. Una huelga general paralizó La Coruña; en Zaragoza, Huesca, Barbastro y muchas otras localidades de la región se produjeron ataques contra la Guardia Civil; se incendiaron iglesias y conventos en Calatayud y Granada; y, quizás lo peor de todo, el expreso Barcelona-Sevilla fue deliberadamente sabotado por los revolucionarios, causando la muerte de diecinueve personas.

Se proclamó el estado de alarma, como era de esperar, y una vez más la profesionalidad de la policía y el ejército salvó la situación. En tres días, las revueltas, salvo algunas huelgas generales, habían terminado, y el ciudadano de a pie volvió a centrar su atención en la política. Como muchos habían predicho, Alejandro Lerroux asumió el cargo con un gabinete de trece miembros, ocho de

los cuales eran radicales, y el resto, con una sola excepción, pertenecían al centro. En los grupos de derecha esto causó gran inquietud, pues muchos veían en la confederación de partidos de Derechas (conocida popularmente, por las iniciales de su nombre en español, como la CEDA), la coalición de partidos más fuerte del país, y esperaban que su joven líder, José María Gil Robles, deshiciera gran parte de lo logrado por Azaña y permaneciera en el cargo hasta que fuera factible reformar la Constitución. Gil Robles, aunque apenas tenía treinta y cinco años y carecía por completo de experiencia en el gobierno, había sido un pilar fundamental para los católicos en la oposición, y se esperaban grandes cosas de él si accedía al poder. Sus enemigos lo tildaban de fascista, pero «fascista» y «marxista» son términos despectivos en la política española y no deben tomarse en serio. Gil Robles nunca había dado motivos para que se dudase de su lealtad a la República, que reafirmó repetidamente, aceptando el régimen republicano como legalmente constituido y declarando que, dentro de su marco, era posible construir una constitución plenamente satisfactoria para los católicos. Era lo que podría denominarse un estadista acostumbrado al debate: de hecho, pocos años antes había formado parte de la plantilla del periódico de ese nombre.

Sus más fervientes seguidores se sintieron, sin duda, decepcionados cuando su líder se limitó a expresar su intención de colaborar lealmente con el Centro, aunque, en cuanto se reunieron las Cortes, declaró estar dispuesto a asumir el cargo inmediatamente si los radicales no lograban sobrevivir. Desafortunadamente para él, hablaba con demasiada libertad sobre «asumir» el cargo; sus seguidores lo aclamaban con entusiasmo cada vez que lo mencionaba y, sin duda, él mismo se veía continuamente como presidente del Gobierno. Pero, al parecer, pasó por alto que antes de poder desempeñar ese cargo necesitaba recibir una invitación; y aunque, durante ese bienio, se le asignó una cartera ministerial en más de una ocasión, nunca se le pidió que formara un gobierno. El presidente evidentemente desconfiaba de él como estadista: también se decía abiertamente que le caía mal personalmente. Cualquiera que fuera la razón, Gil Robles permaneció sin cargo, un hecho que aumentó considerablemente la impopularidad de Alcalá Zamora entre los partidos de derecha, quienes sinceramente pensaban que su líder no había sido tratado con la debida consideración.

Durante la Navidad y el Año Nuevo de 1933-34, España se vio inundada de rumores sobre la política del nuevo Gobierno. Cuando las Cortes se reunieron de nuevo, se observó que se proponían abordar sin demora, a su entera satisfacción, la cuestión religiosa. Se anunció que la sustitución de las escuelas religiosas por escuelas laicas se pospondría indefinidamente, y ya se sabía que los jesuitas impartían clases abiertamente en la capital. Rápidamente se aprobó una ley que concedía a los clérigos que habían recibido beneficios eclesiásticos en abril de 1931 nada menos que dos tercios de su salario para el año en curso. Se iniciaron negociaciones con la Santa Sede y, aunque difícilmente se podrían reanudar las relaciones plenas mientras la Ley de Congregaciones siguiera vigente, se llegó a un acuerdo por el cual el Ministro de Estado, si bien conservaba su cartera, acudía al Vaticano como «Embajador Extraordinario».

Estas decisiones, más allá de los rumores, demostraron que la Iglesia probablemente obtendría numerosos beneficios de la reacción política. El monarquismo y el fascismo avanzaron con más audacia que desde 1931. Un nuevo Club Monárquico de Madrid recibió un telegrama de Alfonso XIII, en el que declaraba que en los grupos juveniles monárquicos residía su «esperanza para la salvación de nuestra amada España». Dos artículos del periódico monárquico ABC hicieron hincapié en las implicaciones de este mensaje, declarando que el tercer hijo de don Alfonso, don Juan (tras la renuncia de los dos primeros a la sucesión), era considerado por muchos como el héroe de la inminente Restauración: «un príncipe ajeno a las discusiones y disputas, que no ha participado en las contiendas del pasado». Sin embargo, no debe suponerse que, ni entonces ni en los tiempos mucho más sombríos que siguieron, existiera un deseo generalizado de retorno a la monarquía. La gente se horrorizaba ante la idea de la agitación que inevitablemente seguiría a la restauración de los Borbones. ¿Y el rey? En aquel entonces, uno podría preguntar a los antiguos contrarios a la república, pesimistas sobre el futuro del país: «¿El rey? ¡No, nunca!», en un tono horrorizado. Pase lo que pase, parecía que la continuidad de una forma de gobierno no monárquica era segura.

Al acabar el invierno, se hizo evidente la naturaleza probable del período de gobierno de Centro. En general, el país parecía más tranquilo, pues, aunque un pequeño número de huelgas revolucionarias, en particular una en Zaragoza, extendieron la miseria durante semanas e incluso meses, el número de huelgas parciales disminuyó y hubo relativamente pocas de esas desconcertantes huelgas relámpago de veinticuatro horas a las que los españoles se habían acostumbrado con Azaña. Y cuando estallaban —hubo una particularmente efectiva en Madrid ese abril— eran más pacíficas que en el pasado.

Pero también quedó claro que era poco probable que se lograra algo de valor en el parlamento. Sin otra razón aparente, aparte de la inestabilidad general, la falta de una política y la resistencia a colaborar de los individuos, un gobierno tras otro dimitía. El gabinete del diciembre anterior duró solo hasta principios de marzo, y Gil Robles comentó sobre su sucesor: «dándole el beneficio de la duda, me extrañaría que sobreviva al mes». Su pronóstico fue casi acertado: terminó el veinticinco de abril.

El gobierno que se estableció en marzo destacó por la inclusión, como Ministro de Instrucción, de Salvador de Madariaga, una de las personalidades más sobresalientes de la época y tan alejado del político común que a muchos les sorprendió que aceptara un cargo político. Pensador audaz y perspicaz, y escritor con dominio absoluto de tres idiomas, había tenido una distinguida carrera durante la Dictadura en la Sociedad de Naciones y como profesor en Oxford, mientras que la República lo había utilizado como embajador, primero en Washington y luego en París. Tanto en España como en el extranjero, abundaban las especulaciones sobre las reformas que cabría esperar en la educación española si un hombre con una mente tan aguda y una experiencia tan vasta en los sistemas educativos de otros países pudiera imponer su voluntad. ¡Pero, ay de las especulaciones! Madariaga, tras haber sido efectivamente apartado de París por razones que sólo podemos conjeturar, pasó exactamente seis semanas en el Ministerio de Instrucción, fue destituido del siguiente gobierno y nunca volvió a formar parte de otro. Si algún día publicara sus memorias, estos acontecimientos y otros que los precedieron, sin duda conformarían un capítulo interesante.

Una nueva oleada de huelgas en marzo sumió a España una vez más en el estado de alarma: las centrales sindicalistas y comunistas, junto con varias sedes socialistas, fueron clausuradas por orden de las autoridades. La huelga más molesta, la convocada por los impresores, surgió de una disputa con *ABC* por la contratación de un único trabajador no inscrito en ningún sindicato. *ABC*, sin duda recordando los meses de suspensión, durante los cuales había pagado a sus trabajadores el salario íntegro, se negó a someter la disputa a arbitraje y durante cuatro días no hubo periódicos, salvo los gestionados por trabajadores no sindicados, en particular *La Época* y *El Debate*, cuyos vendedores ambulantes recibieron protección armada del Gobierno. Junto con los impresores, se unieron a la huelga obreros de la construcción, metalúrgicos y (en Cataluña y Aragón) trabajadores del gas y la electricidad. Valencia, a finales de marzo, se encontraba en una situación verdaderamente deplorable: sin gas ni luz eléctrica, sin agua, sin teatros abiertos y sin periódicos. En Zaragoza, una huelga general se prolongó durante casi dos meses y la preocupación fue tan intensa que los hijos de los huelguistas fueron enviados en grupos a otras partes del país, especialmente a Madrid y Barcelona. Sin embargo, en ningún lugar hubo disturbios generalizados, y para la Semana Santa, que por primera vez bajo la República fue una fiel reproducción de su antiguo esplendor, España había recuperado la tranquilidad.

En Cataluña, un acontecimiento eclipsó a todos los demás en importancia durante este periodo: el día de Navidad de 1933 falleció Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat y protagonista de la lucha por la autonomía catalana.

«El Abuelo» era el cariñoso apodo que le daban sus paisanos. Era, en efecto, un anciano venerable. Su figura alta y ligeramente encorvada, su voz tranquila y decidida, y la mirada penetrante que brillaba bajo sus pobladas cejas, todo ello causaba una impresión inmediata en

quienes lo veían. Recuerdo haberle hecho una visita pocos meses antes de su muerte y haberle comentado que, si pudiera pintar un retrato suyo, lo titularía «Juventud a los setenta y cuatro años».

Energía, determinación y valentía, unidas a un idealismo casi visionario, eran las señas de identidad de Macià. Nacido en 1859, pasó cuarenta y cinco años de su vida en su Cataluña natal antes de darse a conocer como político. Ya entonces, como coronel de los Ingenieros destinado en la ciudad catalana de Lérida, atrajo la atención de los líderes del movimiento autonomista catalán por su firme actuación ante una manifestación militar anticatalanista que había provocado gran indignación en Barcelona. Una vez integrado en el movimiento, pronto empezó a destacar como un catalanista de vanguardia. Cuando en 1912 Canalejas accedió a patrocinar la forma de gobierno local ya conocida como Mancomunitat —que posteriormente se convirtió en ley—, se negó a aceptar el compromiso y defendió la autonomía total, por la fuerza si fuera necesario.

Cuando las primeras semanas del gobierno de Primo de Rivera dejaron claro que los catalanes estaban a punto de perder todos y cada uno de los pocos privilegios que les habían sido restituidos, Macià abandonó Barcelona y estableció la sede de su organización autonomista, el Estat Català, primero en París y, posteriormente, tras la fallida rebelión de Prats-de-Molló en 1926, en Bruselas. Con un equipo entusiasta, fondos considerables y una energía personal inagotable, llevó a cabo una amplia propaganda a favor del incipiente Estado. Tras la caída de Primo de Rivera, a pesar de tener más de setenta años, regresó a Barcelona para continuar con su inquebrantable objetivo en su tierra natal. Fue expulsado inmediatamente, pero en febrero de 1931 fue readmitido y aclamado unánimemente como el único líder posible del nuevo partido Esquerra Republicana, que estaba a punto de presentarse a las trascendentales elecciones del 12 de abril. Desde esa fecha hasta el día de su muerte, su historia es la historia de Cataluña.

Si la felicidad reside en la realización de ideales nobles, Macià murió feliz. No sólo logró su propósito, sino que quienes lo llevaron a cabo actuaron con honestidad. Pocos hombres en España han sido tan profundamente amados por sus allegados, y pocos han sido tan genuinamente respetados, incluso por sus oponentes políticos.

Tras la muerte de su líder, la trayectoria política de Cataluña comenzó a divergir, durante un tiempo, de la de la República. Esto, sin embargo, no se debió inicialmente al cese de la influencia de Macià, sino al hecho perfectamente comprensible de que la opinión catalana no se había inclinado hacia la derecha como la del resto de España. Las elecciones municipales, aplazadas en otros lugares, se celebraron debidamente en toda Cataluña en enero, y Esquerra las ganó con facilidad, aunque por una mayoría algo reducida. A medida que, una tras otra, las reformas de la izquierda en España fueron revertidas o descartadas por el nuevo Gobierno, la opinión de la izquierda se endureció en Cataluña, y cuando en marzo el nuevo presidente de la Generalitat llegó a Madrid para consultas secretas con el Gobierno, se sugirió libremente, y no se contradijo oficialmente, que la principal cuestión en discusión era las graves consecuencias que cabría esperar en Cataluña, de inclinarse más hacia la derecha el Gobierno central.

Este nuevo presidente era un hombre al que ya hemos conocido en más de una ocasión: Lluís Companys. En muchos sentidos, contrastaba con Macià, veinte años mayor que él. Abogado de aspecto discreto, de modales marcadamente burgueses, poseía más sutileza y habilidad política que su predecesor, pero infinitamente menos personalidad y carisma. Como líder de la Esquerra, sin embargo, gozaba de la confianza de su partido y de quienes simpatizaban con él, lo que equivale a decir la gran mayoría del pueblo catalán. Cuando, posteriormente, cayó, resurgió con mayor prestigio, e incluso en su caída algunos vislumbraron elementos de triunfo.

Los acontecimientos en Madrid que precedieron a la caída del Gobierno de marzo demostraron que, a pesar de los ostentosos intentos de resurgimiento del monarquismo y el fascismo, el país seguía fiel a los principios que dieron origen al nuevo régimen. Un solo incidente bastó para reflejar el sentir nacional. Pocos días antes de las celebraciones del tercer aniversario de la República, las Cortes debatieron un proyecto de ley del Gobierno que restablecía la pena de

muerte para los delitos de asesinato, durante un año a partir de la fecha de su publicación, si llegaba a ser ley. El proyecto de ley era impopular en el país, y el ministro de Justicia, Álvarez Valdés, tuvo que defenderlo con gran detalle, enumerando los crímenes que se producían con tanta frecuencia en las principales ciudades de España y declarando que la única forma de acabar con ellos era la pena capital.

Desde la ejecución de los dos oficiales de Jaca —un acto que sin duda separó al pueblo de la monarquía—, la opinión pública en España se había mostrado reacia a la pena capital, y nadie que la defendiera podía esperar un aumento de popularidad. Pero Álvarez Valdés fue más allá. En su faceta más incendiaria, tuvo la osadía de arremeter contra la revuelta de Jaca y de hablar de forma contraria a la veneración que se sentía por los «Mártires de la República». ¡El escándalo fue tremendo! Las protestas de toda la Cámara y de todo el país sólo permitieron una solución. Inmediatamente después de que se pusieran fin a las celebraciones del aniversario, el Ministro de Justicia dimitió y su cartera (por una ironía que no pasará desapercibida para el futuro historiador de la Segunda República) fue asignada temporalmente a Madariaga.

Tras este pequeño revuelo, surgió la polémica en torno al proyecto de ley de amnistía y el breve regreso a la escena política de Alcalá Zamora. Era de esperar que, una vez fuera del poder la izquierda, quienes habían sido condenados por delitos contra ella fueran indultados; las amnistías siempre marcan el vaivén de la política española y, por lo tanto, las cadenas perpetuas pierden gran parte de su horror. El proyecto de ley de amnistía presentado por el nuevo gobierno proponía indultar a los presos políticos por delitos cometidos antes del 3 de diciembre de 1933, entre los que destacaban, por supuesto, el general Sanjurjo y sus compañeros de la insurrección sevillana.

El proyecto de ley se tramitó en las Cortes en medio de una fuerte controversia. Se produjeron numerosos incidentes entre monárquicos y socialistas, e incluso escenas de violencia física. Finalmente, la oposición se abstuvo y el proyecto de ley fue aprobado a finales de abril por 269 votos a favor y 1 en contra. Sin embargo, apenas se anunció el resultado de la votación, Madrid se vio inundada de rumores de que el presidente estaba a punto de negarse a firmarlo. Durante días no sucedió nada y se oyeron profecías de nuevas crisis por doquier. Finalmente, el presidente firmó el proyecto de ley, pero al mismo tiempo publicó una declaración en la que exponía detalladamente sus razones para desaprobarlo. Era difícil imaginar un compromiso más débil o ineficaz. Es cierto que, al igual que con la Ley de Congregaciones, había pocas esperanzas de que, al devolver el proyecto de ley a las Cortes, como permitía la Constitución, el Presidente pudiera haber logrado que se rechazase. Pero de hacerlo, al menos habría sido un gesto a favor de la izquierda. Ahora se había granjeado la enemistad tanto de la izquierda como de la derecha y, de paso, había provocado un nuevo cambio de gobierno, pues difícilmente cabía suponer que, tras un rechazo tan contundente como el que le había propinado el Presidente, Lerroux permanecería en el cargo por más tiempo.

Cuando a los pocos meses dimitió, ya se hablaba de nuevas elecciones generales, principalmente por parte de la izquierda, que no dejó de presionar durante casi dos años hasta que finalmente las consiguió. Probablemente habrían ganado poco con unas elecciones celebradas antes de que se consolidara una nueva reacción a su favor, y hubo un alivio general cuando la crisis culminó con una remodelación del gabinete. El nuevo primer ministro, que anteriormente había ocupado la cartera de Industria y Comercio, era Ricardo Samper, y, salvo la ausencia de Madariaga, la lista de sus colegas no contenía sorpresas. Tampoco la administración del gobierno. Durante poco más de cinco meses, Samper pasó el tiempo con cierta dignidad, siendo la principal distracción en las Cortes los discursos de Calvo Sotelo. Este joven y capaz exministro de Hacienda de Primo de Rivera había abandonado España tras la proclamación de la República y, aunque fue elegido diputado a las Cortes en ausencia en cada una de las elecciones generales, prefirió permanecer en el exilio hasta que la Ley de Amnistía le permitiera regresar. Tras algunas deliberaciones, se le permitió ocupar su escaño en las Cortes y no tardó en lanzar enérgicos ataques contra las finanzas y la administración republicanas. Durante su larga ausencia, otros hombres menos capaces lo habían

reemplazado ante los partidarios de la derecha, pero, a las pocas semanas de su regreso, su incisivo estilo parlamentario lo catapultó a la primera fila de su grupo, y durante este periodo fue responsable de varias sesiones animadas. Sin embargo, a pesar de ello, el centro del interés popular se desplazó de las Cortes a las provincias, y cuando, tras los acontecimientos que se describirán en el próximo capítulo, el gobierno de Samper se derrumbó, fue de un modo muy parecido a la inercia. Y su caída podría haberse producido incluso antes, de no haber sido verano.

II. JUNIO-SEPTIEMBRE DE 1934.

Problemas en las provincias: los vascos y el Concierto Económico; los catalanes y la Ley de Cultivos. Los partidos de la oposición en las Cortes hablan de revolución. La CEDA provoca una crisis parlamentaria.

El verano de 1934 fue un periodo de crecientes problemas que culminaron trágicamente en octubre.

El menor de estos problemas, aunque expresa muy bien la creciente independencia de actuación por parte del regionalismo, fue el conflicto entre el Gobierno y los Ayuntamientos de las dos provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. Las causas que llevaron a las disputas de agosto son demasiado complejas para detallarlas por completo. Pero, en resumen, las provincias vascas, bajo el Concierto Económico, gozaban desde hacía tiempo del derecho a la autoliquidación y al pago de una cantidad fija anual al Tesoro Público en lugar de impuestos. Ciertos nuevos impuestos parecían poner en peligro este privilegio, por lo que los Ayuntamientos se reunieron y decidieron elegir representantes en cada municipio, el segundo domingo de agosto, que defenderían el Concierto. El Gobierno declaró ilegales estas elecciones y, tras sugerir en vano su aplazamiento hasta que se reunieran las Cortes, prohibió su celebración anticipada.¹⁵⁵

Decididos a ejercer lo que consideraban sus derechos, la mayoría de los Ayuntamientos eligieron debidamente sus comités, bajo la protesta formal de los Gobernadores Civiles de las provincias y, a pesar de (o quizás debido a) la presencia de policías, guardias armados y tropas de choque en gran número, sin que se produjera ningún disturbio. Tras las elecciones, un gran número de alcaldes fueron arrestados, pero, salvo que algunos cabecillas fueron multados o destituidos de sus cargos, los arrestos fueron meramente formales, ya que se aceptó la libertad bajo fianza y el asunto quedó en suspenso a la espera de su debate en las Cortes. Todo esto ocurrió en pleno apogeo de la temporada de vacaciones y recibió mayor publicidad debido a que numerosas personalidades políticas se encontraban de vacaciones en este encantador rincón de la Península. Pero, por importante que fuera el incidente desde el punto de vista histórico, apenas causó revuelo en la apacible vida de estas provincias, y los alarmantes términos en que se lo describió en el extranjero no sorprendieron a nadie más que a los principales afectados.

Un problema mucho más grave para el Gobierno fue el problema agrario de este verano y, en particular, sus repercusiones en Cataluña. En toda la España rural, el cambio de Gobierno se había recibido con aprensión, pues si bien la Ley Agraria se desarrollaba lentamente, al menos figuraba en la legislación, y cabía esperar que sus promotores la aplicaran con mucha más celeridad que aquellos que se habían abstenido de votarla o que, habiéndola votado, se mostraban tibios en su favor. Esto otorgó mayor relevancia a la breve huelga campesina organizada en junio en quince provincias y a la grave situación que surgió inmediatamente después en Cataluña.

Algunas semanas antes, la Generalitat había aprobado una nueva ley agraria, conocida como Ley de Cultivos, destinada a resolver un conflicto de larga data entre los arrendatarios y los propietarios. En Cataluña, la tierra se cultiva mediante contratos que otorgan a los arrendatarios la

155 Un resumen de la cuestión en cuestión, escrito por un vasco, se puede encontrar en «Desde Bilbao» (B.S.S., 1934, Vol. XI, pp. 225-228).

tenencia de la tierra por periodos variables, hasta un máximo de cincuenta años. En los últimos tiempos, la depresión económica había imposibilitado a los agricultores el cumplimiento de sus contratos, y muchos de ellos sufrieron el desalojo. La nueva ley estableció tribunales arbitrales para dirimir las controversias surgidas desde la proclamación de la República. Ambas partes debían estar representadas en los tribunales, pero los términos del acuerdo, que implicaban la restitución de los agricultores desposeídos y el pago a los propietarios de tan solo la mitad de los alquileres anteriores a la república, parecieron injustos y confiscatorios a los propietarios, quienes protestaron enérgicamente contra ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, la nueva ley fue sometida al Tribunal de Garantías Constitucionales, que, según la Constitución, es la máxima instancia judicial en materia de este tipo de asuntos. Por escasa mayoría, la ley fue rechazada por dicho órgano, no por infringir la Constitución, sino porque el Parlamento catalán carecía de competencia para legislar sobre la cuestión.

Esta era precisamente la situación que cabía esperar en un periodo inicial de autonomía, y que los defensores de la paz y el orden temían. El asunto, por supuesto, adquirió de inmediato un carácter político de suma importancia. En Barcelona, si bien la Lliga Catalana, de derechas, apoyaba en general al Tribunal, Esquerra, con su amplia mayoría, se negaba rotundamente a llegar a un compromiso. El presidente de la Generalitat calificó la actuación del Tribunal como un ataque, no solo contra la autonomía de Cataluña, sino contra los principios fundamentales de la República. Los diputados de Esquerra, seguidos por los nacionalistas vascos, abandonaron las Cortes españolas. Finalmente, en medio de un inmenso entusiasmo popular, Companys resolvió el dilema ratificando solemne y públicamente la ley como si el Tribunal la hubiera aprobado.

Todo esto ocurrió a principios de junio, y durante cuatro meses persistió estancada la situación. Por un lado, el Gobierno respaldó al Tribunal y los debates en las Cortes no ofrecieron ninguna salida. Por otro lado, los catalanistas no perdieron oportunidad de atacar, no sólo la actuación del Tribunal, sino también la naturaleza y composición del Gobierno de Centro que la había aprobado. «El Estatuto de Cataluña —rezaba una declaración ampliamente difundida— está siendo sistemáticamente socavado como consecuencia del ascenso al poder de partidos políticos con ideas centralizadoras». Sin embargo, la franqueza de este lenguaje no era nada comparada con la violencia con la que Companys consideró oportuno arremeter contra el Gobierno. La situación, declaró, era «producto de la misma mentalidad que caracterizó a la caída Monarquía Borbónica» y predijo abiertamente un conflicto en el que Cataluña podría «ser derrotada y perder sus libertades». De hecho, sus recriminaciones iban acompañadas de amenazas apenas veladas. En una reunión celebrada en Gerona el 2 de septiembre, por ejemplo, dijo lo siguiente:

«Este Gobierno, encargado de guiar a los pueblos hispanos, ya no es leal a la Constitución. No puede desprenderse del manto del imperialismo ni de la educación que recibió de la Monarquía. Estos hombres no son liberales; no comprenden la idea federalista. Si en Madrid no logran crear el ideal hispano, procederemos a crear una nacionalidad catalana».¹⁵⁶

A menos que el Presidente de la Generalitat estuviera fanfarroneando, este lenguaje sólo podía significar una cosa: revolución. Pero las Cortes se limitaron a responder emitiendo una declaración en el sentido de que la rendición debía preceder a cualquier negociación, mientras que la Generalitat, haciendo caso omiso, procedió a aplicar la ley al detalle. En ese momento, tras un debate particularmente acalorado, en el que un exministro socialista causó revuelo al blandir una pistola, las Cortes aprobaron un voto de confianza al Gobierno y, dejándole actuar a su antojo con Cataluña, se levantaron para el primer receso realmente largo desde el inicio de la República.

El Presidente del Gobierno hizo un último gesto: una nota cortés a la Generalitat, «solicitándole que se abstuviera de aplicar la ley» y, como era de esperar, esto no produjo ningún resultado, se marchó de vacaciones de verano.

156 «Catalonia and the Sixth of October» (*Contemporary Review*, December 1934, pp. 671–676).

Así, por el momento, terminó el conflicto sobre la Ley de Cultivos. Pero mientras tanto, surgía otro peligro, aún más grave, y, aunque al principio difícil de localizar y definir, se empezó a hablar de él con creciente aprensión. Era natural que, tras la persistencia con la que sus oponentes radicales habían jugado al juego de la obstrucción parlamentaria y su aplastante derrota en las urnas tras el llamamiento a la nación, la izquierda derrotada se sintiera resentida ante la perspectiva de un período de gobierno del centro o de la derecha. Pero, dado que habían aprovechado bien sus dos años en el poder, cabría esperar que se retiraran dignamente a la oposición hasta que la opinión pública volviera a favorecerlos. En lugar de esto, con menos justificación que los radicales unos meses antes, de hecho, sin ninguna justificación, pues las urnas por sí solas habrían justificado la formación de un gobierno, no del centro, sino de la derecha, comenzaron a insinuar, primero el abstencionismo, luego la obstrucción y, finalmente, a medida que las acciones del gobierno les resultaban cada vez menos satisfactorias, una revuelta abierta.

En su mayoría, estos parlamentarios descontentos eran socialistas, y quienes los apoyaban comenzaron a buscar liderazgo en dos destacados políticos socialistas, a su vez rivales: Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Se creía que ambos correrían riesgos por lo que consideraban verdaderos principios republicanos. «¿La libertad, para qué?¹⁵⁷ —había preguntado este último públicamente unos meses antes—. ¿Para qué sirve la libertad? ¿Acaso el Estado no es, por definición, un poder absoluto? Ciertamente, nosotros, los socialistas y los verdaderos republicanos, no vamos a ser tan ingenuos como para conceder libertad si a la primera ocasión socava los cimientos del gobierno».

Tal lenguaje sugiere una dictadura roja, y sin duda había en ese momento muchos socialistas destacados para quienes tal dictadura habría sido bienvenida. Pero no eran los únicos en lamentar la nueva situación política. Otros partidos de izquierda se sumaron a la protesta; y lo mismo hizo nada menos que Azaña, quien, tras la derrota temporal de su coalición, primero asumió el papel de un Aquiles descontento, y luego, en numerosos discursos recopilados posteriormente en el segundo volumen de una obra titulada *En el poder y en la oposición*, se manifestó abiertamente con el carácter más peligroso de un revolucionario.

Al parecer, había perdido la esperanza en España. El gobierno de Esquerra en Cataluña, declaró, era ahora «el único poder republicano» en todo el país y el único «baluarte» contra el retorno de la tiranía. Él mismo no podía servir a «una República imbuida de monarquismo, hecha a la medida de los siervos del rey, o más bien de renegados de su servicio». «No queremos —añadió— una República como ésta».¹⁵⁸

Otros hombres de menor rango, que habían estado asociados a él en la tribuna y en el parlamento, se sumaron a su clamor. «Ésta —exclamó, por ejemplo, un destacado diputado, Sánchez Román— es una República mutilada. De ninguna manera es una República auténtica. Los verdaderos republicanos están siendo perseguidos por un gobierno con el que no pueden tener ninguna solidaridad».¹⁵⁹ Esa fue la actitud adoptada por la izquierda decepcionada en su conjunto, y la utilizaron para justificar la revuelta pasiva e incluso la rebelión armada. Resulta difícil imaginar cómo, sobre tales principios, podría ser posible el gobierno democrático que decían defender.

En septiembre, el panorama se había vuelto aún más sombrío. En las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, en protesta por el trato recibido, dimitieron todos los ayuntamientos. En todo el País Vasco se celebraron manifestaciones exigiendo plena autonomía, y una delegación enviada al recién elegido comité intermunicipal por la catalana Esquerra demostró que las dos regiones de habla no castellana estaban dispuestas a unirse. Casi simultáneamente, se celebró en Madrid una asamblea multitudinaria de terratenientes catalanes, opuestos a la Ley de Cultivos: los socialistas,

157 [En castellano en el original.]

158 Cf. *B.S.S.*, 1934, Vol. XI, p. 211.

159 Op. cit., p. 214.

sindicalistas y comunistas protestaron contra la asamblea mediante una huelga general, que se habría repetido en Barcelona de no ser por la apelación en contra por parte de la Generalitat.

En Cataluña, en el País Vasco, en Madrid y en muchas otras partes de España, los discursos incendiarios se hicieron más frecuentes y la opinión pública se alarmó genuinamente cuando se anunció que un cargamento de más de setenta cajas de armas había desembarcado recientemente en Asturias. ¿Tenía esto alguna relación con los rumores de una rebelión socialista, o se trataba simplemente de armas propiedad del Estado que se habían extraviado? Las acciones del presidente del Gobierno aumentaron los temores generales. Primero, anunció que se habían realizado descubrimientos de municiones ocultas a gran escala, que se habían efectuado detenciones y que se estaban realizando registros en busca de armas ocultas ilegalmente en numerosos lugares sospechosos. Luego se firmó un decreto que establecía el estado de alarma en toda España. Las elecciones municipales, con dieciocho meses de retraso, debían celebrarse en otoño, pero los planes para éstas fueron cancelados. Todo parecía conspirar contra la tranquilidad social e incluso las personas habitualmente optimistas estaban atemorizadas.

Políticamente, la situación era aún peor. Una crisis en las Cortes era inminente. Durante meses, en los términos más rotundos, Gil Robles había estado declarando públicamente que se acercaba el momento en que él gobernaría. En un día nevado de abril, cincuenta mil miembros de las juventudes de Acción Popular desafiaron las inclemencias del tiempo y acudieron en masa a un congreso en El Escorial para escuchar a su líder explayarse en un discurso que, pensándolo más tarde, podrían haber considerado excesivamente confiado, si no jactancioso, pero que en aquel momento parecía lo más natural del mundo:

«El poder nos llegará infaliblemente, y os lo digo con la mayor responsabilidad. Pero llegará cuando nosotros queramos, cuando convenga a los intereses de España y de nuestro partido. Entonces, en efecto, gobernaremos y nadie impedirá que determinemos el rumbo de la política española en el futuro... Pronto llegaremos al poder, pues los partidos políticos se están desmoronando, sus organizaciones se están fragmentando de arriba abajo, y llegará el momento en que no sólo los grupos de derecha, sino las grandes masas neutrales de toda España, recurrirán a nosotros como su única esperanza para el futuro. Ese será el momento en que diremos: *¡Ahora es el momento!* El momento de trabajar, no por nuestro propio bien, sino por el bien común. Por el bien de nuestra España y de todos los españoles».¹⁶⁰

Llegó septiembre y el momento de Gil Robles aún no había llegado. Pero parecía que se acercaba. Los grupos juveniles celebraron otro congreso, esta vez en Asturias, en el lugar venerado por todos los tradicionalistas como cuna de la nación española: Covadonga. Y, una vez más, el líder pronunció uno de sus discursos llenos de seguridad, condenando con frases rotundas la «rebelión» de las provincias vascas y el apoyo que le brindaba Cataluña, la cual, «no contenta con mantener la rebelión en su propio territorio, se aprovecha de la ingenuidad de aquellos cuyos horizontes se ven limitados por insignificantes aspiraciones nacionalistas». Hasta ese momento, Acción Popular había mostrado una notable moderación, pero la situación era ya tan grave que ya no resultaba tolerable.

«El camino está despejado. ¡Ni un momento más! Para nosotros nada pedimos, pero no permitiremos que esta situación se prolongue».¹⁶¹

Estas palabras, si algo querían decir, solo podían significar que el Líder reuniría a sus seguidores en las Cortes para derrotar al Gobierno de Centro y luego asumiría el cargo de Presidente de Gobierno. Así, al menos, las interpretó el proletariado asturiano, y al día siguiente Asturias se vio sumida en una huelga general, con el resultado de que a los delegados les resultó más difícil e incómodo regresar a casa desde la cuna de la nación española que el viaje de ida. Dos semanas después, Gil Robles asestó su golpe, y el mundo se enteró de que, al abrirse las sesiones de

160 *El Sol*, 24 de abril de 1934.

161 *El Sol*, 11 de septiembre de 1934.

las Cortes, la CEDA retiraría su apoyo al Gobierno y, como todos sabían, esto expulsaría a los radicales del poder.

III. OCTUBRE DE 1934-MAYO DE 1935.

El gobierno de Centro gira a la derecha. La Revolución del 6 de Octubre en Cataluña. Guerra Civil en Asturias. España bajo la ley marcial. Los resultados de la revolución en Cataluña

Si fue la oposición de la CEDA la que acabó con el gobierno de Samper o su propia pusilanimidad es una cuestión de opinión. Hay quienes sostienen que su colapso habría sido inevitable, en cualquier caso, debido a su magistral falta de actividad.

La escena en las Cortes el 1 de octubre fue curiosa. Tras el repaso de los acontecimientos del verano por parte de Samper, el líder de la CEDA se levantó con aire algo pontifical y condenó a los sucesivos gobiernos de los once meses anteriores por no haber interpretado la voluntad de la mayoría del pueblo. «Les hemos brindado nuestro apoyo —declaró— pero sentimos que ya no podemos hacerlo. Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber.»¹⁶²

Se sentó. El presidente del Gobierno, sin saber quizás qué hacer a continuación, pidió la opinión de los líderes de los partidos. Ninguno accedió. Se produjo un silencio incómodo. Entonces, lentamente, Cid, el único miembro agrario del Gobierno, se levantó de su asiento, no para hablar, sino para abandonar la Cámara. Fue un reconocimiento de la derrota, una señal de que el Gobierno dimitiría sin oponer resistencia. La sesión se levantó y, pocos minutos después, se anunció que lo inevitable había sucedido.

Tres días después, tras la habitual oleada de rumores y los informes casi horarios de nuevas consultas presidenciales, se hizo pública la composición del siguiente Gobierno. Para los seguidores incondicionales de Gil Robles, fue una bomba. Su líder no había «asumido», «tomado» ni «ocupado» el poder, tal y como había pronosticado con tanta seguridad. No era el jefe del nuevo Gobierno. Ni siquiera era miembro del nuevo Gobierno. Él (según decían públicamente), con su conocida modestia y total desinterés, se había mantenido en un segundo plano: por el momento, desempeñaría el papel de poder oculto tras el banco azul. Pero lo que pensaban, y comentaban en privado, era que el infame Presidente de la República lo había pasado por alto inexplicablemente, añadiendo así un delito más a los que ya le venían imputando.

El nuevo Presidente de Gobierno, encargado de formar un Gobierno (para usar la elegante expresión presidencial) dentro de los límites de la cordialidad republicana, no era otro que el omnipresente Alejandro Lerroux. Su equipo aún mostraba una escasa mayoría para su propio partido. Ocho de los quince ministros (incluido Samper, que asumió la cartera de Relaciones Exteriores) eran radicales; dos eran agrarios; uno era independiente; uno liberal demócrata; y tres eran miembros de la CEDA.

Para contrarrestar la inclusión de los cedistas —que constituía, por supuesto, la novedad de este amplio gabinete— se nombraron dos ministros sin cartera. Pero si bien la lista causó desilusión en la derecha, provocó consternación y exasperación en la izquierda, una vehemencia que debía asombrar a las «grandes masas neutrales». Al fin y al cabo, argumentaban estas últimas, había 207 diputados de derecha en las Cortes frente a 99 de izquierda, y era razonable que el grupo mayoritario tuviera una pequeña representación en el gobierno. La izquierda habría sido la primera en quejarse si, como grupo mayoritario, hubiera sido excluida del cargo. ¿Por qué, entonces, siendo demócratas en principio, y habiendo sido rechazados por los electores, debían lanzar un discurso de odio y exigir que lo que no habían podido conseguir por medios lícitos se obtuviera por medios que el ciudadano de a pie considera ilícitos? A juzgar por lo que se oía, la reacción contra el gobierno

¹⁶² *El Sol*, 2 de octubre de 1934.

central ya comenzaba a gestarse, y unos meses de gobierno de centro-derecha probablemente inclinarían la balanza a su favor. Sólo tenían que esperar pacientemente y, sin duda, volverían con una mayoría mayor que la anterior.

Pero consideraciones de este tipo no tuvieron efecto en los políticos, decididos a salirse con la suya, y hacerlo rápidamente. El primer golpe recayó sobre el desafortunado pero bienintencionado presidente, quien, tras haber enfurecido a la derecha, se encontró con que también se había granjeado enemigos implacables de la izquierda. Miguel Maura, ministro del Interior augural de la República, redactó y distribuyó un documento denunciándolo como traidor. Albornoz protestó dimitiendo de su presidencia del Tribunal de Garantías. Un buen número de antiguos compañeros de Alcalá Zamora lo censuraron enérgica y públicamente, llegando incluso a anunciar que no querían tener nada más que ver con él.

Los demás golpes recayeron sobre España. En la mañana del 5 de octubre, se declaró una huelga general casi absoluta en todo el país. Alcanzó su punto álgido en Asturias, donde se tuvo que proclamar la ley marcial y la policía y la Guardia Civil fueron reforzadas por el ejército. Desde La Coruña hasta Valencia, desde San Sebastián hasta Málaga, la huelga se extendió por todas las grandes ciudades. En Madrid, algunos trenes, tranvías y autobuses eran conducidos por militares, pero no existía ningún otro tipo de comunicación, ni correo, y, salvo los periódicos independientes *El Debate* y *ABC*, no había periódicos. Se impuso censura a los telegramas informativos y se recomendó encarecidamente a los ciudadanos que no salieran entre las ocho de la tarde y el amanecer —un gran sacrificio, sin duda, para los españoles—. Por el momento, sin embargo, no había violencia, y pocos habrían imaginado que en veinticuatro horas dos de los distritos más poblados de España se verían inmersos en la revolución más violenta.

En Barcelona, donde la huelga general había transcurrido con total tranquilidad, la revolución llegó sin previo aviso. La noche del 5 de octubre, Companys emitió un llamamiento a la calma, declarando que la Generalitat defendería «la libertad de Cataluña y la esencia democrática de la República». El significado de esto quedó claro el 6 de octubre, cuando, tras un día de crecientes rumores, el Presidente de la Generalitat apareció en el balcón del Palacio, como lo había hecho su predecesor tres años y medio antes, proclamó el Estado catalán como parte de la «República Federal Española» e invitó a los líderes «antifascistas» de España a establecer el Gobierno Provisional de un nuevo régimen en Barcelona.¹⁶³

«¡Catalanes! —gritó a la multitud que se agolpaba en la Plaza de San Jaime, a sus pies— ¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que desde hace tiempo intentan traicionar a la República han logrado su objetivo y se han hecho con el poder...

»Los recientes acontecimientos han dejado a todos los ciudadanos con la clara impresión de que la República, en lo que respecta a sus principios democráticos fundamentales, se encuentra en un peligro extremadamente grave.

»Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales más avanzados, sin distinción ni excepción, se han alzado en armas contra esta audaz maniobra de los fascistas.

» Cataluña, liberal, democrática y republicana como es, no puede permanecer al margen de esta protesta, triunfante en todo el territorio, ni puede guardar silencio ni dejar de proclamar su solidaridad con quienes, como ella, luchan en los países hispánicos, incluso hasta la muerte, por la libertad y la justicia. Cataluña alza su bandera y llama a todos a cumplir con su deber y a rendir obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que rompe toda relación con estas instituciones adulteradas desde este momento.

163 Cf. el artículo citado más arriba: «Catalonia and the Sixth of October» (*Contemporary Review*, December 1934, pp. 671–6).

»En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las funciones del poder en Cataluña, proclama el Estado catalán de la República Federal Española y, restableciendo y fortaleciendo sus relaciones con quienes dirigen esta protesta general contra el fascismo, los invita a establecer el Gobierno Provisional de la República en Cataluña.

»¡Catalanes! La hora es grave y gloriosa. El espíritu del presidente Macià, restaurador de la Generalitat, está con nosotros. Que cada uno ocupe su puesto, y que Cataluña y la República estén en el corazón de todos.

»¡Larga vida a la República y larga vida a la Libertad!»¹⁶⁴

¿Qué decían estas palabras, que no es mera formalidad describir como sinceras y elocuentes, a la multitud que las escuchaba al pie del Palacio? Ciertamente, describían una situación muy distinta a la real. Al oírlas, uno habría supuesto que un nuevo Primo de Rivera había proclamado una dictadura fascista en España, que todo el país se había alzado en armas contra él y que el enemigo estaba siendo rechazado por los republicanos leales a la Constitución de 1931. Lo que realmente había sucedido era que en un gobierno republicano reconstruido se habían incluido tres miembros del grupo con mayor representación en las Cortes constitucionalmente reelegidas en las últimas elecciones generales. La CEDA, de hecho, no era una organización monárquica ni monarquizante; mucho menos fascista. En ningún sentido la «protesta» había sido «triumfante en todo el país», a menos que el mantenimiento de una huelga de veinticuatro horas pudiera describirse como triunfo, en cuyo caso los «auténticos republicanos» del bienio socialista habían sido derrotados con bastante frecuencia. Todo esto, aunque quedó bastante claro al cabo de un día, podría haber pasado desapercibido para una multitud acrítica, fuertemente influenciada y profundamente conmovida por un discurso que apelaba a su patriotismo. Pero incluso ellos debieron comprender que, dado que la Constitución de 1931 rechazaba expresamente el federalismo, quienes incurrían en deslealtad a la Constitución eran aquellos que no sólo defendían la idea federalista en sus discursos, sino que intentaban imponerla incitando a otros a tomar las armas.

Hay mucho que decir al respecto, pero también es importante recalcar que el objetivo de la rebelión de Barcelona no era, como se ha alegado con frecuencia, ningún tipo de separatismo. Quizás nunca sepamos con exactitud qué impulsó a Companys a este acto insensato de rebelión: en aquel momento, algunos de sus amigos afirmaron que ciertos extremistas le habían amenazado con matarlo si se resistía a la acción a la que lo instigaban. Sea como fuere, no cabe duda de que creía estar salvando el principio republicano en España. Desde luego, nunca tuvo la idea de crear una República independiente en Cataluña. El poeta y consejero de Educación de la Generalitat, Gassol, que a continuación le siguió en su discurso al pueblo, lo dejó perfectamente claro. «Este movimiento en defensa de la República del 14 de abril» —así lo llamó, y no de la República del 6 de octubre.

Tras los discursos, siguieron los hechos. En 1931, el Ejército había vacilado durante algunas horas y los hombres habían esperado con ansiedad para saber si apoyaría al nuevo régimen o forzaría una guerra civil. Esta vez, decían los revolucionarios, no debía haber demora en la toma del Ejército; y, como los altos mandos estaban ahora en manos de catalanes, probablemente anticipaban poca oposición. Companys mandó llamar al general Batet, quien, al proclamar la ley marcial, había expresado su esperanza «como catalán, como español y como hombre» de que no hubiera combates, y le pidió que jurara lealtad al nuevo régimen federal.

Eran casi las nueve de la noche y el Ayuntamiento estaba a punto de reunirse para aprobar una resolución de adhesión a Companys. El general Batet pidió tiempo para reflexionar sobre el asunto. Se marchó y regresó a las diez y media con una decisión sencilla pero significativa:

«Estoy con España».

164 Para el texto completo en catalán de los discursos de Companys y de Gassol, véase *B.S.S.*, 1935, vol. XII, págs. 11-12.

Sus tropas ya controlaban la amplia y céntrica Plaza de Catalunya. Companys, ante la llamada a rendirse, se negó y, antes de medianoche, comenzaron los combates. Salvo lo necesario para la defensa o el restablecimiento del orden, el ataque se limitó al Palacio de la Generalitat, que había sido fortificado con ametralladoras y fusiles, y que fue atacado con morteros y aviones. Sólo podía acabar de un modo el combate contra unos rebeldes que contaban con tan escaso apoyo popular. Poco después de las 6 de la mañana del 7 de octubre, Companys y el resto de los concejales (excepto Dencás, que, junto con un compañero, había logrado escapar, parece ser que por una alcantarilla) se rindieron incondicionalmente al general Batet y, junto con el alcalde de Barcelona, fueron llevados a un barco del gobierno anclado en el puerto y encarcelados allí.

Así, en doce horas, terminó el desafortunado intento de Companys de liderar una revolución. Es cierto que durante cuarenta y ocho horas los rebeldes hicieron varios intentos por reagruparse, se oyeron disparos intermitentes de francotiradores y ametralladoras en Barcelona, y los *rabassaires* causaron disturbios esporádicos en el campo. Pero, en esencia, la revuelta se desmoronó tras la rendición de Companys y no hubo un temor serio a que resurgiera.

Todavía queda un hecho importante por aclarar: Azaña se encontraba, por aquel entonces, en Barcelona. ¿Fue fruto del azar o de una estrategia premeditada? La mayoría pensaba entonces, y muchos aún lo creen, que los rebeldes lo habían designado presidente de la República Federal, y el hecho de que fuera arrestado y encarcelado aumentó esa sospecha, aunque algunos la desacreditaron posteriormente. Pero no cabe duda de que su presidencia habría brindado a dicha República la mejor oportunidad de éxito, especialmente en Cataluña, donde siempre ha sido un héroe. Para los catalanes del 6 de octubre, no era el promotor de la odiada Ley de Defensa de la República, el enemigo de las Órdenes religiosas, el principal agente de las deportaciones a África ni la figura siniestra detrás de las masacres de Casas Viejas. Era un «puro republicano» y amigo de Cataluña. Había sido firmante del Pacto de San Sebastián en 1930. En 1931 había contribuido a allanar el camino entre Barcelona y Madrid. En 1932, como presidente del Gobierno de España, había defendido el Estatuto de Autonomía durante los cuatro meses de lucha en las Cortes. ¿Acaso sorprende que, tras su aplastante derrota electoral, los catalanes, siempre un pueblo caballeroso, le permanecieran fieles? En el poder, había dominado las Cortes, y estas lo admiraban; ahora, impotente en Madrid, les resultaba aún más necesario, y (como puedo atestiguar por experiencia propia) quienes en 1931 habían expresado recelos ante la posibilidad de una dictadura roja, en la primavera de 1934 contemplaban con complacencia, si no con entusiasmo, una dictadura de Azaña.

La rebelión en Asturias —o, más exactamente, el breve periodo de guerra civil¹⁶⁵— fue más tenaz y desastrosa que la de Barcelona, y resulta más difícil de describir, dado que la censura de prensa fue estricta y los relatos de los combates que se publicaron son diversos y, en ocasiones, contradictorios. De ningún acontecimiento ocurrido durante la vida de la República se contaron historias más terribles e increíbles, por ambas partes, de tortura y asesinato a sangre fría, mutilación, destrucción gratuita, violación e incendio provocado, tan horribles que hacían creer que, de ser ciertas, España había regresado a la barbarie. Parece improbable que buena parte de todas las noticias fueran ciertas: nunca procedían de testigos presenciales, sino siempre de quienes a su vez las habían escuchado de testigos presenciales. Pero que todas fueran falsas, o incluso exageradas, es igualmente improbable, y esto por varias razones. En primer lugar, algunas de ellas fueron confirmadas por escrito por varios testigos independientes, o por individuos que, aunque ciertamente partidistas, difícilmente serían desmentidos en cuestiones de hechos concretos. En segundo lugar, un gran número de casos de presunta crueldad por parte de la Guardia Civil y otras fuerzas del orden quedaron plasmados en dos documentos presentados al Presidente de Gobierno, cada uno por un destacado político de izquierdas (Gordón Ordás y Álvarez del Vayo), con nombres, fechas y firmas de testigos. En tercer lugar, los ultrajes denunciados por ambas partes en Asturias, si bien a una escala mucho mayor, son sorprendentemente similares a los relatados en relación con

165 Véase: Manuel Chaves Nogales, [Crónicas de la Revolución de Asturias](#). (Clásicos de Historia)

Castilblanco y Casas Viejas, todos ellos probados, mediante investigación independiente, más allá de toda duda razonable. No existe, por supuesto, justificación alguna ni para las atrocidades cometidas por los rebeldes ni para la brutalidad de quienes los reprimieron, y es lamentable el uso partidista que se les ha dado. Más aún, es lamentable que hayan podido ocurrir.

Aunque los detalles de la rebelión asturiana pueden ser difíciles de determinar, su desarrollo general es bastante claro. El mismo día de la huelga general, estallaron disparos y explosiones sin previo aviso en Oviedo, y la concentración de rebeldes en las colinas y minas de Asturias obligó al Gobierno a desplegar los refuerzos más numerosos posibles. Sin embargo, no llegaron a tiempo para impedir un ataque decidido contra Oviedo. Allí, las tropas leales se vieron obstaculizadas por el elemento que le faltó a la revolución en Barcelona: el apoyo popular. Una y otra vez, como por ejemplo cuando marcharon al rescate de la sede del Gobernador Civil, atacada por los rebeldes, se encontraron bajo fuego de francotiradores desde casas particulares, por lo que no les quedó más remedio que replegarse a los cuarteles, desde donde partieron grupos para tomar posiciones estratégicas en la ciudad. Para el 7 de octubre, se calculaba que los rebeldes sumaban unos seis mil, todos ellos completamente armados y provistos de tanques, ametralladoras, vehículos blindados y grandes cantidades de dinamita.

Durante los tres días siguientes, Oviedo fue escenario de continuos combates. Tan pronto como las tropas eran expulsadas de hoteles, tiendas o bancos, los rebeldes intentaban incendiarlos, y además atacaron o quemaron numerosos edificios, entre los que destacan el Banco Asturiano, el Instituto de Enseñanza Media, la Universidad y la Catedral. La destrucción casi total de la Universidad y la demolición de la famosa Cámara Santa de la Catedral fueron dos de las acciones violentas más desastrosas que la República había presenciado hasta entonces.

Durante estos días de batalla en Oviedo, el general López Ochoa, al mando de las tropas leales en Asturias, libraba una feroz batalla con menos de cuatrocientos hombres cerca de la pequeña localidad de Avilés, a unos veinticuatro kilómetros al noroeste. Tan pronto como los rebeldes fueron derrotados allí, se apresuró a reforzar a sus hombres en Oviedo, pero la destrucción de puentes y el bloqueo de la carretera con troncos retrasaron enormemente su avance. Su regimiento se encontró con una grave escasez de provisiones y completamente sin agua. La llegada de refuerzos, sin embargo, elevó su moral y el día 13 la ciudad fue tomada.

Es fácil imaginar las pérdidas y la devastación causadas por los combates de la semana. Meses después, el Gobierno publicó cifras oficiales que mostraban un total de 1.335 muertos, de los cuales 1.051 eran civiles, 100 oficiales y soldados de la Guardia Civil, 98 soldados y 86 policías y agentes de aduanas. Los heridos ascendieron a 2.951, de los cuales algo más de dos tercios eran civiles. Los edificios destruidos o dañados por el fuego sumaron 730. Entre las armas y municiones capturadas se encontraban 89.000 fusiles, 33.000 pistolas y 350.000 cartuchos.

El testimonio de los observadores resulta aún más doloroso. «Oviedo —escribió un corresponsal de *ABC*— da la impresión de ser una de las ciudades en ruinas de la Gran Guerra.» Y *El Sol*, siempre moderado en sus declaraciones, describe la escena en un pasaje del que se pueden

«En toda la ciudad se aprecian huellas de la furia que la ha asolado. La calle de Uría, la principal de Oviedo, una vía aristocrática tanto por su arquitectura como por el tamaño y la calidad de sus comercios, presenta la deprimente perspectiva de una interminable hilera de casas totalmente destruidas... Cafés, oficinas, tiendas: no queda nada de ellas... Las calles principales, donde se ubicaban la Audiencia, el Instituto, el Gobierno Civil, la Universidad, el Hotel Covadonga: todas están destruidas... Algunas calles tendrán que reconstruirse por completo... Sólo en la Plaza de la Escandalera y el Campo de San Francisco, la Cruz Roja recuperó 475 cadáveres... Ha habido guerra en España y la ciudad devastada por ella ha sido Oviedo.»¹⁶⁶

166 *El Sol*, 23 de octubre de 1934.

Se estimaba que la completa recuperación de la rebelión asturiana duraría no meses, sino años. En lo que respecta a la destrucción de propiedades, se abrieron listas de suscripción y se otorgaron subvenciones con la mayor celeridad posible. Pero es más fácil destruir que construir; el costo de reconstruir la Universidad, por sí solo, superó el millón de pesetas, y la ciudad en ruinas se convirtió en objeto de la compasión europea. Las cuestiones de responsabilidades y sanciones eran aún más graves, pues no sólo las autoridades tenían opiniones diferentes en aquel momento, sino que, tras las elecciones de 1936, prevalecieron otras políticas distintas a las del centro-derecha, y gran parte de lo que se había hecho se deshizo, con consecuencias aún más desastrosas que cualquiera que la desafortunada España hubiera sufrido hasta entonces.

El resultado final de la rebelión, que comúnmente se describió como organizada por el Partido Socialista y cuyo costo ascendió a alrededor de un millón de libras esterlinas, fue frustrar el propósito mismo para el que se había planeado. Por un lado, los líderes de la izquierda, especialmente Azaña y Largo Caballero, fueron encarcelados; muchos concejales de izquierda, e incluso ayuntamientos enteros, fueron destituidos; el Ateneo de Madrid fue clausurado; y los periódicos de izquierda de Barcelona (aunque no los de Madrid, que permanecieron en absoluto silencio) fueron suspendidos. Por otro lado, el Gobierno no sólo se mantuvo constituido, sino que la popularidad de todos los partidos de derecha creció exponencialmente. Tanto el partido fascista, liderado por el hijo de Primo de Rivera, el joven marqués de Estella, como el partido monárquico, conocido como Renovación Española, ofrecieron sus servicios incondicionalmente al Gobierno para prevenir o reprimir cualquier nuevo levantamiento.

Durante semanas, los ministros viajaron de Oviedo a Barcelona para investigar la situación, mientras que la incautación de armas se extendía por los distritos más remotos de la Asturias rural. En Barcelona, a medida que se producían detenciones menores, el buque prisión en el puerto se llenaba cada vez más, y la creciente cantidad de detenidos como sospechosos pronto incluyó funcionarios, intelectuales, profesores universitarios e incluso al rector de la Universidad de Barcelona. La transferencia de poderes a la Cataluña autónoma, que se había estado desarrollando con mucha lentitud, llegó a su fin; su administración local volvió a centralizarse en Madrid; y los catalanes amantes de la paz, que habían sido intensamente leales a la República en las buenas y en las malas, descubrieron con humillación que la imprudencia de los líderes en quienes habían confiado les estaba costando, por el momento, sus libertades.

Durante dos meses, toda España permaneció bajo la ley marcial, e incluso al final de ese período, el estado de alarma la sustituyó muy gradualmente, provincia por provincia. En realidad, las restricciones de la ley marcial se relajaron considerablemente y los turistas a menudo recorrían todo el país sin percatarse de la anormalidad de la situación. Las medidas adoptadas fueron preventivas: jamás se habría podido arriesgar otro levantamiento como el de octubre. De hecho, los meses de invierno de 1934-1935 fueron de los más pacíficos en la historia de la República. Las fuerzas de la agitación se habían agotado; las huelgas prácticamente habían cesado; y el Gobierno comenzó a hablar de nuevo de celebrar las elecciones municipales, largamente aplazadas.

Pero si bien fue muy escasa la violencia revolucionaria, sí hubo frecuentes y feroces conflictos de opinión, el primero de los cuales giró en torno al futuro de Cataluña. Tras la rebelión, el Gobierno central, como era de esperar, tomó el control de los servicios esenciales de la región, como la policía, la recaudación de impuestos y la administración de justicia. Los opositores a la autonomía catalana, que habían luchado con tanta determinación contra el Estatuto dos años antes, contaban ahora con una fuerte representación en las Cortes y tenían toda la intención de aprovechar su ventaja. Los monárquicos exigieron la anulación total del Estatuto: tales rebeliones, dijeron, como las que se acababan de presenciar se repetirían una y otra vez hasta que los extremistas catalanes lograran la separación completa. Los defensores del Estatuto, entre los que se encontraban los radicales, escucharon con respeto y aprobación un notable discurso de Sr. Cambo, líder de la Lliga Catalana conservadora, quien bajo la Monarquía había sido protagonista de la causa de la

autonomía, había perdido credibilidad y se había visto obligado a abandonar España con la llegada de la República, pero había regresado recientemente a la vida política y, con el declive de la Esquerra, ocupaba ahora su lugar natural en las Cortes. Argumentó, con toda razón, que no era Cataluña en su conjunto, sino la Esquerra, la que había perjudicado el Estatuto, y que se podía confiar en que la Lliga lo administraría con lealtad. No había habido más que enemistad, dijo, entre la Esquerra y la Lliga. «Durante tres años nos han humillado e insultado. Cuando la policía examinó los documentos del Sr. Dencás, encontró una lista de veintiocho personas que serían fusiladas si la rebelión triunfaba. Yo era una de ellas.»

Esta exposición del asunto causó gran impresión, y en pocos días los diputados de la CEDA, resistiendo los intentos de los monárquicos de captar sus votos para la anulación del Estatuto, llegaron a un acuerdo con los radicales en los términos que finalmente prevalecieron. El Estatuto no se revisaría, sino que permanecería en suspenso hasta que las Cortes decidieran iniciar su restauración gradual. Se nombraría un Gobernador General para asumir las funciones de Presidente de la Generalitat durante el período de transición, y, una vez finalizado éste, el Gobierno seguiría teniendo el derecho a nombrar un delegado que lo representara. Lamentablemente, el compromiso no fue aceptable para la Lliga, pero, considerando la conmoción que el intento de golpe de Estado de Dencás había causado en la opinión pública, probablemente fue la solución más favorable que podían haber esperado.

Hacia finales de año se produjeron varias dimisiones en el Gobierno, y durante el receso navideño se reconstituyó, con una representación partidista muy similar a la anterior. Sin embargo, estos cambios no lograron acallar los rumores de que los cedistas y los agrarios reclamaban más carteras ministeriales y de que los miembros del Gobierno estaban profundamente divididos sobre la cuestión de las penas de muerte impuestas por los tribunales militares a los cabecillas de la rebelión asturiana.

Los cargos contra Azaña habían sido desestimados y, aunque posteriormente sería arrestado de nuevo, fue puesto en libertad. Sin embargo, varias personalidades conocidas figuraban entre los condenados por los tribunales, y los rumores, avivados por el descontento, difundían con rapidez historias sobre el trato recibido durante su cautiverio. Uno de ellos, Teodomiro Menéndez, diputado socialista, había intentado suicidarse en prisión, un hecho que el partido socialista aprovechó con creces. La clave del asunto, no obstante, residía en el número de condenas a muerte dictadas por los tribunales militares y en la postura que adoptaría el Gobierno. Al principio, sólo había dos o tres condenas, pero el número fue aumentando paulatinamente hasta que, a finales de marzo, descontando ocho que habían sido conmutadas dos meses antes y dos que ya se habían ejecutado, el total ascendía a veinte.

¿Qué decidiría el Gobierno: indulto o ejecución? Obviamente, dado que la opinión pública estaba tan dividida en el país como en las Cortes, cualquier decisión que se tomara sería errónea a ojos de una gran parte de la sociedad, y la cuestión se redujo principalmente a una cuestión de conveniencia. Los «mártires» de 1930 debieron aparecer en los sueños de los ministros como espectros que les advertían de no repetir los errores de la monarquía. Sin embargo, por otro lado, ¿no cabía esperar que volvería a estallar una revolución si sus cabecillas quedaban impunes a pesar de sentencias probadas, pensando que seguramente serían revocadas en cuanto la izquierda volviera al poder?

Tarde o temprano había que tomar una decisión, y su resultado fue la caída del Gobierno. Los radicales favorecían la conmutación de las penas; los ministros cedistas, agrarios y liberal-demócratas votaron por la ejecución. Al no alcanzarse un acuerdo, se anunció la decisión mayoritaria de conmutar las penas, y los ministros de la minoría presentaron inmediatamente su dimisión.

El establecimiento o la dimisión de un Gobierno en España siempre se ha denominado «crisis», pero la situación que se presentó entonces era una crisis tanto en el nombre como en la

realidad. La derecha seguía presionando para aumentar su representación: Gil Robles, de hecho, exigía un mínimo de seis carteras ministeriales sólo para su partido. Sin embargo, desde el punto de vista de los radicales, había muchas más razones que antes para resistir estas demandas. El presidente de la República hablaba amablemente de formar un «Gobierno de concentración y concordia», pero no se encontraba a nadie capaz de semejante hazaña y, tras casi una semana de incertidumbre, se llegó a la solución más insólita: Lerroux formó un gabinete minoritario de trece miembros de su propio partido, de los cuales nada menos que ocho no tenían escaño en las Cortes.

Evidentemente, un gobierno así tenía pocas posibilidades de sobrevivir, y todos los partidos comenzaron a hablar de nuevas elecciones generales. Afortunadamente, quizás, la atención pública se desvió de la política con las celebraciones del aniversario del 14 de abril, marcadas por la condecoración de los dos generales que habían sofocado los levantamientos de octubre y por la suspensión de la ley marcial en las zonas de España donde aún estaba vigente. Durante días después de las celebraciones, la prensa no tuvo nada que informar salvo sobre las reuniones entre los líderes de los partidos. Entonces, exactamente un mes después de su formación, llegó la tan esperada noticia de la dimisión del Gobierno minoritario. Sin duda, había sido un experimento ridículo, y Samper debió sentir que su propio desempeño poco glorioso en las Cortes había sido superado por su antiguo líder. Porque este Gobierno había muerto casi al nacer: no solo no había esperado a ser derrotado, como debía ser, en su primera votación, sino que ni siquiera se había mantenido en el poder el tiempo suficiente para reunirse con las Cortes.

IV. MAYO DE 1935-FEBRERO DE 1936.

Juicio a los consejeros catalanes. Proyectos de reforma constitucional y económicos. Disolución de las Cortes. Manifiesto electoral del Frente Popular

Los partidarios de la Ceda, que desde los levantamientos de octubre habían crecido enormemente en número y prestigio, creían ahora tener su oportunidad. Argumentaban que las «grandes masas neutrales» estaban sin duda de su lado, profundamente indignadas por el derramamiento de sangre y la destrucción causados por los rebeldes extremistas, y reconocían en la CEDA la garantía más segura de la paz futura. Consideraban que el líder radical se había convertido en el hazmerreír con su gobierno de treinta días, que se había desprestigiado como un reloj viejo que nadie cree que valga la pena volver a poner en marcha. El presidente de la República difícilmente podría dejar de recurrir ahora a Gil Robles: la única alternativa sería la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Así que se extendió el lema: «¡Gil Robles o elecciones!», que significaba, según los cedistas, «¡Gil Robles o caos!» Pero, una vez más, ocurrió lo inesperado: la crisis se resolvió en veinticuatro horas, y la solución no fue ni Gil Robles ni unas elecciones generales, sino otra coalición de centro-derecha liderada por el imperturbable «Don Ale».

El único consuelo que los cedistas pudieron encontrar en su decepción fue que su líder estaba en el nuevo Gabinete como Ministro de Guerra y cuatro de sus seguidores lo acompañaban. El equipo, cuidadosamente mezclado, incluía sólo a tres radicales, y los demás integrantes, además de los cinco cedistas, eran dos agrarios, dos independientes y un liberal demócrata. El Presidente de Gobierno, con humor inconsciente, lo describió como un gobierno no partidista centrado únicamente en una política constructiva. El país supo, sin embargo, con cierta inquietud, que el punto principal de la política constructiva, aparte de la presentación del segundo presupuesto, que se había pospuesto tanto que nadie creía en él, era la reforma de la Constitución de 1931. Incluso a muchos que no les gustaba esa Constitución les preocupaba descubrir que se añadiría a los ya numerosos temas de controversia que los acontecimientos y una rápida sucesión de gobiernos habían lanzado de un lado a otro como una pelota de tenis. Cualquier intento de introducir enmiendas decisivas, argumentaban, sin duda se prolongaría tanto y causaría tantas crisis que, antes

de que el procedimiento se completase, se produciría la reacción política y la izquierda volvería al poder. Y ésta desharía todo lo que se hubiese efectuado, y quizás propondría enmiendas en dirección contraria a las ahora planteadas. El panorama no era nada alentador.

Sin embargo, otros asuntos acapararon la atención del Gabinete y del país antes de que pudiera llevarse a cabo una política práctica. El primero fue Cataluña. Un decreto firmado en abril había restituido una autonomía estrictamente limitada, junto con muchos de los servicios públicos que le habían sido retirados; la principal función, sin embargo, seguía dependiendo totalmente del Gobierno central: el orden público. Un mes después, los nuevos consejeros de la reformada Generalitat —una coalición de Lliga, CEDA y Radicales— asumieron sus cargos. Por entonces iba a tener lugar el juicio ante el Tribunal de Garantías, de Companys y sus seis compañeros, cada uno de los cuales, por mayoría de 14 votos contra 7, fue condenado a treinta años de prisión, sin que llegara a considerarse la pena de muerte. Companys pronunció un discurso excelente y convincente en su propia defensa, negando que hubiera existido pacto alguno entre catalanes, vascos y gallegos, o que se hubiera pensado en Azaña para la presidencia de la República Federal, y asumiendo, de la manera más caballerosa posible, toda la responsabilidad.

Dos informes minoritarios atenuaron considerablemente el alcance de la sentencia, especialmente uno firmado por cinco magistrados disidentes que argumentaron que, dado que lo único que los acusados habían deseado era la sustitución del gobierno unitario por uno federal, difícilmente podía afirmarse que hubieran conspirado contra el régimen. Pero, por plausible que fuera, el argumento no los salvó; a finales de junio estaban recluidos en prisiones para condenados: tres en Puerto de Santa María, cerca de Cádiz, y el resto en Cartagena.

Tras el juicio de los conspiradores catalanes, se celebró el segundo juicio contra Sr. Azaña, quien junto con su antiguo compañero Casares Quiroga había sido acusado en febrero, en un documento procedente de la derecha, de alentar a revolucionarios portugueses y de conspirar de diversas maneras contra la República. Al mes siguiente, las Cortes celebraron un debate de dos días sobre los cargos, que, en una Cámara con apenas la mitad de sus miembros, resultó en un voto adverso de 194 a 49. El propio Azaña refutó las acusaciones en un discurso de casi cuatro horas, refiriéndose con profunda emoción a la campaña que se había estado librando contra él «durante siete meses una campaña de persecución personal sin precedentes en la historia», como la caracterizó con perdonable exageración.¹⁶⁷ Una comisión designada por las Cortes para examinar las acusaciones las declaró probadas después de tres meses, por nueve votos contra cinco, pero las Cortes, a las que fueron remitidas para su ratificación por mayoría absoluta, les otorgaron sólo 189 votos contra 68, por lo que no se aprobaron. Este debate de una sola sesión, repleto de personalidades e incidentes descritos por la prensa como «ruidosos y pintorescos», marcó el punto más bajo alcanzado por el crédito y la popularidad de Azaña. A partir de ese día, por una de esas extraordinarias reacciones barométricas tan difíciles de predecir o explicar, su popularidad aumentó continuamente, hasta que, sin lugar a dudas, superó la de cualquier otro personaje público en España desde el comienzo de la República.

Dos temas, la reforma constitucional y la economía pública, acapararon el interés público hasta finales de julio, cuando las Cortes se dispusieron a un receso de dos meses. El primer punto reviste gran interés, pues, si bien los acontecimientos impidieron su materialización, ofrece una idea de lo que el centro-derecha habría hecho de haberse mantenido más tiempo en el poder. La Constitución de 1931 había sido redactada por una Cámara fuertemente influenciada por el sentimiento antitradicional y lo que el Gabinete describió acertadamente como «fervor especulativo». Dado que, por lo tanto, preveía su propia revisión cuatro años después de su promulgación (es decir, después del 8 de diciembre de 1935), por no más de una mayoría absoluta de las Cortes, no cabía duda de que se intentaría la revisión. Ya en enero de 1935, el Presidente Alcalá Zamora, cuya mente jurídica se esforzó por mantener una actitud objetiva, había presentado

167 Cf. B.S.S., 1935, Vol. XII, p. 128.

un informe detallado a sus ministros sobre el funcionamiento de la Constitución durante los tres años que llevaba promulgada. Dado que al menos tres cuartas partes de los diputados en las Cortes debían estar a favor de la revisión, parecía haber pocas dudas de que el informe del Presidente tenía esto en mente y que la revisión se llevaría a cabo debidamente durante el invierno siguiente.

A mediados de verano, el Gabinete publicó un documento que resumía sus propias propuestas. Estas incluían la modificación de los artículos sobre autonomía regional; la supresión del artículo socialista que autorizaba las expropiaciones de propiedad privada, «que ha demostrado ser una amenaza y una causa de inestabilidad, sin aportar ningún beneficio compensatorio»; la redefinición de las funciones del Estado como instructor e inspector de la educación; y la restauración del Senado, ya que se admitía en general que el sistema unicameral había sido un fracaso. Se impediría a los diputados de los parlamentos de las regiones autónomas formar parte de las Cortes de la República. El Tribunal de Garantías Constitucionales fue señalado para su reforma; se consideraba que tenía un carácter demasiado político, y sus miembros, incluso sus presidentes, habían sido elegidos según su afiliación partidista, en lugar de por sus capacidades jurídicas y prestigio personal. Se propusieron cambios importantes que afectaban a las atribuciones del presidente, a las amnistías para delitos políticos y a la disolución de las Cortes. Se planteó alguna modificación de los artículos sobre la cuestión religiosa, sin que, sin embargo, se sugiriera una ruptura con la concepción original del Estado laico. El artículo sobre el matrimonio y el divorcio se describió como demasiado radical y con una influencia insatisfactoria en la vida familiar. Estos extractos de las propuestas del Gobierno dejan claro que, de no haber cambiado la situación política, España se habría enfrentado a un periodo de debate largo y posiblemente tormentoso, y mucho habría dependido del carácter de las nuevas Cortes Constituyentes.

El segundo asunto que el Gobierno planteó al país durante el verano fue su enérgico programa de economía pública. Durante años, la presentación de un presupuesto había sido objeto de frecuentes debates en las Cortes, pero no se había hecho nada más allá de hablar de ello. Los sucesivos ministros de Hacienda, entre ellos el señor Marraco, un destacado banquero, habían instado a la presentación inmediata de un presupuesto, pero se vieron desanimados por la inactividad de sus colegas o por las súplicas de los exministros de Hacienda, quienes argumentaban que tal medida sería imposible.

Pero el Gobierno entonces en el poder contaba con un nuevo ministro de Hacienda, Chapaprieta, un hombre calificado de «independiente», quien decidió que debían realizarse esfuerzos para aplicar medidas de ahorro inmediatas, que debía presentarse un presupuesto en octubre de 1935 y que, aunque éste tuviera que arrojar necesariamente un déficit considerable, el presupuesto para 1936-1937 debía estar equilibrado. No se había presentado ningún presupuesto desde 1932; lo más parecido a ello fue la declaración del ministro de Hacienda de que el déficit aproximado para 1934-1935 rondaba los 750 millones de pesetas —unos treinta millones de libras esterlinas y, al tipo de cambio actual, unos veinte millones.

El Ministro se enemistó con los cedistas y el Gabinete se disolvió en medio del desorden. Dejó el cargo con gran alboroto, afirmando en una carta al Presidente de la República que en siete meses había ahorrado al país doscientos millones de pesetas y que su único fracaso se debió a la falta de cooperación de sus compañeros. Sin duda tenía razón: la cooperación nunca ha sido el punto fuerte de España y las reformas financieras generan muchos enemigos. Huelga decir que no se volvió a saber nada del presupuesto ni de la Ley de Restricciones. En cuanto a las elecciones municipales, largamente postergadas, parecían más lejanas que nunca.

La situación política era ahora tan complicada como lo había sido durante muchos años. Esta fue la sexta crisis de gabinete en doce meses y (según *ABC*, que difícilmente habría pasado por alto alguna de ellas) la vigésimo sexta desde el establecimiento de la República. Duró una semana entera. Casi todos los que eran capaces de formar gobierno rechazaron el honor. El líder radical estaba en entredicho; el líder agrario prefirió mantenerse en un segundo plano; el primer ministro

saliente se negó a seguir participando en la formación de gabinete. En cuanto a Gil Robles, hacía tiempo que había dejado de hablar de «asumir» el cargo, y las grandes masas neutrales debían de haber decidido ya que era improbable que encabezara un gobierno hasta que la República cambiara de presidente. No parecía haber esperanza de ningún progreso: era mediados de diciembre y el país llevaba estancado desde principios de otoño. Unas elecciones generales parecían la única solución, y quizás, dado que España estaba tranquila, este sería un buen momento.

Así pues, el presidente eligió una figura decorativa como nuevo primer ministro, y eligió una de magnífico aspecto. Manuel Portela Valladares, otrora Gobernador Civil de Barcelona y, más recientemente, durante el régimen transitorio, Gobernador General de Cataluña, era un hombre distinguido y honrado, de mirada inquisitiva y con una abundante cabellera blanca: la persona ideal para lucir bien en las numerosas fotografías que se publicarían en la prensa durante el periodo electoral. A su alrededor reunió a nueve ministros: Chapaprieta (irónicamente) volvió al frente de Hacienda; el líder agrario en el Ministerio de Estado; un general en el Ministerio de Guerra; un almirante al frente de la Marina; y un grupo heterogéneo de radicales e independientes no cedistas para ocuparse del resto. El equipo no era tan profundo como un pozo, ni tan amplio como la puerta de una iglesia, pero serviría...

Por muy decepcionantes que resultaran todos estos cambios para el desafortunado país, la situación se estaba volviendo, en realidad, bastante cómica. Las carteras ministeriales cambiaban de manos con tanta frecuencia que resultaba difícil seguirles el ritmo. He aquí, por ejemplo, el caso del nuevo Ministro de Guerra, el General Molero. Mientras comandaba pacíficamente la Séptima División en Valladolid, fue convocado de urgencia para asumir una cartera por Miguel Maura, uno de los numerosos candidatos del Presidente para jefe de gobierno. Al llegar lo antes que pudo, descubrió que Maura no había logrado formar un Gabinete y que su sucesor tenía otro nominado para el Ministerio de Guerra. En consecuencia, en lugar de convertirse en Ministro de Guerra, fue arrestado por abandonar su puesto sin permiso, y encarcelado en la correspondiente fortaleza. Pero apenas llegó allí, habiendo logrado Portela formar un Gobierno donde otros habían fracasado, decidió que el General sería una figura decorativa tan útil como podía desear. Así pues, el General salió de prisión para suceder al Ministro de Guerra.

Para colmo, el Gobierno dimitió tras quince días en el cargo, y el mismo líder tuvo que proporcionar una nueva figura. «Ayer —escribió *ABC* el 31 de diciembre de 1935, con justificado sarcasmo —llegó la séptima y última crisis política del año; decimos la última, pues suponemos que difícilmente habrá otra antes del anochecer.» En los cincuenta y siete meses de vida de la República, calculaba, había habido veintiocho gobiernos, con una duración media de poco más de dos meses cada uno. ¡Era peor que la situación que existía bajo la Monarquía antes de la llegada de la Dictadura! Y no faltaron quienes llevaron la conclusión aún más lejos.

No hace falta decir nada sobre la nueva figura, pues el interés de la historia cambia repentina y dramáticamente, y, casi por última vez en su carrera, la atención se centra en los rasgos benévolos del Presidente Alcalá Zamora. ¿Firmaría el Presidente el decreto aprobado por el anterior Gabinete que disolvía las Cortes? De ser así, sería la última oportunidad que tendría de hacerlo antes de finales de 1937, fecha en la que normalmente terminaría su mandato, pues ya las había disuelto una vez y la Constitución solo le concedía dos oportunidades. Si se negara a firmarlo, ¿qué esperanza de paz política o progreso social podría haber para España, sumida como estaba en una situación precaria con gobiernos minoritarios y coaliciones de lo más inestables? Unas elecciones, por supuesto, bien podrían reproducir la misma situación que España ya había tenido que tolerar durante dos largos años, pero, por otro lado, podrían devolver a la derecha o a la izquierda con un mandato claro.

Evidentemente, Alcalá Zamora necesitaba tiempo para reflexionar, pues aunque al día siguiente (1 de enero de 1936) firmó un decreto, este sólo suspendía las sesiones de las Cortes durante un mes en lugar de disolverlas. Seis días después, tomó una decisión y, mediante un decreto

con un extenso preámbulo en el que expuso sus motivos, disolvió las Cortes y fijó el 16 de febrero para las elecciones generales. Al mismo tiempo, presumiblemente como muestra de lo que confiaba en el pueblo, lo que en este caso parece plenamente justificado, declaró el estado de alarma y prevención en los distritos donde aún estaba vigente, además de intensificar la censura que durante tantos meses había oprimido a la sufrida prensa.

Durante las seis semanas de campaña electoral, la opinión pública se mostró probablemente más incierta que nunca sobre lo que iba a suceder. En circunstancias normales, cabría esperar que el pobre historial del centro-derecha y el lapso de dos años hubieran inclinado nuevamente la balanza hacia la izquierda. Pero la indignación suscitada entre los votantes no afiliados a partidos por la rebelión en Asturias había calado hondo, y muchos sentían, al mismo tiempo, que, si bien el Centro había tenido su oportunidad, la Derecha no había recibido un trato justo por parte del Presidente. En general, la mayoría se inclinaba a creer que la Derecha volvería al poder, pero con una mayoría tan escasa que, una vez más, sería incapaz de gobernar sin el apoyo del Centro. Sin embargo, no existía una base sólida ni para esta opinión ni para ninguna otra. Aunque más de treinta escaños en las Cortes habían quedado vacantes durante los dos últimos años, no se habían celebrado elecciones parciales para cubrirlos, y estas siempre son un indicador político útil. Las elecciones municipales, además, en España siempre se disputan en torno a una plataforma política, y no se habían celebrado en casi cinco años, con la excepción de las elecciones de los «burgos podridos» de 1933, que precedieron a las últimas elecciones generales. El único indicador del sentir popular era la manifestación, y esta, en general, sugería que la Izquierda estaba ganando terreno.

El hecho más significativo en este sentido fue el creciente prestigio de Azaña. Desde los sucesos de octubre de 1934, se había negado a responder a las reiteradas convocatorias a consultas del Presidente, dirigidas a todos los líderes de los partidos, y esta constante actitud de distanciamiento, si bien no exenta de inconvenientes, tenía la ventaja de otorgarle total independencia. Ante el pueblo, su popularidad había ido en aumento misteriosamente, sin razón aparente, desde que se defendió con tanta vehemencia en las Cortes el día de su destitución. En octubre de 1935, había electrizado la capital con un discurso apasionado, pronunciado, con toda su energía de siempre, ante lo que se describió sin reservas como uno de los mítines políticos más multitudinarios jamás celebrados en el país. Para sus seguidores de la Izquierda Republicana, era el líder más importante de España, y muchos miembros de otros grupos de izquierda comprendieron que en él residía la única esperanza de regresar al poder, si lograban unirse.

Y bajo su liderazgo se unieron: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Socialistas, Sindicalistas, Anarquistas, Marxistas y Comunistas, formando, para la campaña electoral, una falange unida, un Frente Popular, como lo llamaron. Nadie sabía cuánto tiempo permanecería unido, como una coalición de nombre similar en Francia: los ideales de sus grupos integrantes eran tan completamente diferentes que había pocos motivos para el optimismo. Pero, a menos que se perdieran todos los frutos de los dos primeros años de la República, la Izquierda debía ganar estas elecciones, sin importar el sacrificio. «Cooperamos para establecer aquella otra República, no esta», había dicho Largo Caballero en diciembre, cuando fue juzgado, tras catorce meses de detención, por rebelión militar, cargo del que finalmente fue absuelto.¹⁶⁸ Pues bien, volverían a cooperar para traer de vuelta «aquella otra República», para brindar a los trabajadores de España progreso y creciente prosperidad tras dos años de apatía y reacción. Debió de ser un momento de gran esperanza e inspiración cuando, tras un largo periodo de depresión, tomaron esa decisión.

El manifiesto electoral conjunto de los partidos del Frente Popular recibió una gran difusión. La derecha, cuyo cartel principal mostraba a un hinchado Gil Robles con la mirada perdida en el futuro, se había unido bajo la bandera de la Ley y el Orden, calificando a todos sus oponentes de anarquistas y marxistas con tan poca justificación como el calificativo de fascistas con que ellos mismos eran motejados. Pero el discurso electoral de sus oponentes era mucho más atractivo.

168 Cf. *B.S.S.*, 1936, Vol. XIII, p. 79.

Prometía, ante todo, amnistía inmediata para todos los presos políticos que, por decenas de miles, languidecían en prisión o malgastaban sus energías en el exilio. Prometía, además, la reincorporación inmediata a cientos de miles más que habían sido despedidos de sus empleos por motivos políticos. Habría indemnizaciones para las familias de las víctimas de las fuerzas revolucionarias o de actos represivos ilegales de las autoridades y las fuerzas del orden. La Constitución no debía ser alterada como proponía la derecha; debía conservarse con las leves y razonables modificaciones que la experiencia (es decir, la experiencia de la izquierda) pudiera sugerir, y, sobre todo, debía aplicarse con rigor, sin permitir que cayera en desuso (como en algunos aspectos había ocurrido). Todas las reformas interrumpidas tan bruscamente en 1933 debían retomarse: educativas, financieras y agrarias.

Si un discurso como este se leyera sin espíritu crítico, seguramente habría sido difícil para cualquier elector de mentalidad progresista resistirse a él. Aquellos que lo hicieron, y votaron por el centro y la derecha, sin duda se vieron impulsados por los recuerdos del bienio socialista y por la convicción de que el leopardo no había cambiado sus manchas, sino que simplemente había cambiado de guarida y variado su forma de actuar.

Así pues, se acercaba el dieciséis de febrero, con pocas señales de entusiasmo aparte de la euforia estudiantil en las universidades, y con todos los indicios de que, una vez más, se estaban tomando con la mayor seriedad posible las elecciones generales y que los votos que se emitieran se darían con el máximo sentido de la responsabilidad.

Capítulo V.

CAOS

B.S.S., Vol. XIII, pp. 87-92, 132-5; II: Vol. XIII, pp. 135-42; III: Vol. XIII, pp. 142-3, 172 ss.; IV: Vol. XIII, pp. 172 ss.

I. FEBRERO-MARZO DE 1936.

Victoria del Frente Popular. Indiferencia seguida de graves disturbios. Asesinatos y revueltas en Madrid y otros lugares. Disturbios agrarios.

A las diez y media de la mañana del día de las elecciones, el acaudalado banquero y diputado mallorquín, Juan March, cruzó la frontera con toda su familia hacia la tierra más segura de Francia. A diferencia de la mayoría de sus compañeros tradicionalistas, anticipaba un triunfo de la izquierda, durante cuyo anterior mandato había estado en prisión durante un año y medio sin juicio, protagonizando una fuga espectacular y una huida exitosa desde Alcalá de Henares a Gibraltar apenas dos semanas antes de las elecciones de 1933. Esta vez no corría riesgos y, aunque posteriormente fue elegido con la mayor cantidad de votos en su circunscripción, probablemente se felicitó por su perspicacia. En pocas semanas, le seguían multitudes de simpatizantes de la derecha, mientras que extremistas de ideologías políticas opuestas regresaban en gran número tras exilios forzosos o autoimpuestos.

Estos hechos sugieren que el Frente Popular había obtenido una victoria espectacular y las cifras reales quizás no justifiquen el éxodo generalizado. La poca fidelidad como miembros de un partido determinado por parte de un buen número de diputados, hace imposible agrupar a los miembros electos de otra manera que no sea aproximada. Pero nadie, en febrero de 1936, habría objetado enérgicamente la suposición de que 256 de los nuevos diputados votarían normalmente con la izquierda, 52 con el centro y 165 con la derecha.¹⁶⁹

El aumento de 157 en el tamaño de los grupos de izquierda fue, por supuesto, notable y justificó con creces la posterior euforia. Pero se verá de inmediato que la victoria se obtuvo mucho más a costa del centro, que perdió 115 escaños, que de la derecha, que perdió solo 42. Fue el gobierno del centro, y no el de la derecha, el que quedó desacreditado. Y no hay que olvidar que, si bien 87 de los diputados de izquierda eran socialistas y 81 pertenecían al partido de la Izquierda Republicana de Azaña, el partido más numeroso en las Cortes seguía siendo la CEDA, con casi 100 miembros. Además, la solidaridad de los partidos de derecha era mucho mayor que la de la izquierda, cuya coalición corría el riesgo de romperse irremediabilmente en cualquier momento.

¹⁶⁹ Las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de la Gobernación antes de la segunda vuelta fueron: izquierda, 240; centro, 46; derecha, 176. Las cifras que aparecen en el texto son las que más se difundieron en la prensa tras la segunda vuelta.

Por lo tanto, los observadores con mentalidad académica, al igual que los decepcionados simpatizantes de la derecha y una considerable proporción de las «grandes masas neutrales», consideraban improbable que la izquierda recuperara la hegemonía que había disfrutado en las Cortes Constituyentes. En aquel entonces Azaña, de quien ya se daba por hecho que sería el nuevo jefe de gobierno, contaba con casi cuarenta seguidores más que ahora y prácticamente ningún oponente. En este momento, si el Centro por cualquier motivo se aliaba con la derecha, como bien podría suceder, la izquierda tendría dificultades para obtener la mayoría, incluso si su propia y frágil unión se mantuviera unida. Por lo tanto, parecía haber motivos de sobra para anticipar otro período de crisis y cambios de gobierno, y, mientras en el extranjero los periódicos sensacionalistas sorprendían con noticias de «Salvajismo en Madrid», «Disturbios rojos en España», el propio Madrid, reflexionando tranquilamente una mañana mientras tomaba su café y sus panecillos, observó que la inimitable viñeta de Bagaría en el Sol, titulada «Tranquilidad», mostraba a dos ancianos bostezando y entregándose al siguiente comentario político:

«—Bueno, parece que no pasa gran cosa...

—No, y va a haber otro gobierno.

—Sí, es lo que yo dije... No pasa nada...»

Pero sí que iban a pasar cosas, como se demostró muy pronto, pero esta profunda indiferencia era el estado de ánimo de la España cotidiana en los días inmediatamente posteriores a las elecciones. El país había acudido a las urnas una vez más en un orden ejemplar, que se mantuvo hasta que quedó perfectamente claro que el Frente Popular había obtenido la mayoría. Entonces, los partidarios del Frente Popular comenzaron a impacientarse con gran violencia. Exigían las amnistías prometidas para sus amigos y familiares, y las querían de inmediato. Los funcionarios destituidos clamaban por su reincorporación inmediata; las familias penalizadas exigían su compensación económica; Cataluña insistía en el regreso de sus consejeros exiliados. Se produjeron pocos disturbios, pero se celebraron manifestaciones a favor de la amnistía en Madrid, y el ritmo político en el país se aceleró alarmantemente. El Gobierno comprendió que, al menos durante unos días, debía ser algo más que una figura decorativa, o se produciría una revuelta abierta.

Así pues, se proclamó el estado de alarma durante una semana en todo el país; el Gobernador General fue llamado de urgencia de Cataluña; los altos cargos que habían sido destituidos fueron restituidos y los designados por un gobierno anterior que los habían sustituido fueron destituidos. Tras efectuar estas concesiones, Portela Valladares dimitió de forma imprevista.

Todo esto ocurrió una semana después de las elecciones y mucho antes de la publicación de los resultados definitivos. Muchos detractores de ese gobierno de paja le reprocharon con dureza su huida. Pero lo cierto era que la reacción en el país había sido mayor de lo que indicaban las cifras electorales y cuanto antes un hombre fuerte estuviera al mando, mejor. Así pues, el Presidente no perdió tiempo en encargar a Azaña la formación de un gobierno, y en pocas horas disponía de la lista completa de ministros. Esta incluía el número anterior de trece miembros, excluía a los socialistas, ponía el Ejército en manos de un general y repartía las carteras restantes entre Izquierda Republicana y Unión Republicana en una proporción de tres a uno. La lista no se hizo pública hasta medianoche, pero cuando el nuevo presidente del Gobierno apareció en el balcón del Ministerio de la Gobernación para dirigirse a la multitud congregada en la Puerta del Sol, parecía que todo Madrid estaba presente. Con unas pocas palabras elocuentes, repitió las promesas del programa electoral y les dijo que las amnistías y las restituciones debían aplicarse sin demora.

A la mañana siguiente, el Consejo de Ministros decidió restablecer los antiguos Ayuntamientos y nombrar nuevos Gobernadores Civiles en toda España, así como restituir al Rector y al Consejo de la Universidad de Barcelona, que recuperaría su autonomía. Al día siguiente, el Presidente firmó el Decreto de Amnistía, dejando su aprobación en las Cortes para cuando se presentara la oportunidad. Pero incluso esta enérgica acción política ya había sido superada por el sentir popular. Huelgas generales y manifestaciones ruidosas, aunque inofensivas, habían abierto las

puertas de las cárceles con notable rapidez: sólo en Oviedo, varios cientos de presos fueron liberados y miles más en otras partes del país. Companys y sus seis compañeros consejeros convergían por diferentes rutas hacia la capital, pronunciando discursos y recibiendo muestras de admiración a su paso. En un discurso radiado a los catalanes, su expresidente, a punto de retomar su cargo, describió su rebelión como una forma de «confirmar y fortalecer a Cataluña en la gloriosa obra de la República».¹⁷⁰

A principios de marzo, un nuevo decreto facultó al Parlamento catalán para reelegir a su gobierno, y los exconsejeros realizaron un viaje triunfal desde Madrid hasta Barcelona. Se convocó de inmediato una sesión extraordinaria del Parlamento y Companys fue reelegido presidente. «El título —le dijo el presidente del Parlamento— es más suyo que nunca antes. Usted gozó de nuestra confianza antes de su encarcelamiento, la gozó durante su encarcelamiento y ahora que está libre, la sigue gozando». Así pues, independientemente de lo que se hubiera dicho bajo el Gobierno anterior, la Revolución de Octubre fue completamente encubierta y, mientras el Parlamento de Barcelona se regocijaba por ella, el Tribunal de Garantías de Madrid declaraba (por una mayoría de dieciséis votos contra siete) que la anulación de la autonomía catalana había sido ilegal.

El primer acto del Parlamento catalán, como era de esperar, fue reforzar la Ley Agraria que había promulgado dieciocho meses antes desafiando al Tribunal de Garantías y contra la cual, debido a las nuevas circunstancias, el Tribunal ahora no podía o no quería luchar. Barcelona estaba satisfecha; otras partes de España, sin embargo, no estaban tan tranquilas. Lo mejor que se puede decir de los disturbios que tuvieron lugar durante los meses posteriores a las elecciones generales es que casi todos parecen haber sido actos espontáneos y desorganizados de vandalismo, debido al regreso de extremistas exiliados y a la efervescencia del sentimiento por el retorno al poder de la izquierda tras haber estado eclipsada.

Fue lamentable que las iglesias fueran los primeros objetivos de la violencia popular, pues la inacción de las fuerzas del orden para sofocar los disturbios se interpretó, al menos implícitamente, como un indicio de una nueva política oficial anticlerical. En realidad, parece que se debió más bien al deseo de no exacerbar el sentimiento popular y a la esperanza de que, si se les dejaba en paz, se extinguiría por sí sola en pocas semanas. Sin embargo, las iglesias y los conventos se convirtieron en los objetivos más evidentes y obvios de los incendios provocados, y se registraron casos en todo el país, especialmente en Madrid, donde se incendiaron la sede de *La Nación* y las iglesias de San Luis y San Ignacio; en Logroño, al norte, donde se prendieron fuego a dos iglesias y cuatro conventos; y en Elche, en el extremo sureste, que perdió tres iglesias, entre ellas la de Santa María, escenario de la famosa obra medieval que se representaba anualmente en la festividad de la Asunción.

Una rígida censura de prensa impidió que muchos de estos hechos salieran a la luz, mientras que magnificó otros hasta límites insospechados y creó, especialmente en Madrid, un grado de pánico mayor que el conocido desde la llegada de la República. El estado de alarma se prolongó mes tras mes; muchas personas abandonaron el país, llevándose consigo todo el dinero que pudieron pasar de contrabando por la aduana; muchas más permanecieron en sus casas tras la puesta del sol y observaron las precauciones más elaboradas al salir de ellas. Y hay que reconocer que tenían motivos para ello, pues a los incendios provocados generalizados se sumó una oleada de asesinatos a mano armada, respecto a los cuales, al menos en algunos casos, crecía de forma inquietante y acelerada la sospecha de que el fascismo era el principal responsable.

Entre las víctimas de estos asesinatos se encontraban José María Maura, un funcionario de seguros de Bilbao, hermano de tres figuras políticas famosas e hijo de uno de los más grandes primeros ministros de España; Alfredo Martínez, un médico de Oviedo, líder del partido Liberal Demócrata en Asturias y miembro del último Gobierno; y Miquel Badia, uno de los dos cabecillas de la rebelión de octubre, quien, tras su fracaso, se había refugiado en Francia, de donde acababa de

170 Cf. B.S.S., 1936, Vol. XIII, p. 92.

regresar. Entre los que escaparon se encontraba el profesor socialista Jiménez de Asúa, vicepresidente de las Cortes, quien fue tiroteado en plena calle cuando salía de su casa rumbo a la universidad. Durante una revista militar celebrada en Madrid para conmemorar el quinto aniversario de la República, disparos y explosiones desencadenaron una estampida general, y los enfrentamientos callejeros provocaron la muerte de un guardia civil. En el funeral se produjeron nuevos disturbios y tres fascistas perdieron la vida. Mientras tanto, un gran número de fascistas, desde el joven marqués de Estella en adelante, fueron encarcelados, y parecía que pronto no quedaría ninguno en libertad.

El estado de tensión que se vivía en Madrid en abril de 1936 superaba cualquier cosa que los españoles con larga experiencia pudieran recordar. La indisciplina y la anarquía, que se habían hecho sentir durante el primer mes de la República, parecían haber alcanzado finalmente un punto extremo. Los incidentes callejeros más insignificantes hacían presagiar que esta situación no podía prolongarse mucho más. Sin embargo, otras ciudades de España, incluso en el sur, aunque inquietas, se mantenían relativamente tranquilas, y apenas se vislumbraba la inminencia de una revuelta organizada.

No obstante, el Gobierno tomó precauciones. Una de sus primeras medidas fue fijar el 12 de abril para la celebración de las elecciones municipales, pospuestas en numerosas ocasiones, que llevaban cinco años sin celebrarse. Era una fecha infortunada, decían los supersticiosos, pues el 12 de abril de 1931 las elecciones municipales habían provocado la caída de la Monarquía: ¿y si las del 12 de abril de 1936 provocaran la caída de la República? No tenían por qué preocuparse: una o dos semanas antes de la fecha prevista, las elecciones se pospusieron una vez más. No era momento de arriesgarse a nuevos disturbios como los que podrían surgir tras una victoria decisiva de un partido. Además, como veremos, el Gobierno tenía otros asuntos urgentes que resolver.

Un último tipo de disturbio tuvo lugar en las zonas agrícolas del centro y sur de España: la expropiación forzosa de tierras por campesinos impacientes. Durante más de dos años, la Ley Agraria de 1932 había estado bloqueada por los gobiernos de centro-derecha, y un invierno inusualmente lluvioso en el sur de España había incrementado el desempleo y provocado una profunda crisis. Cuando el regreso de la izquierda al poder permitió al Instituto de Reforma Agraria comenzar a aplicar la ley en serio, quedó claro que el ritmo de trabajo debía acelerarse. Los campesinos que, cuatro años antes, habían recibido, según creían, la promesa de sus pequeñas parcelas en ese mismo momento, habían esperado pacientemente, pero en vano, a que se cumplieran dichas promesas. Ahora les decían que sus aliados habían vuelto al poder y que todo iría bien; pero habían pasado dos meses, seguía sin haber noticias de la distribución, y pronto sería demasiado tarde para la siembra de este año. Así pues, aunque en esos dos meses se habían entregado las tierras a 70.000 hombres, y a finales de marzo se publicó un decreto que autorizaba al Instituto a acelerar aún más el proceso, miles de yunteros (como se denomina a los trabajadores que poseen sus propias yuntas o yuntas de mulas o burros) decidieron tomar la justicia por su mano. No debe suponerse que el proceso, organizado por las Federaciones Agrícolas Socialistas, estuviera acompañado habitualmente de desorden o violencia. Un testigo presencial describe así una escena típica en una zona rural de la provincia de Badajoz.

«A las 5 de la mañana del 25 de marzo, grupos organizados de trabajadores armados con cuerdas, palas y otras herramientas se reunieron en secreto y salieron en tropel de 150 de las 163 aldeas de la provincia; muchos de ellos, por supuesto, a lomos de burro, se dirigieron a las grandes propiedades vecinas y delimitaron con calma las franjas que se proponían ocupar para el cultivo bajo el nuevo sistema de asentamiento de tierras. Luego, tras un enérgico grito de *¡Viva la República!*, regresaron a sus aldeas, celebraron una manifestación frente al edificio del gobierno local y enviaron una comisión para obtener la aprobación formal de la ocupación de sus tierras,

alegando que se les había prometido la tierra en el programa electoral del gobierno, pero que se les estaban poniendo todo tipo de obstáculos burocráticos.»¹⁷¹

En la mayoría de los casos, el hecho consumado parece haber sido aceptado y regularizado con la debida celeridad, pero en algunos lugares los campesinos fueron expulsados de las tierras que habían ocupado, lo que causó gran confusión, aunque por lo general no provocó disturbios graves. Sin embargo, como signo del caos reinante, debido principalmente a la lentitud de dos años en gran parte perdidos, los incidentes resultaron sumamente inquietantes; y cuanto más se leía y reflexionaba sobre ellos, mayor era la perplejidad respecto al futuro inmediato.

II. MARZO-MAYO DE 1936.

Deposición del Presidente Alcalá Zamora.

Elección del Sr. Azaña a la Presidencia.

A pesar de su deseo de satisfacer a todos, el Gobierno, nada más reunirse con las Cortes debidamente constituidas, provocó en el país la mayor conmoción política que se había vivido desde la caída del rey Alfonso. Al hacerlo, creó una situación que podría haber parecido insoluble de no haberse elaborado la solución con bastante antelación, y provocó un cambio dramático en la administración del régimen del que se esperaban grandes cosas, justo en el momento en que las pasiones reprimidas se desataron y sumieron a España en el desastre.

La noticia no fue otra que la destitución del presidente de la República por parte de las Cortes. Decir que, salvo para unos pocos, fue una sorpresa es quedarse corto respecto al efecto que tuvo en el país. El desafortunado «Botas» se había desprestigiado ofendiendo mortalmente a los principales grupos políticos y haciéndose altamente impopular. De hecho, circulaban chistes de mal gusto sobre la necesidad de un limpiabotas nacional, y se rumoreaba abiertamente que, con la llegada al poder de Azaña, presentaría su dimisión. Pero la opinión más generalizada era que permanecería en su cargo en el Palacio Nacional, y con un sueldo más que regio, hasta que su mandato llegara a su fin en diciembre de 1937, y que entonces se sumiría en un discreto anonimato y se retiraría de la política. Sin embargo, si tal era su intención, ciertamente no lo era de quienes ahora ostentaban el poder.

El motivo técnico por el que se decidió destituir al presidente fue su reciente decisión de disolver las Cortes. Cabe recordar que la Constitución prevé que el presidente pueda disolver las Cortes dos veces durante sus seis años de mandato, pero también establece que, tras una segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar su necesidad: «un voto desfavorable por mayoría absoluta de las Cortes —reza el artículo—, implicará automáticamente la destitución del presidente».¹⁷² El Gobierno, por lo tanto, tenía el camino despejado, ya que era improbable que su coalición se desintegrara en una fase tan temprana y, a menos que esto ocurriera, el presidente sólo podría salvarse con los votos, o la abstención, de todo el Centro y la Derecha y con la abstención de un grupo considerable de la Izquierda.

El protagonista del debate fue el socialista Indalecio Prieto; Azaña, quizá por motivos que dan fe de su delicadeza, se mantuvo en un segundo plano. De principio a fin, la discusión siguió las líneas partidistas. El argumento que el propio presidente había esgrimido en el momento de la disolución, según el cual la disolución de las Cortes Constituyentes «no contaba», fue desmontado por el orador socialista sin más preámbulos, tras lo cual llevó a cabo la hazaña sobrenatural de indagar en la mente del presidente y sacar a la luz lo que él concebía que habían sido los motivos de

171 W. Horsfall Carter: «Spain To-day», en *The Listener*, 1936, Vol. XV, pp. 797-9, 826. Todo el artículo es extremadamente informativo.

172 Art. 81.

su actuación. Las Cortes habían sido disueltas, declaró, sin ninguna intención sincera de recabar el veredicto del país sobre la situación política, sino «con el deseo ilógico de pisotear la voluntad soberana del pueblo y de amoldar el Parlamento a las opiniones del propio presidente, en lugar de que estas opiniones estuvieran, como establece la Constitución, subordinadas a la opinión del país». La intención se vio frustrada, continuó el Sr. Prieto con una elocuencia superficial, por la «noble reacción del pueblo español», que durante tanto tiempo, «en lo más profundo de su corazón, había ocultado su dolor» ante un régimen de represión al que por fin había puesto fin.

El debate se prolongó durante cinco horas, pero desde el principio su resultado estaba claro. La derecha se mostró, como era de esperar, crítica con los argumentos del líder socialista, pero tras el trato que el presidente había dispensado a Gil Robles, les era igual de útil que al Frente Popular, por lo que decidieron abstenerse. Sólo Portela Valladares y aquellos de sus antiguos colegas que estaban presentes defendieron al desafortunado sucesor del rey Alfonso, ofreciéndose a asumir toda la responsabilidad de la disolución si la izquierda los aceptaba como sacrificio propiciatorio. Pero lo único que pudieron hacer fue sumar cinco votos solitarios a favor del presidente y, dado que la anulación de algunos resultados electorales había reducido la fuerza efectiva de la Cámara a 417, el número de votos registrados a favor de la moción —238— fue más que suficiente para garantizar su aprobación.

A las diez de la noche del 7 de abril se anunció el resultado de la votación, y no se perdió tiempo en darle efecto. Se nombró una comisión de la Cámara para comunicar a Alcalá Zamora su destitución, debiendo reanudarse la sesión de las Cortes a su regreso. Como suele ocurrir en la política española, los actos, concebidos con toda la dignidad debida, se vieron amenizados por un toque de humor involuntario. La comisión, precedida por la habitual pandilla de periodistas, se dirigió en dos coches a la casa del presidente destituido y solicitó una entrevista. Pero, en lugar de recibirlos, el presidente envió un mensaje a través de uno de sus hijos para decir que estaba «descansando» y que, por lo que él sabía, ninguna cláusula de la Constitución le obligaba a recibirlos. El comité insistió, pero el presidente se mantuvo firme, y lo mejor que pudieron hacer fue dirigirse a su despacho en el Palacio Nacional y presentar su informe a su secretario principal. Una vez hecho esto, regresaron a la Cámara de Diputados, donde, veinte minutos después de medianoche, se reanudó la sesión.

Un cuarto de hora bastó para despachar los asuntos pendientes. Dado que la Constitución establece que, durante un interregno como este, el presidente de las Cortes ocupará el puesto del presidente, el vicepresidente de mayor antigüedad y presidente de la comisión recién nombrada invitó formalmente al presidente de las Cortes recién elegido, Martínez Barrio, a ocupar la presidencia hasta después de la nueva elección. El presidente aceptó, subió a la tribuna y, en ese mismo momento, con los diputados de pie, prestó el «juramento» de fidelidad a la República y a la Constitución.¹⁷³

Una vez concluida su labor, la Cámara se dispuso a disolverse. «¡Viva la República!», exclamó un diputado con entusiasmo mientras los diputados se ponían en pie.

Su voz se perdió entre un coro de ¡Vivas!

«¡Viva el Frente Popular!», gritó un comunista con algo menos de convicción.

Pero sólo una voz respondió a esta exclamación, la voz de un diputado que había sido juzgado, encarcelado y prácticamente condenado a muerte tras la Revolución de Octubre. Y en esa voz no faltaba convicción, cuando gritó: «¡Viva Asturias!».

Cabe especular sobre el número de diputados que se despertaron a la mañana siguiente con ligeras dudas sobre el efecto que su acto de la noche anterior podría tener sobre la estabilidad de la República. Es posible que más de uno de ellos recordara cómo la Primera República de 1873-1874 había tenido cuatro presidentes en once meses y se preguntara si ya se había dado el primer paso

¹⁷³ Cf. *El Sol*, 8 de abril de 1936.

hacia una debacle similar. Pero, fueran cuales fueran sus pensamientos, sus conversaciones se centraron por completo en el sucesor de Alcalá Zamora.

El procedimiento constitucional establecido para la elección de un presidente es, como hemos visto, bastante torpe. No depende ni directamente del pueblo ni de las Cortes, sino de un Colegio Electoral compuesto por todos los diputados de las Cortes y un número igual de compromisarios *ad hoc*. Como no se iban a presentar públicamente nombres para la presidencia hasta que se hubiera constituido el Colegio, transcurrió casi un mes antes de que dichos nombres se barajaran en la prensa. La elección del presidente no iba a tener lugar hasta el 10 de mayo, y fue hacia finales de abril cuando las vagas especulaciones comenzaron a dar paso a insistentes rumores.

Durante un mes se habían barajado los nombres de numerosos líderes políticos como posibles candidatos a la Presidencia. Llamaba la atención que no se mencionaran nombres de grandes personalidades españolas ajenas a la política, como había ocurrido cuatro años y medio antes: las candidaturas de los partidos eran ya inevitables. Dado que la derecha se había retirado del campo de batalla y no había participado de forma significativa ni siquiera en las elecciones de los compromisarios, estaba bastante claro que el nuevo presidente pertenecería a la izquierda y, en realidad, al echar un vistazo a la lista de personas sugeridas, no parecía haber ninguna razón por la que uno de ellos debiera ser elegido (o rechazado) en lugar de cualquier otro. Sin embargo, con el paso del tiempo, un nombre, que en un principio se había mencionado sólo para ser descartado como fuera de concurso, fue ganando adeptos. Era el nombre del presidente del Gobierno, Manuel Azaña.

Hasta el último momento hubo quienes —no, por supuesto, entre bastidores, sino en estrecho contacto con la política española— afirmaban que era impensable que Azaña permitiera que su nombre entrara en liza. Es cierto que contar con un hombre fuerte en la Presidencia era muy deseable, pero tenerlo como presidente del Gobierno, con Madrid en un estado de gran nerviosismo y España en ebullición, lo era mucho más. No podían creer que Azaña fuera a dejar el Frente Popular —que sólo él era capaz de mantener unido, si es que alguien podía— a merced de las pasiones individuales y de la inevitable desunión política. Pero a medida que, día tras día, los periódicos abogaban cada vez más por la elección de Azaña, y cada día con mayor firmeza, uno empezaba a sospechar que estas fervientes sugerencias estaban claramente organizadas. No se tiene información, y quizá nunca se tenga, sobre cuándo se le ocurrió exactamente a Azaña la idea de convertirse en presidente, pero no hay duda de que su elección se organizó con gran efecto dramático. A principios de mayo ya era aceptado como el único candidato del Frente Popular; el día de las elecciones era el único candidato serio.

En una cálida mañana de domingo se celebraron las elecciones presidenciales en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en pleno centro de la ciudad moderna. La votación, como era de esperar, se realizó por partidos políticos y, una vez contabilizados los votos, los electores pasaron la mayor parte del tiempo a la sombra de los árboles o en el bar al aire libre que se había instalado en las inmediaciones del Palacio. Salvo por una pelea entre dos diputados socialistas, todo transcurrió en paz.

La elección había comenzado a las once de la mañana, pero eran casi las dos —la hora del almuerzo en Madrid— cuando se convocó de nuevo a los electores para dar a conocer el resultado, que habían esperado sin especial impaciencia.

Al parecer, el número de electores era de 911. De ellos, 874 habían votado. 115 papeletas (en su mayoría, las de la derecha) eran votos en blanco. Alejandro Lerroux, el líder radical, había recibido un voto. Francisco Largo Caballero, el líder socialista, había recibido un voto. José Antonio Primo de Rivera, el líder fascista, había recibido un voto...

(A este ritmo, habría pensado alguien ajeno a la situación, se tardaría algún tiempo en completar los 874.)

Ramón González Peña —el diputado que había gritado «¡Viva Asturias!»— había recibido dos votos.

(¡La cifra iba en aumento!)

¡Y Manuel Azaña Díaz había recibido 754 votos! Así pues, Manuel Azaña Díaz fue elegido.

«¡Viva la República!», exclamaron los electores cuando el presidente de la mesa se retiró para saludar al nuevo presidente, quien, según se informó más tarde, había recibido la noticia de su elección «con emoción».

Los socialistas y los comunistas alzaron los puños y alzaron la voz para entonar *La Internacional*.

Los catalanes, para no quedarse atrás, entonaron su propio himno nacional, *Els Segadors*.

Los vascos respondieron con el *Guernikako arbola*. Los monárquicos no cantaron nada, lo cual, en aras de la paz pública, quizá fue mejor así, y el resto de los republicanos tampoco cantaron nada, porque no tenían nada que cantar, ya que el talento republicano aún no había producido un nuevo himno nacional. Pero se oyó a algunos con inclinaciones musicales tararear el *Himno de Riego*, que honra a un patriota español fusilado exactamente un siglo antes de la llegada de la Dictadura, por orden del bisabuelo de Alfonso XIII.

Al día siguiente, Manuel Azaña Díaz juró ser fiel a la Constitución y a la República. «Por fin —había dicho a su propio partido unos días antes, con la misma efusión momentánea que había mostrado cuando asumió por primera vez el cargo de presidente del Gobierno—, España tendrá un Presidente que sea un auténtico republicano. Seré incapaz de caer en la corrupción, insensible al soborno e impermeable a las amenazas. Para defender la República, si es necesario, derramaré hasta la última gota de mi sangre.»¹⁷⁴

Tras su elección, el nuevo presidente anunció su intención, no sólo de mantener una oficina en el Palacio Nacional, como había hecho su predecesor, sino de establecer allí su residencia permanente.

Era un anuncio que merecía la pena. De alguna manera, saber que Azaña estaba en el Palacio proporcionaba a los españoles la sensación de confianza que tanto necesitaban.

III. MAYO-JULIO DE 1936.

El Gobierno de Casares Quiroga. Protestas de la derecha contra la anarquía generalizada.

El fascismo militante y el Gobierno. Nuevos asesinatos que culminan con el de Calvo Sotelo.

Una vez superada la crisis presidencial —y tras la segunda dimisión formal del Gobierno y su posterior confirmación en el cargo—, lo siguiente era que las Cortes se pusieran manos a la obra. Tras dos días de ministerio interino, Casares Quiroga, miembro del antiguo partido del nuevo presidente, asumió el cargo —el cuarto primer ministro en tres meses— y su gabinete tenía una composición similar a la de Azaña.

Una lectura detenida de la prensa española de mayo y junio de 1936 transmite la impresión de una gran actividad parlamentaria y, de hecho, el Gobierno trabajó intensamente en los preparativos para volver a poner en vigor la Ley Agraria y la Ley de Confesiones y Congregaciones. Pero a la luz de los acontecimientos posteriores, el interés de estos meses reside fuera de las Cortes más que

174 Cf. B.S.S., 1936, Vol. XIII, p. 141. «Seré un Presidente incorruptible, insobornable e inacobardable.» [En castellano en el original.]

dentro de ellas: en el intenso y creciente malestar social y en el alarmante y rápido crecimiento del fascismo militante.

Es imposible dar una idea precisa de la avalancha de huelgas revolucionarias que mantuvieron los extremistas durante este periodo: incluso enumerarlas todas requeriría muchas páginas. En un debate parlamentario¹⁷⁵ celebrado exactamente cuatro meses después de las elecciones generales, Gil Robles declaró que se habían producido 113 huelgas generales y 218 huelgas parciales durante ese periodo. Las cifras no fueron cuestionadas y, por lo tanto, pueden considerarse correctas. Pero si se ampliaran las estadísticas para incluir el mes siguiente, serían aún más impresionantes. Jamás, como durante este mes, se había vivido tal agitación social en toda la historia de la República. Día tras día, las páginas de los periódicos se llenaban de noticias sobre huelgas antiguas resueltas, nuevas huelgas declaradas, manifestaciones, tiroteos, heridos, escenas violentas en funerales, disturbios, incendios provocados y destrucción. También hubo numerosos informes de detenciones relacionadas con estos disturbios; lo que rara vez se veía era que se llevara a nadie a la cárcel por algún delito concreto. La desdichada España se encaminaba rápidamente hacia un estado de caos total.

Naturalmente, los partidos de derecha en las Cortes, numéricamente tan fuertes, no perdieron oportunidad de reprochar, e incluso burlarse, del Gobierno por su impotencia. Los protagonistas del ataque fueron el decepcionado líder de la CEDA, Gil Robles, y el exministro de Hacienda de Primo de Rivera, Calvo Sotelo. El Gobierno era tan impotente dentro como fuera de la Cámara. El jefe de gobierno no podía negar que en cuatro meses se habían incendiado 170 iglesias, 69 clubes y las oficinas de 10 periódicos, y que se habían intentado quemar otros 284 edificios, incluyendo 251 iglesias. Solo podía sostener que en realidad era el resultado de la represión que sus oponentes habían practicado cuando estaban en el poder; que, si bien ciertamente no había una «tranquilidad absoluta» en el país (frase irónica), las descripciones de sus críticos eran «pura fantasía»; y que, mientras el Ejército siguiera siendo leal a la República, «no pasaría nada». Así pues, la vieja etiqueta de dictadura volvió a cobrar sentido en un nuevo contexto. Pero la principal alegación de la oposición era irrefutable y su exigencia, bastante razonable, como sin duda el Ministro de la Gobernación habría admitido de haber podido satisfacerla. Problemas y exigencias eran simplemente estos:

«Un país puede vivir perfectamente bajo una monarquía o una república, bajo un régimen parlamentario, un régimen soviético o el de una dictadura. Pero un país no puede vivir en un estado de anarquía, y España se encuentra hoy en un estado de anarquía. Esta situación en la que vive España no puede continuar. Les pedimos que le pongan fin.»¹⁷⁶

Al no poder controlar a los extremistas de su propio bando, el Gobierno se esforzó por complacer a sus oponentes deteniendo a los extremistas del bando contrario, el de sus oponentes. A mediados de junio de 1936 comenzó aquel mes de intensa actividad y violencia por parte de los fascistas y de intensa represión por parte de la izquierda, que resultó ser el preludio del desastre. El fascismo español era, por supuesto, en 1936 algo muy diferente de lo que había sido durante los Gobiernos anteriores. Entonces era un partido casi académico, solo un grupo entre muchos con los que se podía contar para apoyar a la derecha en las Cortes. No contaba con un líder parlamentario muy eficaz, pues Gil Robles era antifascista, e incluso Calvo Sotelo, aunque podemos considerar que había ocupado un cargo en un Estado fascista, no era miembro del partido fascista, sino sólo del partido monárquico que se autodenominaba «Renovación Española». Si la derecha hubiera tenido éxito en las elecciones de febrero, el fascismo sin duda habría seguido desarrollándose en su seno, pero lo habría hecho lentamente, con objetivos formativos más que militantes, con la esperanza de que, mediante métodos pacíficos, pudiera atraer gradualmente hacia sí a líderes de otros partidos

175 Véase [El orden público en las Cortes de 1936](#). (Clásicos de Historia)

176 *El Sol*, 17 de junio de 1936.

que, aunque sus oponentes los describían libremente como fascistas, en realidad estaban muy lejos de serlo.

Pero, cuando el Frente Popular llegó al poder en febrero de 1936, surgió un movimiento reaccionario muy similar al que había comenzado en sentido contrario tras la victoria del Centro dos años antes. La mayoría de los grupos de derecha se contentaron con acatar las consecuencias de la decisión del electorado y pasar a la oposición hasta que finalmente les llegara el turno de gobernar. Pero los fascistas no. En primer lugar, sin duda estaban eufóricos por el éxito de la campaña de la Italia fascista en Abisinia y alentados por los resultados de las acciones enérgicas de la Alemania nazi. Además, ya habían visto cómo habían sido dos años de gobierno de la izquierda, y pensaban que el siguiente período sería mucho peor, ya que el sindicalismo, el anarquismo y el comunismo eran mucho más fuertes. Además, probablemente pensaron que, si en ese momento de desilusión y de incipiente reacción psicológica lanzaban una ofensiva decidida, conseguirían muchos nuevos y útiles apoyos —en particular los de los líderes del Ejército, que se veían, según la habitual ley del péndulo, en peligro de ser juzgados, degradados, encarcelados y expulsados por el papel que habían desempeñado en la represión de los levantamientos de octubre de 1934, ya que los promotores de dichos levantamientos se encontraban ahora en el poder.

Sin duda, razonamientos como estos rondaban por la mente del partido fascista parlamentario y de la denominada Unión Militar, si es que, como parece probable (pues la historia de este periodo aún se conoce de forma imperfecta), se dispusieron deliberadamente a seguir el ejemplo dado por los extremistas del bando contrario dos años antes. El Gobierno, sin la menor duda, reconoció el peligro y respondió a su desafío tácito con duras palabras. «Hay una cosa —anunció el primer ministro ante las Cortes a mediados de mayo—, hay una cosa que deseo dejar clara con respecto a la actitud del Gobierno ante el fascismo... El propósito de los grupos fascistas es atacar los principios fundamentales de la República democrática. En este sentido, el Gobierno no puede mantener una actitud de neutralidad. En sus relaciones con el fascismo, el Gobierno es beligerante».¹⁷⁷

Así pues, el panorama estaba claro y, con el fascismo amenazando directamente por un lado y el extremismo de izquierda clamando por el poder mediante huelgas ilegales por el otro, el Gobierno siguió adelante, impotente, con las tareas que se había impuesto, aunque apenas pudiera albergar esperanzas de llevarlas a cabo. En tiempos normales, por ejemplo, cabría esperar que un Gobierno de izquierdas avanzara con paso firme en el tema de la autonomía regional. Pero fue con una sensación de total irrealidad que se leyó, a principios de julio, la noticia del plebiscito de Galicia sobre su Estatuto de Autonomía, que acababa de ser aprobado por el setenta y cinco por ciento de los votantes: todo esto parecía tan lejano cuando los dos principales grupos políticos de Madrid se estaban lanzando al cuello mutuamente, cuando todo el país estaba desgarrado por la ansiedad y cuando la propia existencia del régimen republicano se veía amenazada, hasta el punto de que el expresidente Alcalá Zamora, liberado contra su voluntad de las preocupaciones del cargo, había concebido la excelente idea de abandonar España para pasar tres meses de vacaciones en el extranjero, justo (por casualidad) en el momento en que España se encaminaba hacia el caos. ¡Alcalá Zamora no ha sido precisamente el menos envidiable de los líderes de la Segunda República!

Mientras tanto, lo más inquietante de las noticias diarias ya no eran las huelgas ni los disturbios, sino los asesinatos políticos. La total impunidad con la que se cometían, a pesar de los esfuerzos —o al menos de la presencia— de detectives, policías, guardias civiles y guardias de asalto, resultaba angustiada. Lo único que las autoridades parecían capaces de hacer era detener a fascistas, por docenas, o incluso por centenares, por meras sospechas. A principios de julio debía de haber miles de ellos en prisión. Y, sin embargo, los asesinatos continuaban. El 4 de julio, una multitud salía de una reunión socialista en la Casa del Pueblo. Desde coches que pasaban, unos

177 Cf. B.S.S., 1936, Vol. XIII, pp. 143.

pistoleros dispararon a quemarropa contra ella y desaparecieron: siete socialistas murieron y una docena resultaron heridos. Ocho días después, José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, salía de su casa en una pequeña calle de Madrid situada entre dos avenidas principales. Cuatro hombres se le acercaron y le dispararon: en un instante yacía muerto.

Es de suponer que estos crímenes, al igual que la otros de los ya enumerados, fueron obra de hombres con simpatías fascistas o tradicionalistas. No se puede saber cuánto conocían sobre sus autores los que decidieron vengarlos. Pero se dice que, junto al cadáver de Castillo —quien había disparado a un destacado fascista en los disturbios de abril y desde entonces había recibido varias cartas amenazando su vida—, uno de sus compañeros juró llevar a cabo una venganza inmediata. Si ese compañero fue el responsable del crimen del 13 de julio, sin duda actuó con notable rapidez.

A las tres de la madrugada de ese día, el diputado Calvo Sotelo, dirigente de los monárquicos, fue despertado por unos fuertes golpes en la puerta exterior de la casa en la que vivía, en la calle de Velázquez. Al salir, se encontró con una furgoneta policial al mando de un agente que portaba una orden de detención contra él. Dado que este tipo de detenciones eran bastante habituales (el hijo mayor de su difunto jefe, Primo de Rivera¹⁷⁸, por ejemplo, llevaba ya algún tiempo en prisión), primero se cercioró de la buena fe del agente y luego se marchó con él. Sus amigos nunca volvieron a verlo con vida.

A primera hora de la tarde, la comisaría recibió una llamada del Cementerio del Este, en cuya morgue algunos policías habían depositado un cadáver en la madrugada, diciendo que lo habían encontrado en la calle. Prometieron enviar un informe oficial en unas horas. El informe nunca llegó. El cuerpo fue examinado de inmediato. Era el de José Calvo Sotelo.¹⁷⁹

De todos los asesinatos políticos de este convulso régimen, este fue quizás, aunque solo fuera por la meticulosidad con la que fue planeado y ejecutado, el más repugnante. También fue, desde el punto de vista de los tradicionalistas, el más desastroso. Aunque solo tenía cuarenta y tres años, se hablaba con frecuencia de la víctima como un futuro dictador; con su dilatada experiencia política, bien podría haberse convertido en un Salazar español y, en más de un sentido, haber salvado la destino de su país. La izquierda, por supuesto, no habría compartido esta opinión, pero tanto la izquierda como la derecha quedaron conmocionadas por la audacia del crimen, mientras que el ciudadano de a pie, atónito por el horror, lo vio como el punto culminante del crimen. «Esto —se dijo, quizás sin saber exactamente lo que quería decir— debe ser el final.»

IV. JULIO-AGOSTO DE 1936.

El levantamiento militar en el Marruecos español se extiende por la península y se convierte en guerra civil. Rápidos cambios de gobierno. Panorama en agosto de 1936.

El final llegó pocos días después, en forma de una revuelta militar que se extendió por todo el país y, en el transcurso de un breve fin de semana, se transformó en guerra civil.¹⁸⁰

Hasta qué punto el estallido de la revuelta estuvo relacionado con el asesinato de Calvo Sotelo es una pregunta para la que quizá nunca tengamos una respuesta concluyente. Al producirse al final de la misma semana, en un principio se supuso que era una consecuencia directa. Pero pronto quedó

178 Véase: José Antonio Primo de Rivera, *Discursos y otros textos*. (Clásicos de Historia)

179 Había recibido un disparo en el pecho y en el ojo derecho. La historia, difundida en la prensa inglesa, de que le habían arrancado los ojos con una daga, no encuentra confirmación ni en los informes de la prensa española ni en el testimonio del perito médico (véase *El Sol*, 14 y 15 de julio de 1936).

180 Dado que en el momento de redactar esta sección apenas había periódicos españoles disponibles, las fuentes principales han sido *The Times* y cartas privadas recibidas desde España.

claro que no se trataba de un simple estallido impulsivo provocado por los acontecimientos diarios, sino de un pronunciamiento revolucionario, como el levantamiento del general Sanjurjo casi exactamente cuatro años antes: una revolución cuidadosamente planificada y hábilmente organizada por competentes líderes militares a escala nacional. Es muy posible que la fecha en que se asestó el golpe inicial se adelantara con el fin de ganarse la simpatía de quienes se habían horrorizado ante un asesinato tan a sangre fría, pero parece más probable que la coincidencia de los dos acontecimientos fuera fortuita y que el momento en que se produjeron los distintos levantamientos siguiera un plan preestablecido.

Semanas antes, Casares Quiroga había hablado con ligereza en las Cortes sobre una proyectada revuelta fascista, cuyos detalles, según él, eran perfectamente conocidos por su Gobierno. Si se refería a esta revuelta, o bien estaba gravemente equivocado o tuvo gran parte de la culpa. Pero, una vez más, parece probable que no existiera ninguna conexión entre la revuelta proyectada y la real, y que la forma que esta última adoptó fuera una completa sorpresa tanto para el Gobierno como para todo el mundo.

Los disturbios comenzaron en el Marruecos español, donde el 17 de julio varios regimientos se sublevaron contra la República. Su líder, el general Francisco Franco, hermano del intrépido aviador de Cuatro Vientos, llevaba un tiempo destinado en las Islas Canarias y voló desde Las Palmas a Marruecos el día anterior a la revuelta. Aunque, con el apoyo de la Legión Extranjera, los rebeldes tomaron Ceuta y Melilla, no se sintió gran inquietud en la Península: sucesos más preocupantes se estaban produciendo en el país. Al mediodía del día siguiente, el Gobierno emitió un comunicado en el que condenaba la revuelta marroquí con un vigor bastante elocuente, y añadía, con un tono que sin duda parecía un exceso de insistencia, que «nadie, absolutamente nadie» en la Península había «participado en este absurdo complot».

Pero, incluso mientras se redactaba esta nota, el «absurdo plan» se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más formidable. Para la tarde del 18 de julio, llegaban a Madrid noticias de numerosas ciudades importantes: guarniciones sublevadas y generales distinguidos liderando insurrecciones. A la mañana siguiente, era evidente que la revuelta se había extendido a casi toda España. El general Franco había desembarcado su primer destacamento de tropas en la península y tenía el control absoluto de Algeciras y Cádiz. Sevilla, que se convertiría en la metrópoli meridional de los rebeldes, había sido tomada sin resistencia. En Zaragoza, toda la guarnición se había sumado a la insurrección, al igual que en Pamplona, la capital de la tradicionalista Navarra.

Era evidente que estos motines habían sido dirigidos con habilidad y valentía. Mandos de alto rango, que cinco años antes se habían negado a arriesgarlo todo para salvar la Monarquía, ahora lo arriesgaban todo para lograr sus objetivos. Algunos de ellos, como el general Queipo de Llano, al mando de los insurgentes en Andalucía, habían participado en actividades pro-republicanas antes del nacimiento de la República. En el norte, los comandantes eran el veterano general Cabanellas y el general Mola, quien había sido director general de policía. En Mallorca, el general Goded se había pronunciado a favor de la insurrección y, dejando Palma en manos rebeldes, voló para participar en una misión más importante en Barcelona. Sin embargo, durante las primeras etapas de la insurrección, tuvo que rendirse y, posteriormente, fue sometido a consejo de guerra y fusilado. Esto supuso un duro revés para los rebeldes, y casi al comienzo de su campaña sufrieron otra pérdida aún más grave. El intrépido pero desafortunado general Sanjurjo, que volaba de Lisboa a un destino desconocido en España, sufrió un accidente aéreo cerca de la frontera española y murió abrasado.

¿Se podrían sofocar tantas revueltas independientes antes de que los ejércitos se movilizaran, unieran sus fuerzas e involucraran a todo el país? Esa era la pregunta que se planteaba aquel fatídico sábado y domingo, 18 y 19 de julio, y de su respuesta dependía todo. Los socialistas creían que podían garantizar la paz y el orden aplicando una vez más su ya conocida panacea: dondequiera que

los rebeldes proclamaran la ley marcial, anunciaba la Unión General de Trabajadores, sus partidarios declararían una huelga general. Pero, de alguna manera, esto fracasó por completo: incluso en Sevilla, donde el extremismo de izquierdas había dominado durante tanto tiempo, los trabajadores no lograron su objetivo. Para la tarde del domingo, el proletariado de las grandes ciudades españolas se preparaba a gran escala para la resistencia armada. Teniendo en cuenta los acontecimientos anteriores, no cabe duda de que la mayoría ya contaba con un buen suministro de armas. Quienes no las tenían pronto las adquirieron, y, en las ciudades donde los rebeldes no habían logrado establecerse, los trabajadores se hicieron responsables del orden público. «A medianoche del sábado —escribió un observador en Madrid—, comenzaron a aparecer marxistas armados. El domingo por la mañana, patrullaban por todas las calles, y se registraba a todos los transeúntes rigurosamente, aunque de forma cortés. La policía casi había desaparecido».¹⁸¹

Mientras tanto, ¿qué fue del Gobierno y del hombre fuerte de la República, su Presidente Manuel Azaña? Si Azaña, semanas antes, hubiera tomado el poder en sus propias manos, como tantos habían profetizado, es posible que hubiera consolidado la frágil lealtad del Ejército a su Gobierno y al régimen republicano antes de que surgiera un grupo rival de líderes que reclamara su lealtad. Pero desde el principio optó por ser estrictamente constitucional; y, aunque en el extranjero se preguntaban qué había sido del indomable líder español, en España el rumbo que tomó le granjeó el respeto, al menos, de todos los demócratas. Permaneció en su cargo, apelando a la nación como tenía derecho a hacerlo en un momento de emergencia nacional y, por lo demás, cumpliendo el papel que le asignaba la Constitución.

Su primer deber fue presidir una serie de vertiginosos cambios de Gobierno que, por su rapidez, superaron cualquier cosa que esta República, tan cambiante, hubiera conocido. Hubo tres ministerios en veinticuatro horas. Para la noche del sábado, era evidente que el «plan absurdo» ridiculizado por el gobierno de Casares Quiroga se había convertido en una situación de gravísimo peligro, y difícilmente se podía esperar que un primer ministro que había clamado «Aquí no pasa nada» hasta el mismo momento de una insurrección nacional, y que luego, en una nota oficial, había restado importancia a la insurrección, permaneciera en el poder. Por consiguiente, Casares Quiroga renunció a su cargo a las tres de la madrugada del domingo.

El presidente optó por una estrategia contraria a la que la mayoría de los observadores habrían previsto: en lugar de intentar afrontar el peligro común con un gobierno de coalición del Frente Popular, plagado de extremistas, mandó llamar al moderado presidente de las Cortes, Martínez Barrio, y le encomendó la formación de un gabinete, que resultó ser tan moderado que incluso incluyó a Sánchez Román, quien se había rebelado contra el manifiesto del Frente Popular en febrero anterior.¹⁸²

Ante esto, los líderes de los grupos extremistas protestaron vehementemente. Afirmaban que era principalmente el extremismo, y no simplemente el «puro republicanismo» del incorruptible e indomable Azaña, lo que se alzaba en armas para salvar la República. La milicia que se estaba formando era mayoritariamente comunista. Las hogueras que pronto arderían serían prendidas por anarquistas. El nuevo Gobierno, cualquiera que fuera su composición, probablemente tendría una importancia práctica mínima. «El Gobierno no existe —declaró el líder marxista Andrés Nin, uno o dos días después en Barcelona—. Colaboramos con ellos, pero no pueden hacer más que sancionar lo que hacen las masas».¹⁸³ Aun así, según los extremistas, aunque solo fuera una figura simbólica, el Gobierno debería seguir representando al Frente Popular, que aún no se había disuelto.

El hombre fuerte no tuvo más remedio que rendirse. Era una situación humillante. Los líderes rebeldes se habían ganado la condena de todos los buenos republicanos al pronunciarse en contra de un Gobierno elegido constitucionalmente, pero allí estaban los mismos defensores de la

181 *The Times*, 5 de agosto de 1936.

182 *Ibid.*

183 *The Times*, 3 de agosto de 1936.

Constitución interfiriendo con la prerrogativa que esta le otorgaba. Así pues, tras apenas unas horas en el cargo, el segundo Gabinete cedió su lugar a un tercero, que era prácticamente idéntico al primero, con el exministro de Marina, José Giralt, al frente, y el leal general Pozas, en el Ministerio de la Gobernación.¹⁸⁴

Los combates en las calles de Madrid, entre los obreros y la Unión Militar, ya habían comenzado, primero de forma esporádica y luego, en algunas de las principales avenidas, de manera más constante. Donde los extremistas salían victoriosos, se cobraban su habitual víctima: para la noche del domingo, iglesias y conventos volvían a arder. El lunes, los regimientos del cuartel de Montaña, detrás de la estación del Ferrocarril del Norte, se amotinaron, pero, tras un intenso bombardeo, se rindieron en pocas horas. Fue un enfrentamiento breve pero sangriento. Se dice que algunos oficiales se suicidaron; otros fueron obligados a rendirse por sus propios hombres; los líderes de la insurrección, el general Fanjul y el coronel Quintana, fueron hechos prisioneros y fusilados, y se estima que el número total de soldados muertos ascendió a doscientos.

Por terrible que fuera todo esto, lo peor estaba ocurriendo en otros lugares. Barcelona fue escenario de una batalla que duró tres días, en la que, apenas las tropas gubernamentales sofocaron a los rebeldes, comenzaron incendios masivos, mutilaciones y asesinatos a sangre fría, por no hablar de las violentas disensiones entre los vencedores. Sevilla seguía firmemente en manos de los rebeldes, y Fernando Primo de Rivera, hijo del difunto dictador, combatía en Córdoba. A pesar de la marcada lealtad de la Marina, las tropas cruzaban constantemente de Marruecos a Andalucía, preparándose para una gran marcha hacia el norte. Se decía que Galicia se había sublevado, junto con Gijón en Asturias, mientras que se presagiaban intensos combates en Oviedo. Cerca de la frontera occidental, los rebeldes luchaban por el control del camino hacia Francia; pronto Irún sería bombardeada con ferocidad. En otros frentes, el ejército del general Mola estaba en marcha: había comenzado la marcha sobre Burgos. Ya se podía imaginar cómo los ejércitos del norte y del sur se acercaban a Madrid...

¡Era una guerra civil! Esa fue la terrible constatación que, durante aquel breve fin de semana, se fue gestando gradualmente y que, al finalizar, estalló repentinamente sobre el pueblo español. En un par de días, el general Franco había anunciado públicamente que el objetivo de los insurgentes era sofocar el bolchevismo y que la entrada victoriosa de las fuerzas antigubernamentales en Madrid iría seguida del establecimiento de un Directorio militar. Desde Burgos, capital provisional del nuevo régimen, si es que tal iba a ser, el general Mola proclamó el establecimiento de dicho Directorio, envió mensajes a potencias extranjeras y anunció la destitución de todos los embajadores y cónsules de la Segunda República.

A medida que la guerra avanzaba, los periódicos empezaron a hablar con ligereza de los frentes norte y sur, de las batallas que se libraban en la sierra de Guadarrama, del inminente asedio de Badajoz, de la posibilidad de una acción frente a Madrid. Entonces, las ondas que se extendieron rápidamente por España se propagaron. Los trabajadores rusos contribuyeron con grandes sumas a los fondos del Gobierno español; aviones italianos volaron a Marruecos para apoyar a los rebeldes; miembros del Frente Popular en Francia instaron a la intervención en favor de sus camaradas españoles; el gobierno francés propuso al gobierno británico un pacto de no intervención; Alemania exigió una compensación por el fusilamiento de cuatro alemanes... Así, de una manera que pocos podrían haber previsto, España finalmente irrumpió en la escena internacional: y el país que durante siglos se había mantenido un aislamiento no demasiado espléndido, se convirtió en el centro de atención de toda Europa.

Con la transformación de una serie de motines aparentemente dispersos en una revolución y la posterior conversión de ésta en la más sangrienta y feroz de las guerras civiles, esta historia de la Segunda República española llega a un trágico final. Cualquier análisis de la guerra civil y sus consecuencias pertenece, sin duda, a otro volumen, para el cual el historiador encontrará material de

184 *The Times*, 5 de agosto de 1936. Confirmado mediante correspondencia privada.

sobra. Pero la Segunda República, en cualquier aspecto, está muerta. Aunque continuara nominalmente, jamás podría volver a ser lo que se pretendía en sus inicios. Su destino quedó sellado desde el momento en que el gabinete de Martínez Barrio fue depuesto. Desde ese momento, los hombres no hablaban del futuro del régimen republicano, sino de la naturaleza del régimen que habría de sucederle. ¿Qué clase de gobierno tendría que sufrir ahora España, que tanto había sufrido ya?

Nadie dudaba de que el efecto inmediato de la guerra, independientemente de quién fuera el vencedor, sería hacer oscilar el péndulo con más violencia que nunca. La paz, cuando llegue, no podrá sino ir seguida de un período de gobierno represivo —una dictadura, sin duda— en el que los partidarios del bando perdedor que queden con vida tendrán la opción de cambiar de bando, de conformarse indefinidamente con opiniones que nunca podrían sostener en conciencia o de abandonar el país. Esto, sin duda, junto con el efecto de la liberación de pasiones reprimidas durante tanto tiempo, explica la terrible amargura y el salvajismo a veces casi bestial que se ha observado en ambos bandos. Ninguno de los bandos contemplaba la posibilidad de que venciera el otro. Para cada bando, la victoria simplemente debía ser suya.

V. REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA CIVIL.

Alianzas e ideales de los partidos. La tragedia de la Segunda República. Su fracaso según Madariaga.

Perspectivas inmediatas y futuras.

Al reflexionar sobre la guerra y sobre la tragedia de la República de 1931, hay que resistirse a toda costa a la tentación de buscar responsables. Reflexionar con ese espíritu de represalia que fue la perdición de la República nos llevaría a una simplificación excesiva de unas cuestiones que, en todo momento, han estado estrechamente interrelacionadas entre sí y, por lo tanto, son extremadamente complejas.

Es una paradoja extraña y terrible, por ejemplo, que la nación se viera sumida en un baño de sangre por el acto deliberado de hombres que luchaban por los ideales del partido que tan recientemente se había presentado ante el país con el lema de «Ley y Orden», y que, de hecho, fuera precisamente por esa ley y orden tal y como ellos la concebían por lo que lucharon. Los políticos de la derecha, sin duda, dirían que la guerra fue iniciada por una revuelta del ejército en la que ellos no participaron, y de la que muchos de ellos, si no todos, ignoraban su existencia. Sea como fuere, pronto se resolvió en un conflicto, y un conflicto a muerte, entre la izquierda y la derecha. Todos que estar de un lado o del otro: ya no había centro.

En el extranjero, hemos tendido a considerar la guerra como un enfrentamiento entre fascistas y comunistas, entre la mano alzada y el puño cerrado, entre Mussolini y Moscú. Pero, en realidad, aunque el fascismo inspiró a los rebeldes y a sus seguidores, y fueron en gran medida los comunistas los responsables de reunir a las fuerzas del Gobierno, las partes enfrentadas no tenían en absoluto una composición tan simple. Por un lado estaban los generales del Ejército descontentos con el régimen republicano, al que rechazaban por haber sido atacados en el último giro del péndulo. Arrastraron con ellos a Legión Extranjera en Marruecos y a amplios sectores de los oficiales y tropa del ejército, no necesariamente porque fueran fascistas, ni siquiera porque supieran lo que era el fascismo, sino en parte porque sus mandos eran distinguidos soldados en altos cargos y con excelentes historiales militares, y les habían dicho que era su deber resistirse al bolchevismo. Y también porque muchos de ellos, al igual que sus jefes, se oponían genuinamente a un Gobierno que tanto había pisoteado lo que ellos y sus padres habían apreciado más.

Al otro lado estaba el Gobierno del Frente Popular, seguido por todos aquellos que apoyaban a cualquiera de los grupos que conformaban una coalición tan precaria: entre ellos destacaban la Unión Republicana, la Izquierda Republicana, los socialistas, los sindicalistas, los marxistas unificados, los comunistas y los anarquistas. Este bando contaba también con el apoyo de un gran número de personas respetuosas con la ley y de mentalidad democrática, que en octubre de 1934 habían estado del lado del centro-derecha, pero que sostenían que, independientemente de sus opiniones políticas, era su claro deber ponerse del lado de un Gobierno elegido constitucionalmente y que, por lo tanto, representaba lo más fielmente posible la voluntad del pueblo. Así, había partidarios del centro-derecha que apoyaban al Gobierno, al igual que había antiguos aliados de la izquierda que esperaban, en privado si no en público, la victoria de los rebeldes, porque, a pesar de su aversión al régimen militar, lo detestaban menos que el caos continuado o el dominio del anarquismo o el comunismo. Y aquí cabe recordar cómo Largo Caballero, socialista avanzado como era, había declarado su implacable oposición al comunismo, y que Azaña, sólo unos días antes de su elección a la Presidencia, había respondido a un diputado conservador, que le había tachado de simpatizante comunista: «Tengo tanto que perder con la posible llegada del comunismo como el honorable diputado». De hecho, muy pronto tuvo mucho más.

Estos indicios bastarán para poner de manifiesto la naturaleza muy heterogénea de las fuerzas de ambos bandos, etiquetadas de forma inexacta como «fascistas» contra «comunistas», sobre todo porque en este mundo moderno todo el mundo tiene que ser etiquetado de algún modo. Entre los rebeldes, unos luchaban por distintas formas del antiguo régimen: por la Iglesia, por la nobleza, quizá por el Rey. Algunos, sin duda, por un retorno a 1923 y a un Estado fascista en una Europa ahora plagada de fascismo. Otros, sin duda, por un retorno a 1931 y un nuevo comienzo en el camino de las reformas, pero con un progreso lento y moderado, no por una continuación del ritmo al que España se había precipitado cuesta abajo hacia su propia destrucción. Las tropas leales luchaban por objetivos bastante más diversos: algunos simplemente por el derecho inalienable del pueblo a un gobierno de su elección; otros por las reformas que la izquierda ya había emprendido para «esa otra República» a la que se había referido Largo Caballero en su juicio; algunos por la revolución proletaria, que al fin, tras cinco años de República, había sido provocada por los capitalistas y por el Ejército; otros finalmente, por la destrucción de las instituciones odiadas, por la destrucción de cualquier cosa, por la destrucción a secas.

Resulta sencillo y natural, condenar a los jefes militares por levantarse contra un Gobierno legítimamente constituido, pero hay que recordar que habían pasado menos de dos años desde que una amplia parte de la izquierda había hecho lo mismo. Estos, a su vez, podrían haber declarado que los insurgentes del general Sanjurjo de 1932 les habían servido de ejemplo, y el general Sanjurjo podría haber alegado a su favor la influencia que ejerció sobre la opinión pública el levantamiento republicano de Jaca en 1930, aunque este levantamiento fracasara en su objetivo inmediato. Del mismo modo, se pueden encontrar precedentes de la brutalidad de la que sin duda fueron culpables ambas partes en el conflicto, así como de la represión anterior y las inútiles represalias que manchan la historia de la República. Tampoco bastará con remontarse a la dictadura de Primo de Rivera, pues un examen de la situación de la política española antes de su llegada convencerá de que había motivos de sobra para la exasperación tanto entonces como después.

Una visión verdaderamente objetiva del reñidero español revelará patriotismo e idealismo por un lado y por el otro, y en ambos bandos hay líderes a quienes podemos admirar por su capacidad y con quienes podemos compadecernos por su derrota. No menos merecedores de condolencias que Primo de Rivera y su Soberano son los hombres que instauraron la Segunda República. Puede que haya habido momentos en sus breves carreras en los que la túnica de su importancia se les cayera y los dejara de pie, sin darse cuenta, ataviados con traje de comedia, pero supondría un incremento de la tragedia actual que el Estado español se viera privado para siempre de su utilidad. A algunos de ellos, al menos, sus oponentes más acérrimos los recordarán con honor e incluso con afecto. Eran hombres de altos ideales, de asombrosa laboriosidad, de indudable probidad y de notable capacidad

administrativa. Fracasaron en su tarea principal por dos razones. En primer lugar, como la mayoría de los de su clase, padecían un individualismo tan intenso que fueron incapaces de mantener una coalición, como la de abril de 1931, que representaba con bastante precisión las diferentes opiniones de los progresistas españoles y que, de haberse mantenido unida, sin duda habría ganado numerosos adeptos. En segundo lugar, fueron incapaces o no estuvieron dispuestos a detener el péndulo, y el péndulo es la maldición de España.

Estas ideas fueron expresadas con gran fuerza por uno de los republicanos más destacados, Salvador de Madariaga, en su notable *Idearium para la Constitución de la Tercera República* que publicó cuando la Segunda República cumplía cuatro años. «Aquellos pocos de nosotros —escribe— que en 1931 soñábamos en que España hubiera logrado por fin su redención y estaba a punto de emprender con ilusión la elaboración de su nueva Constitución antes de ponerse a trabajar en serio, hemos visto cómo la ambición de unos pocos, la negligencia de todos, las divisiones en las filas del Centro y la intransigencia de los extremistas han asestado a España un golpe terrible tanto en su economía como en su moral y en su prestigio en el extranjero. Sabemos que acabarán por provocar su ruina, a menos que los españoles podamos apasionarnos con una generosidad suficiente para elevarnos por encima de nuestras ambiciones y prejuicios, nuestras impaciencias y malos hábitos, y para llenarnos de un sentido de nuestra responsabilidad».¹⁸⁵

Tenía razón. Estos idealistas de la izquierda no podían o no querían ver que, al fomentar la reacción en lugar de intentar frenarla, solo estaban invitando a los extremistas a utilizarlos como peldaños para sus propios fines. Los extremistas podían permitirse tolerar la República hasta que llegara el momento propicio para su tan anhelada revolución, tras la cual podrían desechar a los fundadores de la República como hombres que ya habían cumplido sus propósitos y que ya no les servían de nada.

Sin duda, algunos de estos fundadores responderían de buena fe que, en los primeros tiempos de la República, la severidad era necesaria para su consolidación y que los descontentos, con agravios profundamente arraigados contra el antiguo orden, nunca habrían tolerado reformas lentas y graduales. Analizar esta respuesta nos adentraría más en el terreno de las hipótesis de lo que sería factible en este contexto. Baste decir que hay grados de severidad, como pronto descubrieron quienes pensaban que Primo de Rivera había alcanzado el máximo, y que un gran líder, de haber surgido, podría haber despertado el entusiasmo por una reforma basada en un plan de diez o veinte años —el único camino, al parecer, hacia la salvación definitiva de España.

La debilidad fundamental de la Segunda República ha sido la falta de un gran líder. No ha producido ningún hombre lo suficientemente poderoso para gobernar, pero a la vez capaz de hacerlo con moderación y prudencia, de trascender los fines recriminables de la política partidista y de persuadir a otros para que lo acepten y crean que él tiene la clave de la prosperidad del país. Un hombre así debe surgir necesariamente para que España pueda salvarse. Los gobiernos de izquierda sólo produjeron reacción. Los gobiernos de derecha, de haberse intentado, probablemente no habrían producido menos. Los gobiernos de centro no hicieron más que marcar el paso del tiempo y liquidar los resultados de la reacción. Pero en algún momento, ya sea en un futuro cercano o lejano, un gobierno de centro debe volver a surgir, y esta vez debe venir, no para transigir, sino para gobernar.

El panorama inmediato es sombrío, en una grado indescriptible. La esperanza y el optimismo de hace apenas cinco años han dado paso a la desesperación. «Hemos proclamado la República —telegrafió un alcalde apócrifo de 1931 al Ministerio de la Gobernación— ¿qué hago con el cura?» Nos reímos, pues aquello era una comedia: el cura corría poco peligro. «Hemos masacrado a los oficiales —telegrafió la tripulación de un buque de guerra en 1936— ¿qué hacemos con los cadáveres?» Ya no nos reímos, pues esto es una tragedia. La matanza de un lado y la matanza del otro parecen ser las únicas perspectivas. El ritmo de la reacción se ha acelerado hasta perderse en el

¹⁸⁵ *Anarquía o jerarquía*, p. 10. Cabe añadir que la redacción de este capítulo concluyó el 10 de agosto de 1936.

torbellino y el choque de la guerra. Los hombres se enfrentan entre sí. La civilización ha cedido ante el caos. Y hay un «mártir de la República» por encima de todos los demás: España.

Sin embargo, creo en España, con la misma firmeza con que siempre he creído en ella, y creo que los millones de sus ciudadanos que aún anteponen la patria al partido, a su debido tiempo, en una tierra reunificada y próspera, tendrán su recompensa. Puede haber diversas opiniones sobre reyes, presidentes, estadistas, demagogos y políticos partidistas, pero nadie que conozca España, y para quien sea un segundo hogar, puede tener la menor duda sobre la grandeza intrínseca de su pueblo. Si la naturaleza la ha dotado de riquezas, la historia la ha coronado una y otra vez con laureles perdurables. Se ha elevado muy por encima de gobernantes tiránicos, favoritos caprichosos y gobiernos vacilantes, y se elevará aún más por encima incluso de las luchas partidistas más encarnizadas. Porque todavía conserva esas virtudes esenciales sin las cuales, en la antigua Europa belicosa, jamás habría podido disfrutar de su espléndido pasado. Y esas mismas virtudes, en la nueva Europa, que ahora lucha, como ella misma, en medio de un proceso de renacimiento, le brindarán un futuro aún más espléndido.

BIBLIOGRAFÍA

SOBRE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Las obras más destacadas de la Sección III están marcadas con un asterisco (*); los libros publicados en España y escritos en catalán, con una cruz (†).

Los estudiantes también pueden consultar los tres primeros y el último capítulo de *Spain, a Companion to Spanish Studies*¹⁸⁶, Londres, 1929; F. Sánchez: *Bibliographical List relative to the Dictatorship of Primo de Rivera*, Carolina del Norte, 1931.

El orden de los libros dentro de cada sección es alfabético.¹⁸⁷

I. HISTORIAS DE ESPAÑA ESCRITAS EN INGLÉS

Altamira, R.: *A History of Spanish Civilization*. Trans. P. Volkov. London, 1930.

Atkinson, W. C.: *Spain, a Brief History*. London, 1934.

Bertrand, Louis, and Petrie, Sir Charles: *The History of Spain, 711-1931*. London, 1934.

Chapman, C. E.: *A History of Spain*. New York, 1925.

Hume, Martin: *Modern Spain, 1788-1898*. London, 1899.

Moran, Catherine: *Spain, its Story Briefly Told*. London, 1931.

Petrie, Sir Charles: *Spain* (Modern States Series). London, 1934.

Sedgwick, H. D.: *Spain, a Short History*. London, 1925.

II. LIBROS EN INGLÉS O FRANCÉS SOBRE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Alcalá-Galiano, Álvaro (Marqués de Castel-Bravo): *The Fall of a Throne*. Trans. Mrs. Steuart Erskine. London, 1933. [Una historia anecdótica de los últimos días de la Monarquía, escrita desde un punto de vista marcadamente monárquico y traducida del segundo libro mencionado en la Sección III.]

Anónimo: *The Spanish Republic: A Survey of Two Years of Progress*. London, 1933. [Antirrepublicano. Documentación interesante.]

186 [Editado por Allison Peers, que redacta el «Preface», y los capítulos «Spanish History, 1492 to 1898» y «Spanish Literature to 1681». Los otros colaboradores son: William Atkinson, H. J. Chaytor, William J. Entwistle, S. C. Kaines Smith, Martin S. Briggs, Sidney Grew y Aubrey F. G. Bell. Este último se ocupa de «Spain since 1898».]

187 [Las obras presentes en Clásicos de Historia están enlazadas en el título. Otras obras de los autores citados por Peers, que también guardan relación con el tema y que asimismo forman parte de Clásicos de Historia, se enlazan al nombre del autor.]

- Benoist, Charles: *Cánovas del Castillo: La Restauration rénovatrice*. Paris, 1930.
- Brandt, Joseph A.: *Toward the New Spain*. Chicago, 1933. [Historia del desarrollo político en España desde 1812 hasta 1933, escrita por un autor norteamericano. Las fuentes de la última parte de la narración se indican con frecuencia en notas a pie de página. Incluye una buena bibliografía, principalmente sobre el periodo anterior al reinado de Alfonso XIII, que resultará de consulta para los estudiosos de la época.]
- Chapman-Huston, (Major) D., and Princess Pilar of Bavaria: *Don Alfonso XIII: A Study of Monarchy*. London, 1931.
- Dwelshauvers, G.: *La Catalogne et le problème catalan*. Paris, 1926.
- Erskine, Mrs. Steuart: *Twenty-nine Years: the Reign of King Alfonso of Spain*. London, 1931.
- Greaves, H. R. G.: *The Spanish Constitution*. London, 1933. [Folletos Day-to-day, N.º 15, 48 pp.]
- Ludwig Ferdinand of Bavaria, Princess: *Through Four Revolutions, 1862-1933*. London, 1933.
- Madariaga, S. de: *Spain*. London, 1930. [Un análisis de la historia de España, que sigue su desarrollo hasta nuestros días.]
- Manning, Leah: *What I saw in Spain*. London, 1935. [Trata sobre la rebelión asturiana de octubre de 1934. Escrito desde la perspectiva de la izquierda. Incluye apéndices sobre presuntas atrocidades.]
- Mirkine-Guetzévitch, B., and Reale, E.: *L'Espagne*. Paris, 1933. (Bibliothèque d'histoire et de politique.) [Contiene el texto en francés de la Constitución de 1931 y la Ley Agraria de 1932.]
- Sencourt, Robert: *Spain's Uncertain Crown*. London, 1932. [La historia de los soberanos españoles, 1808-1931. Escrito con gran interés, los últimos capítulos desde la perspectiva conservadora.]
- Tharaud, Jérôme et Jean: *Rendez-vous espagnols*. Paris, 1925.
- Trend, J. B.: *The Origins of Modern Spain*. Cambridge, 1934. [«Una colección de ensayos: semblanzas personales e íntimas de los reformadores y educadores de la generación de 1868» (Prefacio). Escrito desde la perspectiva de la izquierda.]
- Young, Sir George: *The New Spain*. London, 1933, [Aborda de forma positiva los primeros logros de la República.]

III. LIBROS EN ESPAÑOL O CATALÁN SOBRE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.

- Albornoz, Álvaro de: *Al Servicio de la República*. Madrid, 1936.
- *Alcalá-Galiano, Álvaro: *La caída de un trono*, 1931. Madrid, 1933.
- Álvarez, Basilio: *Dos años de agitación política*. Alcalá de Henares, 1933. 2 vols.
- Álvarez y Blanco Gendín, S.: *Regionalismo. Estudio general. El Problema en Asturias, etc.* Oviedo, 1932.
- Araquistáin, Luis: *Entre la guerra y la revolución: España en 1917*. Madrid, 1917.
- Araquistáin, Luis: *El ocaso de un régimen*. Madrid, 1930.
- Arrabal, Juan. José María Gil Robles: *Su vida, su actuación, sus ideas*. Madrid, 1933.
- Asamblea Nacional: Biografía y retratos de los 400 asambleístas y numerosos datos de menor interés*. Madrid, 1927.

- *[Azaña, Manuel](#): *En el poder y en la oposición (1932–1934)*. Madrid, 1934. 2 vols. [Discursos políticos.]
- *Azaña, Manuel: *Una Política, 1930-1932*. Madrid, 1932. [Discursos políticos.]
- *Bermejo, I. A.: *Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868*. Madrid, 1876–7. 3 vols. [También ediciones posteriores.]
- Blanco, Carlos: *La Dictadura y los procesos militares*. Madrid, 1931.
- Blasco Ibáñez, V.: *Lo que será la República española*. Paris, 1925.
- Blasco Ibáñez, V.: *Una nación secuestrada. El terror militarista en España*. Paris, 1925.
- *Calvo Sotelo, J.: *Mis Servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la historia*. Madrid, 1931.
- Camba, Julio: *Haciendo de República*. Madrid, 1934. [Artículos humorísticos de un conocido periodista.]
- Cambó, Francisco: [Por la Concordia](#). Madrid, 1930. [Versión catalana de Cambó: *Per la concòrdia*.]
- Canals, Salvador: *España, la Constitución y la Monarquía*. Madrid, n.d.
- Casares, F.: *La C.E.D.A. va a gobernar. Notas y glosas de un año de vida pública nacional*. Madrid, 1934.
- [Castrillo y Santos, J.](#): *La Orientación de la República*. Madrid, 1933.
- Castro, Cristóbal de: *Al servicio de los campesinos: Hombres sin tierra, tierra sin hombres*. Madrid, 1931 (segunda edición).
- Castro y Hernández, M. de: *Nacionalismo, Humanismo y Civilización*. Madrid, 1922.
- *Ciges Aparicio, M.: *España bajo la dinastía de los Borbones: 1701-1931*. Madrid, 1932.
- Claridades, Capitán (Vicente Clavel): *Fermín Galán y su nueva creación*. Barcelona, 1931.
- [Constitución política de la República Española](#). Madrid, 1931.
- Cordero Pérez, M.: *Los Socialistas y la Revolución. Temas de actualidad*. Madrid, 1932.
- Cortés Cavanillas, J.: *La caída de Alfonso XIII*. Madrid, 1932.
- Domingo, Marcelino: *¿A dónde va España?* Madrid, 1930.
- †Estelrich, Joan: *De la Dictadura a la República*. Barcelona, 1931.
- *Fernández Almagro, M.: *Historia del reinado de Alfonso XIII*. Barcelona, 1933.
- Franco, Comandante: *Madrid bajo las bombas*. Madrid, 1931.
- García Gallego, J.: *¿Por dónde se sale? El momento actual de España*. Madrid, 1931.
- *Giménez Caballero, E.: *Genio de España*. Madrid, 1932.
- Giménez Caballero, E.: *Manuel Azaña. Profecías españolas*. Madrid, 1932.
- González Araco, M.: *Castelar: su vida y su muerte*. Madrid, 1900.
- González López, E.: *El Espíritu universitario*. Madrid, 1931.
- González Ruiz, N.: *Azaña. Sus ideas religiosas, sus ideas políticas, el hombre*. Madrid, 1932.
- Heredia, M. de: *Semblanzas. Figuras de la revolución española*. Madrid, 1933.
- Hernández Mir, F.: *La Dictadura ante la Historia*. Madrid, 1930.

- Jiménez de Asúa, L.: *Notas de un confinado*. Madrid, n.d.
- Jiménez de Asúa, L.: *Política, figuras, paisajes*. Madrid, n.d.
- *Jiménez de Asúa, L.: *Proceso histórico de la Constitución de la República Española*. Madrid, 1932.
- *Juderías, J.: [*La Leyenda negra*](#). Barcelona, n.d.
- *Lerroux, Alejandro: *Al Servicio de la República*. Madrid, 1930.
- Lerroux, Alejandro: *Trayectoria política de Alejandro Lerroux*. Madrid, 1934. [Selección de sus discursos y artículos.]
- Llopsis y Pérez, A.: *Historia política y parlamentaria de D. Nicolás Salmerón y Alonso*. Madrid, 1915.
- Llorens, E. L.: *La Autonomía en la integración política*. Madrid, 1932.
- López Ochoa, E. (General): *De la Dictadura a la República*. Madrid, 1930.
- *Madariaga, S. de: *Anarquía o Jerarquía. Ideario para la Constitución de la Tercera República Española*. Madrid, 1935.
- *Maeztu, Ramiro de: [*Defensa de la Hispanidad*](#). Madrid, 1934.
- Marco Miranda, V.: *Las Conspiraciones contra la Dictadura*. Madrid, 1930.
- Marsá, Graco: *La sublevación de Jaca: relato de un rebelde*. Madrid, 1931.
- Martínez de la Riva, R.: *Las jornadas triunfales de un golpe de estado*. Barcelona, 1923.
- *Maura Gamazo, Gabriel: *Bosquejo histórico de la Dictadura*. Madrid, 1930. 2 vols.
- Maura Gamazo, Gabriel: *Dolor de España*. Madrid, 1932.
- [Maurín, J.](#): *La Revolución Española. De la monarquía absoluta a la revolución socialista*. Madrid, 1932.
- Maurín, J.: *Los Hombres de la Dictadura*. Madrid, 1930.
- Medina y Togores, J. de: *Un Año de Cortes Constituyentes. Impresiones parlamentarias, etc.* Madrid, 1932.
- Mola, Emilio (General): [*Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad*](#). Madrid, 1932. 2 vols.
- *Mori, Arturo: *Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española*. Madrid, 1932 y siguientes. En curso.
- †Nicolau d'Olwer, Ll.: *La lliçó de la Dictadura*. Barcelona, 1931.
- Ors, J.: *España y Cataluña*. Madrid, 1930.
- Ortega y Gasset, E.: *La Verdad sobre la Dictadura*. Madrid, 1931.
- *[Ortega y Gasset, J.](#): *Rectificación de la República*. Madrid, 1931.
- Orts González, J.: *El Destino de los pueblos ibéricos*. Madrid, 1932.
- *Pérez de Ayala, Ramón: *Política y toros*. Madrid, 1925 (2nd edition).
- Pérez Serrano, N.: *La Constitución Española*. Madrid, 1932.
- Pi y Margall, F.: *La Federación*. Madrid, 1880.
- Pi y Margall, F.: [*Las Nacionalidades*](#). Madrid, 1882.

Pi y Margall, F.: *Lecciones de Federalismo*. Recopiladas por J. Pi y Arsuaga. Barcelona, 1931.

Posada, Adolfo: *La Reforma Constitucional*. Madrid, 1931.

*Primo de Rivera, Miguel: (1) «Génesis de la Dictadura»; (2) «Constitución y labor del Directorio»; (3) «La Dictadura civil»; (4) «Fin de la Dictadura española». [Cuatro artículos escritos para *La Nación* de Buenos Aires, reimpresos en *El Debate* de Madrid los días 21, 22, 23 y 25 de marzo de 1930, e incluidos en esta lista de libros por su singular interés histórico.]

Primo de Rivera, Miguel: *Epistolario del Dictador*. Ed. J. M. y L. de Armiñán Odriozola. Madrid, 1930.

Recaséns Siches, L.: *El Poder Constituyente. Su teoría aplicada al momento español*. Madrid, 1931.

Reparaz, Gonzalo de: *Alfonso XIII y sus cómplices*. Madrid, 1931.

Reparaz, Gonzalo de: *Páginas turbias de historia de España que ahora se ponen en claro*. Madrid, n.d. (1929).

Rivera y Pastor, F.: *Nueva práctica y estilo de la República*. Madrid, 1935.

*Rodríguez-Solís, E.: *Historia del partido republicano español*. Madrid, 1892–3. 2 vols.

*[Romanones, Conde de](#): *Las últimas horas de una monarquía. La República en España*. Madrid, 1931.

Romanones, Conde de: *Las Responsabilidades políticas del antiguo régimen de 1875 a 1923*. Madrid, n.d.

†Rubió Tudurí, M., y Mart, N.: *Estat espanyol, Societat Anónima*. Barcelona, 1930.

Salazar Alonso, R.: *La Justicia bajo la Dictadura*. Madrid, 1930.

Salmerón, Nicolás: *Discursos parlamentarios*. Madrid, 1881.

Sánchez Guerra, R.: *Dictadura, Indiferencia, República*. Madrid, 1931.

Sánchez Guerra, R.: *Proceso de un cambio de régimen*. Madrid, 1932.

Sandoval, A. de: *El Hombre que necesita España. Ensayo político-social*. Madrid, 1934.

Tusquets, J.: *Orígenes de la Revolución española*. Barcelona, 1932.

Vila, E.: *Un Año de República en Sevilla*. Sevilla, 1932.

Villanueva, F.: *La Dictadura militar*. Madrid, 1930.

Yáñez, T. R.: *La Soberanía popular y su fuerza emancipadora. Ante la situación de España*. Madrid, 1931.

CLÁSICOS DE HISTORIA

<http://clasicoshistoria.blogspot.com.es/>

- 576 Víctor de Tunnuna, *Cronicón*
- 575 Isidoro de Sevilla, *Varones ilustres*
- 574 Gareth Jones, *Un periodista galés en la Unión Soviética (1930-1935)*
- 573 Malcolm Muggeridge, *La denuncia de la Hambruna soviética*
- 572 Amador de los Ríos, *Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España*
- 571 Joaquim Pedro de Oliveira Martins, *Brasil y las colonias portuguesas*
- 570 Joaquim Pedro de Oliveira Martins, *Historia de Portugal*
- 569 Jorge de Sena, *El polígrafo barroco Manuel de Faria e Sousa*
- 568 Manuel de Faria y Sousa, *Epítome de las historias portuguesas*
- 567 Carlos Pereyra, *El mito de Monroe. Seguido de El crimen de Woodrow Wilson*
- 566 Johannes Scherr, *Germania, dos mil años de historia alemana*
- 565 José María Salaverría, *El instante dramático y otros artículos*
- 564 Eduardo Barriobero, *Un tribunal revolucionario. Cuenta rendida por el que fue su Presidente*
- 563 Winston S. Churchill, *La guerra civil española. Artículos y discursos 1936-1939*
- 562 Francisco Javier Simonet, *La mujer árabe-hispana y otros estudios andalusíes*
- 561 Godefroid Kurth, *¿Qué es la Edad Media? y otros artículos polémicos*
- 560 Juan Valera, *Sobre el concepto que hoy se forma de España y otros artículos*
- 559 Ramón del Valle-Inclán, *Visión estelar de un momento de guerra*
- 558 Hans Holbein el Joven, *Danza de la Muerte*
- 557 Megástenes, *La India (fragmentos)*
- 556 Beroso, *Babilonia (fragmentos) seguido del Falso Beroso de Annio de Viterbo*
- 555 Leonor López de Córdoba, *Memorias (1368-1412)*
- 554 Herrada de Lansberg, *Hortus deliciarum. Calcos de las miniaturas*
- 553 Augustin Cochin, *Las sociedades de pensamiento y la democracia en la revolución francesa*
- 552 Manetón, *Historia de Egipto (fragmentos)*
- 551 Horace Greeley, *La Administración Lincoln y la Guerra Civil (1860-1865)*
- 550 DeBow, Lagdon, Van Dyke, *Defensa de la esclavitud. Un panfleto antiabolucionista de 1860*
- 549 John L. O'Sullivan, *El destino manifiesto (artículos)*
- 548 Pedro Sarmiento de Gamboa, *Historia de los Incas*
- 547 Francis Yeats-Brown, *La jungla europea*
- 546 E. A. Wallis Budge, *La literatura de los antiguos egipcios*
- 545 Yevgeny Ivanovich Zamiatin, *Nosotros*
- 544 *La epopeya de Gilgamesh*
- 543 Joaquín Costa, *Reconstitución y europeización de España*
- 542 Ricardo Macías Picavea, *El problema nacional: hechos, causas, remedios*
- 541 Julio Cejador y Frauca, *Tierra y alma española*
- 540 Havelock Ellis, *El alma de España*
- 539 Sexto Aurelio Víctor, *Sobre los Césares*
- 538 Jacob Burckhardt, *La época de Constantino el Grande. Del paganismo al cristianismo*
- 537 Rufo Festo, *Breviario de las victorias del pueblo romano*
- 536 Lucio Cecilio Lactancio, *Cómo mueren los perseguidores*
- 535 Luis Zapata de Chaves, *Miscelánea o Varia historia*
- 534 Nicolás de Condorcet, *Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano*

- 533 Martin Hume, *Historia del pueblo español, su origen, desarrollo e influencia*
- 532 François Plaine, *Los pretendidos terrores del año mil*
- 531 Juan Ximénez Cerdán, *Letra intimada al Justicia de Aragón*
- 530 Andrés de Mena y Francisco de Rioja, *Sobre el Conde Duque de Olivares, en su caída*
- 529 Luis Suárez, *Grandes interpretaciones de la Historia*
- 528 *La falsa vida del falsario Saavedra (relatos y refutaciones)*
- 527 Eusebio Jerónimo de Estridón, *Varones ilustres*
- 526 Bernardino de Sahagún, *Historia general de las cosas de Nueva España*
- 525 Pedro Mártir de Angleria, *Décadas del Nuevo Mundo*
- 524 Carlos Pereyra, *Tejas: la primera desmembración de Méjico*
- 523 Lorenzo Zavala, *Viaje a los Estados Unidos del Norte de América en 1830*
- 522 Frances Trollope, *Costumbres familiares de los norteamericanos*
- 521 Jesse Ames Spencer, *Historia de los Estados Unidos (2 tomos)*
- 520 Benjamín Franklin, *Esclavos y razas (1751-1790)*
- 519 Alejandro Manzoni, *Historia de la Columna Infame*
- 518 Alejandro Manzoni, *Los novios. Historia milanese del siglo XVII*
- 517 Fernando Patxot, *Las ruinas de mi convento*
- 516 Marqués de Ayerbe, *Memorias sobre la estancia de D. Fernando VII en Valençay*
- 515 Jerónimo Münzer, *Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495*
- 514 Conde de Robres, *Historia de las guerras civiles de España desde 1700 hasta 1708*
- 513 Isidoro de Sevilla, *Historia de los reyes godos, vándalos y suevos*
- 512 Ángel Salcedo Ruiz, *Contra el regionalismo aragonés (1918-1920)*
- 511 Juan Moneva y Puyol, *Disertaciones políticas (republicanas y regionalistas)*
- 510 Andrés Nin, *Las dictaduras de nuestro tiempo*
- 509 Francisco Cambó, *Las dictaduras*
- 508 Manuel Chaves Nogales, *La vuelta a Europa en avión; los reportajes del Herald*
- 507 Guillén de Lampart, *Proclama por la liberación de la Nueva España y otros textos*
- 506 Carlos Pereyra, *La obra de España en América*
- 505 Pedro Mártir de Angleria, *Cartas del Nuevo Mundo 1493-1525*
- 504 Juan Moneva y Puyol, *Política de represión y otros textos*
- 503 Francisco Cambó: *Un catalanismo de orden; textos 1907-1937*
- 502 Macalister y otros, *Palestina en 1911 (Encyclopædia Britannica)*
- 501 George Robinson, *Viaje a Palestina y Siria en 1830*
- 500 Augusto Conte, *Recuerdos de un diplomático*
- 499 Pere M. Rossell, *La Raza*
- 498 *Las razas europeas en la antropología racista. Textos, mapas y gráficos*
- 497 Marco Aurelio, *Soliloquios*
- 496 Cayetano Barraquer, *Quema de conventos y matanza de frailes en la Barcelona de 1835*
- 495 Francisco Raull, *Historia de la conmovición de Barcelona en... julio de 1835*
- 494 Eugenio de Aviraneta y Tomás Bertrán Soler, *Mina y los proscritos*
- 493 Ramón Xaudaró y Fábregas, *Bases de una constitución política... y otros textos*
- 492 Joaquín del Castillo, *Las bullangas de Barcelona o sacudimientos de un pueblo oprimido...*
- 491 John Tanner, *Narración de su cautiverio y aventuras con los indios de Norteamérica*
- 490 Alphonse Daudet, *Tartarín de Tarascón*
- 489 Gustave de Beaumont, *Estado Unidos en 1831: Esclavitud, racismo, religión, tribus indias...*
- 488 William Jay, *Causas y consecuencias de la guerra de 1847 entre Estados Unidos y Méjico*
- 487 Manuel Gil Maestre, *El anarquismo, hechos e ideas*
- 486 Miguel de Cervantes, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*
- 485 Richard F. Burton, *Peregrinación a La Meca y Medina*
- 484 Romualdo Nogués, *Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja*

- 483 Vicente de la Fuente, *La sopa de los conventos*
 482 John Leech, *Grabados de la Historia cómica de Roma*
 481 José García de León y Pizarro, *Memorias*
 480 Gustavo Adolfo Bécquer, *Desde mi celda. Veruela. Costumbres de Aragón*
 479 Washington Irving, *Cuentos de la Alhambra*
 478 Manuel de Galhegos, *Obras varias al real palacio del Buen Retiro*
 477 Évariste Huc, *Recuerdos de un viaje a la Tartaria, el Tíbet y la China en 1844, 1845 y 1846*
 476 Rafael Torres Campos, *Esclavitud e imperialismo en el África árabe*
 475 Rosendo Salvado, *Memorias históricas sobre la Australia*
 474 Juan Fernández de Heredia, *Libro de los fechos et conquistas de la Morea*
 473 *Crónica del rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso*
 472 Plinio el Joven, *Cartas. Libro I al IX*
 471 Thomas Macaulay, *Revolución de Inglaterra*
 470 Manuel Fraga Iribarne, *Razas y racismo*
 469 Juan Bautista Pérez, *Parecer sobre las planchas de plomo que se han hallado en Granada*
 468 G. Lenotre, *Historias íntimas de la Revolución Francesa*
 467 Pierre Gaxotte, *La España de los años treinta. Artículos de «Je suis partout»*
 466 Lucio Marineo Sículo, *Crónica de Aragón*
 465 Gonzalo de Céspedes, *Excelencias de España y sus ciudades*
 464 Plinio el Joven, *Panegírico de Trajano y correspondencia con el emperador*
 463 *Auca de l'Estatut de Catalunya*
 462 Thomas Macaulay, *Constructores del imperio británico en la India*
 461 *Los ilustrados y la esclavitud*
 460 José Pascasio de Escoriaza, *La esclavitud en las Antillas*
 459 Alonso de Sandoval, *Mundo negro y esclavitud*
 458 Claudio Claudiano, *Elogio de Serena*
 457 *Concilio IV de Toledo (año 633)*
 456 Pedro Bosch Gimpera, *España, Para la comprensión de España, y otros textos*
 455 Ramón Menéndez Pidal, *Lenguas y nacionalismos. Artículos y polémicas*
 454 Charles Van Zeller, *Guerra civil en España. Esbozos y recuerdos*
 453 Antonio Pirala, *Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista (6 tomos)*
 452 Plinio el Viejo, *Hispania antigua en la Naturalis Historia*
 451 Benvenuto Cellini, *Su vida escrita por él mismo en Florencia*
 450 *Propaganda y doctrina. Editoriales y otros textos de la revista Escorial (1940-1942)*
 449 Diego Abad de Santillán, *Por qué perdimos la guerra*
 448 Nuño de Guzmán, *Jornada de Nueva Galicia y otras cartas*
 447 Alfredo Chavero, *Explicación del lienzo de Tlaxcala*
 446 Ramón Menéndez Pidal, *Tres artículos sobre Bartolomé de las Casas*
 445 Américo Vespucio, *Tres cartas sobre el Nuevo Mundo*
 444 Publilio Siro, *Sentencias*
 443 Aulo Gelio, *Noches áticas*
 442 Tito Lucrecio Caro, *De la naturaleza de las cosas*
 441 Aurelio Prudencio Clemente, *Psicomaquia o Pelea de las Virtudes y los Vicios*
 440 Luciano de Samósata, *Historias verdaderas*
 439 Concepción Arenal, *La cuestión social*
 438 Benjamin Constant, *De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos*
 437 Emilio Mola Vidal, *Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad*
 436 Manuel García Morente, *Idea de la Hispanidad*
 435 Vaclav Schaschek y Gabriel Tetzl, *Viaje de León de Rosmital por España en 1466*
 434 Andrea Navagero, *Viaje por España 1524-1528*

- 433 Georg von Ehingen, *Viaje por España en 1457*
 432 Francesco Guicciardini, *Relación de España 1512-1513*
 431 Santiago Ramón y Cajal, *Patriotismo y nacionalismos. Textos regeneracionistas*
 430 Julián Ribera, *Lo científico en la historia*
 429 Juan Gálvez y Fernando Brambila, *Ruinas de Zaragoza en su primer sitio*
 428 Faustino Casamayor, *Diario de los Sitios de Zaragoza*
 427 Georges Desdevises du Désert, *Ideas de Napoleón acerca de España*
 426 Wenceslao Fernández Flórez, *Columnas de la República 1931-1936*
 425 Berman, Low y otros, *Antes de la catástrofe. Caricaturas políticas en Ken 1938-1939*
 424 Dolores Ibárruri "Pasionaria", *Artículos, discursos e informes 1936-1978*
 423 Gregorio Marañón, *Artículos republicanos 1931-1937*
 422 Emil Hübner, *La arqueología de España*
 421 Alexandre de Laborde, *Grabados del Voyage pittoresque et historique de l'Espagne*
 420 Pompeyo Trogo, *Los asuntos de España*
 419 Frederick Hardman, *Escenas y bosquejos de las guerras de España*
 418 Fustel de Coulanges, *Alsacia alemana o francesa, y otros textos nacionalistas*
 417 Theodor Mommsen, *A los italianos (la guerra y la paz)*
 416 Fustel de Coulanges, *La ciudad antigua. Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones*
 415 *Historia Augusta. Vidas de diversos emperadores y pretendientes desde el divino Adriano...*
 414 Anténor Firmin, *La igualdad de las razas humanas (Fragmentos)*
 413 Fermín Hernández Iglesias, *La esclavitud y el señor Ferrer de Couto*
 412 José Ferrer de Couto, *Los negros en sus diversos estados y condiciones*
 411 *Textos antiguos sobre el mito de las edades: Hesíodo, Platón, Ovidio, Virgilio, Luciano*
 410 Tertuliano, *Apologético*
 409 Flavio Arriano, *Historia de las expediciones de Alejandro*
 408 Luciano de Samósata, *Cómo ha de escribirse la Historia*
 407 Vasco de Quiroga, *Información en derecho sobre algunas Provisiones del Consejo de Indias*
 406 Julián Garcés, Bernardino de Minaya y Paulo III, *La condición de los indios*
 405 Napoleón Colajanni, *Raza y delito*
 404 Ángel Pulido, *Espanoles sin patria y la reza sefardí*
 403 Ángel Pulido, *Los israelitas españoles y el idioma castellano*
 402 George Dawson Flintner, *Examen del estado actual de los esclavos de la isla de Puerto Rico*
 401 Vicente de la Fuente, *Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España*
 400 Francisco Guicciardini, *Historia de Italia... desde el año de 1494 hasta el de 1532 (2 tomos)*
 399 *Anti-Miñano. Folletos contra las Cartas del pobrecito holgazán y su autor*
 398 Sebastián de Miñano, *Lamentos políticos de un pobrecito holgazán*
 397 Kenny Meadows, *Ilustraciones de Heads of the people or Portraits of the english*
 396 *Grabados de Les français peints par eux-mêmes (2 tomos)*
 395 *Los españoles pintados por sí mismos (3 tomos)*
 394 Ramón de Mesonero Romanos, *Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid*
 393 Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla, *Histoire generale de la Chine (13 tomos)*
 392 Fernando de Alva Ixtlilxochitl, *De la venida de los españoles y principio de la ley evangélica*
 391 José Joaquín Fernández de Lizardi, *El grito de libertad en el pueblo de Dolores*
 390 Alonso de Ercilla, *La Araucana*
 389 Juan Mañé y Flaquer, *Cataluña a mediados del siglo XIX*
 388 Jaime Balmes, *De Cataluña (y la modernidad)*
 387 Juan Mañé y Flaquer, *El regionalismo*
 386 Valentín Almirall, *Contestación al discurso leído por D. Gaspar Núñez de Arce*
 385 Gaspar Núñez de Arce, *Estado de las aspiraciones del regionalismo*
 384 Valentín Almirall, *España tal cual es*

- 383 *Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña* (1885)
- 382 José Cadalso, *Defensa de la nación española contra la Carta Persiana...* de Montesquieu
- 381 Masson de Morvilliers y Mariano Berlon, *Polémica sobre Barcelona*
- 380 Carlo Denina, *¿Qué se debe a España?*
- 379 Antonio J. de Cavanilles, *Observaciones sobre el artículo España de la Nueva Encyclopedia*
- 378 Eduardo Toda, *La vida en el Celeste Imperio*
- 377 Mariano de Castro y Duque, *Descripción de China*
- 376 Joseph de Moyriac de Mailla, *Cartas desde China* (1715-1733)
- 375 Dominique Parennin, *Sobre la antigüedad y excelencia de la civilización china* (1723-1740)
- 374 Diego de Pantoja, *Relación de las cosas de China* (1602)
- 373 Charles-Jacques Poncet, *Relación de mi viaje a Etiopía* 1698-1701
- 372 Thomas Robert Malthus, *Ensayo sobre el principio de la población*
- 371 Víctor Pradera, *El Estado Nuevo*
- 370 Francisco de Goya, *Desastres de la guerra*
- 369 Andrés Giménez Soler, *Reseña histórica del Canal Imperial de Aragón*
- 368 *Los juicios por la sublevación de Jaca en el diario "Ahora"*
- 367 Fermín Galán, *Nueva creación. Política ya no sólo es arte, sino ciencia*
- 366 Alfonso IX, *Decretos de la Curia de León de 1188*
- 365 *Codex Vindobonensis Mexicanus I. Códice mixteca*
- 364 Sebastián Fernández de Medrano, *Máximas y ardidés de que se sirven los extranjeros...*
- 363 Juan Castrillo Santos, *Cuatro años de experiencia republicana* 1931-1935
- 362 Louis Hennepin, *Relación de un país que... se ha descubierto en la América septentrional*
- 361 Alexandre Olivier Exquemelin, *Piratas de la América*
- 360 Lilo, Tono y Herreros, *Humor gráfico y absurdo en La Ametralladora*
- 359 Julián Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*
- 358 *Revolución y represión en Casas Viejas. Debate en las Cortes*
- 357 Pío Baroja, *Raza y racismo. Artículos en Ahora, Madrid* 1933-1935
- 356 Diego de Ocaña, *Ilustraciones de la Relación de su viaje por América del Sur*
- 355 Carlos de Sigüenza y Góngora, *Infortunios de Alonso Ramírez*
- 354 Rafael María de Labra, *La emancipación de los esclavos en los Estados Unidos*
- 353 Manuel de Odriozola, *Relación... de los piratas que infestaron la Mar del Sur*
- 352 Thomas Gage, *Relación de sus viajes en la Nueva España*
- 351 De la Peña, Crespí y Palou, *Exploración de las costas de la Alta California* (1774-1799)
- 350 Luis de Camoens, *Los lusíadas*
- 349 Sabino Arana, *Artículos de Bizkaitarra* (1893-1895)
- 348 Bernardino de Sahagún, *Las ilustraciones del Códice Florentino*
- 347 Felipe Guaman Poma de Ayala, *Ilustraciones de la Nueva Crónica y Buen Gobierno*
- 346 Juan Suárez de Peralta, *Noticias históricas de la Nueva España*
- 345 Étienne de la Boétie, *Discurso de la servidumbre voluntaria*
- 344 Tomás de Mercado y Bartolomé de Albornoz, *Sobre el tráfico de esclavos*
- 343 Herblock (Herbert Block), *Viñetas políticas* 1930-2000
- 342 Aníbal Tejada, *Viñetas políticas en el ABC republicano* (1936-1939)
- 341 Aureger (Gerardo Fernández de la Reguera), *Portadas de "Gracia y Justicia"* (1931-1936)
- 340 Paul Valéry, *La crisis del Espíritu*
- 339 Francisco López de Gómara, *Crónica de los Barbarrojas*
- 338 *Cartas de particulares sobre la rebelión de Cataluña* (1640-1648)
- 337 Alejandro de Ros, *Cataluña desengañada. Discursos políticos*
- 336 Gaspar Sala, *Epítome de los principios y progresos de las guerras de Cataluña*
- 335 *La Flaca. Dibujos políticos de la primera etapa* (1869-1871)
- 334 Francisco de Quevedo, *La rebelión de Barcelona ni es por el huevo ni por el fuero*

- 333 Francisco de Rioja, *Aristarco o censura de la Proclamación Católica de los catalanes*
 332 Gaspar Sala y Berart, *Proclamación católica a la majestad piadosa de Felipe el Grande*
 331 François Bernier, *Nueva división de la Tierra por las diferentes especies o razas humanas*
 330 Christoph Weiditz, *Libro de las vestimentas (Trachtenbuch)*
 329 Isa Gebir, *Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley y sunna*
 328 Sebastian Münster, *Cosmographiæ Universalis. Mapas y vistas urbanas*
 327 Joaquim Rubió y Ors, *Manifiestos catalanistas. Prólogos de Lo gayter del Llobregat*
 326 Manuel Azaña, *La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra en España*
 325 François Bernier, *Viajes del Gran Mogol y de Cachemira*
 324 Antonio Pigafetta, *Primer viaje en torno del Globo*
 323 Baronesa D'Aulnoy, *Viaje por España en 1679*
 322 Hernando Colón, *Historia del almirante don Cristóbal Colón*
 321 Arthur de Gobineau, *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas*
 320 Rodrigo Zamorano, *El mundo y sus partes, y propiedades naturales de los cielos y elementos*
 319 Manuel Azaña, *Sobre el Estatuto de Cataluña*
 318 David Hume, *Historia de Inglaterra hasta el fin del reinado de Jacobo II (4 tomos)*
 317 Joseph Douillet, *Moscú sin velos (Nueve años trabajando en el país de los Soviets)*
 316 Valentín Almirall, *El catalanismo*
 315 León Trotsky, *Terrorismo y comunismo (Anti-Kautsky)*
 314 Fernando de los Ríos, *Mi viaje a la Rusia Sovietista*
 313 José Ortega y Gasset, *Un proyecto republicano (artículos y discursos, 1930-1932)*
 312 Karl Kautsky, *Terrorismo y comunismo*
 311 Teofrasto, *Caracteres morales*
 310 Hermanos Limbourg, *Las muy ricas Horas del duque de Berry (Selección de las miniaturas)*
 309 Abraham Ortelio, *Teatro de la Tierra Universal. Los mapas*
 308 Georg Braun y Franz Hogenberg, *Civitates orbis terrarum (selección de los grabados)*
 307 Teodoro Herzl, *El Estado Judío*
 306 *Las miniaturas del Códice Manesse*
 305 Oliverio Goldsmith, *Historia de Inglaterra. Desde los orígenes hasta la muerte de Jorge II.*
 304 Sor Juana Inés de la Cruz, *Respuesta de la poetisa a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz*
 303 *El voto femenino: debate en las Cortes de 1931.*
 302 Hartmann Schedel, *Crónicas de Nuremberg (3 tomos)*
 301 Conrad Cichorius, *Los relieves de la Columna Trajana. Láminas.*
 300 Javier Martínez, *Trescientos Clásicos de Historia (2014-2018)*
 299 Bartolomé y Lucile Bennassar, *Seis renegados ante la Inquisición*
 298 Edmundo de Amicis, *Corazón. Diario de un niño*
 297 Enrique Flórez y otros, *España Sagrada. Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de España.*
 296 Ángel Ossorio, *Historia del pensamiento político catalán durante la guerra... (1793-1795)*
 295 Rafael Altamira, *Psicología del pueblo español*
 294 Julián Ribera, *La supresión de los exámenes*
 293 Gonzalo Fernández de Oviedo, *Relación de lo sucedido en la prisión del rey de Francia...*
 292 Juan de Oznaya, *Historia de la guerra de Lombardía, batalla de Pavía y prisión del rey...*
 291 Ángel Pestaña, *Setenta días en Rusia. Lo que yo vi*
 290 Antonio Tovar, *El Imperio de España*
 289 Antonio Royo Villanova, *El problema catalán y otros textos sobre el nacionalismo*
 288 Antonio Rovira y Virgili, *El nacionalismo catalán. Su aspecto político...*
 287 José del Campillo, *Lo que hay de más y de menos en España, para que sea lo que debe ser...*
 286 Miguel Serviá († 1574): *Relación de los sucesos del armada de la Santa Liga...*
 285 Benito Jerónimo Feijoo, *Historia, patrias, naciones y España*
 284 Enrique de Jesús Ochoa, *Los Cristeros del Volcán de Colima*

- 283 Henry David Thoreau, *La desobediencia civil*
- 282 *Tratados internacionales del siglo XVII. El fin de la hegemonía hispánica*
- 281 Guillermo de Poitiers, *Los hechos de Guillermo, duque de los normandos y rey de los anglos*
- 280 Indalecio Prieto, *Artículos de guerra*
- 279 Francisco Franco, *Discursos y declaraciones en la Guerra Civil*
- 278 Vladimir Illich (Lenin), *La Gran Guerra y la Revolución. Textos 1914-1917*
- 277 Jaime I el Conquistador, *Libro de sus hechos*
- 276 Jerónimo de Blancas, *Comentario de las cosas de Aragón*
- 275 Emile Verhaeren y Darío de Regoyos, *España Negra*
- 274 Francisco de Quevedo, *España defendida y los tiempos de ahora*
- 273 Miguel de Unamuno, *Artículos republicanos*
- 272 *Fuero Juzgo o Libro de los Jueces*
- 271 Francisco Navarro Villoslada, *Amaya o los vascos en el siglo VIII*
- 270 Pompeyo Gener, *Cosas de España (Herejías nacionales y El renacimiento de Cataluña)*
- 269 Homero, *La Odisea*
- 268 Sancho Ramírez, *El primitivo Fuero de Jaca*
- 267 Juan I de Inglaterra, *La Carta Magna*
- 266 *El orden público en las Cortes de 1936*
- 265 Homero, *La Ilíada*
- 264 Manuel Chaves Nogales, *Crónicas de la revolución de Asturias*
- 263 Felipe II, *Cartas a sus hijas desde Portugal*
- 262 Louis-Prosper Gachard, *Don Carlos y Felipe II*
- 261 *Felipe II rey de Inglaterra, documentos*
- 260 Pedro de Rivadeneira, *Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra*
- 259 Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades* (6 tomos)
- 258 Joaquin Pedro de Oliveira Martins, *Historia de la civilización ibérica*
- 257 Pedro Antonio de Alarcón, *Historietas nacionales*
- 256 Sergei Nechaiev, *Catecismo del revolucionario*
- 255 Álar Núñez Cabeza de Vaca, *Naufragios y Comentarios*
- 254 Diego de Torres Villarroel, *Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras*
- 253 *¿Qué va a pasar en España? Dossier en el diario Ahora del 16 de febrero de 1934*
- 252 Juan de Mariana, *Tratado sobre los juegos públicos*
- 251 Gonzalo de Illescas, *Jornada de Carlos V a Túnez*
- 250 Gilbert Keith Chesterton, *La esfera y la cruz*
- 249 José Antonio Primo de Rivera, *Discursos y otros textos*
- 248 *Citas del Presidente Mao Tse-Tung (El Libro Rojo)*
- 247 Luis de Ávila y Zúñiga, *Comentario de la guerra de Alemania... en el año de 1546 y 1547.*
- 246 José María de Pereda, *Pedro Sánchez*
- 245 Pío XI, *Ante la situación social y política (1926-1937)*
- 244 Herbert Spencer, *El individuo contra el Estado*
- 243 Baltasar Gracián, *El Criticón*
- 242 Pascual Madoz, *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España...* (16 tomos)
- 241 Benito Pérez Galdós, *Episodios Nacionales* (5 tomos)
- 240 Andrés Giménez Soler, *Don Jaime de Aragón último conde de Urgel*
- 239 Juan Luis Vives, *Tratado del socorro de los pobres*
- 238 Cornelio Nepote, *Vidas de los varones ilustres*
- 237 Zacarías García Villada, *Paleografía española* (2 tomos)
- 236 Platón, *Las Leyes*
- 235 Baltasar Gracián. *El Político Don Fernando el Católico*
- 234 León XIII, *Rerum Novarum*

- 233 Cayo Julio César, *Comentarios de la Guerra Civil*
- 232 Juan Luis Vives, *Diálogos o Linguae latinæ exercitatio*
- 231 Melchor Cano, *Consulta y parecer sobre la guerra al Papa*
- 230 William Morris, *Noticias de Ninguna Parte, o una era de reposo*
- 229 *Concilio III de Toledo*
- 228 Julián Ribera, *La enseñanza entre los musulmanes españoles*
- 227 Cristóbal Colón, *La Carta de 1493*
- 226 Enrique Cock, *Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592*
- 225 José Echegaray, *Recuerdos*
- 224 Aurelio Prudencio Clemente, *Peristephanon o Libro de las Coronas*
- 223 Hernando del Pulgar, *Claros varones de Castilla*
- 222 Francisco Pi y Margall, *La República de 1873. Apuntes para escribir su historia*
- 221 *El Corán*
- 220 José de Espronceda, *El ministerio Mendizábal, y otros escritos políticos*
- 219 Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, *El Federalista*
- 218 Charles F. Lummis, *Los exploradores españoles del siglo XVI*
- 217 Atanasio de Alejandría, *Vida de Antonio*
- 216 Muhammad Ibn al-Qutiyya (Abenalcotía): *Historia de la conquista de Al-Andalus*
- 215 *Textos de Historia de España*
- 214 Julián Ribera, *Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana*
- 213 León de Arroyal, *Pan y toros. Oración apologética en defensa del estado... de España*
- 212 Juan Pablo Forner, *Oración apologética por la España y su mérito literario*
- 211 Nicolás Masson de Morvilliers, *España (dos versiones)*
- 210 *Los filósofos presocráticos. Fragmentos y referencias (siglos VI-V a. de C.)*
- 209 José Gutiérrez Solana, *La España negra*
- 208 Francisco Pi y Margall, *Las nacionalidades*
- 207 Isidro Gomá, *Apología de la Hispanidad*
- 206 Étienne Cabet, *Viaje por Icaria*
- 205 Gregorio Magno, *Vida de san Benito abad*
- 204 Lord Bolingbroke (Henry St. John), *Idea de un rey patriota*
- 203 Marco Tulio Cicerón, *El sueño de Escipión*
- 202 *Constituciones y leyes fundamentales de la España contemporánea*
- 201 Jerónimo Zurita, *Anales de la Corona de Aragón (4 tomos)*
- 200 Soto, Sepúlveda y Las Casas, *Controversia de Valladolid*
- 199 Juan Ginés de Sepúlveda, *Demócrates segundo, o... de la guerra contra los indios.*
- 198 Francisco Noël Graco Babeuf, *Del Tribuno del Pueblo y otros escritos*
- 197 Manuel José Quintana, *Vidas de los españoles célebres*
- 196 Francis Bacon, *La Nueva Atlántida*
- 195 Alfonso X el Sabio, *Estoria de Espanna*
- 194 Platón, *Critias o la Atlántida*
- 193 Tommaso Campanella, *La ciudad del sol*
- 192 Ibn Battuta, *Breve viaje por Andalucía en el siglo XIV*
- 191 Edmund Burke, *Reflexiones sobre la revolución de Francia*
- 190 Tomás Moro, *Utopía*
- 189 Nicolás de Condorcet, *Compendio de La riqueza de las naciones de Adam Smith*
- 188 Gaspar Melchor de Jovellanos, *Informe sobre la ley agraria*
- 187 Cayo Velejo Patérculo, *Historia Romana*
- 186 José Ortega y Gasset, *La rebelión de las masas*
- 185 José García Mercadal, *Estudiantes, sopistas y pícaros*
- 184 Diego de Saavedra Fajardo, *Idea de un príncipe político cristiano*

- 183 Emmanuel-Joseph Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?*
- 182 Publio Cornelio Tácito, *La vida de Julio Agrícola*
- 181 Abū Abd Allāh Muhammad al-Idrīsī, *Descripción de la Península Ibérica*
- 180 José García Mercadal, *España vista por los extranjeros*
- 179 Platón, *La república*
- 178 Juan de Gortz, *Embajada del emperador de Alemania al califa de Córdoba*
- 177 Ramón Menéndez Pidal, *Idea imperial de Carlos V*
- 176 Dante Alighieri, *La monarquía*
- 175 Francisco de Vitoria, *Relecciones sobre las potestades civil y ecl., las Indias, y la guerra*
- 174 Alonso Sánchez y José de Acosta, *Debate sobre la guerra contra China*
- 173 Aristóteles, *La política*
- 172 Georges Sorel, *Reflexiones sobre la violencia*
- 171 Mariano José de Larra, *Artículos 1828-1837*
- 170 Félix José Reinoso, *Examen de los delitos de infidelidad a la patria*
- 169 John Locke, *Segundo tratado sobre el gobierno civil*
- 168 Conde de Toreno, *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*
- 167 Miguel Asín Palacios, *La escatología musulmana de la Divina Comedia*
- 166 José Ortega y Gasset, *España invertebrada*
- 165 Ángel Ganivet, *Idearium español*
- 164 José Mor de Fuentes, *Bosquejillo de la vida y escritos*
- 163 Teresa de Jesús, *Libro de la Vida*
- 162 Prisco de Panio, *Embajada de Maximino en la corte de Atila*
- 161 Luis Gonçalves da Câmara, *Autobiografía de Ignacio de Loyola*
- 160 Lucas Mallada y Pueyo, *Los males de la patria y la futura revolución española*
- 159 Martín Fernández de Navarrete, *Vida de Miguel de Cervantes Saavedra*
- 158 Lucas Alamán, *Historia de Méjico... hasta la época presente* (cuatro tomos)
- 157 Enrique Cock, *Anales del año ochenta y cinco*
- 156 Eutropio, *Breviario de historia romana*
- 155 Pedro Ordóñez de Ceballos, *Viaje del mundo*
- 154 Flavio Josefo, *Contra Apión. Sobre la antigüedad del pueblo judío*
- 153 José Cadalso, *Cartas marruecas*
- 152 Luis Astrana Marín, *Gobernaré Lerroux*
- 151 Francisco López de Gómara, *Hispania victrix* (*Historia de las Indias y conquista de México*)
- 150 Rafael Altamira, *Filosofía de la historia y teoría de la civilización*
- 149 Zacarías García Villada, *El destino de España en la historia universal*
- 148 José María Blanco White, *Autobiografía*
- 147 *Las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos en el diario ABC*
- 146 Juan de Palafox y Mendoza, *De la naturaleza del indio*
- 145 Muhammad Al-Jusaní, *Historia de los jueces de Córdoba*
- 144 Jonathan Swift, *Una modesta proposición*
- 143 *Textos reales persas de Darío I y de sus sucesores*
- 142 Joaquín Maurín, *Hacia la segunda revolución y otros textos*
- 141 Zacarías García Villada, *Metodología y crítica históricas*
- 140 Enrique Flórez, *De la Crónica de los reyes visigodos*
- 139 Cayo Salustio Crispo, *La guerra de Yugurta*
- 138 Bernal Díaz del Castillo, *Verdadera historia de... la conquista de la Nueva España*
- 137 *Medio siglo de legislación autoritaria en España (1923-1976)*
- 136 Sexto Aurelio Víctor, *Sobre los varones ilustres de la ciudad de Roma*
- 135 *Códigos de Mesopotamia*
- 134 Josep Pijoan, *Pancatalanismo*

- 133 Voltaire, *Tratado sobre la tolerancia*
- 132 Antonio de Capmany, *Centinela contra franceses*
- 131 Braulio de Zaragoza, *Vida de san Millán*
- 130 Jerónimo de San José, *Genio de la Historia*
- 129 Amiano Marcelino, *Historia del Imperio Romano del 350 al 378*
- 128 Jacques Bénigne Bossuet, *Discurso sobre la historia universal*
- 127 Apiano de Alejandría, *Las guerras ibéricas*
- 126 Pedro Rodríguez Campomanes, *El Periplo de Hannón ilustrado*
- 125 Voltaire, *La filosofía de la historia*
- 124 Quinto Curcio Rufo, *Historia de Alejandro Magno*
- 123 Rodrigo Jiménez de Rada, *Historia de las cosas de España*. Versión de Hinojosa
- 122 Jerónimo Borao, *Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854*
- 121 Fénelon, *Carta a Luis XIV y otros textos políticos*
- 120 Josefa Amar y Borbón, *Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres*
- 119 Jerónimo de Pasamonte, *Vida y trabajos*
- 118 Jerónimo Borao, *La imprenta en Zaragoza*
- 117 Hesíodo, *Teogonía-Los trabajos y los días*
- 116 Ambrosio de Morales, *Crónica General de España* (3 tomos)
- 115 Antonio Cánovas del Castillo, *Discursos del Ateneo*
- 114 *Crónica de San Juan de la Peña*
- 113 Cayo Julio César, *La guerra de las Galias*
- 112 Montesquieu, *El espíritu de las leyes*
- 111 Catalina de Erauso, *Historia de la monja alférez*
- 110 Charles Darwin, *El origen del hombre*
- 109 Nicolás Maquiavelo, *El príncipe*
- 108 Bartolomé José Gallardo, *Diccionario crítico-burlesco del... Diccionario razonado manual*
- 107 Justo Pérez Pastor, *Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores*
- 106 Hildegarda de Bingen, *Causas y remedios. Libro de medicina compleja.*
- 105 Charles Darwin, *El origen de las especies*
- 104 Luitprando de Cremona, *Informe de su embajada a Constantinopla*
- 103 Paulo Álvaro, *Vida y pasión del glorioso mártir Eulogio*
- 102 Isidoro de Antillón, *Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros*
- 101 Antonio Alcalá Galiano, *Memorias*
- 100 *Sagrada Biblia* (3 tomos)
- 99 James George Frazer, *La rama dorada. Magia y religión*
- 98 Martín de Braga, *Sobre la corrección de las supersticiones rústicas*
- 97 Ahmad Ibn-Fath Ibn-Abirrabía, *De la descripción del modo de visitar el templo de Meca*
- 96 Iósif Stalin y otros, *Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.*
- 95 Adolf Hitler, *Mi lucha*
- 94 Cayo Salustio Crispo, *La conjuración de Catilina*
- 93 Jean-Jacques Rousseau, *El contrato social*
- 92 Cayo Cornelio Tácito, *La Germania*
- 91 John Maynard Keynes, *Las consecuencias económicas de la paz*
- 90 Ernest Renan, *¿Qué es una nación?*
- 89 Hernán Cortés, *Cartas de relación sobre el descubrimiento y conquista de la Nueva España*
- 88 *Las sagas de los Groenlandeses y de Eirik el Rojo*
- 87 Cayo Cornelio Tácito, *Historias*
- 86 Pierre-Joseph Proudhon, *El principio federativo*
- 85 Juan de Mariana, *Tratado y discurso sobre la moneda de vellón*
- 84 Andrés Giménez Soler, *La Edad Media en la Corona de Aragón*

- 83 Marx y Engels, *Manifiesto del partido comunista*
- 82 Pomponio Mela, *Corografía*
- 81 *Crónica de Turpín (Codex Calixtinus, libro IV)*
- 80 Adolphe Thiers, *Historia de la Revolución Francesa* (3 tomos)
- 79 Procopio de Cesárea, *Historia secreta*
- 78 Juan Huarte de San Juan, *Examen de ingenios para las ciencias*
- 77 Ramiro de Maeztu, *Defensa de la Hispanidad*
- 76 Enrich Prat de la Riba, *La nacionalidad catalana*
- 75 John de Mandeville, *Libro de las maravillas del mundo*
- 74 Egeria, *Itinerario*
- 73 Francisco Pi y Margall, *La reacción y la revolución. Estudios políticos y sociales*
- 72 Sebastián Fernández de Medrano, *Breve descripción del Mundo*
- 71 Roque Barcia, *La Federación Española*
- 70 Alfonso de Valdés, *Diálogo de las cosas acaecidas en Roma*
- 69 Ibn Idari Al Marrakusi, *Historias de Al-Ándalus (de Al-Bayan al-Mughrib)*
- 68 Octavio César Augusto, *Hechos del divino Augusto*
- 67 José de Acosta, *Peregrinación de Bartolomé Lorenzo*
- 66 Diógenes Laercio, *Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*
- 65 Julián Juderías, *La leyenda negra y la verdad histórica*
- 64 Rafael Altamira, *Historia de España y de la civilización española* (2 tomos)
- 63 Sebastián Miñano, *Diccionario biográfico de la Revolución Francesa y su época*
- 62 Conde de Romanones, *Notas de una vida (1868-1912)*
- 61 Agustín Alcaide Ibieca, *Historia de los dos sitios de Zaragoza*
- 60 Flavio Josefo, *Las guerras de los judíos.*
- 59 Lupericio Leonardo de Argensola, *Información de los sucesos de Aragón en 1590 y 1591*
- 58 Cayo Cornelio Tácito, *Anales*
- 57 Diego Hurtado de Mendoza, *Guerra de Granada*
- 56 Valera, Borrego y Pirala, *Continuación de la Historia de España de Lafuente* (3 tomos)
- 55 Geoffrey de Monmouth, *Historia de los reyes de Britania*
- 54 Juan de Mariana, *Del rey y de la institución de la dignidad real*
- 53 Francisco Manuel de Melo, *Historia de los movimientos y separación de Cataluña*
- 52 Paulo Orosio, *Historias contra los paganos*
- 51 *Historia Silense, también llamada legionense*
- 50 Francisco Javier Simonet, *Historia de los mozárabes de España*
- 49 Anton Makarenko, *Poema pedagógico*
- 48 *Anales Toledanos*
- 47 Piotr Kropotkin, *Memorias de un revolucionario*
- 46 George Borrow, *La Biblia en España*
- 45 Alonso de Contreras, *Discurso de mi vida*
- 44 Charles Fourier, *El falansterio*
- 43 José de Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*
- 42 Ahmad Ibn Muhammad Al-Razi, *Crónica del moro Rasis*
- 41 José Godoy Alcántara, *Historia crítica de los falsos cricones*
- 40 Marcelino Menéndez Pelayo, *Historia de los heterodoxos españoles* (3 tomos)
- 39 Alexis de Tocqueville, *Sobre la democracia en América*
- 38 Tito Livio, *Historia de Roma desde su fundación* (3 tomos)
- 37 John Reed, *Diez días que estremecieron al mundo*
- 36 *Guía del Peregrino (Codex Calixtinus)*
- 35 Jenofonte de Atenas, *Anábasis, la expedición de los diez mil*
- 34 Ignacio del Asso, *Historia de la Economía Política de Aragón*

- 33 Carlos V, *Memorias*
- 32 Jusepe Martínez, *Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura*
- 31 Polibio, *Historia Universal bajo la República Romana*
- 30 Jordanes, *Origen y gestas de los godos*
- 29 Plutarco, *Vidas paralelas*
- 28 Joaquín Costa, *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España*
- 27 Francisco de Moncada, *Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos*
- 26 Rufus Festus Avienus, *Ora Marítima*
- 25 Andrés Bernáldez, *Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel*
- 24 Pedro Antonio de Alarcón, *Diario de un testigo de la guerra de África*
- 23 Motolinia, *Historia de los indios de la Nueva España*
- 22 Tucídides, *Historia de la Guerra del Peloponeso*
- 21 *Crónica Cesaraugustana*
- 20 Isidoro de Sevilla, *Crónica Universal*
- 19 Estrabón, *Iberia (Geografía, libro III)*
- 18 Juan de Biclario, *Crónica*
- 17 *Crónica de Sampiro*
- 16 *Crónica de Alfonso III*
- 15 Bartolomé de Las Casas, *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*
- 14 *Crónicas mozárabes del siglo VIII*
- 13 *Crónica Albeldense*
- 12 *Genealogías pirenaicas del Códice de Roda*
- 11 Heródoto de Halicarnaso, *Los nueve libros de Historia*
- 10 Cristóbal Colón, *Los cuatro viajes del almirante*
- 9 Howard Carter, *La tumba de Tutankhamon*
- 8 Sánchez-Albornoz, *Una ciudad de la España cristiana hace mil años*
- 7 Eginardo, *Vida del emperador Carlomagno*
- 6 Idacio, *Cronicón*
- 5 Modesto Lafuente, *Historia General de España* (9 tomos)
- 4 *Ajbar Machmuâ*
- 3 *Liber Regum*
- 2 Suetonio, *Vidas de los doce Césares*
- 1 Juan de Mariana, *Historia General de España* (3 tomos)